

CADERNOS CIDIJUS

VOLUME 8



**JOSÉ RICARDO CAETANO COSTA
EDER DION DE PAULA COSTA
HECTOR CURY SOARES
(ORGANIZADORES)**

CADERNOS
CIDIJUS

VOLUME 8

JOSÉ RICARDO CAETANO COSTA
HECTOR CURY SOARES
EDER DION DE PAULA COSTA
(Organizadores)

CADERNOS CIDIJUS

VOLUME 8

Rio Grande
IBRAJU Edições
2023

Copyright © 2023 by IBRAJU Edições.

Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Capa: Edna Karina da Silva Lira

Normalização e editoração eletrônica: Gilmar Gomes de Barros

Edna Karina da Silva Lira

Revisão: os autores

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Gilmar Barros, CRB 14/1693

C837c	Costa, José Ricardo Caetano
	Cadernos CIDIJUS [recurso eletrônico] / José Ricardo Caetano Costa; Hector Cury Soares; Eder Dion de Paula Costa (Organizadores). – Rio Grande : IBRAJU Edições, 2023. – (Coleção Cadernos CIDIJUS ; v. 8).
	283 p. ; 21,1 cm.
	Acesso remoto: < https://repositorio.furg.br/handle/123456789/11340 > ISBN: 978-65-89073-16-1
	1. Direitos sociais. I. José Ricardo Caetano Costa. II. Hector Cury Soares. III. Eder Dion de Paula Costa. IV. Título. V. Série.
	CDU: 349.3

Índice para catálogo sistemático:

I. Direitos sociais

349.3

CONSELHO EDITORIAL:

Sheila Stolz (Brasil)

César Correa Arias (México)

Paulo Opuszka (Brasil)

Dhayana Carolina Fernandez Matos (Colômbia)

Samyra H. das Farra N. Sanches (Brasil)

Júlio C. Nogueira (Argentina)

Eurico Wongo Gungula (Angola)

Jaime Garcia Ruiz (Cuba)

Raquel Fabiana L. Sparemberger (Brasil)

Thiago Jorge Kühn (Brasil)

Mario Garmendia Arigón (Uruguai)

Suzana Maria Loureiro Silveira (Brasil)

Rubens Soares Vellinho (Brasil)

Juliana Teixeira Esteves (Brasil)

Julia Lenzi Silva (Brasil)

Thais Hoshila (Brasil)

Edgardo Ricardo Romero (Cuba)

Marco Aurélio Serau Jr. (Brasil)

SUMÁRIO

EL MULTILATERALISMO ALTERNATIVO INTENTA PATEAR EL TABLERO MUNDIAL Y SURGEN LOS ANTI-VALORES CAPITALISTAS PARA SOFOCAR LA REBELIÓN.....	8
Edgardo Romero Fernández	
A TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA	14
Diuster de Franceschi Gariboti	
UM OLHAR CRÍTICO NO PÓS-PANDEMIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA.....	29
Thalyta Karina Correia Chediak	
João Baraldi Neto	
Amanda Netto Brum	
O CINEMA COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM: APONTAMENTOS A PARTIR DO FILME <i>A FORMA DA ÁGUA</i>	41
Luciana Alves Dombkowitsch	
Amanda Netto Brum	
Renato Duro Dias	
EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E AMOR: ENSAIO NARRATIVO-REFLEXIVO SOBRE AS PEDAGOGIAS DO AMOR EM MATURANA, FREIRE E WARAT	56
Vanessa dos Santos Moura	
A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA: UMA ABORDAGEM CONTRA CONSERVACIONISTA DE SUSTENTABILIDADE	76
Kariza Lopes	
Daniela Simões Azzolin	

A CRISE DO ENSINO JURÍDICO TRADICIONAL SOBRE O OLHAR DAS METODOLOGIAS ATIVAS COMO ALTERNATIVA PROPULSORA DE UM ENSINO-APRENDIZAGEM MAIS PARTICIPATIVO	91
Gabriel Lima Mendes Frederico Thaddeu Pedroso	
O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: A PRECARIZAÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELOS <i>STREAMER</i> NA PLATAFORMA DIGITAL TWITCH.....	110
Yanka dos Santos Pinto	
A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES	127
Luíse Pereira Herzog Yanka dos Santos Pinto	
BREVES OLHARES SOBRE A JUSTIÇA REPRODUTIVA COMO FUNDAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES	140
Júlia Silva Gonçalves Fabiane Simioni Caroline Ledesma Al-Alam	
A INVISIBILIDADE DAS MULHERES ATRÁS DAS GRADES	153
Thalyta Karina Correia Chediak João Baraldi Neto Luíse Pereira Herzog	
A INVISIBILIDADE DAS MULHERES PESCADORAS E O RECEBIMENTO DO SEGURO-DEFESO EM SILVIA FEDERICI.....	174
Kaio Figueiredo Salvador Isabella Pozza Gonçalves	

<i>COMPLIANCE</i> : NOVA FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS E EFETIVO PROPULSOR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES.....	187
Janaina Tôres Esteves	
BPC PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE PONTOS CONTROVERSOS	202
Vítor Prestes Olinto	
Dandara Trentin Demiranda	
José Ricardo Caetano Costa	
SINDEMIA E SEGURIDADE SOCIAL: O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO GERENCIAMENTO DOS DESAFIOS SOCIAIS DA PANDEMIA DE COVID-19	217
Frederico Thaddeu Pedroso	
Gabriel Lima Mendes	
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS.....	237
Fernanda Pohlmann	
ENTRE TEXTOS E CONTEXTOS: A HERMENÊUTICA COMO FAROL PARA ADAPTAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS EM UMA SOCIEDADE EM CONSTANTE MUDANÇA.....	254
Caroline da Rosa Cavalheiro	
Juliana Inês Urnau	
SOSTENIBILIDAD Y ORDEN ECONÓMICO EN EL ESTADO SOCIOAMBIENTAL: BREVE SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS CONSTITUCIONES ECONÓMICAS BRASILEÑA Y VENEZOLANA.....	267
Victoria Emilia Toro Blanco	

EL MULTILATERALISMO ALTERNATIVO INTENTA PATEAR EL TABLERO MUNDIAL Y SURGEN LOS ANTI-VALORES CAPITALISTAS PARA SOFOCAR LA REBELIÓN

Dr. C. Edgardo Romero Fernández¹

Lo que he llamado (por pura lógica), el multilateralismo alternativo intenta patear el “tablero mundial”² (Brzezinski, 1997), pues desde después de la Segunda Guerra Mundial ya se había esbozado una suerte de multilateralismo, que terminó siendo el llamado “mundo basado en reglas” y se tornó en el mecanismo de la hegemonía imperial, que hoy en crisis, se caracteriza por la ansiedad y la desesperación. Lo que se puede denominar multilateralismo alternativo se ha estado conformando durante décadas y su conformación responde a necesidades de subsistencia del género humano.

Si se es muy sintético, se podría explicar el actual caos mundial con cierta retrospectiva asumiendo el criterio de que la Unión Soviética perdió la Segunda Guerra Mundial 46 años después de que esta concluyera, lo cual se consumó con su desintegración en 15 países diferentes, todos los que de una u otra forma abandonaron el sistema socialista iniciado en 1917 con la Gran Revolución de Octubre, sin embargo en el presente trabajo por razones de espacio no se hará más referencia al asunto del socialismo, sino meramente a las relaciones de dependencia en las que estas nuevas naciones ex socialistas y sus aliados tercermundistas, volvieron a caer con respecto a lo porción del mundo que Putin denomina el “Occidente Colectivo”³.

El desarrollo alcanzado, (con diferentes niveles) en estos nuevos países, sin mencionar a otros de Europa del Este, inmediatamente cayó en un bache profundo y arrastró consigo a una multiplicidad naciones, que una vez establecidas sus relaciones con el denominado Sistema Socialista Mundial (SSM) tuvieron que volver a recomponer (si es que eso fue posible) sus relaciones con el sistema hegemónico capitalista y eso

¹ edgarcs@uclv.edu.cu.

² BRZEZINSKI, Zbigniew (1997). The Grand Chessboard., Washington D.C.: *Basic Books*.

³ Se debe aclarar que este es un término puramente político que se refiere en primer lugar a Estados Unidos y los países miembros de G7, así como algunos de sus lacayos/aliados más connotados como es al caso de Israel.

ocurrió en situaciones muy desventajosas para ellos con lo cual en solo seis años luego del “derrumbe” la economía de la zona soviética cayó en un 60%⁴.

Sería bastante ingenuo pensar que la desaparición de la URSS y el SSM ocurrieron simplemente por errores de estrategia económica y político – ideológica de la dirección soviética; o por una revolución interna de ciudadanos descontentos con el socialismo (lo cual no quiere decir que no hubiese de lo uno y de lo otro en los procesos de construcción socialista), pero no es posible obviar que el sistema capitalista mundial con su hegemonía Estados Unidos de América a la cabeza, no cesó ni un instante en su guerra contra el socialismo y contra todas las expresiones de independencia y soberanía nacional que impidieran sus planes de expansión económica, aún cuando parecía que luego de la Segunda Guerra Mundial el mundo entraba en un escenario de relaciones multilaterales con la intención de basar el desarrollo de las naciones en el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la paz y la cooperación internacional.

Esa situación aparente fue sencillamente una consecuencia de la correlación de fuerzas establecida en el año 45 con el derrocamiento de Alemania y sus aliados y el ascenso del socialismo, su conversión en sistema mundial y así como el fortalecimiento de los movimientos de liberación nacional con el consiguiente proceso de descolonización en todo el mundo.

Paro hay que destacar que en ese propio escenario y en esa época comienzan dos fenómenos que hoy existen bajo la forma de conflicto bélico y de los cuales se considera fundamental analizar en su esencia para poder entender el momento caótico que vive hoy la humanidad y sus causas verdaderas.

Poco tiempo después de la derrota de la Alemania nazi se plantea necesario crear un estado para los judíos perseguidos y vilipendiados por el nazifascismo y se concibe la creación del Estado de Israel como vecino del pueblo palestino al cual también se le concede el derecho de su propio estado. Las naciones occidentales con Estados Unidos y Reino Unido a la cabeza apuestan a insertar en el corazón del oriente medio un estado no musulmán, o más bien anti musulmán y anti árabe, para sembrar a través del odio étnico y religioso desorden y caos y tener la puerta abierta para hacer su papel de gendarme mundial ante los conflictos que de allí surgiesen.

⁴ Dacal, Ariel y Brown, Francisco. Rusia: Del socialismo real al capitalismo real: La Habana: Ciencias Sociales.

Entre tanto en la vieja Europa otro grupo de “ex – nazis” y “simpatizantes” protege y aúpa a un viejo colaborador (Stepan Bandera) y a todos sus seguidores para sembrar el odio contra lo soviético y por derivación contra lo ruso fomentando una historia nacional ucraniana separada de la rusa que incluso se ha estado consolidando como anti - rusa en los últimos años, atizada por las políticas de expansión de la OTAN hacia el este europeo.

Ambos procesos ya estaban en marcha en los años cuarenta del pasado siglo y fueron consolidándose con el paso del tiempo. Pero si se realiza un enorme salto histórico y nos ubicamos en el presente, podemos advertir ciertas similitudes entre lo que ocurre en la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra entre Israel y Hamás – Franja de Gaza.

Y es aquí en donde se quiere centrar la atención de este artículo, pues ese multilateralismo alternativo que intenta patear el “tablero mundial” y modificar el orden hegemónico existente, se manifiesta en ambos casos por razones de subsistencia, ya que estamos ante grupos humanos que son despojados de sus derechos y relegados dentro del propio espacio geográfico que han habitado durante mucho tiempo, por leyes y regulaciones absurdas de un enemigo hegemónico que los quiere modificar en su esencia, en lo que los define como pueblo o nación, lo que equivale en la práctica a hacerlos desaparecer y simplemente ello es intolerable. Ni los habitantes de Donetsk y Lugansk; ni el pueblo palestino han tenido más alternativa que enfrentar esos oprobios e injusticias para intentar cambiar un orden de cosas en el cual apenas lograban subsistir.

Ante la protesta, la acción reivindicativa, sea pacífica o armada “El Occidente colectivo” reacciona. La falta de objetividad, la hipocresía y la manipulación afloran como estandartes para la salvaguarda del sistema hegemónico mundial. Dichos anti-valores se han complotado al presentar ambos conflictos por parte de los medios de comunicación masiva y las plataformas que albergan las redes sociales manejadas por Occidente de una manera absolutamente parcializada.

Cuando se les tilda a los habitantes del Donbass de separatistas, se está manipulando la opinión pública, pues el origen del conflicto (de este choque armado actual, que luego se redimensionó con la operación especial militar rusa en 2022) se remonta como mínimo a hace 8 años, cuando el presidente ucraniano Yanukovich anuló el 23 de febrero de 2014, de la ley Kivalov - Kolesnichenko de 2012, que hacía del ruso una lengua oficial⁵, atentando de esa forma contra un expresión de identidad nacional de los habitantes del sudeste ucraniano, pero aún así la protesta

⁵ https://hmong.es/wiki/Language_policy_in_Ukraine

de estas regiones del país no se hizo con el afán de independizarse de Ucrania, sino de preservar sus derechos de minorías y pedir autonomía para su región.

Los referéndums llevados a cabo por las dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk en mayo de 2014, no fueron referéndums de «independencia» (независимость), como han afirmado algunos periodistas sin escrúpulos, sino referéndums de «autodeterminación» o «autonomía» (самостоятельность).

Por su parte, en el caso de Palestina, cuando el movimiento sionista logró obtener la “Declaración Balfour” en 1917 para ayudar a “establecer una patria nacional para los judíos en Palestina”, **el número de judíos que residían en Palestina en ese momento no superaba el 1% de la población total**⁶. Sin embargo, después de su éxito en 1922 al incluir esta promesa como un punto en el Mandato Británico para Palestina, las tasas de inmigración judía aumentaron durante todo el período que se extendió hasta después de la Segunda Guerra Mundial, bajo protección británica.

El número total de judíos no superaba el 30 por ciento de la población total cuando la “disputa” fue presentada a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó el proyecto de división de Palestina en 1947. Es cierto que este proyecto de partición en sí mismo constituía una negación del dicho “una tierra sin pueblo”, pero el rechazo del pueblo palestino hacia él se justificó no sólo porque era el verdadero dueño de una patria que era atacada, sino también porque concedía a la minoría judía un espacio mayor que el de la que concedió a la mayoría árabe, lo que supuso una doble injusticia contra esta mayoría.

Al margen del ocultamiento de la historia real de estos conflictos, su proceso de divulgación, de exposición al público mundial a través de los mencionados medios y redes sociales se hace de manera cínica e hipócrita. Podemos comparar el discurso de Von der Leyen cuando acusaba a Rusia de cometer crímenes de guerra al cortar el suministro de energía en territorio ucraniano y atacar a población civil, con el discurso que mantiene hoy cuando es Israel quien comete estas agresiones a gran escala, anunciadas sin pudor por sus principales líderes políticos. O podemos comparar la contribución de ayuda europea al conflicto ucraniano, que sólo desde febrero de 2022 tiene un monto de 77.000 millones de euros invertidos en ayuda económica, humanitaria y también militar, frente a los miserables 691 millones en ayuda al desarrollo en

⁶ <https://www.resumenlatinoamericano.org/2023/11/26/palestina-la-transferencia-como-politica-israeli-para-liquidar-a-un-pueblo/>

Palestina, cifra que aún exígua intentó bloquear un comisario húngaro de la Unión Europea hace apenas unos días.

Este tipo de accionar además de evidenciar hipocresía y manipulación, evidencia que todo el accionar del “Occidente colectivo” con Estados Unidos a la cabeza se orienta por el afán de lucro y el mantenimiento de la hegemonía unipolar sobre el resto del mundo. La explicación del primer fundamento del capitalismo moderno “el afán de lucro” quedó brillantemente explicado por Max Weber⁷ y se pudo sintetizar en cómo obtener ganancias siempre y a toda costa, entretanto el mantenimiento de la hegemonía mundial en función por su puesto del afán de lucro fue actualizado por Brzezins⁸ en 1997 cuando recomendaba que si no se podía tomar la región euroasiática con todos sus recursos naturales había que cercarla y desgastar a las grandes potencias que la componen. Cualquier similitud con la realidad actual no parece pura coincidencia.

Ambos elementos está asociados la industria de la guerra, al gran complejo militar industrial que beneficia a las élites de poder que procuran lucro y hegemonía sobre la base de la miseria y la muerte de millones de seres humanos y eso nos lleva a la posibilidad y el enorme peligro de que Europa y Estados Unidos hagan con Palestina lo que ha hecho en la Guerra de Ucrania, con el único fin de desgastar a las potencias emergentes que le rivalizan en el escenario geopolítico mundial.

Lo cierto es que en ambos conflictos el Derecho internacional y los acuerdos internacionales (Oslo y Minsk) se utilizaron para ganar tiempo y poder perpetrar mejor la agresión hacia los pueblos en rebeldía y de paso dar oportunidad a la militarización excesiva en ambas zonas del mundo con lo cual engordan la industria militar y de la seguridad (afán de lucro) y se arrastra nuevamente a los rivales a una carrera armamentista desgastante.

El tratamiento informativo sobre ambos conflictos por parte del “Occidente colectivo” ha sido de manipulación total, utilizando el “poder mediático” para ensalzar la imagen libertaria de Occidente (poder blando) y contribuir descaradamente al mantenimiento de la Hegemonía estadounidense y sus secuaces, sin embargo la realidad de los hechos en el tablero mundial muestra una recomposición de fuerzas, un multilateralismo emergente anti hegemónico, aunque no anticapitalista que deberá consolidarse y definirse mejor, sobre todo política e

⁷ Weber, Max (1991) *La Ética protestante y el Espíritu del capitalismo*. Barcelona: Ediciones Península.

⁸ Brzezinski, Z. Op. Cit.

ideológicamente, si verdaderamente quiere patear el gran tablero y reordenar las fichas.

Ojalá del aprendizaje de Ucrania y del horror de Palestina resurja una fuerza moral; cívica y política suficiente para frenar el horror; el unilateralismo; el guerrerismo; para hacer valer los Derechos Humanos; y para que se recomponga y regrese una izquierda internacionalista, pacifista y antiimperialista.

A TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

THE THEORY OF CIVIL LIABILITY FOR THE LOSS OF A CHANCE ACCORDING TO BRAZILIAN JURISPRUDENCE

Diuster de Franceschi Gariboti⁹

Resumo

A teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance no Direito Civil brasileiro consiste em responsabilizar o autor do dano pelo fato de ter privado um indivíduo de obter a oportunidade de uma chance de um resultado útil ou apenas de ter privado ele de evitar um dado prejuízo. Por esse viés, esta pesquisa visa explorar e abordar os aspectos da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance na doutrina e jurisprudência brasileira. Este artigo objetiva analisar a doutrina e as jurisprudências dos tribunais brasileiros acerca da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Com isso, a metodologia utilizada nesta pesquisa é a hipotético-dedutiva e a técnica de pesquisa bibliográfica, junto a pesquisa documental, com o viés de analisar e contextualizar diversos estudos de renomados autores, junto às jurisprudências do Brasil, relacionados à perda de uma chance no Direito Civil brasileiro.

Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Perda de uma chance. Jurisprudência.

Abstract

The theory of civil liability for the loss of a chance in Brazilian Civil Law consists of holding the person responsible for the damage for having deprived an individual of obtaining the opportunity of a chance of a useful result or just having deprived him of avoiding a given loss. For this bias, this research aims to explore and address aspects of the theory of civil liability for the loss of a chance in Brazilian doctrine and jurisprudence. This article aims to analyze the doctrine and jurisprudence of Brazilian

⁹ Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista de mobilidade acadêmica na Universidade Nova de Lisboa pelo programa da Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP. E-mail: garibotidiuster@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1357223673966110>.

courts regarding the theory of civil liability for the loss of a chance. With that, the methodology used in this research is the hypothetical-deductive and the technique of bibliographical research, together with the documental research, with the bias of analyzing and contextualizing several studies of renowned authors, together with the jurisprudence of Brazil, related to the loss of a chance in Brazilian Civil Law.

Keywords: Civil law. Liability. Loss of a chance. Jurisprudence.

1 INTRODUÇÃO

Em um primeiro ponto, evidencia-se que esta pesquisa vai explorar e abordar os aspectos da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance na doutrina e jurisprudência brasileira. Assim, objetiva analisar a doutrina e as jurisprudências dos tribunais brasileiros acerca da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Surge a justificativa desta pesquisa através da demanda de pesquisa desenvolvida ao decorrer das aulas e debates da disciplina de “Direito Contratual e Responsabilidade Civil” ministradas na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) no curso de Direito Bacharelado no ano de 2022.

Nesse âmbito, foi usada neste estudo a metodologia hipotético-dedutiva que, consoante Popper (1993), desenvolve-se a partir de uma problemática, dentro de uma conjuntura, que se submete a sucessivos testes de falseamento. Junto a ela, utilizar-se-á a técnica de pesquisa bibliográfica, somada a pesquisa documental, com o ideal de analisar e contextualizar diversos estudos de renomados autores, junto às jurisprudências do Brasil, relacionados à perda de uma chance no Direito Civil brasileiro.

Observa-se que a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance surgiu e se alastrou, primordialmente, na França e, após, os demais países passaram a adotar a teoria. Essa ideia apareceu a partir da análise de casos que mostravam que, independente de um resultado final, a ação ou omissão de um indivíduo que acabasse privando outra pessoa de uma oportunidade de chegar a um resultado útil ou privando de evitar um dado prejuízo deveria ser responsabilizada por isso.

Assim, a fim de proporcionar ampla proteção aos direitos e garantias dos cidadãos, a jurisprudência e a doutrina passaram a prever a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance no contexto jurídico brasileiro. E, nesse instante, convém ressaltar que essa teoria apenas é amparada pela doutrina e pela jurisprudência no Brasil, não havendo uma regulação legislativa acerca da temática em questão.

Sendo assim, cabe analisar como a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance vem sendo tratada pelos doutrinadores e nas jurisprudências dos tribunais brasileiros. Desse modo, dividir-se-á o presente estudo em três partes, sendo a primeira uma elucidação de alguns aspectos da responsabilidade civil do Direito Civil brasileiro, após, uma compreensão sobre a teoria da responsabilidade civil pela perda de um direito e, por fim, uma análise jurisprudencial acerca de como ela vem sendo explorada pelo Poder Judiciário no Brasil.

2 ALGUNS ASPECTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO

A priori, cabe destacar que a ideia de responsabilidade civil deriva do latim, da palavra *respondere*, responder alguma coisa - evidenciando a necessidade que há de responsabilizar alguém por suas ações danosas (Stocco, 2001). Mas, de maneira a conceituar a Responsabilidade Civil, infere-se que ela é um vínculo jurídico que é estabelecido entre o ser que causa o dano e a sua vítima. E, vê-se que a temática da responsabilidade civil está disciplinada no Código Civil brasileiro.

A doutrinadora, Maria Helena Diniz, conceitua a Responsabilidade Civil como sendo a “aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (2010, p. 35). Junto a isso, percebe-se que o Código Civil de 2002 também tenta definir a Responsabilidade Civil.

Assim, verifica-se que o diploma civil brasileiro de 2002, ao contrário do de 1916, disciplinou a responsabilidade objetiva, que até o instante era regulada através de leis especiais. Entretanto, infere-se que subsiste a responsabilidade subjetiva, a qual sempre possui aplicação quando não tiver disposição legal expressa impondo o uso da teoria objetiva (Rocha, 2010). Em relação aos artigos do Código Civil brasileiro, traz-se que o artigo 186, aliado ao artigo 927, regulam a cláusula geral da responsabilidade com culpa. Já os artigos 927, 187 e 931, preveem as cláusulas gerais da responsabilidade objetiva.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação.

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Visando um melhor entendimento, abaixo evidencia-se o que se encontra regulado no Código Civil acerca do ato ilícito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

Além disso, convém ressaltar que, em relação à culpa, a responsabilidade civil se divide em objetiva e subjetiva. Desse modo, entende-se que a responsabilidade civil subjetiva decorre de dano causado

a partir de ato doloso ou culposo de um indivíduo, consoante Gagliano e Pamplona Filho (2017). Já em relação à responsabilidade civil objetiva, os mesmos doutrinadores expressam que o dolo e a culpa perante à conduta do indivíduo que causa do dano não possuem qualquer relevância jurídica, pois apenas é preciso que haja o elo de causalidade entre o dano e a conduta do indivíduo que praticou o ato, a fim de que apareça o dever de indenizar.

Ademais, faz-se imprescindível compreender que, relativo à natureza da norma jurídica violada, há a possibilidade de classificar a responsabilidade civil em contratual e extracontratual, consoante os pensadores Gagliano e Pamplona Filho (2017). Sendo assim, a responsabilidade civil contratual iria decorrer do inadimplemento da obrigação prevista no contrato, de modo que seria uma violação da regra contratual combinada em momento anterior pelas partes. E, em relação à responsabilidade civil extracontratual, tem-se que seria uma violação direta de uma regra legal, a qual não possui previsão em negócio jurídico contratual contratado entre as partes de maneira prévia, mas que tem previsão da possibilidade de assunção obrigacional específica.

Para Silvia Vassilieff,

A responsabilidade civil extracontratual tem por fonte a lei que regula sua medida e condições. É consequência do ato ilícito e tem origem no descumprimento do dever geral, erga omnes, de não lesar ninguém e de cuidado e vigilância, bem como no inadimplemento dos deveres de boa-fé, moralidade, honestidade e veracidade (2006, p. 99).

Enfim, cabe expressar que a responsabilidade civil visa promover a garantia de que a vítima seja indenizada/reparada de maneira integral. Sendo assim, a indenização precisa ter o condão de propiciar o restabelecimento da vítima ao seu status quo ante, ou melhor, ao estado como ela estava antes da ocorrência/existência do evento danoso/prejudicial.

3 TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE

A priori, convém frisar que a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance foi sediada na França e na Itália, países em que tal

teoria foi debatida pelos doutrinadores e aplicada na prática pelos tribunais judiciais. Os países mencionados, relacionado aos dispositivos normativos que regem a cláusula geral da responsabilidade civil, acabam por adotar uma classificação de dano com grande amplitude, no instante em que comporta todas as espécies de dano, dentre elas, a que advém da perda de uma chance (Dias, 2010).

Nesse ínterim, identifica-se que há uma ausência de previsão legislativa/legal específica acerca da temática em debate no diploma civil brasileiro de 2022, de modo a regulamentar a reparação pela oportunidade perdida ou impedimento de evitar certo prejuízo. Todavia, entende-se que a teoria considera-se aceita pelo ordenamento jurídico do Brasil com respaldo em sua hermenêutica/interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos que regulam o dever de indenização, de acordo com os princípios constitucionais (Rocha, 2010).

Além do mais, observa-se que grande parte do arcabouço doutrinário brasileiro admite e está de acordo com a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance. Relativo ao pensamento da jurista Vivian de Almeida Sieben Rocha (2010, p. 52), pode-se dizer que é “maciça a posição favorável, o que denota a sua recepção. No entanto, inúmeras foram as manifestações que não adentraram profundamente na natureza jurídica da teoria, especialmente os autores de obras clássicas, sendo recente os estudos mais elaborados”.

Em adendo, destaca-se que a responsabilidade civil pela perda de uma chance possui caracteres singulares, de modo que as maneiras de configurar, identificar e indenizar, a partir dela, são realizadas de forma diversa dos demais casos em que estão relacionados às perdas e danos. Segundo o renomado jurista Sérgio Savi:

O termo chance utilizado pelos franceses significa, em sentido jurídico, probabilidade de obter um fulcro ou de evitar uma perda. No vernáculo, a melhor tradução para o termo chance seria, em nosso sentir, oportunidade. Contudo, por estar consagrada tanto na doutrina, como na jurisprudência, utilizaremos a expressão perda de uma chance, não obstante entendermos mais técnico e condizente com o nosso idioma a expressão perda de uma oportunidade (Savi, 2009, p. 3).

Na sequência, evidencia-se que, em relação à perda de uma chance, o autor do dano é responsabilizado não por causar um dano diretamente e

imediatamente ao vitimado, mas sim, por ter impedido determinado indivíduo de ter a oportunidade de uma chance de um dado resultado ou, até mesmo, apenas por ter impedido o indivíduo de ter evitado certo prejuízo. Sendo assim, percebe-se que o fato não aconteceu, em função de ter sido impedido por determinada ação ou omissão de uma pessoa e, por isso, o que se pretende indenizar nessa questão é a perda da chance de obter uma vantagem/oportunidade ou de evitar algum prejuízo (Silva, 2007).

Assim, sabe-se que a chance de alcançar o resultado útil precisa ser de teor real e sério, pois ao dano meramente hipotético não cabe indenização. A perda de obtenção de uma chance/vantagem, consoante a teoria supramencionada, é realizada observando e utilizando um critério de probabilidade, levando em consideração que esse dano possui aspecto de dano emergente e não de lucro cessante, no instante em que o caráter de fixação é realizado por meio da verossimilhança. Nota-se que é feito dessa maneira, em função de que não se faz possível confirmar que o indivíduo prejudicado iria alcançar aquela chance/vantagem realmente, na situação de não haver o ato ou fato da pessoa que impediu a chance de obter dado resultado.

Portanto, verifica-se que a responsabilidade civil pela perda de uma chance é aquela na qual a vítima, por certa ação ou omissão de outrem, acaba por perder a chance de obter uma vantagem ou evitar um dano. Assim, sabe-se que essa teoria da responsabilidade civil possui alguns requisitos gerais para que seja configurada, com isso, a pesquisadora, Marina Czarneski Felício dos Santos (2014, p. 14-15), infere que:

Primeiramente é o ato ilícito que decorre de uma conduta omissiva ou comissiva, derivada da culpa ou não, em que uma pessoa interrompe o fluxo normal dos eventos da vida da vítima, ato este contundente a impedir que o lesado aufera uma vantagem ou evite um dano.

Por conseguinte, o segundo requisito é o nexó de causalidade. Cuida-se de ligação normativa entre a conduta e o resultado, que nesse caso específico é a perda da chance. Apenas para fins elucidativos, a teoria do nexó causal mais utilizada no Brasil é a teoria da causalidade direta e imediata. De acordo com essa teoria, a causa é apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessidade

ao resultado danoso, determina que este último seja como uma consequência sua, direta e imediata.

Por fim, o último pressuposto básico para a configuração da responsabilidade civil pela perda de uma chance é o dano. [...] O benefício não ocorreu, portanto, não há como saber com certeza se ele teria ocorrido, sendo este sempre hipotético. Entretanto, é impossível negar que houve a perda da oportunidade de, pelo menos, tentar obter uma vantagem; essa perda da chance, por sua vez, era certa.

Além dos requisitos supracitados, comuns a qualquer responsabilidade civil, a responsabilidade civil pela perda de uma chance tem um pressuposto próprio para que haja a configuração dessa responsabilidade e possível reparação. A chance perdida deve ser séria e real. É preciso que haja uma verdadeira probabilidade, a chance realmente deve ser potencial. Não há que se falar em reparação pela perda de uma chance quando a vítima tinha uma mera expectativa, e a vantagem perdida era apenas uma hipótese, sem concretude.

Ademais, conforme exposto por Rodrigues Júnior *et al* (2011), para que seja concretizado o dever de reparação pela perda de uma chance, a oportunidade frustrada necessita ser analisada de maneira objetiva, de modo que não devem/podem ser meramente expectativas subjetivas. Por esse viés, compreende-se que convém ao juiz realizar a análise individual de cada caso a fim de verificar a concretude, seriedade e a realidade da oportunidade perdida ou impedida.

4 ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE

O ordenamento jurídico do Brasil, como já mencionado anteriormente, não evidencia em sua legislação nenhum dispositivo que trate sobre a responsabilidade civil pela perda de uma chance. Através disso, percebe-se que a jurisprudência e a doutrina possuem a responsabilidade de traçar os aspectos, hipóteses e requisitos relacionados a essa teoria em que haverá a possibilidade de uma reparação.

Em sequência, expõe-se que, ao serem observados os artigos 186, 187, 402, 927 e 949 do Código Civil de 2002, aliados ao artigo 5º, inciso V, da CF/88, faz-se possível entender que mesmo não havendo nos

diplomas legais brasileiros uma regulamentação específica do tema em questão, o jurista, utilizando o critério da analogia, tem a possibilidade de adaptar a legislação brasileira em vigor ao caso concreto. Isso tudo, desde que observadas e respeitadas a proporcionalidade e a adequação. Entretanto, em relação à jurisprudência brasileira, a partir de seus julgados, compreende-se que a temática nem sempre é abordada de maneira como deveria, adequada, a não ser nas decisões que mencionam a perda de uma chance, mas acabam por negar a indenização.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DE ADVOGADO, QUE SERIA RESPONSÁVEL PELA REVELIA E INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE APELAÇÃO. PROVA QUE SÓ PERMITE CONCLUIR PELA CULPA DO PROFISSIONAL NA ÚLTIMA HIPÓTESE. PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE, PORÉM, DA SERIEDADE E VIABILIDADE DA CHANCE PERDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PRESENTES NA ESPÉCIE. ACOLHIMENTO DO PEDIDO APENAS PARA CONDENAÇÃO DO PROFISSIONAL AO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PAGOS PELOS AUTORES E PREPARO DO RECURSO INTEMPESTIVO. APELO EM PARTE PROVIDO.

(TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005635750, 6ª CÂMARA CÍVEL, REL. DÊS. CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, J. EM 17/11/2003).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEVIDA DEMONSTRAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE E RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO.

1. Constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

2. Hipótese dos autos em que a Corte local reconheceu inexistir negativa de prestação jurisdicional e a incidência do enunciado 7/STJ, tendo o agravo se limitado a, de forma ineficaz, afirmar não cumprir ao órgão julgador a análise do mérito e não se exigir no recurso a revisão do contexto probatório, sem, todavia, assim demonstrá-lo.

3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL nº 2020/0341303-7, T3 - TERCEIRA TURMA, RELATOR, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DATA DO JULGAMENTO: 24/10/2022).

Ademais, convém trazer que a teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance também pode ser aplicada no âmbito médico, seara esta que tem tido uma vasta repercussão nos julgados dos tribunais do Brasil. Há algumas decisões em que o STJ aplicou a teoria aqui exposta em relação a pacientes que vieram a óbito por motivo de tratamento de câncer, por exemplo, impróprio/inadequado, de maneira que acaba retirando da vítima a chance/oportunidade de obter sua cura/viver (casos como de erro de diagnóstico são recorrentes nessa seara também). Nesse sentido, retrata-se que o valor da indenização deve ser calculado de modo proporcional entre o dano final e a chance perdida.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016.

Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano moral.

3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes.

4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal.

5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência.

6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação, não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica.

7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido.

Recurso especial interposto pelos genitores julgado prejudicado.

(STJ, RESP 1662338/SP, RECURSO ESPECIAL Nº 2015/0307558-0, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2017).

Sendo assim, vê-se que, a partir disso, a indenização pela perda de uma oportunidade não recai no bem propriamente dito, mas sim na perda da chance de alcançar tal bem. Por exemplo, é a perda da oportunidade da vítima se curar ou de sobreviver a determinada doença. Nessa perspectiva, é necessário ser realizada uma análise para averiguar se a vítima realmente tinha chances de cura, na situação em que fosse empregada de maneira correta a atuação profissional liberal. Ademais, expressa-se que

a indenização por essa perda de oportunidade precisa ser inferior à indenização que seria caso fosse retratada em relação ao prejuízo final.

Já em relação ao contexto da advocacia, tem-se que o advogado pode ser responsabilizado pela perda de uma chance, por exemplo, na hipótese da não propositura da ação em tempo hábil, de modo que acabe ocorrendo a prescrição/acabe o prazo. Nota-se que nem sempre a inocência da prescrição caracteriza a real e séria oportunidade perdida, de modo que não é admitida indenização nesses casos. Ao ser analisada a jurisprudência, compreende-se que as situações em que mais cabem e causam a responsabilidade civil do advogado pela perda de uma oportunidade são as perdas de prazo em função de interposição de recursos.

Além disso, outra forma de evidenciar a responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance, exemplificando, é quando ocorre a não propositura da ação rescisória no prazo de dois anos, o que enseja à vítima a perda da oportunidade de ter o seu direito validado. A partir da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), percebe-se que, inversamente, a propositura da ação rescisória pelo advogado afasta a responsabilidade civil pela perda de uma oportunidade imputada a ele pela perda temporal do prazo de interposição de recurso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA
PERDA DE UMA CHANCE. ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA AÇÃO
PRINCIPAL. DANO MORAL. CONFIGURADO.
PRECEDENTE.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando a prova dos autos, concluiu que o dano moral experimentado pelo autor decorreu de conduta culposa do advogado. Alterar esse entendimento é inviável na via especial a teor do que dispõe a referida Súmula.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AGRG NO RESP Nº 1149718/MT,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL Nº 2009/0138419-8, RELATOR

MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4
- QUARTA TURMA, DATA DO
JULGAMENTO: 21/02/2013).

Por fim, infere-se a imprescindibilidade do sistema jurídico e Poder Judiciário de tutelar as várias espécies de danos já existentes, junto às novas espécies, pois nota-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, X, assegura a todas as pessoas direitos e garantias individuais. De maneira que percebe-se que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem dos seres humanos, e, com isso, se garante e assegura o direito de indenização pelo dano material ou moral em função de dada violação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade civil pela perda de uma chance é uma temática de grande relevância na sociedade e no meio jurídico, visto que expande a abrangência de atuação/aplicação da responsabilidade civil, de maneira que promove a possibilidade de indenizar uma vítima por uma espécie de dano nova. Nesse sentido, é possível a indenização de um indivíduo que foi impedido de alcançar uma oportunidade ou de evitar um prejuízo. Ademais, verifica-se que a legislação brasileira não comporta nenhum dispositivo acerca da responsabilidade civil pela perda de uma chance, deixando a cargo dos doutrinadores e da jurisprudência traçarem seus aspectos e suas hipóteses.

Ao realizar análise de algumas jurisprudências, entende-se que, apesar de admitir a teoria da perda de uma chance, a Jurisprudência termina por ser bem exigente em sua configuração, no instante em que é necessário demonstrar vários requisitos. E, sendo assim, diante da relevância social mencionada da teoria, compreende-se que faz-se preciso que ocorra uma harmonização dos requisitos e de seus critérios de aplicação por parte da doutrina e da jurisprudência, e, possivelmente, uma regulação legislativa acerca da temática, a fim de ter parâmetros definidos e proporcionar uma aplicação justa e coesa para as partes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, [2002]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406compilada.htm. Acesso em: 09 nov. 2022.

DIAS, J. **Responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI, Itajaí, 2010. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Judit%20Dias.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2022.

DINIZ, M. H. **Curso de direito civil brasileiro**. 24. ed. São Paulo: Saraiva Jur, v. 7, 2010.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 36. ed. Saraiva Jur, v. 6, 2022.

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. **Manual de Direito Civil**. São Paulo: Saraiva, 2017.

POPPER, K. R. **A Lógica da Pesquisa Científica**. São Paulo: Cultrix, 1993. Disponível em: <https://ocondedemontecristo.files.wordpress.com/2011/05/popper-karl-a-logica-da-pesquisa-cientifica.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2022.

PORTUGAL. **Decreto Lei n.º 47344, de 25 de Novembro de 1966**. Código Civil. Lisboa, 1966. Disponível em: <https://www.ministeriopublico.pt/iframe/codigo-civil>. Acesso em: 12 nov. 2022.

ROCHA, V. A. S. A responsabilidade civil pela perda de uma chance no direito brasileiro. **Direito & Justiça**, Porto Alegre, v. 36, n. 1, p. 45-60, 2010. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/fadir/article/view/9063>. Acesso em: 25 nov. 2022.

RODRIGUES JUNIOR, O. L. *et al.* **Responsabilidade civil contemporânea**: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, p. 153, 2011.

SAVI, S. **Responsabilidade civil por perda de uma chance**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SANTOS, M. C. F. **Responsabilidade civil pela perda de uma chance**. Monografia - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, Brasília, 2014. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/6016/1/21008093.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2022.

SILVA, R. P. **Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance**. São Paulo: Atlas, 2007.

STJ. **Agravo Interno no Recurso Especial nº 2020/0341303-7**. T3 - Terceira turma. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data do julgamento: 24/10/2022.

STJ. **AGRG nº RESP Nº 1149718/MT, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2009/0138419-8**. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. T4 - Quarta Turma. Data do julgamento: 21/02/2013.

STJ. **RESP Nº 1662338/SP, RECURSO ESPECIAL Nº 2015/0307558-0**. Relatora Ministra Nancy Andrichi. T3 - Terceira Turma. Data do julgamento: 12/12/2017.

STOCCO, R. **Tratado da responsabilidade civil**: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial. 5. ed. Rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

TARTUCE, F. **Manual de Direito Civil**: volume único. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2021.

TJRS. **Apelação Cível nº 70005635750, 6ª Câmara Cível**. Relator Desembargador Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Julgado em 17/11/2003.

VASSILIEFF, S. **A responsabilidade civil do advogado**. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

UM OLHAR CRÍTICO NO PÓS-PANDEMIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

A CRITICAL LOOK AT BRAZILIAN BASIC EDUCATION POST-PANDEMIC

Thalyta Karina Correia Chediak¹⁰

João Baraldi Neto¹¹

Amanda Netto Brum¹²

Resumo

A presente pesquisa possui como o objetivo geral analisar os principais dados referente a desigualdade de ensino e evasão escolar na educação básica durante a pandemia da Covid-19 (2020-2022), assim como as medidas governamentais de reparação adotadas pelo governo. Para tanto, vale-se da abordagem qualitativa de natureza documental. Este estudo desenvolve-se, então, com base no método histórico-dialético diante nos estudos de Kosik (1976) e Netto (2011). Para coleta de dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Datafolha, Inep e Pnad acerca da educação básica brasileira o recorte temporal estabelecido foi de 2020 a 2022, período que engloba o cenário da pandemia da Covid-19. Acredita-se, por fim, que o direito e o acesso à educação no Brasil estão em risco devido à potencialização de políticas neoliberais e movimentos políticos fascistas, que ganharam força durante o Governo Bolsonaro (2019-2022) e diante disso, políticas públicas de reparação e proteção à educação básica demonstram-se fundamentais.

Palavras-Chave: Educação Básica brasileira; Políticas Públicas; Pós-pandemia.

Abstract

The general objective of this research is to analyze the main data regarding teaching inequality and school dropout in basic education during the Covid-19 pandemic (2020-2022), as well as the governmental reparation measures adopted by the government. To this end, it uses a qualitative approach of a documentary nature. This study is therefore developed based on

¹⁰ Mestre em Educação (UNIR), mestranda em Direito e Justiça Social (FURG). Email: chediakthalyta@gmail.com.

¹¹ Mestre em Direito e Justiça Social – FURG.

¹² Pós-doutoranda em Direito (FURG), doutora em Direito (UNISINOS), mestra em Direito e Justiça Social (FURG), Especializanda em educação para sexualidades (FURG). Integrante do Grupo de pesquisa Direito e Sexualidades – GdiS. Email: amandanettobrum@gmail.com.

the historical-dialectic method in the studies of Kosik (1976) and Netto (2011). To collect statistical data provided by the Datafolha Institute, Inep and Pnad about Brazilian basic education, the time frame established was from 2020 to 2022, a period that encompasses the Covid-19 pandemic scenario. Finally, it is believed that the right and access to education in Brazil are at risk due to the strengthening of neoliberal policies and fascist political movements, which gained strength during the Bolsonaro Government (2019-2022) and in light of this, public policies of repair and protection of basic education prove to be fundamental.

Keywords: Brazilian Basic Education; Public policy; Post-pandemic.

1 INTRODUÇÃO

A educação é, no Brasil, direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercer a cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

A educação básica brasileira é compulsória e são várias as leis que corroboram para a tentativa de garantir o acesso à educação nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por exemplo, exige frequência mínima no ano letivo para aprovação nas séries iniciais, sendo de 75% (setenta e cinco por cento) para o ensino fundamental e médio e 60% (sessenta por cento) para o ensino infantil. Embora nossa legislação preveja a obrigatoriedade do Estado Neoliberal em garantir meios para o acesso e permanência na escola, na prática, é possível observar que tal direito foi negligenciado durante a pandemia da Covid-19.

Assim, é possível perceber que os impactos deixados pela pandemia no âmbito educacional têm colocado o direito à educação em risco, diante das políticas de cunho fascista adotadas pelo governo na época do contexto pandêmico para com a educação, sendo, em dias presentes, necessário a adoção de políticas públicas reparadoras, por parte do Estado, a fim de garantir o desenvolvimento integral dos alunos, especialmente no pós-pandemia.

Diante deste cenário, esta pesquisa possui o objetivo geral de analisar os principais dados referente a desigualdade de ensino e evasão escolar na educação básica durante a pandemia do Covid-19 (2020-2022), assim como as medidas governamentais de reparação adotadas pelo governo brasileiro.

A presente pesquisa possui abordagem qualitativa, de natureza documental, é desenvolvida com base no método histórico-dialético, a partir dos estudos de Kosik (1976) e Netto (2011). Para o

desenvolvimento da pesquisa, estabelecemos o recorte temporal de 2020 a 2022, período que engloba o cenário da pandemia do Covid-19, utilizamos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Datafolha, Inep e Pnad acerca da educação básica brasileira. Ainda, selecionamos as principais medidas governamentais adotadas para identificar os principais desafios e perspectivas no pós-pandemia para a educação brasileira.

O presente trabalho divide-se em três partes. Na primeira, apresentamos os dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Datafolha, Inep e Pnad acerca do acesso e permanência dos alunos na educação básica brasileira. Na segunda parte, discutimos sobre as principais medidas governamentais de cunho reparador adotadas em prol do acesso e permanência dos alunos da educação básica brasileira com base nos estudos de Stanley (2018). Já na terceira parte, propomos analisar quais os principais desafios e perspectivas da educação básica brasileira no pós-pandemia.

2 O ACESSO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA EM DADOS

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Datafolha (2022), cerca de 4 milhões de alunos, com idade de 6 a 34 anos, deixaram a escola durante 2020 até 2022. Os dados representam uma taxa de 8,4% de evasão escolar.

Sobre o conceito de evasão, Anuto (2013) explica que a saída definitiva do aluno do ambiente escolar possui como marca principal a caracterização do fenômeno de fuga.

A evasão escolar compreende, em linhas gerais, o abandono da escola durante o período letivo, ou seja, o aluno se matricula, inicia suas atividades escolares, porém, em seguida deixa de frequentar a escola, por uma ou um conjunto de razões. Outra situação de evasão é quando o aluno se matricula, inicia o período letivo, no entanto, desiste ou embrenha na fuga do estabelecimento de ensino. Este seria na perspectiva mais adequada a evasão, cuja sanção seria a reprova por falta. [...] A evasão, de forma clássica, consiste no ato ou processo de evadir, de fugir, de escapar ou esquivar-se dos compromissos assumidos ou por vir a assumir (Anuto, 2013, p. 19).

A preocupação sobre a evasão escolar compõe as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) sancionado em 2014. O documento estabelece o objetivo de universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos com o fim de elevar a taxa líquida de matrículas, no ensino médio, para 85% (oitenta e cinco por cento).

Além da preocupação com o ingresso e permanência dos alunos nas Instituições de Ensino de educação básica, há também a preocupação com o nível de aprendizagem esperado de acordo com as competências curriculares de cada série, estabelecidas nos dispositivos que norteiam toda a educação brasileira.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou em 2022, o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) referente ao ano de 2021. De acordo com a avaliação, houve diminuição na média de aprendizado em todas as séries que foram avaliadas.

O Saeb constitui um indicativo da qualidade do ensino básico brasileiro, e a diminuição da média em comparação aos anos anteriores, em especial no que tange os impactos da pandemia na educação, apontam para um retrocesso preocupante.

Durante a pandemia houve maior abrandamento dos critérios de aprovação e desempenho dos alunos, diante da adoção do “continuum escolar”, que resultou na não reprovação dos estudantes e ausência de adoção de medidas para garantia da qualidade do ensino no período de pandemia em nível nacional.

Há tempos presenciamos no Brasil um elevado índice de desigualdade social e de dificuldade de acesso à educação para os menos favorecidos socialmente e economicamente e pudemos ver na pandemia da Covid-19 esses déficits sociais enfatizados e que demonstraram ser capazes de elevar a gravidade dos problemas educacionais existentes.

Diante do caos repentino instaurado pelo risco de contágio da Covid-19, o sistema educacional brasileiro necessitava de uma resposta rápida e eficaz para garantir o acesso ao ensino e a permanência desses alunos. Porém, segundo dados do Inep (2022), podemos verificar que as medidas adotadas não foram tão eficazes para atender a todos de forma igualitária, pois os principais motivos que levaram à evasão dos alunos foram a dificuldade do acesso remoto às aulas e problemas financeiros.

Ainda, de acordo com dados fornecidos pelo Instituto Datafolha (2022), cerca de 4 milhões de alunos, com idade de 6 a 34 anos, deixaram a escola durante 2020 até 2022. Portanto, a partir deste cenário, observa-

se que pouco foi feito para garantir, de fato, a permanência dos discentes no ambiente escolar.

3 PRINCIPAIS MEDIDAS GOVERNAMENTAIS ADOTADAS ENTRE OS ANOS 2020 E 2022 EM PROL DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

A pandemia da Covid-19 se instaurou durante o governo de Jair Bolsonaro, então, este será o período que tomaremos como base de análise. Todavia, é importante destacar que o governo Bolsonaro ficou conhecido pela adoção de diversas medidas de impactos na educação brasileira, em todos os níveis, que contribuem para a precarização do ensino, conforme aponta Chediak (2023), e em se tratando de um período de reclusão em decorrência da pandemia, a situação se tornou ainda mais alarmante.

Segundo Silva e Sousa (2020, p. 969) “a pandemia é um alerta para a criação, ampliação e consolidação das políticas de inclusão digital no cotidiano escolar”. A partir da necessidade de manter as atividades escolares de casa, pudemos refletir sobre a possibilidade de aprendizado por meio de mídias e de metodologias inovadoras, mas acima de tudo, tivemos a oportunidade de pensar no direito à inclusão digital para fins educacionais.

Poucas medidas foram adotadas pelo governo em prol da garantia de qualidade de ensino dos alunos da educação básica. A exemplo disso, enumeramos duas medidas. A primeira, a Lei nº 14172/2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet para fins educacionais, e a segunda, o Projeto de Lei nº 3520/2021, que institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia do Covid-19 na Educação.

A Lei nº 1472/2021 dispõe sobre a assistência da União aos Estados e ao Distrito Federal para a garantia de acesso à internet, com fins educacionais. Visa garantir inclusão aos alunos e aos professores da educação básica pública, nos termos do inciso III do caput do art. 9º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Em seu Art. 2º, a lei supracitada determinou o repasse de recursos da União para os Estados e Distrito Federal, no valor de R\$ 3.501.597.083,20 (três bilhões, quinhentos e um milhões, quinhentos e noventa e sete mil e oitenta e três reais e vinte centavos), com o intuito de adotar ações para a garantia do acesso à internet, aos alunos e aos professores da rede pública de ensino, em virtude da calamidade pública decorrente da Covid-19.

Uma pesquisa realizada pela Vox Populi (2021), por solicitação do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, apontou que professores, estudantes e pais não tiveram apoio do poder público para desenvolver as aulas remotas. Logo, fica evidente que, embora o governo tenha adotado medidas que considerava suficientes, a falta de conectividade foi uma das principais causas para o cumprimento regular das atividades de ensino, o que penalizou, ainda mais, os estudantes de baixa renda.

De acordo com os resultados obtidos pela Vox Populi (2021), os professores apontaram que houve mais trabalho do que o normal, pois para 49,2% dos entrevistados, as jornadas chegavam até 10 horas. E por outro lado, dados demonstram que os alunos estudaram menos. Quando entrevistados, os estudantes do ensino médio, cerca de 84,1% declararam ter dedicado menos tempo às aulas virtuais. Na oportunidade, os pais também foram entrevistados e afirmaram que seus filhos estudaram apenas 2,5 horas por dia.

O estudo revela que houve falta de apoio do governo principalmente com relação à falta de treinamento para os professores para dar aulas pela internet. Para a pesquisa, mais da metade dos entrevistados afirmaram que não receberam do poder público infraestrutura física para trabalharem ou estudarem remotamente. Isso inclui equipamentos tecnológicos, pacote de internet e suporte técnico para viabilizar as aulas remotas. Entre os pais dos estudantes, essa reclamação chega a 73,8%, ou seja, dois terços.

Somente no Estado de São Paulo, onde a pesquisa foi realizada, segundo os pais, 15,1% dos filhos deixaram de estudar por falta de acesso à Internet ou por necessitarem trabalhar e ajudar na composição da renda familiar.

Ainda, a pesquisa analisou a estrutura das escolas para oferta de aulas remotas e o resultado também pode ser considerado preocupante. 50,5% dos professores ouvidos expuseram que, em pleno século XXI, nem todas as salas possuíam acesso à internet, computadores ou câmeras de vídeo disponíveis para as aulas.

Além disso, 42,5% dos estudantes do ensino médio revelaram que possuem acesso a computadores. Para assistir às aulas neste período, cerca de 94% teve disponível somente o celular para acompanhar as atividades, e que em alguns casos ainda era compartilhado com outro membro da família.

Stanley (2018) explica que nos últimos anos diversos países do globo foram acometidos com uma espécie de nacionalismo de extrema-

direita. Tal alegação retrata muito bem o cenário político brasileiro entre os anos de 2020 e 2022.

O autor explica que este movimento político de direita se relaciona com o avanço das políticas fascistas e, portanto, com o avanço de um possível surgimento de um estado fascista.

A tarefa de generalizar em torno de tal fenômeno é sempre problemática, já que o contexto de cada país é sempre único. Mas essa generalização é necessária no momento atual. Escolhi o rótulo “fascismo” para qualquer tipo de ultranacionalismo (étnico, religioso, cultural), no qual a nação é representada na figura de um líder autoritário que fala em seu nome (Stanley, 2018, p. 6).

Diante dos dados apresentados, no Brasil, é possível observar que mesmo diante do aumento da evasão escolar e da diminuição da aprendizagem dos alunos da educação básica, o governo mostrou grande apoio às ações de interferência direta na educação básica brasileira, ainda que nenhuma delas tivesse o objetivo de garantir aos estudantes boas condições de estudo.

Ocorre que o interesse do governo neste período possui viés anti-intelectual, que para Stanley (2018) constitui uma das características de políticas fascistas.

A política fascista inclui muitas estratégias diferentes: o passado mítico, propaganda, anti-intelectualismo, irrealidade, hierarquia, vitimização, lei e ordem, ansiedade sexual, apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. Embora a defesa de certos elementos seja legítima e, às vezes, justificada, há momentos na história em que esses elementos se reúnem num único partido ou movimento político, e esses momentos são perigosos (Stanley, 2018, p. 6).

Segundo Stanley (2018), no mundo inteiro é possível identificar movimentos de extrema direita atacando o sistema de educação pela suposta disseminação do “marxismo”, “pedagogias freirianas de esquerda”, “feminismo”, deixando de dar lugar central às ideologias de extrema direita.

O autor explica que, por mais que tais argumentos falaciosos não coadunem com a verdade fática, contribuem para a criação de uma política do “nós” e “eles” em prol do anti-intelectualismo e tudo aquilo que seja conhecimento científico, objetivando o controle das instituições de saberes.

Para o autor, o “político fascista possui técnicas específicas para destruir os espaços de informação e quebrar a realidade (Stanley, 2018, p. 51)”, portanto, ele é a favor da precarização da educação para que, por consequência, forme cidadãos acríticos e incapazes de adotar posicionamento em desfavor das políticas de manutenção do poder econômico e ideológico do governo de extrema direita.

A educação, portanto, representa uma grave ameaça ao fascismo ou se torna um pilar de apoio para a nação mítica. Não é de se espantar, então, que os protestos e confrontos culturais nos campi universitários representem um verdadeiro campo de batalha político e recebam atenção nacional. Há muita coisa em jogo (Stanley, 2018, p. 36).

Diante disso, é possível observar que vários desafios e medidas contribuíram para a desestabilização da educação no Brasil durante o governo Bolsonaro durante a pandemia da COVID-19. Stanley (2011) explica acerca da possibilidade de adoção de políticas fascistas pelo governo democrático no capitalismo, uma vez que o capitalismo permite de forma sutil a adoção de políticas e gestão neste viés.

A falta de apoio do governo para fornecer recursos e infraestrutura adequada para o ensino a distância é um fator importante no declínio da qualidade da educação e no aumento das taxas de abandono escolar. Essas ações refletem o movimento anti-intelectual (Stanley, 2018) característica das políticas fascistas voltadas para o controle das instituições de conhecimento e a criação de uma polarização entre “nós” e “eles” diante do aumento de movimentos de extrema-direita que atacam o sistema educacional, desvalorizam o conhecimento científico e promovem a desinformação e a manipulação da realidade.

É importante reconhecer a educação de qualidade como direito fundamental e combater todas as formas de insegurança que impedem o desenvolvimento intelectual e crítico dos alunos, bem como o acesso ao ensino básico obrigatório previsto pelo ordenamento jurídico.

4 DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA NO PÓS-PANDEMIA

Dentre os principais desafios e perspectivas para a educação básica brasileira no pós-pandemia são desafiadores, uma vez que os estudantes brasileiros, principalmente os usuários do ensino público e matriculados na educação básica, tiveram cerceado o seu direito à educação durante o período de pandemia, motivo pelo qual a academia necessita promover essa discussão, de forma interdisciplinar, a fim de que novos projetos possam ser apresentados dentro do governo de 2023-2026.

Contudo, com base nos dados apresentados, entre os principais desafios encontrados, está a desigualdade de acesso, vez que a pandemia evidenciou ainda mais as já existentes desigualdades educacionais. Neste período muitos alunos não tiveram acesso adequado aos recursos tecnológicos e a espaços adequados que oferecessem boas condições de estudo em casa. A principal maneira de reduzir a enorme desigualdade é o enfrentamento do tema pelas lideranças políticas de forma a guiar a promoção de uma educação básica de qualidade para todos, conforme prevista constitucionalmente.

Também destacamos a defasagem de aprendizado, pois os alunos tiveram dificuldade em acompanhar o conteúdo e, portanto, tiveram o seu aprendizado comprometido. Dessa forma, será necessário a implementação de um conjunto de estratégias para a recuperação, aulas reforços e nivelamento, mediante identificação das lacunas de aprendizagem.

Além disso, destacamos o impacto que o isolamento social acarretou na saúde mental dos alunos e professores, sendo necessário o oferecimento de apoio psicológico adequado e a adoção de medidas práticas em prol do autocuidado e do desenvolvimento de toda a comunidade acadêmica.

Outros pontos desafiadores são a necessidade de reconhecimento da necessidade no uso adequado das tecnologias na educação, uma vez que a pandemia acelerou o processo de adoção dessas ferramentas, de forma que a capacitação do corpo docente para o uso efetivo das ferramentas digitais seja possível.

Por fim, diante dos dados apresentados, a reorganização escolar se faz fundamental para lidar com os desafios do cenário brasileiro. É preciso repensar o currículo escolar de forma a torná-lo adaptável aos diferentes formatos de ensino e promover uma abordagem interdisciplinar para o desenvolvimento integral do aluno, conforme conceituado por Saviani e Duarte (2012).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela análise dos dados e da questão de pesquisa investigada, é possível identificar que o direito e o acesso à educação no Brasil estão em risco devido à potencialização de políticas neoliberais e movimentos políticos fascistas, que ganharam força durante o Governo Jair Bolsonaro (2019-2022).

Vimos o reflexo dessas políticas atingir ainda mais a classe baixa durante o período de pandemia da Covid-19, ou seja, os mais afetados foram os estudantes de baixa renda, que já possuíam dificuldades de acesso ao ensino, e tiveram esta problemática agravada pela pandemia, principalmente devido ao grande número de brasileiros que não possuem acesso à internet, conforme dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad Contínua TIC) de 2018.

É possível verificar que o modelo de gestão adotado à época pelo Ministério da Educação (MEC) interferiu diretamente no direito à educação de muitas crianças e adolescentes, o que culminou no aumento do índice de evasão escolar e da desigualdade no ensino público.

O ensino remoto revelou problemas estruturais que os brasileiros enfrentam para fazer jus ao acesso à educação e, embora tenhamos alguns avanços com a edição da Lei nº 14172/2021, que dispõe sobre a garantia de acesso à internet para fins educacionais, e o Projeto de Lei nº 3520/2021, que institui o Plano Nacional de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia do Covid-19 na Educação, a legislação específica ainda carece de efetividade.

De igual modo, não podemos precisamente medir os danos causados no processo de ensino e aprendizagem dentro deste período estudado, bem como o tempo de reparação para tanto, se isso for possível.

Diante disso, parece razoável afirmar que a falta de políticas públicas eficazes para garantir o acesso à internet para fins educacionais durante a pandemia foi uma problemática enfrentada pelas famílias fundamentalmente de classe baixa, nas quais grande parte dos estudantes sequer tinham computadores para realizar as atividades escolares, conforme apontado pela pesquisa Vox Populi (2021).

A partir desse panorama, pudemos constatar que a pandemia da COVID-19 destacou a importância da conectividade digital para a continuidade da educação, porém, nem todos os estudantes têm acesso adequado à internet. Portanto, além dos efeitos da ausência de serviço de internet durante a pandemia, que precisam ser investigados e

minimizados, as políticas públicas de conectividade devem ser repensadas para o futuro dessa nova era digital que vivemos.

A ausência de efetividade das leis analisadas para lidar com essa questão dificultam ainda mais a resolução do problema, principalmente porque o governo não adotou medidas para tentar resolver essa lacuna.

Entendemos que, considerando o investimento público anunciado para investimento nesta área discutida, outras medidas poderiam ter sido adotadas para enfrentar a falta de acesso à internet para fins educacionais.

Durante o período da gestão do governo Bolsonaro, caberia o investimento em infraestrutura de conectividade, expansão de cobertura de internet em áreas remotas, além de subsídios para famílias de baixa renda terem condições de se conectarem com a rede mundial de computadores.

Ainda, destaca-se que o poder público poderia ter realizado parcerias com empresas de telecomunicações e organizações não governamentais para fornecer acesso à internet de forma gratuita ou a preços mais acessíveis para as famílias dos estudantes de baixa renda.

Num cenário ainda mais pessimista, mas que está dentro da realidade do Brasil, o governo poderia ter distribuído dispositivos eletrônicos para os estudantes de baixa renda, como tablets ou laptops.

Fica evidente que a falta de internet ainda é um problema para além do período da pandemia e é preciso que a legislação se adeque para garantir não somente o direito à educação, mas o direito fundamental à conectividade.

REFERÊNCIAS

APEOESP/Vox Populi. Pandemia escancara omissão do Estado com educação pública. **Sindicato dos professores do ensino oficial de São Paulo**, São Paulo, 2021. Disponível em: <http://www.apeoesp.org.br/publicacoes/pesquisa-2021/pandemia-escancara-omissao-do-estado-com-educacao-publica-mostra-pesquisa-apeoesp-vox-populi/>. Acesso em: jun. 2023.

BORHER, L. Evasão escolar: Brasil pode levar três anos para recuperar déficit no processo educativo. **Rede Brasil Atual**, São Paulo, 18 fev. 2021. Disponível: <https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/evasao-escolar-brasil-pandemia/>. Acesso em: 12 abr. 2023.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da

República, [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 09 dez. 2023

CHEDIÁK, T. K. C. **O estado de exceção e o estado democrático de direito para além das aparências**: uma análise das políticas do ensino superior público do governo Bolsonaro. 2022. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Rondônia, 2022.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO. Pandemia ampliou desigualdade no ensino, evasão escolar e perda de aprendizagem. **CNTE**, Brasília, DF, 23 ago. 2023. Disponível em:

<https://www.cnte.org.br/index.php/menu/comunicacao/posts/noticias/75275-pandemia-ampliou-desigualdade-no-ensino-e-perda-de-aprendizagem-nas-escolas#:~:text=De%20acordo%20com%20uma%20pesquisa,%C3%A0s%20classes%20D%20e%20E>. Acesso em: 12 abr. 2023.

INOUE, G; BERNARDES, G. Inep aponta piora em todos os níveis da educação básica devido à pandemia. **CNN**, São Paulo, 23 ago. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/inep-aponta-piora-em-todos-os-niveis-da-educacao-basica-devido-a-pandemia>. Acesso em: 12 abr. 2023.

KOSIK, K. **Dialética do concreto**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

NETTO, J. P. **Introdução ao estudo do método de Marx**. São Paulo: Expressão Popular, 2011.

SAVIANI, D.; DUARTE N. **Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar**. Campinas: Autores Associados, 2012.

STANLEY, J. **Como funciona o fascismo**: A política do “nós” e “eles”. Tradução de Bruno Alexander. Porto Alegre: L&PM. E-book, 2018.

SILVA, D. S. V; SOUSA, F. C. Direito à Educação Igualitária e(m) Tempos de Pandemia: Desafios, Possibilidades e Perspectivas no Brasil. **Revista Jurídica Luso-Brasileira**, v. 6, n. 4, p. 961-979, 2020.

**O CINEMA COMO INSTRUMENTO DE
APRENDIZAGEM: APONTAMENTOS A PARTIR DO
FILME *A FORMA DA ÁGUA***

**CINEMA AS A LEARNING INSTRUMENT:
NOTES FROM THE FILM THE SHAPE OF WATER**

Luciana Alves Dombkowitsch¹³
Amanda Netto Brum¹⁴
Renato Duro Dias¹⁵

Resumo

Tem-se como objetivo, neste estudo, analisar a partir do filme *A forma da água* algumas possibilidades de políticas educativas centradas na justiça curricular, como caminho para a concretização de uma justiça social. De abordagem qualitativa e metodologia bibliográfica a proposta avança tendo como hipótese que o cinema se constitui como uma ferramenta de aprendizagem, ou seja, como uma possibilidade de construção pedagógica pautada em justiça curricular. Para tanto, no

¹³ Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas – UCPEL. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, especialização em Direito e Processo do Trabalho pela UCB, mestrado em Direito e Justiça Social pela FURG/RS. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa (CNPq) Direito e Sexualidades (GDIS FURG) e Núcleo de Estudos Latino-Americano (NEL – UCPEL). Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: lucianadomb@gmail.com.

¹⁴ Pós-doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande -FURG. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (2009), especialização em Direito e Processo do Trabalho, mestrado em Direito e Justiça Social - FURG/RS e doutorado em Direito Público pela Universidade do Vale dos Sinos - UNISINOS. Especializanda em Educação para as Sexualidades pela FURG. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa (CNPq) Direito e Sexualidades (GDIS FURG). Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: amandanettobrum@gmail.com.

¹⁵ Vice-Reitor da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Professor da Faculdade de Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado em Direito e Justiça Social (FURG), Doutor em Educação (UFPEL) com período na Universidade de Lisboa, Portugal, Líder do Grupo de Pesquisa (CNPq) Direito e Sexualidades (GDIS FURG.) Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: renatodurodias@gmail.com.

primeiro momento abordar-se-á a forma como o neoliberalismo vem impondo uma transformação nas políticas públicas educativas por meio da introdução do currículo neoliberal. Já no segundo momento problematiza-se a forma como os professores fazem política e como a política faz professores. Logo, questiona-se a possibilidade de existir Justiça Curricular dentro de um modelo de educação neoliberal, e por fim, apresenta-se, a partir do filme A Forma da água, o cinema como ferramenta de aprendizagem, isto é, como uma possibilidade de construção pedagógica pautada em uma justiça curricular despatriarcalizada, anticlassista, antirracista e LGBTQIAP+ inclusivo.

Palavras-Chave: Cinema; A Forma da água; Educação; Neoliberalismo; Política Educacional.

Abstract

The objective of this study is to analyze, based on the film *The Shape of Water*, some possibilities for educational policies centered on curricular justice, as a path to achieving social justice. With a qualitative approach and bibliographic methodology, the proposal advances with the hypothesis that cinema constitutes a learning tool, that is, as a possibility for pedagogical construction based on curricular justice. To this end, we will first address the way in which neoliberalism has been imposing a transformation in public educational policies through the introduction of the neoliberal curriculum. In the second moment, the way teachers make politics and how politics makes teachers is problematized. Therefore, the possibility of Curricular Justice existing within a neoliberal education model is questioned, and finally, based on the film *The Shape of Water*, cinema is presented as a learning tool, that is, as a possibility of pedagogical construction based on a depatriarcalized, anti-class, anti-racist and LGBTQIAP+ inclusive curricular justice.

Keywords: Cinema; *The Shape of Water*; Education; Neoliberalism; Educational politics.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade brasileira é possível apontar que o discurso presente na educação pública, dentro do contexto atual, é o responsável pela baixa densidade democrática na educação pública brasileira. A partir dessa premissa, vem à tona o debate de como este discurso, oriundo da busca por desempenho e eficiência, interfere na forma das escolas fazerem política e conseqüentemente na forma como constroem/elaboram o currículo que corresponderá a estas políticas, que tem como escopo as avaliações de larga escala e a padronização gerencialista, assim como a

reconfiguração do trabalho docente capaz de atender a estas demandas do neoliberalismo de privatização da política educacional.

Diante disso, este estudo investiga a partir da análise do filme a Forma da água algumas possibilidades de políticas educativas centradas na justiça curricular, como caminho para a concretização de uma justiça social. De abordagem qualitativa e metodologia bibliográfica a proposta avança tendo como hipótese o cinema como uma ferramenta de aprendizagem, ou seja, como uma possibilidade de construção pedagógica pautada em justiça curricular.

Para tanto, o primeiro tópico abordará a forma como o neoliberalismo vem impondo uma transformação nas políticas públicas educativas por meio da introdução do currículo neoliberal. A seguir se questionará a possibilidade de existir Justiça Curricular dentro de um modelo de educação neoliberal e, finalmente, no terceiro é relatada, a partir do filme, A Forma d'água como o cinema pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizagem.

A análise proposta neste escrito demonstra-se proeminente pela necessidade proeminente de se legitimar uma Justiça Curricular democrática e igualitária, isto é, despatriarcalizada, anticlassista, antirracista e LGBTQIAP+ inclusivo.

2 APONTAMENTOS ACERCA DO IMPACTO DO NEOLIBERALISMO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS

O neoliberalismo como norma, se estende para muito além do econômico, colocando-se, acima de tudo, como a “[...] racionalidade do capital transformada em lei social geral” (Laval, 2019, p. 9), a qual vem impondo uma transformação profunda na sociedade e em especial nos sistemas educacionais do mundo inteiro, do que não escapa o Brasil.

Essa nova racionalidade do capitalismo proporcionou segundo Ball (2014), a expansão global no neoliberalismo¹⁶ nos programas de governo e em especial nas políticas educativas. O discurso decorrente de tais políticas coloca o Estado como ineficiente para gerir a educação pública, disseminando a importância, ou melhor, a urgência de soluções privadas e filantrópicas, para os problemas da educação pública.

¹⁶ “Neoliberalismo é sobre dinheiro e mentes, e como eu seguirei argumentando, é um nexos de interesse comum entre as várias formas de capital e de Estados contemporâneos” (Ball, 2014, p. 26).

Então, para que se pense em um modelo alternativo de escola, democrática e igualitária, isto é, despatriarcalizada, antirracista, anticlassista e LGBTQIAP+ inclusiva, é necessária uma luta efetiva de emancipação do capitalismo, e para tanto, deve-se compreender o neoliberalismo como uma nova racionalidade do capitalismo. Temos então, a partir de Dardot e Laval

[...] que o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política econômica, é em primeiro lugar e fundamentalmente uma *racionalidade* e, como tal, tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta dos governados (Dardot; Laval, 2106, p. 17).

Ainda, segundo os autores, o neoliberalismo não produz apenas aspectos negativos como os relativos à destruição das regulamentações e das instituições, o neoliberalismo “produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades” (Dardot; Laval, 2016, p. 16).

Importante destacar, que na linha do referencial teórico utilizado, trava-se um diálogo entre os franceses Pierre Dardot e Christian Laval e o inglês Stephen Ball. Os autores possuem semelhante leitura do neoliberalismo, em especial, quando se utilizam da análise foucaultiana do conceito de governamentalidade, “[...] particularmente o governo das populações por meio da produção de seres empreendedores “dispostos”, “auto-governáveis, [...]” (Ball, 2014, p. 26).

No mesmo sentido, da governamentalidade foucaultiana e a partir do conceito de racionalidade política, Dardot e Laval (2016) informam que com o neoliberalismo, o que está em jogo é a própria forma de existência da sociedade, definindo a forma como nos comportamos, como nos relacionamos com os outros e com si mesmo. Segundo os autores,

O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no caminho da “modernidade”. Essa norma impõe a cada um de nos que vivamos num universo de competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar

desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, [...] (Dardot; Laval, 2016, p. 16).

Dentro dessa lógica neoliberal estabelecem-se redes de governança, que segundo Ball (2014) desenvolvem-se como o modo dominante de governança e de organização social, criando o que o autor chama de “déficit democrático” (Ball, 2014, p. 32), impondo a privatização da política, retirando dela a necessária transparência na elaboração das políticas públicas.

Ademais, o neoliberalismo se utiliza práticas e tecnologias, operando em e sobre instituições de ensino, criando, ou melhor, reformando diversos tipos de trabalhadores, em síntese, “As tecnologias neoliberais trabalham em nós para produzir um corpo docente e discente “dócil e produtivo”, e professores e alunos responsáveis e empreendedores” (Ball, 2014, p. 64).

Esse modo dominante de governança e de organização social decorrem do processo de avanço do neoliberalismo, colocado para muito além de um projeto econômico, como um projeto intelectual fundamental para a construção discursiva de uma crise política em torno do Estado, introduzindo que a solução para tal crise se encontra na importação de “novas ideias” em política educacional a partir dos empreendedores sociais, os quais ofertam soluções inovadoras para sanar a crise da educação pública.

Importante pensar então, como esses discursos atuam no modo de ação que o indivíduo exerce sobre si mesmo, o que Foucault vai definir como autogoverno do indivíduo. Esse autogoverno vai definir nossas condutas diante das problemáticas do mundo, as quais serão definidas pelas normas que irão conformar os indivíduos.

Assim, governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique que essa conduta é tanto aquela que se tem *para consigo mesmo* quanto aquela que se tem para com os outros. É nisso que o governo requer liberdade como condição de possibilidade: governar não é governar *contra* a liberdade ou a *despeito* da liberdade, mas governar *pela* liberdade, isto é, agir ativamente no espaço de liberdade dado aos indivíduos para que estes venham a conformar-se por si mesmos a certas normas (Dardot; Laval, 2016, p. 19).

Dessa forma, o discurso de que a educação pública fracassou, e que as políticas de governo não são suficientes para que ela se reanime, faz com que as pessoas entendam que a única forma de governo, tanto para si como para todas é aquela pautada no individualismo, no empreendedorismo, na salvação do público pelo privado, entendendo esta como a única saída viável. Desse modo, vem consolidando-se a mercantilização da educação pública por meio da ação do setor privado, seja através da privatização ou das parcerias e em especial da “nova filantropia” (Ball, 2014).

Trata-se, segundo Ball (2014) de uma ampla forma de transferência de políticas, do público para o privado, quando então, grandes empresas privadas passam a atuar de maneira diversa, diretamente em política educacional, com o objetivo de expansão de possibilidades de lucro, produzindo e disseminando novas políticas educacionais. Um dos principais eixos dessa política é a criação “[...] de um conjunto de argumentos neoliberais sobre uma desestatização mais ou menos radical (JESSOP, 2002), sujeitando organizações públicas à concorrência e/ou à entrega da prestação de serviços educacionais para o setor privado” (Ball, 2014, p. 37).

Há ainda, segundo o autor, um discurso pós-neoliberal, de reafirmação do papel do Estado, sob uma nova perspectiva e sob novas modalidades, instituindo uma mudança no governo, que passa a se caracterizar sob uma forma de governança em rede, onde o Estado deixa de ser prestador de serviços educacionais para ser o “contratante” desses serviços (Ball, 2014, p. 37). Essas atividades implicam:

[...] tanto o “empreendedorismo de políticas” e, ao mesmo tempo, os processos de transferências de políticas, e são um mecanismo de “convergência de políticas”. Os consultores e as empresas educacionais que participam estão entregando “desenvolvimento” e política de ajuda (por lucro em potencial), desenvolvendo infraestruturas políticas e incorporando discursos de políticas ocidentais predominantes [...] (Ball, 2014, p. 38).

Segundo Ball (2014),

[...] o empreendedorismo de política centra-se no papel de agência de elaboração de políticas e mobilidade política [...], o trabalho de “ativistas com um interesse particular no sucesso da política

[...]”. O empreendedor de política é hábil em construir ou abrir e tirar proveito de “janelas políticas”¹⁷ [...]. Empreendedores de políticas, como Kingdon coloca, “estão à espreita” [...] e, assim, precisam estar prontos, flexíveis e persistentes, e serem capazes de “ligar soluções a problemas”, propostas a momentos políticos e eventos políticos a problemas de políticas” [...] (Ball, 2014, p. 41).

A partir da prática do empreendedorismo de Estado, não é mais interessante ao neoliberalismo o extermínio do Estado, haja vista que o Estado, a partir desse modelo, é essencial para a criação e regulamentação de mercado. Dessa forma, o neoliberalismo passa a ser realizado, não só pelos processos de privatização do público, mas em especial,

[...] disseminado e incorporado por meio de quase-mercados, parcerias público privadas, o empreendedorismo de organizações públicas, e o trabalho de instituições de caridade e organizações de voluntariado, na verdade o terceiro setor pode ser visto como uma nova governamentalidade sendo lançada sob o neoliberalismo (Ball, 2014, p. 42).

Segundo Ball (2014),

[...] a reforma neoliberal é tanto exógena (privatizadora), quanto exógena (reformista), o setor público é substituído e reformado ao mesmo tempo, e as duas coisas são conectadas. (Ball, 2014, p. 43)

com o intuito de impor na sociedade e em particular na educação, uma reformulação radical “[...] das bases econômicas, sociais, morais e políticas do fornecimento do serviço público e do desenvolvimento de

¹⁷ “Janelas de políticas são, pelo menos em parte, construídas discursivamente, e especialmente aqui janelas são criadas dentro dos processos e das atividades e críticas ideológicas de neoliberalismo [...]. Além disso, essas críticas, como veremos, no capítulo seguinte, são tipicamente “totalmente financiadas” e estrategicamente articuladas” (Ball, 2014, p. 41).

novos tipos de respostas políticas à desvantagem social” (Ball, 2014, p. 43).

Por fim, a referida reforma neoliberal acaba por instituir um currículo neoliberal, onde “O setor privado é o modelo a ser emulado, e o setor público deve ser “empreendido” à sua imagem.” (Ball, 2014, p. 65) A partir daí que vão se construindo os discursos de gestão de desempenho. Para Ball (2014) a performatividade é a forma de governamentalidade neoliberal, é através dela que se introjecta o sentimento e a necessidade de aperfeiçoamento e de eficácia na busca da inalcançável qualidade e alto índice de produtividade.

Enfim, a performatividade funciona na sua máxima potência, quando os sujeitos acreditam e almejam para si um alto desempenho, acreditando trata-se de um desejo individual e não uma tecnologia de governança neoliberal. O neoliberalismo não se satisfaz em transformar a escola em uma empresa, ele necessita transforma o sujeito em um empreendedor, “[...] em uma unidade produtiva de automaximização que opera em um mercado de desempenhos [...]” (Ball, 2014, p. 67), garantindo assim o principal efeito da performatividade em educação, que é

[...] reorientar as atividades pedagógicas e acadêmicas para com aqueles que são susceptíveis a ter um impacto positivo nos resultados de desempenho mensuráveis para o grupo, para a instituição e, cada vez mais, para a nação, e como tal é um desvio de atenção dos aspectos do desenvolvimento social, emocional ou moral os quais não tem nenhum valor performativo mensurável imediato (Ball, 2014, p. 67).

Assim, torna-se fundamental compreender todos os processos de política e de atuação da política, no que se refere à temática educacional – objeto de análise do tópico seguinte.

3 UMA JUSTIÇA CURRICULAR DESPATRIARCALIZADA, ANTICLASSITA, ANTIRRACISTA E LGBTQIAP+ INCLISIVO É POSSIVEL NO MODELO DE EDUCAÇÃO NEOLIBERAL?

A introdução dos mecanismos de mercado na educação, caracterizada por uma concepção consumidora da escola, leva, segundo Laval (2019, p. 23) “[...] à desintegração da instituição escolar”,

reproduzindo desigualdades sociais. A escola busca como resultado uma eficiência capaz de gerar lucro e ao mesmo tempo aumentar o nível de produtividade da população ativa. Os critérios de avaliação e de comparações impostos, são desiguais e as práticas gerenciais e pedagógicas servem a esse propósito, ou seja, que correspondam “[...] às competências exigidas pelo universo econômico” (Laval, 2019, p. 24).

Mas como já referido, o campo educacional é um campo de tensões, de potencialidades, de possibilidades e de resistências. A introdução da lógica de mercado e do novo gerencialismo público, impõe à educação um déficit democrático, como refere Ball (2014). Portanto, para uma sociedade democrática justa e inclusiva, isto é, despatriarcalizada, anticlassista, antirracista e LGBTQIAP+ inclusiva se faz urgente políticas públicas educativas que compensem e corrijam injustiças estruturais causadas por essa lógica neoliberal da educação que apresenta-se, via de regra, classista, racista, patriarcal e LGBTQIAP+fóbica,

Romper a lógica individualista e consumeristas na educação deve fazer parte do projeto de todo educador que acredita em um modelo de sociedade mais justo e respeitoso com os interesses coletivos. Assim, para Santomé,

Em qualquer conjunto de medidas destinado a educar uma cidadania empoderada – atores reflexivos, críticos, ativos na construção de modos de vida mais justos e democráticos -, é imprescindível um professorado com boa formação psicopedagógica para projetar, implementar e avaliar modelos curriculares verdadeiramente justos; mas também com uma formação cultural com um conhecimento rigoroso acerca de como se constroem e reproduzem as situações de pobreza, exclusão e inferioridade (Santomé, 2018, p. 17).

Segundo Santomé (2018), a escola enquanto instituição é um lócus privilegiado para uma educação cidadã, aberta, avançada e constitutiva de pessoas capazes de dialogar com realidades e culturas diferentes, “[...] comprometida com o pluralismo, o cosmopolitismo democrático e igualitário” (Santomé, 2018, p. 26). Por outro lado, as disciplinas oferecem pontos de vista muito peculiares de mundo, assim, para uma melhor compreensão da realidade social, mister complementá-los e interligá-los a outras realidades.

Não é possível que se admita que os conteúdos culturais e pedagógicos sejam definidos exclusivamente pelas necessidades do mercado. Os cursos de Direito, por exemplo, direcionam suas estruturas curriculares e pedagógicas para a aprovação no exame de ordem (OAB¹⁸) e demais concursos públicos de carreira jurídica, privilegiando uma formação jurídica profissionalizante. Nesse contexto tem-se duas realidades, uma que vende conteúdo para uma maior aprovação e outra que constrói o discurso de que quem não é aprovado não alcança sucesso. Mas afinal, qual a finalidade da formação de futuros juristas?

O ensino atual privilegia demais, no decorrer dos anos de formação, uma perspectiva técnica. O direito seguidamente é apresentado como um conjunto de regras técnicas e o curso limita-se a uma descrição ordenada do direito positivo. Assim, [...] o foco é dado muito mais à aquisição de um saber técnico do que ao domínio de ferramentas para o raciocínio. O jurista formado desta forma se parece frequentemente com um engenheiro tecnólogo, [...].

No entanto, os profissionais do direito, de onde quer que venham, insistem, todos, na imperiosa necessidade de uma formação de base, geral, crítica, que pratique a aprendizagem e o uso de ferramentas para o raciocínio (Flores-Lonjou, 2014, p. 140-141, *apud* Lyon-Caen).

Dessa forma, acabam, segundo Santomé, eliminando “[...] do sistema educativo a educação para a cidadania e os direitos humanos” (Santomé, 2018, p. 30). Indiscutivelmente, a formação em humanidades, artes e ciências sociais é a base para o aprendizado em qualquer área do conhecimento, capaz de constituir sujeitos críticos, reflexivos, dialógicos, ou seja, é a forma de educar uma cidadania democrática.

O alunado precisa acessar a informação cultural em que a diversidade e interdependência entre comunidades, povos e países se tornem visíveis, por isso é imprescindível realizar uma revisão aprofundada dos conteúdos legislados e dos materiais curriculares destinados a trabalhar esses conteúdos em sala de aula para ver em que medida

¹⁸ Ordem dos Advogados do Brasil

a literatura, as ciências experimentais, as artes, a história, a geografia, a filosofia, a economia e a política contemplam essa diversidade reinante no planeta (Santomé, 2018, p. 38).

Assim, é possível afirmar, que dentro do campo da educação, mesmo essa estando inserida dentro de uma racionalidade neoliberal, é possível encontrar espaços para resistência e de construção de espaços de justiça curricular. Segundo Leite (2014, p. 47), estando educadores e pesquisadores empenhados em transformação social, buscam alternativas para a proposta curricular vigente, integrando professores e alunos na construção democrática e participativa de práticas pedagógicas capazes de transformarem o ambiente escolar, transformando-os em ambientes mais democráticos e favoráveis à integração social. Neste contexto, demonstra-se necessário refletir a possibilidade do cinema constituir-se como uma ferramenta de aprendizagem – objeto de estudo no tópico seguinte.

4 O CINEMA COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM: UMA EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO PEDAGÓGICA A PARTIR DO FILME A FORMA DA ÁGUA

Vale-se para esta análise do filme *A Forma da água*, do diretor Guillermo Del Toro, ganhador do Oscar de melhor filme. O filme se passa na década de 60 e é ambientado no período conflituoso de guerra fria. Nele a personagem principal é uma mulher surda, que trabalha em uma base secreta americana. Tem como melhor amiga uma mulher negra, que é sua colega de trabalho e o seu vizinho, um homem gay e solitário. Eliza representa uma princesa de contos de fada, que se apaixona por uma forma viva não identificada.

O filme a partir de seus personagens perpassa questões como machismo, racismo, homofobia, preconceito em razão de deficiência e em especial retrata, sob todas estas questões já levantadas, que tipo de corpo importa e deve ser preservado. Todas as formas de violência são impostas aos personagens. Parece razoável afirmar que tal contexto possibilita a discussão acerca da necessidade, por exemplo, de se fazer pesquisa em Direito a partir de uma perspectiva de direitos humanos.

É possível, por exemplo, após assistir ao filme, fazer um estudo detalhado dos direitos fundamentais previstos na constituição brasileira e na declaração universal dos direitos humanos. A obra cinematográfica possibilita um aprendizado pela experiência narrada pelo filme, tornando

o conhecimento mais instigante e rico do que se tivesse sido ministrado por uma palestra do professor.

A partir da obra cinematográfica analisada, então, é possível refletir a relação entre direito e cinema, já que o Direito constrói discursivamente os mais diversos campos sociais, neste caso mais específico, o de Direitos Humanos e o cinema, que por sua vez, é capaz de desvelar os conflitos sociais, desnudando as desumanidades e as subalternidades que produz, especialmente no que se refere, no caso em análise, do machismo, misoginia, homofobia, racismo e todos os demais corpos que não se enquadram no padrão heteronormativo.

A arte possui uma função social, pois permite a experimentação de sensações e situações não imaginadas pelo indivíduo. Ela recria a história e os anseios humanos. Ela é uma forma de expressar estilos, expressões verbais de pensamento e encontrar prazer, além de também poder evidenciar sinais da evolução social (Marcondes, 2013, p. 32).

A Forma da água apresenta uma crítica à sociedade valendo-se para tanto da reflexão como algumas formas de vida são válidas socialmente e a outras não. A caçada frenética à Forma, demonstra claramente que tido de corpo merece ser vivido e qual não merece ser vivido. Demonstra o quanto os corpos negros e de mulheres e homossexuais podem ser constantemente violados, vilipendiados, desrespeitados. A arte é capaz de trazer a humanidade, ao ensinamento do Direito, rompendo com a lógica tecnicista imposta pela mercantilização da educação, que tem como prioridade a busca incessante por resultados e aprovações.

Este filme traduz essas representações sociais. O cinema proporciona que o contexto social e político dialogue com milhares de pessoas e que, a partir dessa fala, possa-se implementar mudanças sociais e, conseqüentemente, no direito. Já que de acordo com Dias

os estudos do campo visual representam, atualmente, uma potente possibilidade que desloca para o centro o olhar sobre a visualidade. De cunho eminente interdisciplinar, os estudos através das imagens rompem com os recortes epistêmicos e com decisões compartimentadas, produzem-se, assim, infinitas combinações e desdobramentos (Dias, 2015, p. 477).

Pode-se dizer, conforme Marcondes (2013), que o cinema gera espaço de construção da ciência jurídica, constituindo-se num campo de discussão e de problematização das questões sociais.

A análise iconográfica trata de imagens, estórias e representações ao invés de motivos, desta forma, ela pressupõe muito mais que a familiaridade com objetos e fatos que se adquirem a partir de uma experiência vivida (Panofsky, 1986), por outro lado a análise iconológica necessita escavar quais os símbolos percorreram o autor da imagem (Dias, 2016, p. 269).

Para Flores-Lonjou (2014), “[...] o cinema não é apenas uma ferramenta de análise e de reflexão sobre o direito, mas também um suporte de aprendizagem e de formação para os estudantes, [...]”. (Flores-Lonjou, 2014, p. 138). É possível pensar, então, como a metodologia do ensino do direito através do cinema, pode vir a complementar o método positivista de aulas expositivas - corriqueiramente praticada nos cursos de direito. Acredita-se, portanto, que o cinema apresenta potencialidade como uma ferramenta de aprendizagem para estruturar um processo Justiça Curricular democrática e igualitária, isto é, despatriarcalizada, anticlassista, antirracista e LGBTQIAP+ inclusivo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscou-se neste estudo apresentar algumas possibilidades de políticas educativas centradas na justiça curricular, como caminho para a concretização de uma justiça social. Valendo-se da abordagem qualitativa e metodologia bibliográfica a proposta desenvolveu-se tendo como hipótese o cinema como ferramenta de aprendizagem, ou seja, como uma possibilidade de construção pedagógica pautada em justiça curricular. Ao analisar o filme A Forma da água no tópico final compreende-se que a hipótese deste estudo foi confirmada.

Pode-se dizer, que o estudo do direito através do cinema proporciona a constituição de uma educação emancipadora, apoiada em um projeto curricular interdisciplinar do conhecimento, possibilitando a construção de um conhecimento crítico, dialógico e mais democrático. A partir das experiências vividas através da obra de arte, do cinema, passa-se a ter a possibilidade, segundo Santomé (2108), de uma pedagogia do

otimismo e do empoderamento, baseada em temas do passado e do presente, mostrando que a inovação, as lutas pela justiça, pela melhoria da sociedade são imprescindíveis para se ter êxito enquanto sociedade. É possível assim, pensar outro futuro, o qual, somente uma educação emancipadora e crítica tornará isso viável.

Santomé (2018) informa o papel do professor na construção de uma escola pautada em justiça curricular:

Uma instituição escolar comprometida com a justiça curricular exige que a prática profissional dos professores seja governada de forma ativa e reflexiva por princípios éticos, tais como: integridade e imparcialidade intelectual, coragem moral, respeito, humildade, tolerância, confiança, responsabilidade, justiça, sinceridade e solidariedade (Santomé, 2018, p. 47).

Por fim, Santomé (2018) diz que é preciso garantir e aperfeiçoar a democracia duramente conquistada, através de processos permanentes, e com a participação de sujeitos informados de sua cidadania, educados, alertas e utópicos, com fé no futuro da humanidade. Defende-se, portanto, que uma Justiça Curricular democrática e igualitária, isto é, despatriarcalizada, anticlassista, antirracista e LGBTQIAP+ inclusivo pode ser estruturado a partir da introdução no processo de educar do cinema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALL, S. J. **Educação Global S. A.** Novas redes políticas e o imaginário neoliberal. Ponta Grossa: UEPG, 2014.

BALL, S. J.; MAINARDES, J. (org.) **Políticas Educacionais** – questões e dilemas. São Paulo: Cortez, 2011.

BALL, S. J.; MAGUIRE, M.; BRAUM, A. **Como as escolas fazem as políticas** – atuação em escolas secundárias. Ponta Grossa: UEPG, 2016.

DARDOT, P. LAVAL, C. **A nova razão do mundo** – ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.

DIAS, R. D. Fluxos migratórios e fronteiras: necessárias aproximações entre arte política e direito. **Revista de Direito, Arte e Literatura**, Brasília, v. 2, n. 1, p. 161-181, Jan/Jun. 2016.

FLORES-LONJOU, M. Uma experiência francesa de ensino do Direito através do cinema. (org.) **Imagens da justiça, Currículo e educação jurídica**. Porto Alegre: Sulina, 2014.

FOUCAULT, M. **Microfísica do Poder**. 28. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

LAVAL, C. **A escola não é uma empresa - o neoliberalismo em ataque ao ensino público**. São Paulo: Boitempo, 2019.

LEITE, M. C. L. (org.) **Imagens da justiça, Currículo e educação jurídica**. Porto Alegre: Sulina, 2014.

LEITE, M. C. L. Imagens da Justiça, currículo e pedagogia jurídica. (org.). **Imagens da justiça, Currículo e educação jurídica**, Porto Alegre: Sulina, 2014.

LEITE, M. C. L.; HENNING, A. C. C.; DIAS, R. D. (org.) **Justiça Curricular e suas imagens**. Porto Alegre: Sulina, 2018.

MARCONDES, T. C. B. B. **Cine Igualdade: A evolução do cinema LGBT e a conquista de direitos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2013.

SANTOMÉ, J. T. A justiça curricular nas atuais políticas educativas e curriculares. *In*: LEITE, M. C. L.; HENNING, A. C. C.; DIAS, R. D. (org.). **Justiça Curricular e suas imagens**. Porto Alegre: Sulina, 2018.

**EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS E AMOR: ENSAIO NARRATIVO-
REFLEXIVO SOBRE AS PEDAGOGIAS DO AMOR EM
MATURANA, FREIRE E WARAT¹⁹**

**EDUCATION, HUMAN RIGHTS EDUCATION
AND LOVE: NARRATIVE-REFLEXIVE ESSAY ON
THE PEDAGOGIES OF LOVE IN MATURANA,
FREIRE AND WARAT**

Vanessa dos Santos Moura²⁰

Resumo

O presente ensaio narrativo-reflexivo versa sobre a temática do amor. A tese sustentada no texto é a de que o amor é um instrumento (social) potencializador de mudanças na educação. O objetivo consiste em tecer considerações a respeito de pensadores que se propuseram a refletir sobre o ensino de uma forma diferenciada, calcado no amor e no afeto – nomeadamente Humberto Maturana, Paulo Freire e Luis Alberto Warat. As metodologias adotadas consistem em revisão bibliográfica e história de vida. Percorreram-se as ideias principais dos três educadores de forma a confirmar a tese inicial. Constatou-se que, seja pela via biológica, pela via revolucionária ou pela via da mediação, todos têm um mesmo grande objetivo: a transformação social.

Palavras-chave: Amor, Educação em direitos humanos, Humberto Maturana, Luis Alberto Warat, Paulo Freire.

Abstract

This narrative and reflective paper deals with the theme of love. The thesis sustained in the text is that love is a (social) instrument that promotes changes in education. The aim is to make considerations about

¹⁹ O presente ensaio foi publicado na Revista Sociologia Jurídica (nº 24/25 – janeiro/dezembro de 2017) com o seguinte título Ensaio narrativo-reflexivo sobre as pedagogias do amor: breves comentários sobre amor e educação em direitos humanos em Maturana, Freire e Warat. Fizeram-se alterações pontuais no texto para nova publicação.

²⁰ Mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Doutora em Educação Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Professora adjunta lotada no campus Realeza/PR da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS. Membro do Grupo de Pesquisa (Trans)Formação Inicial, Permanente e Contínua de Professores – TRIPEC e do Fronteiras: Laboratório de História Ambiental da UFFS. vanessamoura@uffs.edu.br.

thinkers who have proposed to reflect on teaching in a different way, based on love and affection – namely Humberto Maturana, Paulo Freire and Luis Alberto Warat. The methodologies are bibliographic review and life history. The main ideas of the three educators were traced to confirm the initial thesis. It has been found that, whether through the biological path, the revolutionary path or via mediation, they all have the same goal: social transformation.

Keywords: Education in Human Rights, Humberto Maturana, Love, Luis Alberto Warat, Paulo Freire.

1 INTRODUÇÃO

A crise da educação brasileira é um projeto. Como projeto, tem um processo histórico que lhe antecede, podendo ser analisado nas perspectivas da longa, média e curta duração. O *modus operandi* parece seguir o mesmo plano desde Manuel da Nóbrega: sistematizar a transmissão de conhecimentos de forma verticalizada. Há poucas alterações efetivas no modelo global de ensino; mas isso não significa que não se verifiquem esforços na tentativa de mudar esse quadro. É justamente acerca de alguns destes empenhos que tenciono lançar breves comentários.

A reflexão que se pretende fazer neste pequeno ensaio narrativo-reflexivo versa sobre a temática do amor. A tese que sustento no texto é a de que o amor é um instrumento (social) potencializador de mudanças na educação e meu objetivo consiste em tecer algumas considerações a respeito de pensadores que se propuseram a refletir sobre o ensino de uma forma diferenciada: um ensino calcado no amor e no afeto. Veja-se que a educação é um direito social e encontra previsão expressa no *caput* do art. 6º da Constituição Federal de 1988; mas se a educação é uma condição social básica para a formação de uma sociedade democrática, plural, inclusiva, livre de preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças, parece consentâneo concluir que não é qualquer proposta de educação apta a alcançar tais intentos. Nomeadamente, resgatei as proposições de Humberto Maturana, Paulo Freire e Luis Alberto Warat. Percorri a bibliografia mais significativa dos três autores para o debate sobre o amor e busquei entrelaçar com uma espécie de memorial descritivo, do que se depreende que as metodologias adotadas consistem em revisão bibliográfica e história de vida (Nóvoa, 2000). O ensaio vai motivado pela seguinte pergunta: por que educar com amor?

A justificativa da pesquisa é singela – e o amor é assim: dispensa ornamentos. Parto da seguinte premissa: a educação é causa e efeito da

práxis humana (Calloni, 2002). Se é instrumento humano, portanto culturalmente construído, haverá de espelhar a ontologia do homem enquanto ser social (no sentido lukácsiano), portanto é também da sua própria natureza. Nesse sentido, aponto que a sociabilidade humana tem no amor um dos seus maiores fundamentos – e com essa assertiva não pretendo realizar uma genealogia (no sentido foucaultiano) do amor; os propósitos são muitíssimo mais modestos. Por ora, basta sinalizar que o amor é simultaneamente cultural e intrínseco – do que concluo que educar com amor é uma necessidade; e qualquer “educação” fora da amorosidade não haverá de ser, pois, educação. A pesquisa se justifica, logo, pela necessidade de resgatar a educação amorosa, particularmente para a seara do Direito, em que o corpo docente é integrado quase que na totalidade por bacharéis sem formação voltada para o magistério.

Não segmentei o argumento no formato científico tradicional. Em respeito ao leitor, meu escrito obedece à ordem do título, que foi assim disposta em razão da cronologia do meu contato com estes autores. A nossa história não respeita o movimento histórico das ideias e, por isso, escrevo a partir do meu próprio eixo ontológico.

2 NARRATIVA DO SI: RESGATE DE MEMÓRIAS DAS PRIMEIRAS AMOROSIDADES

A compreensão da natureza da atividade docente passa forçosamente pela análise e entendimento do si. Ao menos é o que afirma António Nóvoa (2000), que observa a docência a partir das narrativas (autobiográficas) das trajetórias dos educadores. A singularidade da forma com que o professor se vincula com o seu trabalho bem como a sua trajetória de vida desempenharão um papel fundamental na sua constituição como profissional. Daí que, para dissertar sobre aquilo que denominei no título de “Pedagogias do Amor”, entrelaço meu escrito com o percurso da conformação do meu próprio si.

Historiar meu processo educativo certamente ocuparia mais páginas do que este ensaio permite – e demandaria um tempo que meu leitor por certo não tem. Mas me autorizo resgatar algumas das amorosidades que transformaram a minha competência emocional – para além do meu eu-professora (i.e., meu eu-profissional).

Meu quociente emocional desenvolveu-se pari passu ao intelectual – ou pelo menos assim pretendeu minha mãe. Tenho muitas memórias de infância e posso apontar com algum grau de certeza que minha inclinação – ou aptidão, ou orientação – às “Pedagogias do Amor” tem endereço e CEP: Avenida Loureiro da Silva, 1735, Cidade Baixa, 90050-240, Porto

Alegre/RS. É nesse local que se situa o Mosteiro Nossa Senhora do Carmo, onde vivem em total clausura as freiras da Ordem dos Carmelitas Descalços. Durante um bom pedaço da minha vida quis ser freira. “Ela quer ser Carmelita. A coitada enlouqueceu!”.

O diagnóstico de loucura não vingou. E também não me tornei freira. Mas é inegável que as irmãs – primeiramente as carmelitas, com quem por motivos óbvios não mantive contato, e depois com as salesianas de Dom Bosco, que atuavam nas cercanias de onde eu morava – me sensibilizaram. Profundamente. Com regimes de conduta absolutamente distintos, todas possuíam uma única palavra de ordem: o amor.

Esse amor era diferente daquilo que narravam Gabo, Borges, Neruda, Galeano, ou mesmo minha favoritíssima Gabriela Mistral – escritores estes que me fizeram companhia na adolescência. Era uma espécie de empatia, de um colocar-se no lugar do outro. Meu colégio, confessional, não me despertava essa capacidade de identificação, mas as minhas atividades como voluntária em trabalhos comunitários promovidas por esta mesma escola sim.

Lá, naquele mundo que não era o meu, eu podia exercitar o respeito, a tolerância, conhecer e conviver com todo o tipo de diversidade – étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política. E não é justamente o que preceitua o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007)?

Nos idos anos 2000 a educação para os direitos humanos ainda não fazia parte do currículo das escolas – como ainda não faz de maneira sólida – e foi em outros espaços que tomei contato com debates sobre a solidariedade, a igualdade, a dignidade humana. Foi nesse outro âmbito, extraescolar, que os internalizei como valores éticos que me acompanharam – e ainda acompanham – no questionamento da legitimidade das práticas e valores “tradicionais”. Desenvolvidos os quocientes emocional e intelectual, finalmente abriam-se as portas para que eu pudesse alargar minha inteligência interpessoal.

É que, a bem da verdade, amar a minha família, meus amigos, meus colegas era fácil; éramos diferentes, mas éramos iguais. E isso não é uma aporia. Só que o amor pelo outro é posto à prova quando se precisa compreender um outro radicalmente diferente da gente. Seja na cor da pele, na religião, na cultura, na idade, no espaço urbano (ou rural) que ocupa ou é impelido a ocupar, nas deficiências, no gênero etc. É quando se percebe que se é, ao mesmo tempo, tão diferente e tão igual. E, paulatinamente, passava a perceber que aquele mundo também era meu – e eu era igualmente responsável por ele.

Ora, o alcance de um horizonte (de expectativas, de futuro, de direitos, de violência etc.) que não é o seu exige um esforço para o qual não estamos preparados; e nem a família, nem o Estado, nem a sociedade, muito menos a escola se ocupa de nos preparar. Quando se tem 12, 13 anos e se vive num mundo binário, dividido entre escola e clube, é mesmo injusto exigir de uma adolescente que consiga alargar tal horizonte por conta própria. E é por isso que minha fala valoriza a educação não-formal. Mas não deveria ser só assim; a diversidade deveria estar desde sempre no interior da escola – de toda e qualquer escola, tanto particulares (como era o meu caso) como públicas. O estímulo ao convívio e ao respeito ao outro poderia encontrar esteio numa educação para os direitos humanos. Só que a difusão de uma cultura nestes moldes, no Brasil, esbarra em aspectos estruturais.

Daí emerge a necessidade de se trazer para a Academia, um dos tantos loci de produção de saber, educadores que proponham uma revolução epistemológica na forma de se ensinar e se aprender – desde a educação infantil até o ensino superior. Dentre diversos autores que refletiram sobre a necessidade de mudanças agudas na área do ensino, escolhi trazer três grandes educadores para uma espécie de roda de conversa, pois a leitura de cada um deles marcou a minha constituição pessoal e profissional – Maturana, lido enquanto fazia o bacharelado em História; Freire, lido ao longo da licenciatura em História; Warat, lido no bacharelado em Direito.

3 AMOR E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM MATURANA

Cognição, Ciência e Vida Cotidiana (2000) veio parar nas minhas mãos meio que por acaso. Estava na lista de bibliografia recomendada de uma das primeiras disciplinas que cursei no bacharelado em História – portanto era leitura não-obrigatória, o que é um “convite” aos acadêmicos de primeiro ano a não ler (um “anti-convite”, como preferir). Tive acesso ao livro e li muito mais do que o sugerido. Eu devorei o Maturana.

Explico. Entrei na universidade muito nova e as primeiras leituras do curso de História não fizeram muito sentido pra mim. Nem as segundas. Não sabia o que era Paradigma Científico Moderno. Nem pensamento cartesiano. Edward Carr, Edward Thompson, Eric Hobsbawm – só para ficar na bibliografia do primeiro semestre (e na letra E) – eram ilustres desconhecidos. Mas a única vantagem de ser um aluno invisível – afinal, eu entrava muda e saía calada da aula – é que alguns dos professores sentem a nossa angústia e tentam, de alguma forma, nos

ajudar a superar isso. Talvez se identifiquem na nossa timidez. E tive a sorte de contar com uma professora, uma dessas pessoas elegantes que jamais constrangeria um aluno “socrático” (que só sabe que nada sabe), que percebia que eu sequer conseguiria formular uma pergunta sobre o que eu não estava entendendo. Era evidente que eu não entendia (quase) nada.

Fiz leituras da Coleção Primeiros Passos por indicação dela – e morria de vergonha, pois meus colegas já desfilavam com Giddens, Gramsci, Gadamer (só para ficar na letra G), ainda inalcançáveis para mim. Passada a Metafísica da Ciência, o conteúdo ministrado nas aulas da professora era, àquela altura, Epistemologia da Ciência. Um novo “baile”, desta vez epistemológico, se aproximava. Até que Maturana entrou em cena. “Se o discurso da História, hoje, ainda não faz sentido pra Vanessa, quem sabe alguém de outra área?”, creio que assim pensou a professora.

Foi desta maneira, por meio de um discurso biológico do amor, situado na bibliografia auxiliar, que entendi o que era Epistemologia. E que compreendi a importância do amor na constituição dos sujeitos-educandos – tanto nas palavras de Maturana como na prática, pois a sensibilidade e o empenho amoroso da minha professora para que eu mesma criasse as condições de superar as adversidades era exatamente o que o autor dizia. Cito-o:

Nós, seres vivos, somos sistemas determinados em nossa estrutura. Isso quer dizer que somos sistemas tais que, quando algo externo incide sobre nós, o que acontece conosco depende de nós, de nossa estrutura nesse momento, e não de algo externo (Maturana, 2005, p. 27).

Fugindo dos determinismos biológicos, Maturana passou a tratar a genética como uma *possibilidade*, o que quer dizer que, apesar de sermos *condicionados*, não estamos *determinados* no nosso desenvolvimento. Ora, isso é revolucionário! E é por isso que o pensamento dele traz consequências importantíssimas para se pensar os papéis da educação e da cultura na estrutura do ser humano. Se os sujeitos são históricos, mutáveis, interativos, podemos educar as pessoas e propiciar interações com contextos de modo a criar condições para que os educandos vivam na diversidade, bem como respeitem a si e aos outros. Essa é, para mim, a “Pedagogia do Amor” de Maturana.

De *Cognição, Ciência e Vida Cotidiana* resgato a inseparabilidade do homem do “ambiente”/contexto; para Maturana não existe uma realidade independente do observador. É justamente a unidade autopoiética que caracteriza o modo de organização humana (em que o ser e o fazer são indissociáveis). Essa é a base do pensamento sistêmico – surgido nos anos 1950 com Ludwig Von Bertalanffy – que buscava afastar o conhecimento científico de uma necessária fragmentação e redução.

Nas palavras de Elisabeth Rossetto, Maturana, “buscando outra maneira de fazer ciência, conhecimento, filosofia e educação”, parte “da compreensão do fenômeno biológico humano como um fenômeno que não ocorre somente no corpo e na fisiologia, mas que opera no entrelaçamento das mudanças na fisiologia e nas relações que vivemos” (Rossetto, 2010, p. 5). Por intermédio da neurofisiologia, Maturana revolucionou o pensar sobre o agir (ou, em seus termos, “operar”) dos seres vivos. O chileno propôs, pois, um novo olhar sobre o viver, incluindo os humanos, desafiando-nos a seguir “uma outra perspectiva epistemológica a partir da biologia do conhecimento e da biologia do amor” (Rossetto, 2010, p. 5).

Observe-se que Maturana é radical ao apontar o papel medular das emoções no modo de vida humano (constituído de mudança e conservação), conceituadas por ele como “os diferentes domínios de ações possíveis nas pessoas e animais, e as distintas disposições corporais que os constituem e realizam” (Maturana, 2005, p. 22). E, dentre elas, afirma que “a emoção fundamental que torna possível a história da hominização é o amor” (Maturana, 2005, p. 23).

Mas de qual amor fala Maturana? Para ele, houve um desvirtuamento substancial da palavra ‘amor’, o que fez com que ela perdesse sua vitalidade. Não é o amor cristão, nem é o amor romântico. O autor conceitua-o como “a emoção que constitui o domínio de condutas em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro como legítimo outro na convivência, e é esse modo de convivência que conotamos quando falamos do social” (Maturana, 2005, p. 23). Aurora Rabelo, em prefácio à obra *Emoções e Linguagem na Educação e na Política*, traduz o pensamento de Maturana e explica a citação supra da seguinte forma:

[...] ao falar das emoções, na condição de biólogo, como “disposições corporais que especificam domínios de ação”, Maturana funda o social numa emoção em particular, o amor, por ser esta a emoção que permite a aceitação do outro como

legítimo outro na convivência. Portanto, uma “biologia amorosa” passa a ser o fundamento do social, não mais essa razão transcendental com a qual nos acostumamos a nos distanciar do nosso “ser biológico” (Rabelo, 2005, p. 8).

Amar, pois, é um fenômeno biológico e o fundamento do social. Disso decorre que o ser humano é, ontologicamente, um ser da cooperação e não da competição. A emergência da linguagem é um dos fenômenos apontados pelo autor como evidência disso. Nesta perspectiva, então, “o âmbito educacional deve privilegiar a amorosidade e jamais a competição que, ao invés de aceitar o outro na sua legitimidade, promove a sua negação” (Barcelos; Maders, 2016, p. 11).

Resgato a história que abre este tópico: as minhas dificuldades em apreender aquilo que lia nos textos não decorriam de uma incapacidade intelectual. Provinham – e vou calcada em Barcelos e Maders – da negação do amor como a principal emoção da convivência; e isso se corrige restituindo para o educando o espaço da emoção de amar (Barcelos; Maders, 2016, p. 11. Excerto adaptado). Continuam os especialistas em Maturana: “os diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos e educandas devem ser levados em conta e respeitados no processo educativo”; isso significa que as particularidades de cada um devem ser aceitas como naturais, i. e., “não devem ser tomadas como faltas, como deficiências, mas, sim, como insuficiências momentâneas no fazer do estudante”, podendo “ser corrigidas na medida em que o educar vai acontecendo na aceitação mútua (biologia do amor) e no auto respeito” (Barcelos; Maders, 2016, p. 11-12). Foi rigorosamente o que fez minha professora.

O ambiente escolar – e aqui incluo a Universidade – é um território privilegiado para oportunizar o amor. Dizem Barcelos e Maders (2016, p. 94) que “tratar as crianças com amor é o melhor legado de aprendizado que poderemos lhes deixar”. Amplio a referência para os estudantes universitários. Amor como aceitação do outro – para mim, essa é a educação para os direitos humanos de Maturana. Julgo que seja por isso que ele não se ocupa em prescrever tarefas utópicas aos educadores e educandos; seus escritos oferecem orientações para o viver cotidiano.

E, talvez, tenhamos que re-aprender a viver esse cotidiano. Esclareço. É que quando confrontamos nosso discurso ético com o mundo, este denuncia incongruências essenciais. Se somos todos bons, justos, solidários, tolerantes, amamos o próximo, por que o mundo está

do jeito que está? Maturana e Verden-Zöller (2004, p. 114) denunciam nosso modo de vida:

Como humanidade, nossas dificuldades atuais não se devem a que nossos conhecimentos sejam insuficientes ou a que não disponhamos das habilidades técnicas necessárias. Elas se originam de nossa perda de sensibilidade, dignidade individual e social, auto-respeito e respeito pelo outro. E, de um modo mais geral, originam-se da perda do respeito por nossa própria existência, na qual submergimos levados pelas conversações de apropriação, poder e controle da vida e da natureza, próprias de nossa cultura patriarcal.

Se o mundo em que vivemos é configurado pelo nosso fazer, e se desejamos viver num mundo diferente, precisamos urgentemente modificar as nossas interações. Maturana e Varela (2010, p. 269) insistem na necessidade de se repensar nossa capacidade de coexistência social:

Sem amor, sem aceitação do outro junto a nós, não há socialização, e sem esta não há humanidade. Qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. Portanto, destrói também o ser humano, porque elimina o processo biológico que o gera. Não nos enganemos. Não estamos moralizando nem fazendo aqui uma prédica do amor. Só estamos destacando o fato de que biologicamente, sem amor, sem aceitação do outro, não há fenômeno social. Se ainda se convive assim vive-se hipocritamente a indiferença ou na negação ativa.

Assim, se nossa natureza biológica é amar e não competir, então a educação verticalizada que praticamos, repito, desde que os jesuítas aqui pisaram, é substancialmente *opressora*. É sobre isso que versa o próximo tópico.

4 AMOR E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM FREIRE

Meu primeiro contato com Paulo Freire se deu quando eu ainda estava no Primeiro Grau (que corresponde mais ou menos ao Ensino Fundamental). Lembro que, dentre as atividades que realizei como voluntária nesta época da escola, a visitação em creches localizadas em bairros vulneráveis era uma constante. E, num desses espaços, havia num dos muros internos uma pintura de um simpático e sorridente homem barbudo, meio parecido com o Papai Noel. Grafitado, logo abaixo da imagem, constavam os dizeres: “a educação é um ato de amor”. E nenhuma indicação de quem era aquela figura – o que me gerava algum constrangimento em perguntar de quem se tratava, pois parecia que todos ao meu redor sabiam quem ele era. Ou simplesmente o ignoravam.

Neste voluntariado, éramos colocados à disposição dos estagiários para auxiliá-los. E frente a minha total inaptidão com crianças (o que infelizmente se perpetua até hoje), tentava ajudar na medida do possível uma jovem estudante de Pedagogia da PUCRS a mediar as brincadeiras no pátio – local onde “habitava” o velhinho risonho. Parecia a oportunidade perfeita para saber quem era ele. Perguntei a uma das crianças, que me respondeu: “É o Feire”. A estudante corrigiu o pequeno, “Freire”, e me mostrou um exemplar de *Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar* (2015) [1993]. Estávamos oficialmente apresentados.

Depois disso tive a oportunidade de conhecer mais da sua proposta pedagógica em outros espaços: nos fóruns de educação, nas edições do Fórum Social Mundial que participei, na breve aproximação da militância partidária. Mas o fato é que só fui impactada pela obra do nosso (felizmente, ainda) Patrono da Educação brasileira alguns anos mais tarde. Como dito, fui ler Paulo Freire, efetivamente, ao longo da Licenciatura em História. E posso dizer, sem sombra de dúvidas, que sou desde então uma eterna estudante de Freire.

Paulo Freire revolucionou a educação. Foi e ainda é o maior educador do mundo. Não ficou confinado ao Nordeste, ao Brasil, à América Latina; seu discurso era muito maior: foi em busca dos oprimidos e oprimidas em todas as partes do globo (Boff, 2011, p. 11) – a título de exemplo, cito Tanzânia, Cabo Verde e Guiné-Bissau. E para mim, que partilho da concepção de educação como parte fundamental para a libertação da opressão, é muito evidente a amorosidade de Freire pelos seres humanos e o papel que o amor desempenha na educação.

Nesse sentido, refaço a pergunta já dirigida a Maturana: de que tipo de amor se está falando? Freire pugna pela liberdade em seus escritos e, no pertinente ao amor, não poderia entendê-lo de outra forma que não

como um exercício da própria *liberdade*. Não há de se falar em um amor romantizado, mas num compromisso ético entre homens e mulheres. Tal definição é elucidada por Balduino Andreola na *Carta-prefácio a Paulo Freire*, texto que consta na obra *Pedagogia da Indignação* (2000); Andreola aponta que as dimensões ética e política são “exigências ontológico existenciais e históricas da pessoa e da convivência humana e, em particular, da educação” (Andreola, 2000, p. 13). Na sequência, aduz que:

[...] sem esquecer as perspectivas da inteligência, da razão, da corporeidade, da ética e da política, para a existência pessoal e coletiva, enfatiza também o papel das emoções, dos sentimentos, dos desejos, da vontade, da decisão, da resistência, da escolha, da curiosidade, da criatividade, da intuição, da esteticidade, da boniteza da vida, do mundo, do conhecimento. No que tange às emoções, reafirma a amorosidade e a afetividade como fatores básicos da vida humana e da educação (Andreola, 2000, p. 13).

No terceiro capítulo da obra *Pedagogia do Oprimido* (2016-b) [1968], intitulado *A Dialogicidade: essência da educação como prática da liberdade*, Freire faz um apelo à importância do diálogo e seu papel fundamental para a construção de relações afetivas e democráticas. O diálogo, observe-se, é uma exigência existencial na concepção freireana; é, pois, “o encontro em que se solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado”, não podendo jamais ser reduzido “a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos permutantes” (Freire, 2016-b, p. 135). Se há diálogo, então há Educação Dialógica – e não há espaço para a Educação Bancária.

Veja-se que Freire aponta que o fundamento do diálogo é o amor:

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé dos homens, o diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança de um polo no outro é consequência óbvia. Seria uma contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos. Por isto inexistente esta confiança na antialogicidade da concepção “bancária” da educação (Freire, 2016-b, p. 139).

Nesse mesmo sentido, em *Pedagogia da Autonomia* (2016-a) [1996], Freire trata do diálogo aberto entre educador e educandos como meio para despertar a vontade de “ser mais”, vocação ontológica dos seres humanos:

É na convivência amorosa com seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos sociohistórico-culturais do ato de conhecer, é que ele pode falar do respeito à dignidade e autonomia do educando. Pressupõe romper com concepções e práticas que negam a compreensão da educação como uma situação gnosiológica” (Oliveira, 2016-a, p. 11).

Para Freire, “não há diálogo [...] se não há um profundo amor ao mundo e aos homens” (Freire, 2016-a, p. 136); Freire é radical em apontar que a superação da contradição opressores-oprimidos só se dará no diálogo, que é um verdadeiro ato de amor e não se confunde com as falsas generosidades opressoras. Explico. A libertação se dá *com* o oprimido e não *para* ele. A pedagogia do oprimido, pois, não pode ser elaborada pelos opressores: “a liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma permanente busca” pois “ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela precisamente porque não a tem” (Freire, 2016-a, p. 68).

Resgato a memória com a qual comecei o presente tópico. As atividades que desenvolvi na creche a que me referi eram essencialmente estas: jogar bola, pular corda, fazer bolo, assistir filmes, fazer horta, composteiras, cisternas para captar água da chuva. Eram bastante divertidas e as crianças, de fato, pareciam entretidas no processo. E que o leitor não me leve a mal: a ludicidade é fundamental para o desenvolvimento cognitivo de todas as crianças. Havia um propósito bastante claro nas nossas ações e no próprio discurso escolar: ajudar, auxiliar, assistir. Ou o sinônimo que se queira usar. Mas e a emancipação daqueles sujeitos? Havia algum contributo efetivo na minha ação para que a comunidade pudesse se libertar? Havia dialogicidade? Era educação? Ou estava eu a reproduzir o discurso ideológico do opressor naquele espaço tão carente de tudo? Só fui conseguir fazer uma leitura crítica do meu voluntariado – pragmático, mas nada analítico – já na faculdade.

Não havia uma má intenção de minha parte em querer “ajudar” aqueles sujeitos; eu genuinamente achava que estava fazendo algo positivo para aquelas crianças e acredito que tenha feito. Fruto dos anos 1990, o modelo de ação comunitária que eu conhecia era o da caridade – e os arquétipos de mulheres fortes da minha geração oscilavam entre Madre Teresa, Lady Di e Zilda Arns de um lado, Madonna do outro. Como o leitor pode deduzir, eu pendia para as primeiras. Mas meu bom-mocismo estava com os dias contados: ele seria estruturalmente abalado pelo homem pintado no muro.

Ao longo da Licenciatura, Freire definitivamente não habitou as minhas estantes – espaço reservado para as coisas que eu “iria” ler mais adiante. Freire era íntimo conhecedor dos meus sempre emaranhados fones de ouvido, dos farelos de bolacha, das barrinhas de cereal e de outras tantas coisas que habitam as mochilas dos estudantes. Seus livros – e eles são vários – me acompanharam desde o primeiro até o último dia de aula. E seguem sendo meus fiéis escudeiros na atividade docente.

Nesse contexto é que minha prática educativa passou a ser repensada – desde o colégio, passando pela História, até chegar no Direito. É que num curso absolutamente elitizado como é este último, era mesmo de se esperar que nossa atuação não visasse dar voz aos excluídos. Citando Freire, “seria na verdade uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica” (Freire, 2011, p. 145). Tal citação, que se refere à escola, é facilmente transportada para o âmbito da Universidade.

Conforme sinaliza o autor, uma rápida passada de olhos nas cartilhas revela a ideologia da classe dominante. In casu, basta mirar os títulos dos livros de direito mais vendidos: manuais facilitados, esquematizados, debulhados, mastigados e toda a sorte de “ados” que se imagine. Data vênica, para usar o jargão da área, não se pode educar com esse tipo de material. Pelo menos não uma educação que vise a autonomia, a emancipação dos educandos. E a consequente transformação social.

Só há de se falar em educação “verdadeira” se ela for libertadora; para Ernani Maria Fiori (2016, p. 51), prefaciador de *Pedagogia do Oprimido*, “a educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais, superestruturais ou interestruturais”. A educação conscientizadora haverá de ser uma prática da liberdade (Freire, 1999).

Dialogicidade, Conscientização, Autonomia, Amorosidade: essas são as palavras-chave para uma educação libertadora e para uma educação

em direitos humanos. O amor em Freire é a radicalização da alteridade, e isso é, na opinião desta ensaísta, a educação em direitos humanos. A “Pedagogia do Amor” freireana é essa: humanizar os homens na ação consciente que devem fazer para transformar o mundo (Chonchol, 1977).

5 AMOR E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS EM WARAT

Meus primeiros contatos com uma crítica formal à crise do ensino jurídico vieram a partir de Lenio Streck – veja só, discípulo de Warat. Mas me parece desnecessário dizer que eu mesma já sabia que as coisas iam mal. E ainda vão. Tive experiências boas e ruins no campo do Direito. Prefiro falar das boas – e meu leitor verá as ruins de maneira subjacente.

Abandonei o curso de Direito no quinto ano (Prezado Leitor: eu disse que falaria de coisas boas, então fique tranquilo que tudo deu certo no final). Não me enxergava no curso; aquele universo era muito diferente do meu, que trabalhava simultaneamente em três empregos – dava aula em dois lugares e ainda fazia “bicos” de tradutora – e tinha muitas outras responsabilidades. Para além dos choques (quase que) diários de realidade, não me via exercendo nada daquilo que meus colegas almejavam. Mas minha “deserção” durou pouco: fui incentivada por um professor, Éder Dion de Paula Costa, num almoço no restaurante da própria Universidade, a retornar e, quem sabe, seguir carreira acadêmica. E foi o que eu fiz.

Desde então comecei paulatinamente a “fugir” das leituras dogmáticas e passei a ler mais sobre educação e ensino jurídico. E tive a felicidade de ter professores que tratavam do assunto em sala de aula, bem como tinham uma leitura bastante crítica da realidade – que se aproximavam, pois, da minha.

Inevitavelmente, acabei com as obras do professor Lenio no colo. E ele falava constantemente num Luis Alberto Warat – de quem eu me recordava mais ou menos de ter lido sobre o falecimento e sobre o impacto que ele tivera na formação de uma verdadeira escola de juristas críticos ao modelo vigente (dogmático) de ensino de direito – ingressei no curso de Direito no ano de 2010, mesmo ano do falecimento de Warat (ocorrido em dezembro). Leonel Rocha, outra grande referência, insistia no mesmo nome. Rogério Gesta Leal, idem. Havia uma cátedra no maior evento da área, o CONPEDI, com o nome dele... é, não havia muita escapatória: eu precisava me debruçar na leitura do tal Warat.

Iniciei com um clássico: A Ciência Jurídica e seus dois Maridos (2000). E nessa obra, que dialoga diretamente com as três carismáticas

personagens de Jorge Amado, encontramos uma das suas múltiplas conceituações de amor; leia-se:

Amar é mostrar-se vulnerável ao outro com a absoluta confiança de que o outro não tentará aproveitar-se da tua vulnerabilidade para converter-se em teu amo. Essa é a arte do amor, a mais esplendorosa alquimia que pode imaginar-se. O amor é uma arte, a maior da existência, também a mais difícil de praticar. A flor dourada é a mais difícil de criar. O amor como luxo, não como necessidade. Um estado da alma, não um fazer. [...] Não existe forma de amar que não seja imensamente. A imensidão é um devir de amor (2000, p. 117-118).

O amor não subjuga: não te torna amo nem servo. E não é a essência do que diz Freire sobre a relação entre opressores e oprimidos? E Maturana, quando trata da aceitação do outro como legítimo outro na convivência? As relações amorosas – e, o que nos interessa, a educação amorosa – exigem a transformação da sala de aula em um ambiente verdadeiramente amoroso. De igualdade e, quando essa não basta, equidade.

Ocorre que tais concepções esbarram numa visão educacional há muito denunciada. A escola, hoje, é burocratizada; a sala de aula, um espaço de anulação da criatividade dos aprendentes. Afirmar Warat (2003, p. 84) que “cada vez mais as pessoas elegem aprender longe das escolas, sentindo-a como um ritual de passagem e não como um lugar onde se possa aprender algo que sirva para a vida”. O resultado disso, e não poderia ser diferente, é “um processo de ensinamento e aprendizagem desumanizado, tanto do lado dos que ensinam quanto dos que simulam aprender” (Warat, 2003, p. 84). Nesse mesmo sentido:

A pedagogia dominante estimula o gregarismo da indiferença. Em toda parte há evidência de um projeto de socialização sem paixões, nem gestos sensíveis que vão preparando o terreno de uma cultura que nos precipitará no abismo da pós-alienação. Estratégias fatais de submissão que nos predis põe para um vazio informativo que ameaça ser existencial (Warat, 1997, p. 59).

Warat insiste que é preciso restaurar o desejo de aprender. Paulo Freire já falava da função do educador: ensinar não é transferir conhecimento. O argentino comunga desse pensamento e também pugna por uma educação diferente, que inspire o amor pelo mundo e que dilua as relações autoritárias. A sala de aula, para o autor, é um “espaço lúdico [que] permite a experimentação do desejo, assim, [sic] como as manifestações de afeição”; a sala é um ambiente que propicia “um aprender com paixão, pronto para repelir como uma imoralidade a autoridade do professor togado, no fundo insignificante, procurando reduzir à obediência o jogo do aprender” (Warat, 2000, p. 150).

A proposta waratiana de mudança é a de uma “educação baseada nos direitos da alteridade em seu sentido mais puro, é dizer, nos Direitos Humanos”, pois “dos vínculos de alteridade é que nasce o entendimento, os modelos de razão e compreensão” (Warat, 2003, p. 84). Segue o autor: “os laços afetivos são os que determinam a expansão do conhecimento” já que “os sentimentos que surgem do aprender com o outro são a base da construção de uma identidade forte, autonomia e sensibilidade com a diferença do outro” (Warat, 2003, p. 85). Essa, pois, é a base da Pedagogia do Amor de Warat.

Surge, nesse cenário, a figura da Mediação (ou, waratianamente, “espaço entre-nós”) como ferramenta fundamental dessa Pedagogia do Amor – e os professores como mediadores. É importante apontar que Warat e Freire divergem no pertinente à mediação. Explico. Enquanto que para Warat o professor é quem realiza a mediação entre o aluno e o mundo, Freire afirma que quem faz a mediação entre os polos educador-educando e educando-educador é o mundo. Sobre o desempenho desta importante função, Warat assevera que “os alunos sem ajuda de mediadores profissionais podem ficar à deriva, sem conseguir explorar todas as suas possibilidades sensitivo-cognitivas” (Warat, 2003, p. 87). A força da mediação, para o autor, radica na possibilidade de inserir os operadores do direito nas práticas existenciais.

Warat faz um apelo de justiça aos esquecidos do mundo – que se encontram em situação pior do que a os excluídos. A tanto, luta por uma justiça pedagógica e terapêutica; diz ele: “a Justiça do Brasil tem que ajudá-los [esquecidos] para que possam recuperar sua própria identidade; ajudá-lo [sic] a terem consciência de que são gente; logo temos que ajudá-los a que aprendam os sentidos e as práticas cotidianas da cidadania” (Warat, 2010, p. 4). E conclui: “a mediação dos esquecidos que têm que ser ajudados para que possam aprender o que é escutar a si mesmos e, posteriormente, aprender a escutar o outro, ao diferente” (Warat, 2010, p. 04).

Como honestidade não se promete, se pratica, serei bastante franca com o leitor ao dizer que não concordo com algumas proposições waratianas. Pelo menos não com a primeira parte. “Ajudar” não é emancipar. “Ajudar” não resolve a dificuldade estrutural da desigualdade social. “Ajudar” não desenvolve a cidadania plena. Era justamente essa a minha autocrítica relativa aos tempos de voluntariado. O que me parece mais estranho nessa opção de palavra é que ela, aos meus olhos, representa um desacordo com a sua trajetória intelectual. E Warat, um erudito, um profundo conhecedor da língua e da linguística, um sujeito sabedor da importância da semântica das palavras, não teria incorrido numa ingenuidade ou numa escolha despropositada. O Warat de 2010, de *A Rua grita Dionísio*, me representa parcialmente – afinal, não vou “jogar fora o bebê junto com a água do banho”. Fico com o Warat de 2003, de *Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Exclusão Social*, que quer lutar pela emancipação dos sujeitos fragilizados para que tenham condições de alcançar os seus direitos.

E para não dizer que não “cuidei” do “bebê”, encerro este tópico trazendo alguns apontamentos daquilo que o jurista denomina de Eco-política (do desejo), que é tratada na obra de 2010. Warat utiliza as categorias foucaultianas de biopoder (poder que se inscreve na vida) e, seu contraponto, a biopolítica (que ele denomina de Eco-política) para analisar as relações com destino – opa! – emancipatório. A mediação então “seria uma resposta ecopolítica de resistência às formas jurídico-institucionais do poder” (Warat, 2010, p. 42).

Para ele, “estamos numa época onde a vida, a política e o poder se tornaram centrais e indissociáveis” pois “abarcam a vida toda” (Warat, 2010, p. 37). A barbárie pós-moderna “precisa ser acompanhada desconstrutivamente por uma nova geração de intelectuais que pense sem repetir as categorias do passado”; trata-se de construir algo diferente, cooperativo, com as ferramentas do século XXI: “novas condições de trabalho, novos papéis da política transformadora, revolucionária” (Warat, 2010, p. 37-38). E o que pode ser concomitantemente mais excêntrico e mais mezinho do que o amor?

Ora, criar uma cultura do amor, dos direitos da alteridade, um espaço entre-nós, uma educação para os direitos humanos são medidas que se impõem. Se a rua grita, precisamos reaprender a ouvi-la. E se ela grita Dionísio, é porque clama pelo resgate da emoção, da festa, da alegria. Do amor. E sobre a educação para os direitos humanos, Warat afirma que “temos que entendê-la como um componente central de uma educação para a paz, que por sua vez deve estar associada a amplos programas de administração e resolução não violenta dos conflitos”

(Warat, 2003, p. 94). O projeto da paz passa, necessariamente, pela Mediação dos conflitos – e é por isso que essa ferramenta precisa figurar na agenda educacional atual. É essa a Pedagogia do Amor waratiana.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O amor ainda está nas bases dos problemas humanos, como já esteve para Gabo, Borges, Neruda, Galeano, Mistral. E para Maturana, Freire e Warat. Por que educar com amor?

Escrever sobre o amor e sobre uma educação baseada na amorosidade não deveria representar um desafio para ninguém. Mas é. Por que? Porque temos facilidade em escrever sobre aquilo que conhecemos, que vivenciamos cotidianamente. Sobre aquilo que desconhecemos, nos sentimos sestrosos em emitir nossa opinião.

O verdadeiro desafio, pois, é amar. Amar o outro. E educar com amor. A tese sustentada ao longo do texto é a de que o amor é um instrumento (social) potencializador de mudanças na educação. Percorri as ideias principais dos três educadores de forma a confirmar a tese inicial. Se há amor, então há possibilidade de mudança (positiva) na educação. Se há mudança (positiva) na educação, então a educação foi amorosa.

Os três autores que nos acompanharam ao longo do ensaio possuem formações distintas: Maturana é neurobiólogo; Freire formou-se em direito, mas jamais exerceu a profissão, e atuou prioritariamente no ensino de língua portuguesa, filosofia e alfabetização de adultos; Warat atuou como docente do ensino superior na área jurídica. Os três possuem arcabouços teóricos diversos. Concepções de educação, de amor, de diálogo, de consciência, de emancipação, de luta divergentes. Mas perseguindo uma espécie de fio de Ariadne, constatamos que todos têm um mesmo grande objetivo (e que também é o meu): a transformação social. Seja pela via biológica, pela via revolucionária ou pela via da mediação, é preciso anunciar a Tese que é possível achar o caminho de volta. E um dos caminhos é a Pedagogia do Amor.

REFERÊNCIAS

ANDREOLA, B. A. Carta-prefácio a Paulo Freire. *In*: FREIRE, P. **Pedagogia da Indignação**: cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo: UNESP, 2000.

BARCELOS, W.; MADERS, S. **Humberto Maturana e a Educação: educar no amor e na liberdade**. Santa Maria/RS: Editora e Gráfica Caxias, 2016.

BOFF, L. Prefácio. *In*: FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança; um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

BRASIL. **Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos**. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, UNESCO, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/2191-plano-nacional-pdf/file>.

CALLONI, H. Breve ensaio sobre o conceito de interdisciplinaridade e a noção de "totalidade" em Paulo Freire. **Revista Educação UFSM**, v. 27, n. 1, 2002, s/p.

CHONCHOL, J. Prefácio. *In*: FREIRE, P. **Extensão ou Comunicação?** 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.

FIORI, E. M. Prefácio. *In*: FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 23. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999.

FREIRE, P. O processo de alfabetização política. *In*: FREIRE, P. **Ação Cultural para a liberdade e outros escritos**. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia; saberes necessários à prática educativa**. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016-a.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 60. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2016-b.

FREIRE, P. **Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

MATURANA, H. **Emoções e Linguagem na Educação e na Política**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

MATURANA, H. **Cognição, Ciência e Vida Cotidiana**. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

MATURANA, H.; VARELA, F. **A árvore do conhecimento**; as bases biológicas da compreensão humana. 8. ed. São Paulo: Palas Athena, 2010.

MATURANA, H.; VERDEN-ZÖLLER, G. **Amar e brincar**: fundamentos esquecidos do humano do patriarcado à democracia. 3. ed. São Paulo: Palas Athena, 2004.

NÓVOA, A. (org.). **Vidas de professores**. 2. ed. Porto/Portugal: Porto, 2000.

OLIVEIRA, E. C. Prefácio. *In*: FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia**; saberes necessários à prática educativa. 54. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

RABELO, A. Prefácio. *In*: MATURANA, H. **Emoções e Linguagem na Educação e na Política**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

ROSSETTO, E. A contribuição do pensamento de Maturana para a Educação. **Educere et Educare**: Revista de Educação, v. 5, n. 10, 2010, p. 1-17.

WARAT, L. A. **A Ciência Jurídica e seus dois Maridos**. 2. ed. Santa Cruz do Sul/RS: EDUNISC, 2000.

WARAT, L. A. **A Rua Grita Dionísio!** Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

WARAT, L. A. **Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Exclusão Social**: Fundamentos preliminares para uma tentativa de refundação. 2003. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf>
. Acesso em: 12 dez. 2017.

WARAT, L. A. **Introdução Geral ao Direito** – O Direito não estudado pela Teoria Jurídica Moderna. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1997. v. 3.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA: UMA ABORDAGEM CONTRA CONSERVACIONISTA DE SUSTENTABILIDADE

CRITICAL ENVIRONMENTAL EDUCATION IN LEGAL EDUCATION: A COUNTER- CONSERVATIONIST APPROACH

Kariza Lopes²¹
Daniela Simões Azzolin²²

Resumo

O presente artigo pretende fazer uma descrição da Educação Jurídico-ambiental no Brasil, com base nos conceitos de Educação Ambiental Conservacionista e Educação Ambiental Crítica. Para isso, convida-se a refletir criticamente sobre determinados padrões sociais e ambientais pré-concebidos e quais suas implicações para os interlocutores da Educação Jurídica. O objetivo geral que guia esta pesquisa é descrever a Educação Jurídico-ambiental a partir dos conceitos de Educação Ambiental Conservacionista e Educação Ambiental Crítica. Os objetivos específicos, por sua vez, são: (i) descrever a Educação Ambiental Conservacionista; (ii) descrever a Educação Ambiental Crítica. A presente pesquisa descritiva tem caráter qualitativo. Utiliza-se técnicas bibliográfica e documental. Por ter sido concebida em uma abordagem multidisciplinar, a pesquisa tem como base estudiosos da Educação Ambiental Crítica, Educação Jurídica, Economia e Ciência Jurídicas. Através da descrição de concepções de desenvolvimento sustentável e das estruturas que operam a sociedade neoliberal globalizante, foi possível criar uma percepção da Educação Jurídico-ambiental Crítica, como plataforma indispensável para guiar os interlocutores da Educação Jurídica e do Direito na direção da democratização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e da justiça social.

²¹ Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social - PPGDJS, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. E-mail: karizadialopes@gmail.com.

²² Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social – PPGDJS, da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Pós-Graduada em Advocacia Feminista e Direitos das Mulheres pela Universidade Legale. Pós-Graduada em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). E-mail: danielaazzolin@hotmail.com.

Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental; Educação Ambiental Crítica; Educação Jurídica; Meio Ambiente.

Abstract

This article aims to describe The Legal-environmental Education in Brazil, based on the concepts of Conservationist Environmental Education and Critical Environmental Education. To this end, we invite you to critically reflect on certain pre-conceived social and environmental standards and what their implications are for legal education interlocutors. The general objective of this research is to describe Legal-environmental Education based on the concepts of Conservationist Environmental Education and Critical Environmental Education. The specific objectives are: (i) to describe the Conservationist Environmental Education; and (ii) to describe Critical Environmental Education. This research is descriptive and it has a qualitative nature. It used bibliographic and documentary techniques. Because it was conceived in a multidisciplinary approach, the research is based on authors of Critical Environmental Education, Legal Education, Legal Sciences and Economics. Through the description of the concepts of sustainable development and of the structures that operate the globalizing and neoliberal society, it was possible to create a perception of Critical Legal-Environmental Education as an indispensable platform to guide the interlocutors of Legal Education and Law towards the democratization of the right to ecologically balanced environment and social justice.

Keywords: Critical Environmental Education; Environment; Environmental Education; Legal Education. Sustainable Development.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende fazer uma descrição da Educação Jurídico-ambiental no Brasil, a partir de uma crítica aos conceitos de Educação Ambiental Conservacionista e Desenvolvimento Sustentável, indo de encontro às possibilidades que existem na adoção de uma Educação Ambiental Crítica. Para isso, convida-se a refletir criticamente sobre determinados padrões sociais e ambientais pré-concebidos e quais suas implicações para os interlocutores da educação jurídica. A educação é um direito social constitucionalizado, consagrado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. Por isso, essencial a constante renovação de um debate crítico sobre a promoção deste direito.

O objetivo geral que guia essa pesquisa é descrever a educação jurídico-ambiental a partir dos conceitos de Educação Ambiental

Conservacionista e Educação Ambiental Crítica. Os objetivos específicos, por sua vez, são: (i) descrever a Educação Ambiental Conservacionista; e (ii) descrever a Educação Ambiental Crítica. A presente pesquisa descritiva tem caráter qualitativo. Utiliza-se técnicas bibliográfica e documental. Por ter sido concebida em uma abordagem multidisciplinar, a pesquisa tem como base estudiosos da Educação Ambiental Crítica, Educação Jurídica e Economia.

Inicia-se trazendo distintas percepções de desenvolvimento sustentável, princípio constitucionalmente protegido na ordem jurídica brasileira, e como cada uma delas se relaciona à Educação Ambiental Conservacionista e Crítica, de forma a afetar a maneira como outras concepções sobre meio ambiente são recebidas pelos interlocutores do Direito Ambiental.

Trabalha-se com a Educação Jurídico-ambiental conservacionista enquanto uma corrente que expressa uma compreensão biologizante, palpável e divisível da crise ambiental, mas não explora seus aspectos político-sociais. Por outro lado, a Educação Ambiental Crítica insurge-se como uma corrente político-pedagógica que busca ressignificar os processos educativos, despertar no educando questionamentos e fomentar a produção de um novo perfil metodológico e epistemológico para a Educação Jurídico-ambiental.

2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONSERVACIONISTA

Em 1988, o Brasil viu a constitucionalização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, direito que, mais tarde, foi elevado ao status de direito fundamental. Esse processo teve importantes implicações, tanto na seara do Direito brasileiro, como em toda sociedade. Mesmo sendo o artigo 225 o dispositivo orientador do tratamento do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não é o único a tratar da temática na Constituição. Dito isso, um aspecto de grande relevância é que, a partir da Constituição Federal de 1988, um conceito chave para a política econômica brasileira ganhou força: o desenvolvimento sustentável, consagrado pelo preâmbulo; artigo 1º, inciso III; artigo 3º, inciso II; artigo 5º, § 2º; artigo 170; e o próprio artigo 225 (Brasil, 1988); bem como em tratados e convenções internacionais (Sarlet; Fensterseifer, 2011).

Como observa Boff (2012), desde meados dos anos 1980, a ideia de desenvolvimento sustentável ganhou espaço e foi rapidamente incorporada ao discurso governamental, ambientalista e empresarial. Assim, atualmente, o Direito Ambiental tem o Princípio do

Desenvolvimento Sustentável como uma de suas bases. Contudo, é necessário, ensaiar uma crítica a este conceito que cria, de uma forma nada ingênua, uma falsa noção de conciliação entre o capitalismo e a questão ecológica.

Segundo Silva Júnior (2010), que faz uma leitura tradicional e não-crítica desse princípio, o desenvolvimento sustentável é um processo no qual as políticas econômicas, fiscais, comerciais, energéticas, agrícolas e industriais são organizadas para produzir o desenvolvimento econômico integrado à boas práticas ambientais, que garantam um meio ambiente saudável para esta e futuras gerações. Ou seja, o meio ambiente deve ser explorado de forma que não se gere uma dívida ecológica ao se explorar as capacidades do planeta Terra.

Essa concepção se insere no paradigma central das ciências naturais, que é socialmente indiferenciado e considera como núcleo do problema ambiental o desperdício e o excesso de exploração ambiental. Isto é, vive-se uma crise ecológica, de proporções mundiais, em que a raça humana, como um todo, de maneira uniforme e homogênea, sofreria os efeitos de um meio ambiente degradado. Note-se que a questão climático-ambiental tende a ser apresentada de forma dissociada da sua concepção social-histórica (Vizeu; Meneghetti; Seifert, 2012).

A partir disso, e tendo em vista que o Estado neoliberal opera sob uma ordem de racionalidade e eficiência, tornou-se pressuposto das economias de mercado que as decisões relativas ao meio ambiente devem ser tomadas objetivando o máximo de aproveitamento sustentável dos recursos produtivos: produzir/explotar o máximo com o mínimo possível. Por essa lógica, propõe-se a necessidade do mercado de eficiência e economia de recursos faria com que o sistema se autorregulasse também em termos ambientais e, aos poucos, surgiriam novas tecnologias sustentáveis que beneficiariam tanto o sistema produtivo quanto a qualidade de vida das classes mais pobres e marginalizadas. A esse processo deu-se o nome de modernização ecológica (Acselrad; Mello; Bezerra, 2009).

Ocorre que, assim, ignora-se os aspectos político-sociais, subjetivos, desse processo, tais como: a natureza das políticas e dos modelos de desenvolvimento econômico; as relações de hierarquia e dominação; a ausência ou ineficiência de uma crítica da ciência e do Estado como instituições que se expressam politicamente no mundo; a indiferenciação das responsabilidades dos agentes poluidores etc. (Lima, 2009).

Por isso, apesar da retórica conservacionista, os pressupostos do desenvolvimento sustentável não rompem com a ideologia do

crescimento organizacional. Pelo contrário: através da tendência de modernização ecológica, presume-se a possibilidade da contínua e indefinida exploração ambiental e consequente acumulação dos lucros. Ao contrário dos processos biológicos que iniciam sua degeneração ao atingirem o ápice da maturidade, os pressupostos do desenvolvimento sustentável não indicam em qual o estágio de maturidade do processo produtivo deve-se parar, portanto, não preveem limites para o crescimento econômico, embora transmita a ideia falaciosa de sacrifício da economia em prol da natureza e do meio ambiente como um todo (Vizeu; Meneghetti; Seifert, 2012).

A concepção conservacionista de desenvolvimento sustentável discute até que ponto a lógica de produção neoliberal globalizante é coerente com o propósito de manutenção da vida no planeta e da redução das injustiças sociais: o capital entende o ambiente como "meio", "recurso" ou "bem", à mercê da satisfação das necessidades humanas²³. Por isso, a lógica do desenvolvimento sustentável representa um cenário impossível de se atingir (Vizeu; Meneghetti; Seifert, 2012).

Todo o exposto representa "uma nítida contradição entre o quadro social real e os textos das leis e da Constituição" (Azevedo, 2008, p. 54). Para Farias e Alvarenga:

Tal forma de abordagem é, entretanto, redutiva e inconsistente diante da crise ambiental. Responsabilizar a humanidade por essa crise, como se as sociedades apresentassem características culturais, econômicas e políticas homogêneas, significa vendar os olhos para os diferentes modos pelos quais diferentes grupos sociais se beneficiam ou são prejudicados pela exploração dos recursos naturais (2014, p. 34).

Nesse contexto, a educação jurídica, especialmente à nível de graduação em Direito, habitualmente voltada ao paradigma do desenvolvimento sustentável, prejudica a forma como se recebe o conceito de meio ambiente, sustentabilidade e a própria função do Direito Ambiental. Machado (2009) explica que os mecanismos epistemológicos, metodológicos da educação jurídica assentada no dogmatismo conservacionista acima descrito servem para camuflar as operações axiológicas do positivismo jurídico, que é, em si, uma opção ideológica

²³ Ao mesmo tempo, não distingue desejos e necessidades, nem reconhece que necessidades são socialmente construídas.

para preservação dos interesses da classe capitalista. Outro impasse que surge no âmbito da educação jurídica é o excessivo apego ao tecnicismo dos ritos procedimentais e na exegese das normas, o que acaba por condicionar pouca sensibilidade dos operadores do Direito no tratamento das questões sociais, por entenderem que isso representaria uma ameaça à segurança jurídica.

É nesse contexto que se funda a Educação Ambiental conservacionista, dominante no ensino jurídico atualmente. Como descreve Lima:

A EA conservacionista sofreu uma forte influência do ethos das ciências naturais, como de resto o próprio ambientalismo, no sentido de que se utilizou das teorias, dos conceitos e de uma visão de mundo biologizante que brotava desse universo particular. Segundo Lima (2005), esse fato decorre, entre outras razões, do pioneirismo dos cientistas naturais em perceber e denunciar as mudanças e os impactos ambientais que observavam em suas pesquisas de campo, o que lhes atribui méritos inegáveis reconhecidos consensualmente. Outra questão inevitável, e dessa vez decorrente da fragmentação e especialização do conhecimento, é que biólogos e cientistas naturais tendem a ter olhos e hábitos relacionados à sua área de formação e a enfatizar as dimensões da realidade que lhes são concernentes. Quero dizer que tenderam a destacar os aspectos naturais ou ecológicos dos problemas ambientais em detrimento de seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Não quero com essa afirmação ser determinista ou reduzir o universo dos cientistas naturais, mas apenas constatar um déficit de elementos sociais em certos setores e fases, sobretudo as iniciais, dos debates ambientais e da EA em particular (2009, p. 153).

Ao contrário da concepção de meio ambiente uno e indivisível, tem-se que a exposição aos riscos e danos ambientais não é democrática e as consequências de um sistema ambientalmente insustentável são vividas de maneira desproporcionalmente excessivas pelas marginalizadas. A questão ambiental deve ser vista sob a perspectiva da justiça social, concebida como equidade de direitos e deveres. Isso porque

a injustiça ambiental não é um processo natural, mas social e político. Para Acsehrad, Mello e Bezerra:

A pobreza não é um fenômeno inscrito na natureza das coisas, mas sim um produto de processos sociais precisos de despossessão (da terra, dos instrumentos de trabalho, de capital cultural, enfim, dos meios que permitam a reprodução das condições de existência), disciplinamento (dos corpos e mentalidades) e exploração (da força de trabalho) para a produção de bens e riquezas que são apropriadas por outrem. [...] Do mesmo modo, a desigualdade ambiental nada mais é do que a distribuição desigual das partes de um meio ambiente injustamente dividido (2009, p. 76).

No mesmo sentido, Cruz e Bodnar (2012):

O princípio da justiça ecológica impõe o dever de preservar o ambiente para as gerações atuais e futuras. Já não é suficiente a ecologia humana que se ocupa com as ações e reações do ser humano universal, relacionado com ambiente. Ela é importante, porque trabalha as categorias mentais (ecologia mental) que faz com que o ser humano singular seja mais ou menos benevolente ou mais ou menos agressivo. Mas é ainda uma visão idealista, pois o ser humano não vive no geral, e sim nas malhas das relações sociais, no específico da vida em sociedade. As próprias predisposições mentais e psíquicas possuem uma característica eminentemente social. Por isso é necessária também uma adequada ecologia social que saiba articular a justiça social com a justiça ecológica. É dentro da ecologia social que os temas da pobreza e da miséria devem ser discutidos. Pobreza e miséria são questões eco-sociais que devem encontrar uma solução eco-social (p. 60).

Os mecanismos de direcionamento dos riscos e danos ambientais às populações marginalizadas decorrem de uma lógica economicista e desenvolvimentista, peculiar de um sistema capitalista neoliberal, tal qual se instalou em escala global a partir da década de 1990, com o fim da Guerra Fria, período de disputas estratégicas e conflitos indiretos de

cunho político. A organização capitalista é inerentemente estabelecida em princípios de desigualdade tipicamente expressos na apropriação dos meios de produção, divisão do trabalho e hierarquização. Esse sistema consegue lucrar com essa distribuição desproporcional (Acselrad; Mello; Bezerra, 2009).

Nas sociedades neoliberais, os serviços estatais, dentre os quais, a proteção ambiental, são distribuídos de forma desigual devido a processos histórico-estruturais de dominação e opressão. Em um sistema em que processos sociais permitem que toda pirâmide social trabalhe para os grupos hegemônicos, há intencionalidade na distribuição desigual do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Azevedo, 2018).

A exploração ambiental e a subjugação das populações às margens da sociedade constroem uma espécie de mais-valia²⁴ ambiental, em que, quanto mais se direciona os riscos e custos ambientais aos pobres e se acumulam os benefícios da capitalização dos bens ambientais nas mãos de poucos, mais se lucra (Acselrad; Mello; Bezerra, 2009).

A constatação da desigualdade ambiental [...] nos leva a reconhecer que o que está em jogo não é simplesmente a sustentabilidade dos recursos e do meio ambiente, ou as escolhas técnicas descoladas da dinâmica da sociedade, mas sim as formas sociais de apropriação, uso e mau uso desses recursos e desse ambiente. É nesse sentido que os mecanismos de produção de desigualdade ambiental se assemelham muito aos mecanismos de produção de desigualdade social (2009, p. 76).

Ainda assim, em oposição ao conjunto conservacionista de aspectos epistemológicos, pedagógicos, políticos e éticos, presentes nas práticas educativas dos atores envolvidos na educação jurídico-ambiental, surge um processo de resignificação ideológica da questão ambiental, através da compreensão da questão ambiental em suas múltiplas dimensões, tais como biológicas, físicas e químicas, mas também subjetivas, como sociais, históricas, políticas etc. Ambos os movimentos entendem o meio ambiente como inter-relação entre natural e social, ambiente e coletividade (Lima, 2009; Carvalho, 2004). Naturalmente, depara-se com um quadro de disputa discursiva e de hegemonia dentro do

²⁴ A mais-valia configura-se na diferença entre o valor final de uma mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho. Para Marx, intelectual que cunhou o termo, esta é a base do lucro no sistema capitalista.

campo da educação jurídica e, dentro dela, da educação jurídico-ambiental brasileira.

3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA

A Educação Ambiental se constituiu como um campo de conhecimento e de atividade pedagógica e política entre os anos 70 e 80 no Brasil. Segundo Lima:

Ela já nasceu como um campo plural e diferenciado que reunia contribuições de diversas disciplinas científicas, matrizes filosóficas, posições político-pedagógicas, atores e movimentos sociais. A despeito dessa diversidade constitutiva, é possível perceber em seu núcleo orientador as tendências dominantes que forjaram seu perfil e que definiram o debate e a direção de sua trajetória histórica (2009, p. 147).

A Educação Ambiental Crítica, por sua vez, é uma das diferentes perspectivas político-pedagógicas dentro do campo da Educação Ambiental (Lima, 2009). Ela fundamenta-se em uma análise político-ideológica da conjuntura social e concebe que o meio ambiente deve ser entendido como a relação entre o ser humano e a natureza, marcada por padrões políticos, sociais e culturais historicamente construídos. Constitui-se em um pensamento crítico, baseado em ideais democráticos e emancipatórios, que pretende superar a visão tecnicista e verticalmente condutora de conhecimentos da educação como um todo, propondo contribuir para uma construção social de conhecimentos. Para esta corrente, é fundamental que se analise as relações de poder, opressão e dominação e como estas se comportam no sistema político-econômico vigente (Layrargues; Loureiro, 2013).

Esta tendência pode ser tratada como “o encontro da educação ambiental com o pensamento crítico dentro do campo educativo” (Carvalho, 2004, p. 18), em que há a pretensão de formação de sujeitos capazes de identificar, problematizar e agir em relação às questões socioambientais.

Estes embates configuram o território político onde as práticas de educação ambiental vão engajar-se na disputa por valores éticos, estilos de vida e racionalidades que atravessam a vida social. Deste

modo, as práticas em educação ambiental, desde suas matrizes políticas e pedagógicas, produzem culturas ambientais, influenciando sobre a maneira como os grupos sociais dispõem dos bens ambientais e imaginam suas perspectivas de futuro (Carvalho, 2004, p. 19).

A Educação Ambiental Crítica recusa o paradigma conservacionista individualista de que mudança social se dá pela soma das mudanças individuais, ou seja, que uma transformação societária virá se cada sujeito fizer sua parte. Ao contrário do pensamento ecológico consagrado, aqui não se culpabiliza os comportamentos individuais, como se o ser humano interagisse com o planeta sem mediações sociais – o indivíduo interage com o meio ambiente ao mesmo tempo em que interage com a sociedade, que também é produzida por ele (Layrargues; Loureiro, 2013). Ao mesmo tempo, também recusa a ideia subjetivista de que a mudança social se dá de maneira genérica e despersonalizada. Para essa corrente, a formação incide sobre as relações indivíduo-sociedade e, então, sociedade-meio ambiente. Todos estes fatores só fazem sentido se pensados em conjunto (Carvalho, 2004). Para Loureiro:

Somente podemos pretender um mundo novo se temos a convicção de que este pode ser construído pela ação consciente dos sujeitos, mas não por indivíduos genéricos, e sim por sujeitos que são definidos pelo e que definem o contexto de realização (2003, p. 41).

A Educação Ambiental Crítica promove o processo de ensino-aprendizagem de forma não vertical, buscando formar sujeitos livres e conscientes e, conseqüentemente, construir uma cidadania ambiental (Loureiro, 2003). Seja através da educação formal ou não formal, no cotidiano escolar, acadêmico, ou independente, busca-se provocar o senso crítico do sujeito que interage com o meio ambiente, despertar novas perguntas a respeito da questão socioambiental, estimular a participação do indivíduo na resolução dos problemas constatados e promover a articulação entre os diversos ambientes cotidianos que são palcos da inter-relação indivíduo-ambiente (Carvalho, 2004).

O objetivo do processo educativo deixa de ser a transmissão verticalizada de conhecimento, porque isso, por si só, é insuficiente para fomentar uma mudança societária significativa. A prioridade, para os defensores da Educação Ambiental Crítica, é a indissociabilidade da

teoria-prática e a consciência de autotransformação do indivíduo educando (Layrargues; Loureiro, 2013). Afinal, para Layrargues e Loureiro, “a crise ambiental não expressa problemas da natureza, mas problemas que se manifestavam na natureza” (2013, p. 68).

A perspectiva da complexidade se justifica pela premissa que compreende as questões ambientais como inerentemente interdisciplinares e multidimensionais, não sendo possível abordá-las adequadamente por olhares disciplinares e reducionistas. Parte da constatação de que a modernidade avançada tem produzido e colocado, para a sociedade, uma qualidade nova de problemas decorrentes da própria reflexividade do conhecimento e/ou do avanço tecnológico que os saberes especializados e fragmentados não conseguem abarcar (Morin, 1996; Beck, 1997; Leff, 1999).

Sob o prisma da justiça social, quando se trata da questão ambiental sob todos os seus aspectos, incluindo os estruturais, deve-se questionar com se dá a relação entre indivíduo e natureza e, a partir da constatação de que esta ocorre por meio de dominação do ser humano para com o meio ambiente, por meio da mercantilização de bens ambientais no sistema vigente, é essencial que se reflita quanto aos fins e porquês de esses recursos estarem sendo explorados da maneira como se têm visto. Mais: é necessário questionar-se sobre quem se beneficia através da relação de exploração do ser humano para com o meio ambiente e quem paga o preço deste modelo de produção. Principalmente, deve-se abrir uma discussão sobre novos modelos de produção e de consumo (Acsehrad; Mello; Bezerra, 2009).

A respeito do ensino do Direito, nas palavras de Cruz e Bodnar (2012):

[...] surge a necessidade da emergência e da consolidação de um novo paradigma do Direito que deve ser mais dúctil e operacionalmente adequado para a produção dialética e democrática de um repertório de argumentos mais densos e legítimos no atual contexto de complexidade. A sustentabilidade emerge, naturalmente, como grande potencial axiológico para ser aplicada e reconhecida na centralidade desta nova ordem jurídica altamente complexa, plural e transnacionalizada (p. 48-49).

A Educação Ambiental Crítica é munida de atributos que podem contribuir para a produção de um novo perfil metodológico de pesquisa

ambiental e sobre justiça socioambiental. Por ser um processo contínuo de ensino-aprendizagem, em que indivíduos e grupos tomam consciência do ambiente e de si mesmos de maneira mais autônoma e socialmente afetada, há aqui a chance de democratização tanto do meio ambiente e da ciência socioambiental (Layrargues; Loureiro, 2013). Muito mais do que uma transformação de caráter técnico, a questão ambiental deve ser vista como mais uma das múltiplas expressões de luta social e política a ser estruturada por meios democráticos.

O Direito não é feito apenas do texto da norma, mas da humanidade que a interpreta. Assim, é necessário saber até que ponto os operadores do Direito são capazes de fazer da norma instrumentos de efetiva transformação social. As concepções de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável devem ser construídas e consolidadas a partir do aporte científico de diversos campos do saber e deve integrar a base formativa de todas as teorias políticas, sociais, econômicas e jurídicas na atualidade. Ao fim, cabe ao universo jurídico fornecer uma estrutura institucional e normativa para a consolidação da sustentabilidade enquanto princípio fundacional juridicizado. Contudo, é necessária uma Educação Jurídico-ambiental emancipatória.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A constitucionalização do meio ambiente e do Princípio do Desenvolvimento Sustentável no Brasil, em 1988, como resultado de um processo de valorização da questão ambiental que já vinha ocorrendo a nível internacional desde a década anterior, foi vista por muitos como o prelúdio de uma nova abordagem de sustentabilidade. Contudo, notou-se que apesar da retórica conservacionista, os pressupostos do desenvolvimento sustentável não romperam com a ideologia produtiva pregressa. Inclusive, a concepção de desenvolvimento sustentável serviu para camuflar o perpetuamento das estruturas neoliberais globalizantes, enquanto transmitiu a falácia de conciliação entre o capitalismo e a questão ecológica como solução para a crise ambiental.

Nesse mesmo sentido, a Educação Jurídico-ambiental, fundada em bases dogmáticas conservacionistas, serviu para fortalecer essa ideia, visto que é o Direito que fornece uma estrutura institucional e normativa para a consolidação da sustentabilidade enquanto princípio fundacional juridicizado. Nesse escopo, a Educação Ambiental Crítica, corrente educativa que visa ressignificar, através de novas práticas reflexivas e educativas, a luta por justiça socioambiental, enquanto instituto que contempla a questão ambiental e as mazelas sociais como indissociáveis

um do outro, é um dos caminhos que se apresenta frente à atual educação jurídica, rompendo mitos e tentando instituir uma nova legalidade democrática.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H.; MELLO, C. C. A.; BEZERRA, G. N.; **O que é Justiça Ambiental**. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.

ACSELRAD, H.; HERCULANO, S.; PÁDUA, J. A. **Justiça Ambiental e Cidadania**. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Fundação Ford, 2004.

AZEVEDO, P. F. **Neoliberalismo**: Desmonte do Estado Social. Porto Alegre: Libretos, 2018. 200 p.

AZEVEDO, P. F. **Ecocivilização**: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 jul. 2019.

BOFF, L. **Sustentabilidade**: O que é - o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012.

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. **Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade**. Itajaí: UNIVALI, 2012. Disponível em: <https://www.univali.br/vida-no-campus/editora-univali/e-books/Documents/ecjs/E-book%202012%20GLOBALIZA%C3%87%C3%83O,%20TRANSNACIONALIDADE%20E%20SUSTENTABILIDADE.pdf>. Acesso em: 27 out. 2023.

CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental Crítica: nomes e endereçamentos da educação. *In*: LAYRARGUES, P. P. (coord.). **Identidades da educação ambiental brasileira**. Brasília: Ministério do Meio Ambiente: Diretoria de Educação Ambiental, p. 13-23, 2004.

FARIAS, T.; ALVARENGA, L. J. (2014). A (in)justiça ambiental e o ideário constitucional de transformação da realidade: o direito em face da iníqua distribuição socioespacial de riscos e danos ecológicos. *In*: PERALTA, C. E.; ALVARENGA, L. J.; AUGUSTIN, S. **Direito e justiça ambiental**: diálogos interdisciplinares sobre a crise ecológica. Caxias do Sul: EDUCS, p. 30-52, 2014. Disponível em <http://www.terrabrasil.org.br/ecotecadigital/index.php/estantes/legislacao/2626-direito-e-justica-ambiental-dialogos-interdisciplinares-sobre-a-crise-ecologica>. Acesso em: 24 out. 2019.

LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. As macro-tendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. **Ambient. soc.**, São Paulo, v. 17, n. 1, p. 23-40, 2014. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-753X2014000100003&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 25 out. 2019.

LIMA, G. F. C. Educação ambiental crítica: do socioambientalismo às sociedades sustentáveis. **Educação e Pesquisa**, v. 35, n. 1, 2009, p. 145-163. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/tSMJ3V4NLmxYZZtmK8zpt9r/>. Acesso em: 26 out. 2023.

LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P. Ecologia política, justiça e educação ambiental crítica: perspectivas de aliança contra-hegemônica. **Trab. educ. saúde**, v. 11, n. 1, p. 53-71, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462013000100004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 22 out. 2019.

LOUREIRO, C. F. B. Premissas teóricas para uma educação ambiental transformadora. Rio Grande: **Ambiente e Educação**, v. 8, p. 37-54, 2003.

MACHADO, A. A. **Ensino Jurídico e Mudança Social**. São Paulo: Expressão Popular, 2009.

SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. **Direito constitucional ambiental**: estudos sobre a constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

SILVA JÚNIOR, I. S. A Educação Ambiental Como Meio para a Concretização do Desenvolvimento Sustentável. **Rev. Direito Público**, v. 4, n. 17, p. 128-140, 2007. Disponível em:

<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1304/770>. Acesso em: 26 out. 2023.

VIZEU, F.; MENEGHETTI, F. K.; SEIFERT, R. E. Por uma crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável. **Cad. EBAPE.BR**, v. 10, n. 3, p. 569–583, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cebape/a/r5yWQp4wykg5RWJN9pmxjQJ/>. Acesso em: 27 out. 2023.

**A CRISE DO ENSINO JURÍDICO TRADICIONAL
SOBRE O OLHAR DAS METODOLOGIAS ATIVAS
COMO ALTERNATIVA PROPULSORA DE UM
ENSINO-APRENDIZAGEM MAIS PARTICIPATIVO²⁵**

**THE CRISIS OF TRADITIONAL LEGAL
EDUCATION ON THE VIEW OF ACTIVE
METHODOLOGIES AS AN ALTERNATIVE FOR A
MORE PARTICIPATIVE TEACHING-LEARNING**

Gabriel Lima Mendes²⁶
Frederico Thaddeu Pedroso²⁷

Resumo

O presente trabalho tem por tema um estudo sobre o problema do ensino jurídico tradicional e os desafios de uma educação jurídica participativa. Nesse contexto, aborda-se para a crise do ensino jurídico tradicional, que tem como ênfase as aulas expositivas sob o amparo puramente dogmático. Este artigo enfrenta a seguinte problemática: o discente como protagonista de um ensino-aprendizagem mais participativo através das metodologias ativas poderia ser uma alternativa asolucionar a crise do ensino jurídico dogmático? Para enfrentar esse questionamento, o presente estudo tem por objetivo demonstrar a crise do ensino jurídico por meio das dogmáticas, bem como tentar elencar possíveis hipóteses de soluções para o rompimento desse cenário por meio do ensino participativo dos alunos como propulsores ativos do conhecimento através das metodologias ativas. Para tanto, este

²⁵ Artigo elaborado como avaliação parcial na disciplina de “Educação Jurídica na Sociedade em Rede”, do Programa de Pós-Graduação em Direito – nível Mestrado da Universidade Federal de Santa Maria (PPGD/UFSM), ministrada pela professora Doutora Ângela Araújo da Silveira Espindola.

²⁶ Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Membro do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual e Contemporaneidade – GPPIC, vinculado à UFSM. Advogado inscrito na OAB/RS e Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Bossoroca/RS. E-mail: gabrielmendes.advocacia@gmail.com.

²⁷ Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Bacharel em Direito pela Universidade Franciscana. Membro do grupo de pesquisa em Direitos da Sociobiodiversidade, vinculado à UFSM. Bacharel em Direito pela Universidade Franciscana de Santa Maria (UFN). Advogado inscrito na OAB/RS. E-mail: frederico.pedroso@acad.ufsm.br.

trabalho se vale do método de abordagem dialético. Ademais, utiliza-se do método de procedimentos monográfico, assim como se opera pela técnica de pesquisa bibliográfica. A partir disso, o referido artigo divide-se em três seções. Ao final, o estudo permite concluir que o uso das metodologias ativas podem ser uma alternativa à crise do ensino jurídico dogmático, já que são técnicas participativas propulsoras do ensino-aprendizagem, que buscam colocar os alunos como protagonistas do ensino.

Palavras-chave: Crise do Ensino Jurídico; Ensino Tradicional; Ensino Dogmático; Metodologias Ativas; Zetéticas.

Abstract

The theme of this work is a study on the problem of traditional legal education and the challenges of participatory legal education. In this context, the crisis of traditional legal education is addressed, which emphasizes expository classes under purely dogmatic support. This article faces the following problem: could the student as the protagonist of a more participatory teaching-learning through active methodologies be an alternative to solving the crisis of dogmatic legal education? To address this question, the present study aims to demonstrate the crisis in legal education through dogmatics, as well as trying to list possible hypothesis solutions for breaking this scenario through participatory teaching of students as active drivers of knowledge through methodologies. active. To this end, this work uses the dialectical approach method. Furthermore, the method of monographic procedures is used, as well as the bibliographic research technique. From this, this article is divided into three sections. In the end, the study allows us to conclude that the use of active methodologies can be an alternative to the crisis of dogmatic legal education, as they are participatory techniques that drive teaching-learning, which seek to place students as protagonists of teaching.

Keywords: Active Methodologies; Dogmatic Teaching; Legal Education Crisis; Traditional Teaching; Zethetics.

1 INTRODUÇÃO

Os cursos de Direito, em sua maioria, assumiram a premissa de que o aluno deve aprender por meio de um processo passivo de recepção de conteúdo e memorização de informações, ou melhor, a ênfase no ensino dogmático e tecnicista vem tomando conta das Instituições de Ensino Superior no Brasil.

Ademais, o destaque na educação de forma fragmentada, desconectada com o contexto prático, assim como a metodologia de sala de aula estritamente calcada pelas aulas expositivas são técnicas de ensino utilizados em demasia no cenário das faculdades de Direito do país.

Dessa forma, um equívoco comum a muitos dos departamentos de cursos universitários é o de pretender que a Universidade deva se preocupar exclusivamente com a habilitação profissional. Nesse sentido, não se estuda para conhecer algo, se estuda para ser aprovado. Formam-se, assim, juristas sem saber crítico, mais preocupados em decorar conceitos e procedimentos técnicos do que raciocinar o Direito de forma mais completa, global e humana. Em outras palavras, não há a preocupação por uma formação mais ativa, tampouco que os alunos detenham um conhecimento mais participativo.

O problema do ensino jurídico tradicional é reflexo de uma crise instalada há mais de 40 anos. Sendo que os desafios de um ensino jurídico participativo persistem até os dias atuais. Nesse contexto, o presente estudo tem como escopo abordar para a crise do ensino jurídico tradicional que tem como ênfase as aulas expositivas sob o amparo dogmático e puramente tecnicista.

Assim, como alternativa para um ensino-aprendizagem mais participativo, urge contextualizar as metodologias ativas como possível opção à substituição frente a esse cenário de crise educacional. Dessa forma, pretende-se responder, através deste trabalho, a seguinte problemática: o discente como protagonista de um ensino-aprendizagem mais participativo através das metodologias ativas poderia ser uma alternativa com o propósito de solucionar a crise do ensino jurídico dogmático?

Para enfrentar esse questionamento, o presente estudo tem por objetivo demonstrar a crise do ensino jurídico por meio das dogmáticas, bem como tentar elencar possíveis hipóteses de soluções para o rompimento desse cenário por meio do ensino participativo dos alunos como propulsores ativos do conhecimento através das metodologias ativas.

Para tanto, este trabalho se vale do método de abordagem dialético. Ademais, utiliza-se do método de procedimento monográfico, assim como se opera pela técnica de pesquisa bibliográfica.

A partir disso, o presente artigo divide-se em três seções. Na primeira, realiza-se uma breve análise da crise do ensino jurídico baseada pelo método do ensino dogmático com ênfase em aulas estritamente expositivas. Na segunda, confronta-se o primeiro capítulo com intuito de apresentar os aspectos positivos do uso das metodologias ativas,

propulsoras do aluno como protagonistas do seu ensino-aprendizagem. Na última, verifica-se o resultado gerado da confrontação das duas primeiras seções: visando evidenciar se, de fato, o ensino participativo por meio das metodologias ativas se apresenta como solução ao ensino tecnicista e dogmático.

2 A CRISE DA EDUCAÇÃO JURÍDICA COM ÊNFASE NO ENSINO STRITAMENTE DOGMÁTICO E TECNICISTA

Insta mencionar quando se destaca a crise do ensino jurídico do Brasil, isso diz respeito a fatores temporais e metodológicos. O primeiro, tange a um aspecto cronológico calcado pelo período histórico retratado, em outras palavras, denota-se que a crise jurídica não é de hoje esim de muitos anos atrás.

Já o segundo, dedilha a vários fatores que podem ser questionados, tais como, o tipo de apresentação que tem sido utilizada em sala de aula, preparo dos professores, comprometimento dos alunos, a mercantilização do ensino, aulas voltadas estritamente para concursos, falta de interdisciplinaridade das matérias, falta de conexão do ensino teórico com a prática e dentre outros diversos motivos que poderiam ser aqui elencados.

O fato é, vários são os problemas que nos trazem até a reflexão do presente estudo, no entanto, evidente que não se tem escopo de esgotar todos esses fatores enumerados acima de forma pormenorizada e, sim, abranger o tema da crise de modo delimitado a um objeto específico, isto é, visando demonstrar a crise do ensino jurídico por meio das dogmáticas, bem como tentar elencar possíveis hipóteses de soluções para o rompimento desse cenário por meio do ensino participativo dos alunos como propulsores ativos do conhecimento através das metodologias ativas.

Sendo assim, urge destacar a reflexão de Caio Tácito, após o envolvimento direto do jurista carioca na reforma universitária de 1968, a qual foi formulada mais de 45 anos atrás, premissa essa que evidenciou naquela época os contornos de crise do ensino jurídico com tamanha sensatez, a saber:

O trauma do bacharel em direito que não chega a adquirir o desembaraço profissional mínimo e nem está capacitado ao raciocínio jurídico ordenado, marca a experiência de sucessivas gerações egressas das Faculdades de Direito, compelidas a

um autodidatismo de adaptação às exigências do mercado profissional. (Tácito, 1975).

Nesse mesmo contexto, Ghirardi destaca, em sua obra, que as principais críticas do ensino jurídico, desde outrora, já alertavam para as possíveis crises do Direito, apontando para a mercantilização do ensino, bem como que as faculdades estariam voltadas aos interesses estritamente capitalistas e não para a formação de um jurista capaz de discernir as nuances do fenômenos normativos, assim como interpretar os fatos complexos de forma interdisciplinar, social e política. Mais do que isso, tratou da distância do direito com a realidade:

A aproximação do Direito (e do ensino do Direito) da realidade sempre foi um dos principais motes das críticas que, desde os anos 1970, alertam para a crise do ensino jurídico no Brasil. (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 19)

Outrossim, o fato de que o Direito é mutável e está na maioria das vezes atrasado (paraná se dizer sempre - a fim de evitar generalizações neologísticas), no que se refere da norma acompanhar a evolução/transformação do contexto social vigente, assim como das questões políticas e econômicas que permeiam o conjunto fático. Isso denota que o legislativo, bem como o sistema jurídico está sempre um passo atrás das conquistas/avanços sociais e culturais, sendo que as mudanças jurídicas não acompanhem os fenômenos ansiados pela sociedade. Nesse ínterim, isso se chancela, mais uma vez, nas palavras de Ghirardi e Feferbaum:

O ensino jurídico não tem conseguido acompanhar as transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais o país tem passado, dentre outros motivos porque o tempo do Direito é muito mais lento que o tempo da sociedade (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 19).

Além disso, somado às mazelas já expostas até o presente momento, há de se destacar como ponto chave deste estudo, pautando-se para demonstração da “clássica distinção entre zetética e dogmática jurídica foi um dos nortes das mudanças introduzidas na organização do ensino jurídico brasileiro, buscando superar a distância entre o Direito e a realidade (Sá; Silva, 2007).

Dessa forma, a interpretação do fenômeno jurídico, segundo as lições de Tercio Sampaio Ferraz Junior, pode ter um enfoque zetético ou dogmático, a partir das leituras de Ghirardi e Feferbaum (2013, p.19).

No entanto, didaticamente, convém antes de se abordar a problemática da dogmática do ensino, com vistas a se introduzir o campo zetético de aprendizado, impende-se diferenciar esses conceitos doutrinários a fim de se obter maior compreensão do que será abordado posteriormente, nas palavras de Ferraz Junior (2012, p. 24):

As zetéticas são, por exemplo, as investigações que têm como objeto o direito no âmbito da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia, da História, da Filosofia, da Ciência Política etc. Essas disciplinas servem não só para informar os juristas, mas, principalmente, para formá-los. Por sua vez, dogmáticas são definidas à medida que consideram certas premissas, em si e por si arbitrarias, como vinculantes para o estudo, renunciando-se, assim, ao postulado da pesquisa independente. Ao contrário das disciplinas zetéticas, cujas questões são infinitas, as dogmáticas tratam de questões finitas (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 19).

Ressalta-se, assim, que as disciplinas dogmáticas são importantes porque fundamentam o Direito positivo, mas elas sozinhas não desenvolvem o senso crítico e o raciocínio do jurista (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 20).

Ademais, o ensino jurídico voltado apenas como base na doutrina e calcado somente de disciplinas teóricas continuam alimentando o cenário de crise apontado anteriormente, uma vez que sob esse olhar de educação pedagógica que dê maior ênfase na parte apenas técnica e burocrata do Direito muito embora sejam importantes não são suficientes. Logo, o enfoque nas propedêuticas é que dará maior aporte ao jurista raciocinar os fenômenos jurídicos com maior proximidade da realidade sociológica e filosófica do mundo dos fatos, tornando-se um profissional do direito mais humano e reflexivo.

Segundo Ovídio Baptista (2004, p. 265) “não devemos alimentar esperança de conquistar algum progresso real na busca de um serviço judiciário eficiente e de boa qualidade, se não extirparmos o dogmatismo de nossa formação universitária”.

Nesse diapasão, a crise do ensino jurídico pode ser denotada por vários fatores diversos, aspectos esses já mencionados, todavia,

preponderantemente o uso da metodologia de ensino com aulas expositivas e de cunho dogmático ao que tange ao ensino-aprendizagem dos alunos continua acarretando e contribuindo para esse cenário de desequilíbrio. Sendo assim, nas brilhantes palavras de Ghirardi, reiteram-se a importância das propedêuticas e do rompimento dessa metodologia de mão única:

Seria de extrema importância trazer as ciências humanas para a sala de aula dos cursos jurídicos de maneira mais integrada, porque, com matérias como História, Sociologia, Filosofia, Literatura e Economia, os estudantes conseguem ter uma visão mais amplada dos problemas jurídicos; isto é, somam-se várias visões e pontos de vistas sobre um ponto comum, o que só tem a acrescentar. Além disso, essas disciplinas possibilitam análises mais críticas e especulativas da nossa sociedade, fazendo com que o aluno faça questionamentos em profundidade do problema que ele irá conhecer e resolver sob uma ótica essencialmente jurídica (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 22).

Antônio Alberto Machado (2009, p. 100) explica que esse enfoque demasiado nas disciplinas profissionalizantes em detrimento das disciplinas propedêuticas pode ser explicado pelo caráter tecnicista que os cursos de direito assumiram desde a década de 1930.

Dessa forma, como possível contorno a fim de deixar o ensino dogmático em segundo plano, bem como dar maior amparo a possíveis soluções para a crise do ensino, urge evidenciar novos métodos de ensino que devem ser experimentados com propósito de preparar melhor o discente e também colocá-lo como centro do ensino-aprendizagem de forma ativa e inovadora, assim dispõe importante pensamento de Ambrosini:

“desenvolver métodos de ensino que poderão ser testados em sala de aula. O currículo não privilegia nenhum método de ensino específico, preservando a diversidade e a pluralidade de estratégias didáticas. Essa pluralidade metodológica traz a vantagem de respeitar as diferentes aptidões de aprendizagem dos alunos (Ambrosini, 2010, p. 172).

3 O USO DAS METODOLOGIAS ATIVAS E A SUA IMPORTÂNCIA PARA O CONTEXTO DO ENSINO ATIVO E MAIS PARTICIPATIVO DOS DISCENTES

Após elucidação do capítulo retro no que diz respeito às crises do ensino jurídico, com ênfase em um dos problemas estar pautado pelo ensino estritamente dogmático, sem que as matérias propedêuticas, ou melhor, de cunho zetético tomem maior abrangência, fica claro e cristalino que os docentes devem se valer de novas metodologias de educação pedagógicas a fim de que seja deixado o ensino dogmático em segundo plano, visando um maior aprendizado e aproveitamento das aulas por parte dos alunos.

Desse modo, urge evidenciar novos métodos de ensino que devem ser experimentados com propósito de preparar melhor o discente e também colocá-lo como centro do ensino- aprendizagem de forma ativa e inovadora, desenvolvendo métodos de ensino que poderão ser testados em sala de aula, com o intuito de que essa pluralidade metodológica traga vantagens no aprendizado e possa respeitar as diferentes aptidões de aprendizagem dos alunos. Assim, nesse contexto surge a seguinte hipótese como antídoto à crise de ensino assolada: a utilização das metodologias ativas no ensino jurídico como propulsoras do ensino-aprendizagem dos alunos, surgindo assim como possível solução a ser devidamente detalhada neste presente capítulo.

Nesse diapasão, há longos anos já vem se falando a respeito da crise de ensino jurídico que, também, por ora se abordada neste estudo - em meados de 2020. Assim, segundo Streck (1999, p.84), todas essas pesadas críticas a esse ensino vendido pelas faculdades de Direito justificam-se por ter se construído “um modo rotinizado, banalizado e trivializado de compreender, julgar e agir com relação aos problemas jurídicos”.

Sendo assim, visando enfrentar o ensino dogmático calcado pelo recurso das aulas tradicionais e mecanizadas, que fazem com que, muitas vezes, o grau de compreensão dos estudantes acerca da interpretação dos fenômenos jurídicos seja reduzida, vale destacar a técnica que pode desbancar e romper com esse sistema retrógrado de ensino, corroborada pelo seguinte entendimento de Melo e Sant’ana, qual seja:

O uso dessa Metodologia Ativa confronta o ensino tradicional das faculdades, caracterizado por retenção de informação, disciplinas fragmentadas e avaliações que exigem memorização, podendo

levar os estudantes à passividade e aquisição de uma visão estreita e instrumental do aprendizado, promovendo carências de constante atualização. O grande desafio da Metodologia Ativa é aperfeiçoar a autonomia individual e uma educação capaz de desenvolver uma visão do todo – transdisciplinar, que possibilite a compreensão de aspectos cognitivos, afetivos, socioeconômicos, políticos e culturais, constituindo uma prática pedagógica socialmente contextualizada (Melo; Sant’ana, 2012, p. 329).

Com o propósito de que seja demonstrada com maior clareza a importância das metodologias ativas, que tem como grande desafio aperfeiçoar a autonomia individual e uma educação capaz de desenvolver uma visão do todo, para, posteriormente, constituir uma prática pedagógica socialmente contextualizada. Assim, importante mencionar e denotar ao leitor de que o ensino jurídico, diga-se de passagem, possui em torno de 1600 faculdades de Direito no país (Blog Exame de Ordem, 2019).

Como implicação disso, o ensino destoa de grande ênfase em questões puramente mercadológicas com o ensino jurídico, lamentavelmente, voltado apenas para a aprovação dos seus alunos na prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ou direcionados para concursos, valendo-se com veemência ao uso extremo de manuais dogmáticos, deixando de lado totalmente as questões práticas do direito, com o uso de métodos em que consistem na passividade dos alunos e com pouca participação. Desse modo:

Essa visão passiva do processo de ensino-aprendizagem é estimulada pela prática do Ensino Médio e por uma visão consumerista que muitos estudantes (e suas famílias) têm do Ensino Superior. Para romper com essa visão, os cursos devem apostar em metodologias participativas, que tirem professores e alunos da zona de conforto criada pelo método puramente expositivo (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 27).

Mais do que isso, além de serem defendidos mecanismos que tirem professores e alunos da zona de conforto criada pelo método puramente expositivo, importa ressaltar que os discentes têm um papel fundamental nesse rompimento de paradigma apontado pelo presente trabalho. Nesse sentido, os alunos devem ser apontados, também, como uma possível

grande solução para o rompimento do ensino dogmático, a fim de que os estudantes se coloquem como propulsores do seu conhecimento de ensino-aprendizagem. Vale destacar, dessa forma, segundo Ghirardi e Feferbaum (2013, p. 27-28):

Principalmente, os estudantes deverão ter em mente que o curso, sozinho, não consegue suprir todos os aprendizados e expectativas. O curso de Direito deve estimular o aluno a sair da zona de conforto de dependência de ideias preconcebidas pelo docente, porque, quando ele termina a graduação e ingressa no mercado de trabalho, precisa caminhar com autonomia e, se não tiver desenvolvido essa habilidade anteriormente (qual seja: caminhar, aprender com autonomia), tornar-se-á um profissional obsoleto e ultrapassado, porque não será capaz de acompanhar as transformações sociais, econômicas, políticas, jurídicas etc. que exigem uma qualificação permanente.

Por conseguinte, partindo do pressuposto de que o curso de Direito deve estimular o aluno a sair da zona de conforto de dependência de ideias preconcebidas pelos docentes, relacionam-se algumas técnicas apontadas dentro do ramo das metodologias ativas como possíveis mecanismos a serem adotados pelos educadores do ensino jurídico. Tudo isso como forma de substituir o ensino dogmático por métodos de educação mais participativos e que disponham de maior proatividade de seus alunos, com enfoque a sistemas diferenciados a serem experimentados em sala de aula, a saber:

O quadro conceitual, que se tornou instrumento de referência para a elaboração dos planos das disciplinas, identificou os seguintes métodos de ensino jurídico atualmente em uso na Escola de Direito: role playing, role-playing com simulação, método do caso, problem-based learning, diálogo socrático stricto sensu, diálogo socrático lato sensu, seminário temático, seminário de leitura, seminário de pesquisa, aula expositiva, debate e leitura crítica (Ambrosini, 2010, p. 170).

Assim, dentre os mais variados métodos ativos acima listados que poderiam ser mencionados no presente trabalho, quaisquer um deles fariam jus a serem aqui citados com muito apreço pelo autor. No entanto, este que vos escreve não esconde o seu encantamento ao método do Diálogo Socrático. Razão pela qual, deu-se ao luxo de mencioná-lo com maior destaque.

Esse referido método apontado, nas palavras de Carvalho (2009) é um mecanismo retórico que busca identificar no curso de um diálogo a verdade presente nos argumentos e contra argumentos dos sujeitos envolvidos. Como método de ensino utiliza a interação dialogada entre dois ou mais sujeitos para estimular a compreensão ou a reflexão sobre um tema. Nesse contexto, a utilização das metodologias ativas em detrimento do ensino tradicional e passivo, por exemplo, aponta-se que:

esta mudança trará como consequência a mudança de atitude do aluno também para um papel de corresponsável pelo seu processo de aprendizagem, para uma atitude de proatividade, de iniciativa e de participação no seu processo de formação profissional, saindo das posições de passividade ou omissão frente às suas responsabilidades estudantis e participando das atividades de formação (Ghirardi; Feferbaum, 2013, p. 41).

Desse modo, não se visa apenas uma mudança de atitude no comportamento do aluno, mas que também se possa romper com o ensino tradicional e dogmático, calcado em aulas estritamente tecnicistas. Vale corroborar todo o exposto, evidenciando que o estudo voltado apenas para a prova da OAB e, também, direcionado tão-somente para concursos jurídicos, sem que a prática e o ensino participativo estejam associados são totalmente falhos.

Em outras palavras, visando denotar a importância desse rompimento, a fim de que seja reivindicado um ensino mais interdisciplinar e ativo, importante cancelar essas questões sobre a perspectiva das palavras de Morin (2000, p. 36), direcionando-se essa temática à educação do futuro:

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez mais

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido.

4 A ADOÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS COMO PROPULSORAS DO ENSINO-APRENDIZAGEM QUANTO UMA POSSIBILIDADE ALTERNATIVA À CRISE DO ENSINO JURÍDICO PASSIVO E DOGMÁTICO

Após as elucidações fáticas corroboradas nos capítulos anteriores acerca da tese pautada pela premissa da crise do ensino jurídico amparada por métodos tecnicistas e dogmáticos, calcado, na maioria das vezes, pelo procedimento de ensino expositivo (estilo passivo de aulas). Somado à apresentação da antítese delineada no capítulo anterior, onde houve a introdução das metodologias ativas como propulsoras de técnicas de ensino que visam o aluno como protagonista do seu conhecimento do ensino-aprendizagem, dá-se espaço nesta terceira seção para uma nova tese a ser trabalhada.

Diante do exposto, este último capítulo tem o escopo de evidenciar se o uso das metodologias ativas pode ser, de fato, uma alternativa à crise do ensino jurídico como substituição do ensino tradicional ao ensino mais ativo e participativo. Dessa forma, vale relembrar, o quão antigo esse cenário problemático do ensino é, para depois mostrar, mais uma vez, o porquê da importância de se apostar em pautar num ensino mais inovador e proativo, calcado pelas metodologias ativas. Nesse contexto:

A constatação desta crise do e no ensino jurídico não é um tema novo, embora nestetrintagenário constitucional tenha ganho uma dimensão ainda maior. A primeira manifestação sobre a crise do ensino do direito, no Brasil, foi de Dantas (1955), quase 130 anos depois da criação dos primeiros cursos jurídicos no país. Desde então, alguns pesquisadores têm se dedicado a enfrentar a temática, a exemplo de Warat e Rosa (1977), Aguiar (1999), Cittadino, Rocha e Warat (1981), Rodrigues (1993), Streck (2007) e Trindade (2008), para citar apenas alguns. (Espindola; Seeger.2019, p. 3).

Diante desse cenário, os cursos de direito, em sua maioria, continuam apostando nas técnicas de ensino tradicionais, corroborando essa premissa nas seguintes palavras da professora Deisy:

Os Cursos de Direito foram jogados a um pragmatismo indigno até mesmo da formação meramente técnica. A efervescência política e cultural ficou no passado, e deu lugar à regurgitação, não de uma dogmática de cunho cientificista, mas sim do conhecimento previamente mastigado dos manuais didáticos, associado à cuspida narrativa de práticas profissionais nem sempre auspiciosas, por vezes travestidas de doutrina. Nos Cursos de Direito brasileiros, o auto-conhecimento e as experiências são quase inexistentes: as pesquisas de campo não são encorajadas (Ventura, 2007, p. 5).

Sendo assim, a fim de que seja combatido o ensino técnico e mecanizado acima denotado, já alertava há algum tempo o professor e jurista Streck (2014) “ou se acaba com a standardização do direito e suas simplificações, ou elas acabarão com o que ainda resta da ciência jurídica”.

A saída, portanto, como alternativa mais viável a fim de solucionar o ensino dogmático e baseado pelas aulas expositivas, em sua maioria, é que essa metodologia ultrapassada (quando utilizada em demasia e de única fonte) seja substituída ou mesclada com amparo das metodologias ativas, como já abordado no segundo capítulo. Dessa forma, nas palavras de Souza, a mesma solução já apresentada se mostra reiterada nos seguintes termos:

Em substituição aos métodos tradicionais, e particularmente passivos, no processo de transformação dos modelos de educação, fortaleceram as considerações acerca: das peculiaridades de aprendizado do adulto e suas relações com a sociedade; da prática das metodologias ativas; e da apropriação de novos recursos das tecnologias de informação e comunicação (Souza; Iglesias; Filho, 2014 p. 285).

Dessa forma, diversos são os autores e estudiosos do ensino jurídico que vêm apresentando o mesmo recurso alternativo. Corroboram

se, nesse sentido, forte no entendimento de Ghirardi e Feferbaum (2013, p. 41), autores esse tão recorrentes em se tratando da temática de reflexão/melhoramento do ensino, explanando o entendimento de que:

A substituição por uma metodologia ativa e participativa, por técnicas e recursos que favoreçam o alcance dos vários objetivos educacionais propostos, que motivem o aluno a aprender e incentivem sua participação no processo de aprendizagem é imprescindível. [...] Nessa organização, revê-se a mudança do *papel e das atividades do professor* de ministrador de aulas e transmissor de informações para o de mediador pedagógico entre os alunos e suas aprendizagens, desenvolvendo relação de parceria e corresponsabilidade com eles, trabalhando junto e em equipe.

No entanto, o que se vê no ensino tradicional, sendo o mesmo problema já comprovado há mais de 40 anos, a tal crise do ensino jurídico: o método dogmático acaba proporcionando com que ocorram muitos destes motivos a serem elencados logo abaixo, sob o entendimento de Ventura, (2007, p. 18):

Neste sentido, causa estupor o autismo que leva milhares de estudantes a pensar que a Faculdade é um fim em si mesmo. É como se a presença física nas aulas, o *recortae cola* de trabalhos graças à Internet, as provas preparadas na véspera ou simplesmente *coladas*, não sentenciassem de imediato seu pertencimento ao batalhão de não-profissionais, ou seja, daqueles para quem o diploma em Direito nada acrescentou, e seguem sobrevivendo graças à atividade que desempenhavam anteriormente (Ventura, 2007, p. 18).

Paviani e Pozenato (1980, p. 43) advertem sobre “as consequências nefastas de um ensino jurídico tecnicista e meramente profissionalizante, em que as disciplinas propedêuticas são tidas como de so menos importância”. Além disso, urge destacar que o ensino puramente tradicional e dogmático causa/proporciona esse desinteresse pelas zetéticas, como também afeta na formação do jurista, fazendo

com que a reflexão dos fenômenos jurídicos seja reduzida, tornando o estudioso do direito menos social e humano e mais burocrata e tecnicista.

Por fim, para evitar que isso ocorra ou visando diminuir esses efeitos que resultam da crise do ensino dogmático e estritamente expositivo, vale apresentar a esperança de Ghirardie Feferbaum (2013, p. 43-44), com que os discentes possam fazer a diferença, almejando que o ensino tradicional seja substituído por um ensino mais participativo da seguinte forma:

Espera-se que o professor assuma um papel de mediador no processo pedagógico e de planejador de situações e práticas pedagógicas inovadoras que melhor colaborem com a aprendizagem de seus alunos. [...] as palavras de Antonio Angarita ao apresentar o livro “Construção de um Sonho”, que narra a história recente da criação de um curso de Direito e de um novo tipo de docência, inovadora pela forma e pelo conteúdo, transformando o aluno em protagonista, ampliando sua compreensão do mundo para além do simples ouvir e fazer exames

Nesse diapasão, já se encaminhando para o fechamento, resta, portanto, que o uso das metodologias ativas podem ser uma alternativa à crise do ensino jurídico, já que são técnicas propulsoras do ensino-aprendizagem participativos, colocando os alunos como protagonistas do ensino. Mais do que isso, que se possa refletir cada vez mais de modo crítico o ensino do Direito, bem como se tenha gradativamente mais discentes disponíveis e dispostos com o interesse em pensar novos padrões para o ensino do direito, tais como, o uso das metodologias ativas em sala de aula. Assim, parafraseando Angarita (2009, p. 16 e 18), chega-se a seguinte consideração final:

As críticas às grandes aulas expositivas (longas e eloquentes) não podem ser apenas um mal-estar “moderno” ou uma tola idiosincrasia. Essas críticas devem levar professores e escolas a saírem da mera impugnação para novos exercícios [...] O que precedeu a tudo, no marco da criação da Escola propriamente dita, foi reunir pessoas interessadas não somente em fazer a crítica do *statu quo*, mas em pensar com liberdade novos padrões para o ensino do Direito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi discutido ao longo deste estudo, é possível afirmar que a crise do ensino jurídico por meio do ensino tecnicistas e dogmático, calcado, na maioria das vezes, pelo método de ensino expositivo (estilo passivo de aulas) é certamente um dos grandes fatores contributivos para o cenário de crise elencada desde os anos 1970.

Em razão disso, importante constatar que a introdução das metodologias ativas como propulsoras de técnicas de ensino que visam centrar o aluno como protagonista do seu conhecimento do ensino-aprendizagem são extremamente necessárias e devem ser trabalhadas com maior afinco nas Instituições de Ensino Superior em Direito, tanto por parte do corpo docente, como também vista com bons olhos por parte dos alunos.

Nesse cenário, fica evidenciado que o uso das metodologias ativas pode ser, de fato, uma alternativa à crise do ensino jurídico como substituição do ensino tradicional ao ensino mais ativo e participativo, visando romper o cenário atual de crise do ensino, desde que manejado em substituição ao modelo dogmático e tecnicista ou até mesmo utilizado em conjunto ao método expositivo, que se centra fortemente nas aulas com amparo doutrinário.

Dessa forma, vale lembrar, o quão antigo esse cenário problemático do ensino é, para depois mostrar, mais uma vez, o porquê da importância de se tentar pautar para um ensino mais inovador e calcado pelas metodologias ativas. Logo, espera-se que o professor assuma um papel de mediador no processo pedagógico e de planejador de situações e práticas pedagógicas inovadoras que melhor colaborem com a aprendizagem de seus alunos.

Sendo assim, a substituição do ensino dogmático por uma metodologia ativa e participativa, que abarquem técnicas e recursos que favoreçam o alcance dos vários objetivos educacionais propostos e motivem o aluno a aprender, bem como incentivem sua participação no processo de aprendizagem é imprescindível. Ademais, mostram-se fundamentais para uma melhor formação profissional e maior capacitação dos juristas aos fenômenos complexos da sociedade global, como também visando um desenvolvimento mais social e humano desses profissionais.

Logo, nessa organização, revê-se a mudança do papel e das atividades do professor de ministrador de aulas e transmissor de informações para o de mediador pedagógico entre os alunos e suas

aprendizagens, desenvolvendo relação de parceria e corresponsabilidade com eles, trabalhando junto e em equipe.

Por fim, fica demonstrado que o uso das metodologias ativas podem ser uma alternativa à crise do ensino jurídico, já que são técnicas propulsoras do ensino-aprendizagem participativos, colocando os alunos como protagonistas do ensino.

Mais do que isso, portanto, que se possa refletir cada vez mais de modo crítico o ensinodo Direito, bem como se tenha cada vez mais alunos e docentes disponíveis e dispostos com o interesse em pensar novos padrões para o ensino do direito, tais como, o uso das metodologiasativas em sala de aula.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.; CAMARGO, S. B. de; SOUZA, A. L. D.; Direito e Realidade: os desafios para o ensino jurídico. *In*: GHIRARDI, J. G.; FEFERBAUM, M. **Ensino do direito em debate**: reflexões a partir do 1º Seminário Ensino Jurídico e Formação docente. São Paulo: Direito GV, 2013.

AMBROSINI, D. R.; ANGARITA, A. (coord.) **Direito GV**: Construção de umsonho - inovação, métodos, pesquisa. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas. Escola de Direito, 2010.

BAPTISTA DA SILVA, O. A. **Processo e ideologia**. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2004.

CARVALHO, L. Diálogo Socrático. *In*: GHIRARDI, J. G. (org.) **Métodos de Ensino em Direito – Conceitos para um Debate**. São Paulo, Editora Saraiva, 2009.

ESPINDOLA, Â. A. S.; SEEGER, L. S. O ensino jurídico no brasil e o senso comum teórico dos juristas: um “olhar” a partir de Warat. **Revista de Direito da Faculdade Guanambi**, v. 5, n. 2, p. 92-120, 2019. Disponível em: <http://revistas.faculdadeguanambi.edu.br/index.php/Revistadedireito/article/view/239>. Acesso em: 12 ago. 2020.

GIESELER, Maurício. Brasil atinge a marca de 1670 faculdades de Direito. **Blog Exame de Ordem**, 25 jul. 2019. Disponível em:

<https://blogexamedeordem.com.br/brasil-atinge-a-marca-de-1670-faculdades-de-direito%20>. Acesso em: 21 ago. 2020.

MACHADO, A. **Ensino Jurídico e Mudança Social**. São Paulo: Atlas, 2009.

MASSETO, M. T.; TAVARES, C. Z.; Inovação e a Universidade. *In*: GHIRARDI, J. G.; FEFERBAUM, M. **Ensino do direito em debate: reflexões a partir do 1º Seminário Ensino Jurídico e Formação docente**. São Paulo: Direito GV, 2013.

MELO, B. C.; SANT'ANA, G. A prática da Metodologia Ativa: compreensão dos discentes enquanto autores do processo ensino aprendizagem. **Com. Ciências Saúde**, v. 23, n. 4, p. 327-339, 2012. Disponível em: http://www.escs.edu.br/pesquisa/revista/2012Vol23_4_5_ApraticaMetodologiaAtival.pdf. Acesso em: 5 ago. 2020.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.

PAVIANI, J. POZENATO, J. C. **A Universidade em debate**. Caxias do Sul: EDUCS, 1980.

SÁ E SILVA, F. C. M. **Ensino jurídico: a descoberta de novos saberes para adematização do direito e da sociedade**. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2007.

SOUZA, C. S.; IGLESIAS, A. G.; FILHO, A. P. Estratégias inovadoras para métodos de ensino tradicionais - Aspectos gerais. **Medicina**, v. 47, n. 3, p. 284-292, 2014. Disponível em: http://revista.fmrp.usp.br/2014/vol47n3/6_Estrategias-inovadoras-para-metodos-de-ensinotradicionais-aspectos-gerais.pdf. Acesso em: 10 ago. 2020.

STRECK, L. L.; BOLZAN DE MORAIS, J. L. **Ciência política e teoria geral do estado**. Porto Alegre, RS: Livraria do Advogado, 2014.

STRECK, L. L. **Hermenêutica Jurídica e(m) crise**. Porto Alegre: Revisto do Advogado.1999.

TÁCITO, C. **Direito Administrativo**. São Paulo: Saraiva, 1975.

VENTURA, D. L. Do Direito ao Método e Do Método ao Direito. *In*: CERQUEIRA, D. T.; FRAGALE FILHO, R. **O Ensino Jurídico em Debate**. Campinas: Millennium, 2007, p. 257-292.

O AVANÇO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO: A PRECARIZAÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA PELOS *STREAMER* NA PLATAFORMA DIGITAL TWITCH

THE ADVANCEMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN WORK RELATIONS: THE PRECARIZATION OF THE ACTIVITY PERFORMED BY *STREAMER* ON THE TWITCH DIGITAL PLATFORM

Yanka dos Santos Pinto²⁸

Resumo

A introdução da tecnologia na sociedade possibilitou a exploração econômica de novas formas de trabalho como a transmissão ao vivo de entretenimento em mídias digitais em troca de retorno econômico. Essas atividades laborais apresentam riscos aos direitos e garantias dos trabalhadores, considerando ausência de legislação e responsabilização das plataformas digitais. Esta pesquisa pretende investigar o fenômeno da plataformização das relações de trabalho na pessoa do criador de conteúdo, bem como identificar as implicações da lógica neoliberal no trabalho desenvolvido pelo *streamer*. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o método de revisão de literatura, bem como se aplicou o método de abordagem indutivo. Na primeira seção, são abordadas as mudanças nas relações de trabalho devido às plataformas digitais. Na sequência, são discutidos os efeitos da aplicação dos ideais do empreendedorismo nas atividades laborais. Ao final, é realizada uma reflexão sobre as medidas que podem ser adotadas para proteção dos trabalhadores inseridos nesta nova organização do trabalho.

Palavras-chave: Relações de trabalho; Plataformas digitais; *Streamer*; Twitch.

Abstract

²⁸ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Pós-graduada lato sensu em Direito Constitucional e em Direito Privado, Especializada em Processo Civil e Mediação de Conflitos, CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4563558746459917>, Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-8537-8808>, yanka.pinto@acad.pucrs.br.

The introduction of technology into society has enabled the economic exploration of new forms of work, for example, the live transmission of entertainment on digital media in exchange for economic return. These work activities present risks to workers' rights and guarantees, considering the lack of legislation and accountability of digital platforms. This research aims to investigate the phenomenon of platformization of work relationships in the person of the content creator, as well as identify the implications of neoliberal logic in the work carried out by the *streamer*. To develop the research, the literature review method was used, as well as the inductive approach method. In the first section, changes in work relationships due to digital platforms are addressed. Next, the effects of applying the ideals of entrepreneurship in work activities are discussed. At the end, a reflection is made on the measures that can be adopted to protect workers included in this new work organization.

Keywords: Work relationships; Digital platforms; *Streamer*; Twitch.

1 INTRODUÇÃO

A expansão das plataformas digitais em diversas atividades da sociedade possibilitou a exploração econômica de novas formas de trabalho, por exemplo, a transmissão ao vivo de entretenimento em mídias digitais, empreendendo esforços em manter espectadores e, posteriormente, formar comunidades, em troca de retorno econômico. Essas atividades laborais derivadas dessas ferramentas tecnológicas apresentam riscos aos direitos e garantias dos trabalhadores, considerando a sua hostilidade quanto à regulamentação das relações de trabalho e à ideia de responsabilização das empresas de tecnologia da informação e comunicação pelas práticas laborais exercidas nos espaços virtuais oferecidos por elas, estabelecendo a lógica neoliberal do empreendedorismo, focando na autonomia do trabalhador. Sobrevém a necessidade em discutir a progressão e implantação dessas plataformas digitais no âmbito das relações de trabalho com a finalidade de proteger direitos e garantias fundamentais dos indivíduos.

Esta pesquisa pretende investigar o fenômeno da plataformação das relações de trabalho na pessoa do criador de conteúdo, bem como identificar as implicações da lógica neoliberal no trabalho desenvolvido pelo *streamer*. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se o método de revisão de literatura, por meio da técnica de pesquisa de documentação indireta, promovendo uma pesquisa bibliográfica e exploratória, recorrendo a autores como Sheila Stolz, Shoshana Zuboff, Byung-Chu

Han, André Fagundes Pase, entre outras obras clássicas, periódicos especializados, trabalhos acadêmicos e artigos científicos voltados para direito do trabalho e novas tecnologias; bem como se aplicou o método de abordagem indutivo, partindo de uma experiência empírica, neste caso, a figura do criador de conteúdo na plataforma digital Twitch, para formulação de aspectos gerais em relação à introdução do avanço tecnológico nas relações de trabalho combinada com neoliberalismo.

Em um primeiro momento, partindo de observações para alcançar uma abstração da realidade e depois retornando para sua concretização estruturada e experimentada pelo sujeito social ao aplicar o método de procedimento estruturalista, são abordadas as mudanças na organização do trabalho em razão da tecnologia e o surgimento das plataformas digitais e da figura do *streamer*. Na sequência, também pelo método de procedimento estruturalista, são discutidos os efeitos da aplicação dos ideais do empreendedorismo nas relações de trabalho, bem como é feita uma reflexão sobre as medidas que podem ser adotadas para proteção dos trabalhadores inseridos neste novo fenômeno trabalhista.

2 A PLATAFORMIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO: A FIGURA DO *STREAMER*

A revolução da tecnológica, principalmente o surgimento dos computadores pessoais e da internet, possibilitou o desenvolvimento de novas relações de trabalho, extinguindo postos de emprego, e criando outros, causando uma profunda mudança no modo como a prestação de serviços é desempenhada, concretizando a existência dos chamados cibertrabalhadores. O que antes a sociedade definia e delimitava como ambientes e tempo de trabalho, separando a fábrica da sua casa, hora do trabalho da hora do lazer, com a introdução das tecnologias da informação e comunicação, há uma desmaterialização do trabalho, onde são extrapolados os limites dos espaços funcionais (Medeiros; Costa, 2022). Os aparatos digitais, em virtude da sua mobilidade, transformam todo lugar em um local de trabalho e todo o tempo em tempo de trabalho (Han, 2018).

Este modelo têm provocado, ademais, inúmeros impactos sobre o mundo do trabalho e a vida das trabalhadoras e dos trabalhadores. Tais impactos vão desde ampliação do setor de serviços e a respectiva redução do operariado fabril (originariamente concentrado em grandes

aglomerações industriais), bem como a descentralização produtiva e, respectivamente, a ampliação das taxas de desemprego e a precarização do trabalho. (Stolz; Souza; Opuszk, 2015, p. 415).

A combinação entre a sociedade do consumo e a geração digital atraiu adeptos do empreendedorismo (Sousa, 2019), concebido a partir da ideia do trabalhador ser empresário de si mesmo, exercendo suas atividades laborais sem sair de casa, no tempo que deseja e com seu próprio material (Montargil, 2023). No culto ao empreendedorismo, a mítica união entre propriedade e administração revela-se em substituição às antigas possibilidades de trabalho, glorificando aspectos como audácia, competitiva e riqueza (Zuboff, 2021). Neste caso é afastada a figura do empregador em razão dos novos meios de organização da força produtiva, apresentando-se as plataformas de tecnologia da informação e comunicação como facilitadoras para aqueles que se consideram trabalhadores autônomos ao permitir, de forma inteiramente remota, o uso da ferramenta como mediadora entre oferta e procura para realização de serviços (Pellegrini; Costa, 2022).

As empresas-plataformas situam como principal narrativa a autonomia e flexibilidade do trabalhador, pregando ideias de parceria, renda fácil, remuneração significativa, jornada maleável e ausência de chefes, existindo inúmeras vantagens nesse novo tipo de relação que dependem somente do empenho de cada um (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Mesmo possibilitando a interação de dois ou mais grupos com objetivo no trabalho intensivo, as plataformas digitais não consideram a natureza do serviço prestado pela empresa, mas sim o método para a realização da atividade, retirando a concepção de subordinação e afirmando a liberalidade do prestador em se ativar ou não na ferramenta (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

No entanto, o que se percebe é uma dependência dos trabalhadores e consumidores nas mídias digitais (Pellegrini; Costa, 2022). Trata-se do fenômeno da platformização, onde o tráfego social e econômico é cada vez mais concentrado em um ecossistema de plataforma on-line, predominantemente corporativo, projetado em rede para organizar interações entre usuários para coleta sistemática, processamento algorítmico, circulação e monetização de dados (Montargil, 2023). Os algoritmos ocupam uma posição central nesse sistema, garantindo a permanência ou desligamento daqueles vinculados às plataformas (Pellegrini; Costa, 2022), compreendendo que as relações de trabalho

passam a ser mediadas digitalmente por softwares e algoritmos e sendo gerenciadas por grandes empresas de tecnologia (Montargil, 2023).

Neste contexto de reorganização das atividades laborais, surge a figura do *streamer*, denominado criador de conteúdo, que é “todo indivíduo que exerce a produção de transmissões audiovisuais ao vivo, com o intuito de entretenimento para um determinado público, em uma determinada plataforma” (Alves, 2021, p. 50). Com a monetização das transmissões ao vivo e a popularização dos jogos digitais, consolida-se um novo modelo de trabalho que consiste em espectadores observando uma pessoa jogar on-line enquanto, simultaneamente, participa de diálogos com outros usuários, e até mesmo com o próprio *streamer*, dentro desta mídia (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020).

A retribuição monetária do criador de conteúdo está diretamente atrelada ao aumento da sua audiência, por isso ele procura explorar ao máximo todo o cenário relacionado aos jogos eletrônicos, os lançamentos, as novidades na cultura gamer e sua atuação para chamar atenção do público (Silva, 2023). É comum que o *streamer* construa um personagem para encenar quando está ao vivo, evocando emoções exageradas e mantendo interação com a audiência para que os espectadores permaneçam na transmissão (Dallegrave, 2020). O trabalho do criador de conteúdo acaba carregando uma carga afetiva, com humor e criação de personagens, para provocar o engajamento do público (Montargil, 2023), desenvolvendo um vínculo baseado em trocas simbólicas e materiais que culminam na sua remuneração (Alves, 2021).

Lançada em 2011, como pioneira nas transmissões focadas em jogos, vendida em 2014 para a empresa de comércio eletrônico Amazon (Dallegrave, 2020), a *Twitch* consiste em uma plataforma digital que abriga diversos *streamers* que realizam transmissões ao vivo desde jogos on-line, vídeos, reações, Just Chatting (Apenas conversando), *Talk Shows & Podcasts*, Music & Performing Arts (Música e artes performáticas), entre outras categorias com objetivo de promover um espaço virtual para exposição de si em um imaginário da vida real (Dallegrave, 2020) ou outros tipos de conteúdo além dos jogos digitais, a exemplo de eventos esportivos como os Jogos Pan-Americanos de 2023 em Santiago, no Chile, pelo canal do *streamer* Casimiro Miguel, CazéTV.

No ano de 2021, cerca de 24 bilhões de horas foram assistidas na plataforma (Medeiros; Costa, 2022), enquanto em 2019 e 2020 a média por mês foi de mais de 800 mil, com aproximadamente 1,2 milhão de espectadores mensais e 45 mil canais de transmissões ativos (Alves, 2021). A *Twitch* funciona como grande catálogo de diferentes canais para assistir, onde o usuário pode escolher aquilo que for do seu interesse,

desde um determinado jogo ou categoria, criadores de conteúdo que estejam ao vivo no momento ou recomendações da própria mídia, sempre visando uma conexão entre a audiência e o *streamer* e, conseqüentemente, a formação de uma comunidade a partir do entretenimento construído em conjunto (Dallegrave, 2020).

A plataforma visa, portanto, a criação de entretenimento através de experiências ao vivo baseadas na interação entre as pessoas. *Streamers* e audiência trabalham juntos para criar e manter uma comunidade, onde um depende do outro para existir. A plataforma funciona como o meio onde tudo isso acontece, comprometendo-se a funcionar da maneira adequada e seguir realizando melhorias (Dallegrave, 2020, p. 48).

A *Twitch* oferece uma série de recompensas em troca da atividade realizada pelo *streamer*, desde que este tenha 18 anos de idade ou, se não tiver, sob a condição de um supervisor responsável (Medeiros; Costa, 2022), dentre elas: as doações em dinheiro por meio da plataforma pelo público ao criador de conteúdo – chamados Donates –; as inscrições, que são uma quantia fixa dada para o *streamer* a cada mês, proporcionando vantagens ao inscrito que lhe diferencia dos demais espectadores, por exemplo, circular por canais exclusivos para apoiadores, participar de sorteios, ter a sua mensagem no chat lida e ser identificado por ícones e selos; itens virtuais que são comprados pelos espectadores e geram um valor em dólar que pode posteriormente ser resgatado pelo *streamer* – denominados Bits; os anúncios, conhecidos por Ads, que interrompem a transmissão para exposição de publicidades direcionadas; o Pix, embora não seja regulado pela plataforma e na maioria dos casos seja utilizado para burlar as taxas e receber as doações de forma integral; por fim, o patrocínio de empresas de jogos eletrônicos ou tecnologia em troca de divulgação dos produtos (Montargil, 2023).

Ainda, a plataforma prevê três níveis de classificação do usuário, o inicial que é o *Streamer*, permitindo que o criador comece imediatamente, mas sem qualquer remuneração dentro da mídia, somente por meios externos, e disponibilizando poucas ferramentas como o chat, a opção de seguir para a audiência e o painel de análise de dados da transmissão, e para subir de categoria são impostas metas: no período de 30 dias fazer transmissões por 8 horas, em sete dias distintos, e manter uma média de três espectadores e 50 seguidores no canal (Pase;

Dallegrave; Fontoura, 2020). O segundo nível, o Afiliado, é ofertado automaticamente quando cumpridas as metas, possuindo três benefícios financeiros: as inscrições, que variam do valor mínimo de US\$ 4,99 até US\$ 24,99, e as gratuitas para assinantes da *Twitch Prime*, que são revertidas em renda ao *streamer*; os Bits, indo US\$ 0,01 de cada item virtual para o criador; e, por último, os Ads (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020).

Para chegar ao terceiro nível, o Parceiro, é preciso cumprir novas metas: no período de 30 dias fazer transmissões por 25 horas, em 12 dias distintos, e manter uma média de 75 espectadores e sem exigência de número de seguidores (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020). Nesta categoria, a mudança não é automática, para alcançar a classificação, é necessário preencher um formulário analisado manualmente por um funcionário da empresa, acumulando os benefícios dos níveis anteriores, acrescido de mais oportunidades de rendimentos e divulgação no seu canal e suporte prioritário (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020). A plataforma torna-se uma fonte de renda para o criador de conteúdo, “conforme ele cresce, atinge números, metas de visualizações e horas de transmissão, há um retorno financeiro gerado pela plataforma” (Dallegrave, 2020, p. 47).

A possibilidade de transformar capital lúdico e social em econômico ao converter números de espectadores em dinheiro, combinando jogos on-line, entretenimento, metas e a plataforma, promove um espaço virtual de ganhos (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020). Apesar de depender da mídia e dos espectadores, o *streamer* se rotula um empreendedor de si mesmo e enxerga a Twitch mais como uma parceira para conquistar o sucesso do que uma empresa interessada em primeiro lugar na geração de lucros e sua expansão no mercado das mídias sociais (Alves, 2021). Na própria página da plataforma encontra-se o pensamento de ser remunerado fazendo uma atividade que a pessoa ama, incitando a ideia de que o indivíduo será feliz no trabalho se exercer uma função prazerosa que seja do seu gosto (Sousa, 2019).

Há uma romantização do lazer enquanto atividade laboral, onde as empresas exploram a ideia do trabalho por amor e repassam pouca ou nenhuma recompensa financeira para o criador de conteúdo, beneficiando-se à custa do afeto dos trabalhadores (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020). “O amor é domesticado e positivado para a fórmula de consumo e conformidade” (Han, 2017, p. 12). Antes de a pessoa escolher ser *streamer*, quase sempre, ela foi um espectador das transmissões de outros, geralmente um criador extremamente popular com altas visualizações, nascendo os primeiros desejos e sonhos de ter um trabalho

que se ama (Alves, 2021). O afeto e o glamour social tornam esse tipo de atividade laboral altamente desejável (Medeiros; Costa, 2022), nesse sentido, a ascensão capitalista do setor de serviços conseguiu sistematizar o trabalho emocional, massificando e o padronizando (Pellegrini; Costa, 2022).

No imaginário do sujeito-*streamer*, as transmissões de entretenimento passam a ser a profissão dos sonhos (Sousa, 2019), tomando como inspiração para os criadores de conteúdo novatos os grandes exemplos de sucesso que se destacaram entre milhares (Alves, 2021). A realidade é que este não é o caminho que o *streamer* comum vai alcançar, na verdade, esta é apenas a ideia propagada pelas plataformas digitais (Alves, 2021), que estimulam o investimento na carreira de *streamer* pelo fato de outros terem conseguido sucesso de público e um grande retorno financeiro dentro da mídia, ao passo que submetemos criadores aspirantes a situações exploratórias, com a esperança de alcançar um mínimo de reconhecimento (Medeiros; Costa, 2022).

O sistema da plataforma, no entanto, permite que apenas um pequeno número de *streamers* de sucesso ocupe o topo da pirâmide e realize o sonho de atingir grandes ganhos financeiros. A maioria permanece com pouco ou quase nenhum ganho financeiro, mas mantém o sistema em funcionamento (Silva, 2022, p. 2).

Embora as pessoas estejam presas aos sonhos, desejando conquistar fama ou uma melhor condição financeira a partir da narrativa do sujeito-empresendedor, somente um pequeno grupo de indivíduos obtém essas vitórias enquanto os demais têm que lidar com as inseguranças e instabilidade da atividade (Alves, 2021). Em razão da glamourização do trabalho na plataforma e o autoreconhecimento como empreendedor, os *streamers* menores conformam-se com uma posição trabalhista individualizada, realizando horas e horas de transmissão assim como aqueles que tiveram sucesso seguindo esse mesmo caminho, em contrapartida a empresa adota uma postura de evitar responsabilidades sobre a precarização dos criadores, não oferecendo suportes de assistência trabalhista ou até psicossocial (Medeiros; Costa, 2022).

3 IMPLICAÇÕES DA LÓGICA NEOLIBERAL NO TRABALHO DO STREAMER

A *Twitch* disfarça a relação de trabalho existente entre ela e o *streamer* ao atribuir a ele o papel do entretenimento (Sousa, 2019), afirmando que sua atividade é apenas a intermediação tecnológica e não a organização e direção de um serviço (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Esses profissionais nem se percebem como trabalhadores devido à sutileza do gerenciamento realizado pela plataforma, ao mesmo tempo em que, de forma unilateral, a *Twitch* impõe elementos que demonstram uma relação laboral desequilibrada e desigual entre os envolvidos (Silva, 2022). Igualmente esta situação de maquiagem das responsabilidades das mídias digitais é estabelecida no caso dos motoristas de aplicativos de transporte individual ou de entregadores, apelando para o discurso de autonomia, de autogestão do trabalho (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

A opção de fixar o horário de início e término da atividade laboral, a autodefinição do tempo de intervalo, a escolha dos dias de trabalho e a ilusão de períodos de inatividades como “férias” são propagados, falsamente, como uma autonomia do trabalhador sobre o tempo de labor, um controle sobre seu período de trabalho e de descanso, considerando-se padrões de si (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Nessa triangularização das relações de trabalho, ocupando a plataforma uma função mediadora no desenvolvimento da atividade econômica, é oferecida ao trabalhador certa liberdade para gerenciar os seus horários, em troca a empresa dita a permanência ou não deste na mídia por meio de um sistema de avaliações e administração de tarefas (Pellegrini; Costa, 2022).

No entanto, estudos, decisões judiciais e demandas políticas indicam que as plataformas estabelecem o controle e o gerenciamento do trabalho a partir do uso de algoritmos que retiram a autonomia do trabalhador ao não discutir os termos da relação de trabalho (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Na legislação brasileira, somente serão considerados trabalhos autônomos aqueles sem qualquer dependência ou subordinação, independentemente do nome atribuído à relação pelas partes, não precisando ser necessariamente o que está descrito na situação contratada, prevalecendo o princípio trabalhista da primazia da realidade sobre as formas sob o título falso de trabalho de autônomo (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

A flexibilidade e a margem criativa existente na atividade desempenhada pelo criador de conteúdo não impedem a configuração da relação de trabalho (Silva, 2022), uma vez que a transmissão no Twitch não funciona de qualquer maneira, havendo predeterminações, diretrizes e regras que o sujeito-*streamer* deve seguir para executar sua função (Sousa, 2019). Para obter renda a partir do entretenimento, o criador precisa percorrer um caminho de metas quantitativas impostas pela

plataforma, “que controlam a produção do *streamer* a partir de métricas relacionadas à frequência (horas e dias transmitidos) e à retenção de espectadores (seguidores e espectadores ativos)” (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020, p. 13). Por analogia, essa rotina pode ser compreendida como um contrato de trabalho formal (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020).

O *streamer* converte-se em uma espécie de funcionário, caso não cumpra suas metas e obrigações (existe, por exemplo, um manual de diretrizes com o que é permitido ou não fazer na plataforma), deixa de receber os valores arrecadados, pode receber uma suspensão que impede a realização de transmissões e, em segundo momento, pode perder seu status. Essa ruptura pode ocorrer de maneira unilateral pela empresa, deixando o criador de conteúdo em uma situação vulnerável (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020, p. 13).

Nota-se o controle da plataforma sobre as determinações de pagamento do criador de conteúdo, como os procedimentos da atividade devem ser feitos, os incentivos a conexão do *streamer* na mídia, a entrega das horas trabalhadas, as penalidades aplicadas ao criador, os desligamentos daqueles que não estão alcançando altas notas e o fenômeno da gestão gamificada, que estimula a intensificação e o prolongamento do tempo de trabalho (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Mesmo em dias ruins ou que não estão dispostos a fazer a transmissão, os *streamers* são obrigados a permanecer na plataforma para alcançar as metas do mês e receber a remuneração pelo trabalho (Dallegrave, 2020).

A extensa jornada de trabalho pensada a partir de estratégias derivadas da gestão gamificada, mantém os trabalhadores conectados o máximo de tempo possível, principalmente, nos dias e horários que as mídias têm mais interesse do que os trabalhadores, como os finais de semana, dias chuvosos, no período noturno (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Muitos adeptos da plataforma apresentam dificuldades em sustentar a meta de espectadores, o que a dedicação de mais horas em suas transmissões, sendo, por exemplo, no Reino Unido, no ano de 2017, a média de 35 horas semanais de atividade ao vivo, o equivalente ao tempo de um trabalho formal no país, e, em alguns casos, os *streamers* chegam a 70 horas semanais de transmissão (Medeiros; Costa, 2022).

O conjunto de regras definido pelas plataformas para produção de renda pelo criador de conteúdo visa, sobretudo, manter ele sempre

conectado (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020), gerando dados e lucros. “A era do digital não é uma era do ócio, mas sim do desempenho” (Han, 2018, p. 21). Essa sobrecarga de jornada transforma a atividade de lazer em trabalho, onde a experiência dos jogos on-line, das conversas e outras atividades feitas na transmissão descaracterizam seu propósito de descanso e diversão, pelo contrário, forçam o *streamer* a executar comportamentos e performances com a intenção de construir e aumentar a sua audiência, para que no final do mês possa receber sua monetização pela plataforma (Dallegrave, 2020).

No caso do *streamer*, ele somente é remunerado pelo seu tempo de produção dentro da plataforma, dependendo também de fatores como o interesse dos espectadores, as propagandas comerciais e os requisitos mínimos fixados pela Twitch (Alves, 2021). O capital lúdico e social exposto pelo criador de conteúdo é mensurado e atribuído pela empresa, sendo influenciado diretamente pelas dinâmicas e algoritmos da mídia (Pase; Dallegrave; Fontoura, 2020). A neutralidade e objetividade das empresas atuam de maneira a incutir a sensação de que o "chefe" é representado por um sistema e não uma pessoa, tratando-se de uma gestão do ideário neoliberal de empreendedorismo, que autoriza as empresas de tecnologia a se apropriarem da força de trabalho gerada pelos criadores que ofertam seus serviços nas plataformas digitais (Pellegrini; Costa, 2022).

É pautado pelas empresas o discurso focado na retórica da liberdade do *streamer* para realizar as atividades que quiser, na hora que escolher e quando bem entender, desde que atenda as regras impostas na plataforma para manutenção e desenvolvimento do trabalho (Alves, 2021). A partir da promessa de um futuro glorioso, onde o indivíduo tem liberdade de trabalhar de acordo com os seus desejos, a ideia de cooperação e da solidariedade entre os *streamers* e as mídias digitais visam esconder a precarização das relações de trabalho e se apoderar dos lucros gerados pelos grandes investidores e corporações, enquanto os criadores colaboram com seu patrimônio e trabalho (Kramer, 2017) e competem com outros empreendedores, disseminando ainda mais a racionalidade neoliberal (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

A *Twitch* afasta qualquer tipo de responsabilização com o trabalhador ao induzir a lógica neoliberal de cidadãos independentes e autônomos a políticas estatais, que não precisam de regulamentações nem realizar o pagamento de impostos para o exercício da profissão (Medeiros; Costa, 2022), fomentando discursos veiculados a ideia de que a inovação e o empreendedorismo somente poderiam existir com a falta das regulações tradicionais (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). O ganho

dessa concepção de “liberdade” na sua forma de produção é a mesma encontrada em ocupações flexíveis fundadas na total submissão do trabalhador ao capital, na ausência de obrigações trabalhistas por parte das empresas e sem quaisquer mediações que se manifestam em outras relações de trabalho, como a luta organizada pelos sindicatos e as intervenções do Estado na criação de legislações para proteger essas novas modalidades de atividade laboral (Alves, 2021).

Tais fatos ocorrem através do surgimento de novas modalidades de contratação e subcontratação [...] acabam aumentando, desmesuradamente, a capacidade empresarial de exercer poder, pressão e controle sobre as trabalhadoras e os trabalhadores em face ao generalizado enfraquecimento da capacidade de resistência e de atuação coletiva e sindical. (Stolz; Souza; Opuszka, 2015, p. 415)

O processo de dissociação de poder e autoridade, que aconteceu no momento de reorganização da força produtiva, possibilitou o retorno das precarizações do trabalho sob a máscara da liberdade (Alves, 2021), o que se verifica nos criadores de conteúdo e outrora se identificou nos motoristas de aplicativo. Há, inclusive, uma similaridade no modo de funcionamento das transmissões providas pelas plataformas e o que alguns autores designam por “uberização do trabalho”, considerando que nas duas situações os trabalhadores são compreendidos pela constituição do sujeito-de-mercado e responsáveis pelos meios de produção (Sousa, 2019). Trata-se de uma forma de divisão do trabalho caracterizada pela descentralização do processo de produção e por uma nova configuração de propriedade dos meios de trabalho, consequência do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, do trabalho flexível e da omissão estatal (Sousa, 2019).

É notável a relação de dependência e precariedade presente nesses modelos que consistem na oferta e demanda por prestação de serviços em razão da subordinação tecnológica e submissão à medição de rendimento das atividades, sendo o vínculo de trabalho apagado pela plataforma que não se identifica como empregadora, apresentando-se como parceira (Pellegrini; Costa, 2022). Para *Twitch*, seguindo a lógica neoliberal, os trabalhadores são criadores de conteúdo, e o site é um espaço projetado para auxiliar no seu desenvolvimento profissional, criar uma comunidade e proporcionar uma renda por meio do entretenimento (Medeiros; Costa, 2022). É adotada a típica estratégia do novo modelo de negócios de

externalização dos riscos e custos da atividade econômica e produtiva realizada na plataforma para multidão de trabalhadores (Silva, 2022).

As dinâmicas contemporâneas de trabalho sustentam-se cada vez mais em relações aparentes de colaboração, rompendo com a noção rígida de hierarquia pautada essencialmente no dueto ordem-punição e na figura do empregador como entidade superior e o empregado como inferior, e, na verdade, demonstrando uma insuficiência no conceito jurídico de subordinação (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020). Mesmo assentados em uma espécie de autogerenciamento subordinado, administrando seu modo de trabalho e assumindo riscos e gastos sem contar com seus direitos, os *streamers* continuam sob o controle e gerenciamento da mídia (Pellegrini; Costa, 2022) e totalmente à mercê das decisões unilaterais da plataforma diante da insuficiência de meios de comunicação com a empresa, vivendo em constante insegurança (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

O uso das mídias digitais de oferta de atividades laborais debilita e sucateia a prestação de serviços ao aplicar algoritmos que refinam e são responsáveis pela sujeição e gestão das avaliações do criador, ao passo que os usuários detêm a prerrogativa de julgar o serviço prestado, impactando diretamente na relação do trabalhador com a plataforma (Pellegrini; Costa, 2022). A mídia digital obtém um retorno econômico a partir da exploração dessa atividade laboral, ao mesmo tempo em que não proporciona garantias mínimas de saúde e segurança para execução da função, tampouco supervisiona as condições de trabalho (Silva, 2022). Com a ampliação da precariedade, as empresas-plataformas colocam-se no mercado de trabalho sem garantir qualquer direito aos trabalhadores (Cardoso; Artur; Oliveira, 2020).

Conforme aponta Medeiros e Costa (2022), a *Twitch* opera em três eixos: primeiramente o método discursivo, onde determinados *streamers* são promovidos ao status de celebridade e, conseqüentemente, reverberaram um ideal de sucesso repousado na meritocracia; em segundo lugar, a fomentação do trabalho precário ao estimular os criadores a produzir exponencialmente mais horas de transmissão; por último, a inexistência de pressões sociais por mudanças em virtude do poder atribuído à plataforma de remunerar os *streamers* e o pensamento neoliberal que leva as pessoas a ser contrárias a regulamentações trabalhistas pelo Estado e afasta as formas de organização sindical. É imposto um regime social de trabalho marcado pelo ritmo intenso das atividades laborais e discursos que qualificam um “bom trabalhador” como aquele que deve estar sempre disponível, e pelo enfraquecimento da capacidade de resistência e de atuação coletiva e sindical (Stolz; Souza; Opuszka, 2015).

A Twitch sempre será referência quanto às transmissões ao vivo, tendo em conta a presença dos criadores mais famosos na plataforma e a grande e crescente circulação de capital em torno dessa atividade; além das regras de remuneração estabelecidas pela empresa, subsidiadas pelos discursos de liberdade e autonomia do trabalho e frustradas quaisquer legislação protetiva ou caracterização da categoria (Medeiros; Costa, 2022), por isso, a necessidade de discutir os aspectos dessas novas relações de trabalho advindas da introdução das tecnologias da informação e comunicação, com o intuito de demandar e fortalecer os direitos dos trabalhadores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da organização das relações de trabalho é possível reconhecer o tempo histórico em que a sociedade está inserida, sendo a era digital caracterizada pelo fenômeno da plataformização, onde as atividades laborais são fundadas na ideia neoliberal da autonomia dos prestadores de serviço e flexibilidade das suas jornadas e ambientes de trabalho, promovendo o discurso do profissional independente, dono do próprio negócio. Assim, as empresas de tecnologia da informação e comunicação apresentam-se como mediadoras entre os trabalhadores e os serviços, estabelecendo as principais condições para o exercício da atividade na mídia enquanto o prestador, com o seu patrimônio e sua força de trabalho, realiza sua função, recebendo via plataforma pela sua produtividade.

A *Twitch* acompanha as plataformas digitais deste momento histórico e gera lucro por meio dos criadores de conteúdo, oferecendo um espaço on-line para práticas de entretenimento como fonte de trabalho e renda, além do sonho de ser famoso e ter sucesso profissional fazendo o que ama. Esta nova modalidade de trabalho estimula o exercício de maiores horas na atividade para gerar mais oportunidades de crescimento da remuneração e atribuiu ao trabalhador a responsabilidade pelos seus meios de produção enquanto empreendedor, eliminando as chances de construção de uma identidade da categoria ou organização por seus direitos.

O *streamer* concorda em ser explorado pela plataforma em troca de um retorno financeiro exercendo um trabalho altamente desejado e com liberdade no seu modo de execução, colocando-se em uma situação de instabilidade econômica, jornada de trabalho excessiva, confusão entre vida pessoal e atividade em razão do mesmo local e sua exposição constante ao público, e necessidade de sempre manter a atenção dos

espectadores, buscando maneiras de inovar e competir com os outros criadores presentes na plataforma. A empresa afasta a existência das relações de trabalho ao se reconhecer apenas como provedora da tecnologia, retirando de si obrigações trabalhistas a respeito, consequência da plataformização do trabalho que debilita e torna flexível o labor de forma unilateral.

Na sociedade contemporânea, as relações de trabalho são marcadas pelo enfraquecimento das condições salariais, a desestabilização das prestações de serviços e a precariedade do trabalho. O criador de conteúdo precisa superar a euforia e promessas oferecidas pelas novas tecnologias e enxergar os abusos ditados pela plataforma e, conseqüentemente, reivindicar por seus direitos, seja a exigência de uma regulamentação assegurando condições mínimas de trabalho, como saúde mental e segurança financeira, ou por meio de associações sindicais, entre outras mobilizações na luta de garantias trabalhistas.

REFERÊNCIAS

ALVES, V. H. A. A nova fase da precarização do trabalho: o *streamer* como uma nova ocupação na era da informação. 2021. **Dissertação** (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2021. Disponível em: <http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/16604>. Acesso em: 31 de out. 2023.

CARDOSO, A. C. M.; ARTUR, K.; OLIVEIRA, M. C. S. O trabalho nas plataformas digitais: narrativas contrapostas de autonomia, subordinação, liberdade e dependência. **Revista Valore**, Volta Redonda, v. 5 (edição especial), p. 206-230, 2020. Disponível em: <https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/657/458>. Acesso em: 31 de out. 2023.

DALLEGRAVE, L. **Streaming de jogos como sistema de performances**: um olhar sobre a transmissão ao vivo de uma *streamer* de fortnite através da Twitch. 2020. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020. 191 p. Disponível em: <http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/9190>. Acesso em: 31 out. 2023.

HAN, B. C. **Sociedade da transparência**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2017. Edição digital.

HAN, B. C. **No exame**: perspectivas do digital. Petrópolis, RJ: Vozes, 2018.

KRAMER, J. C. A economia compartilhada e a uberização do trabalho: utopias do nosso tempo? 2017. **Dissertação** (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 128 p. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/47786>. Acesso em: 31 de out. 2023.

MEDEIROS, K. A. C.; COSTA, C. T. O. P. A estrutura discursiva da Twitch para capitalização imaterial na indústria de games. *In*: TRILHA DE INDÚSTRIA – ARTIGOS COMPLETOS - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL (SBGAMES), 21. , 2022, Natal/RN. **Anais** [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022 . p. 1147-1156. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbgames_estendido/article/view/23759/23588. Acesso em: 31 de out. 2023.

MONTARGIL, G. S. **Loopando e barbarizando com streamers queers**: precarização do trabalho, audiovisualidade tecnogendrada e hackeamentos do corpo-mídia. Orientador: Fabricio Lopes da Silveira. 2023. **Dissertação** (Mestrado em Comunicação) – Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2023. 172 p. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/254670>. Acesso em: 31 de out. 2023.

PELLEGRINI, C. M. C.; COSTA, A. P. M. Trabalho, emprego e renda na era da plataforma digital: o caso dos trabalhos de cuidado. **Liinc em Revista**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 1-15, nov. 2022. Disponível em: <https://revista.ibict.br/liinc/article/view/6011/5700>. Acesso em: 31 de out. 2023.

PASE, A. F.; DALLEGRAVE, L.; FONTOURA, M. G. Capital Lúdico: um reflexo da tecnocultura algorítmica em performances na plataforma de streaming Twitch. **Revista Fronteiras – estudos midiáticos**, São Leopoldo, v. 22, n. 3, p. 2-15, set./dez. 2020. Disponível em: <https://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/fem.2020.223.01/60748126>. Acesso em: 31 de out. 2023.

SILVA, C. G.; TRONCOSO, A. C. Da diversão à profissão: a legitimação do e-sport como modalidade esportiva em pauta. **Revista Tecnologia e Sociedade**, Curitiba, v. 19, n. 55, p. 210-231, 2023. Disponível em: <https://revistas.utfpr.edu.br/rts/article/view/13599/9254>. Acesso em: 31 out. 2023.

SILVA, J. G. Criação de conteúdo em plataformas digitais: os/as *streamers* da Twitch. **Revista Ciências do Trabalho**, n. 21, p. 1-4, 2022. Disponível em: <https://rct.dieese.org.br/index.php/rct/article/view/297/pdf>. Acesso em: 31 de out. 2023.

SOUSA, I. R. L. **Sujeito em jogo**: o funcionamento do discurso sobre o jogo no Twitch. 2019. Tese (Doutorado em Ciências da Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2019. 230 p. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/3363>. Acesso em: 31 de out. 2023.

STOLZ, S; SOUZA, D. G; OPUSZKA, P. R. Os direitos sociais fundamentais à saúde e ao meio ambiente de trabalho equilibrado: o direito do trabalho frente aos desafios do século XXI. **Revista Jurídica Unicuritiba**, Curitiba, v. 4, n. 41, p. 421-456, 2015. Disponível em: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/1468/1001>. Acesso em: 31 de out. 2023.

ZUBOFF, S. **A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira de poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.

A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA NA LUTA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES

THE APPLICATION OF TECHNOLOGY IN THE FIGHT AGAINST DOMESTIC AND FAMILY VIOLENCE AGAINST WOMEN

Luíse Pereira Herzog²⁹
Yanka dos Santos Pinto³⁰

Resumo

As mulheres sofrem com condutas abusivas e agressivas no próprio núcleo familiar, sendo impedidas de pedir ajudar para sair desta situação de vulnerabilidade, com o avanço tecnológico, surgiram novas formas de proteção destas mulheres que se enfrentam em violência doméstica e familiar. Este artigo observou os índices de violência contra as mulheres nos últimos anos, especialmente com a introdução das novas tecnologias na sociedade, bem como investigou o uso das ferramentas digitais no enfrentamento da violência doméstica e familiar. O método utilizado foi hipotético-dedutivo a partir da pesquisa documental e de natureza qualitativa. Discutiram-se os aspectos da violência doméstica e familiar na sociedade e a realidade social das mulheres no Brasil, bem como as ferramentas disponibilizadas pelo Estado. Além disso, foi abordada importância do uso das tecnologias de apoio pelo setor público no enfrentamento da violência contra as mulheres. Concluiu-se que, para o desenvolvimento de uma sociedade mais segura para as mulheres, são necessárias políticas públicas voltadas para uso de tecnologia de apoio no combate à violência doméstica e familiar.

²⁹ Mestranda em Direito e Justiça Social, pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). CV Lattes: <https://lattes.cnpq.br/6258182220720795>. Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos (NUPEDH/FURG) e do Grupo de Pesquisa do CNPq: DIREITO, GÊNERO E IDENTIDADES PLURAIS (DGIPLUS/FURG). Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0001-7680-4046>. E-mail: luisepherzog@gmail.com.

³⁰ Mestranda em Direito e Justiça Social, pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Graduada em Direito pela Universidade do Rio Grande (FURG). CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4563558746459917>. Orcid ID: <https://orcid.org/0009-0001-8537-8808>. E-mail: yanka.pinto@acad.pucrs.br.

Palavras-chave: Violência Doméstica e Familiar; Tecnologia; Políticas Públicas.

Abstract

Women suffer from abusive and aggressive behavior with in their own family nucleus, often being prevented from seeking help to escape this situation of vulnerability. With technological advances, new forms of protection have emerged for women facing domestic and family violence. This article examined the rates of violence against women in recent years, especially with the introduction of new technologies in society. It also investigated the use of digital tools in addressing domestic and family violence. The method used was hypothetical-deductive based on documentary research and of a qualitative nature. The article discussed aspects of domestic and family violence in society and the social reality of women in Brazil, as well as the tools made available by the State. Furthermore, the importance of using support technologies by the public sector in addressing violence against women was addressed. It was concluded that, for the development of a safer society for women, public policies focused on the use of support technology in combating domestic and family violence are necessary

Keywords: Domestic and Family Violence; Technology; Publicpolicy.

1 INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher no Brasil vem aumentando a cada ano, o estupro e o feminicídio foram crimes que tiveram um crescimento significativo de acordo com os registros de ocorrências do ano de 2022. O que está sendo destaque nas mídias de informação e comunicação em razão desse alto nível de incidência de agressões as mulheres. Mecanismos para o enfrentamento da violência contra mulheres são pesquisados e apresentados ao ordenamento constantemente em prol de uma vida segura, bem como são realizadas ações que possam propor uma garantia àquelas que sofrem ou sofreram um tipo de situação abusiva.

A abordagem deste artigo foi efetuada por meio de pesquisa documental, com análise conteudista, por meio de leituras de artigos científicos, legislações e dados secundários originários de fontes jurídicas tradicionais. A pesquisa tem natureza qualitativa, procurando observar índices de violência contra as mulheres nos últimos anos, principalmente com a introdução das novas tecnologias na sociedade e de que forma estas ferramentas digitais podem auxiliar no enfrentamento da violência doméstica e familiar; bem como se aplicou o método de abordagem

hipotético-dedutivo, a partir do estabelecimento de um problema, neste caso, o uso das novas tecnologias no combate aos abusos e agressões sofridas pelas mulheres no núcleo doméstico e familiar, e a formulação de uma hipótese para expressar as consequências derivadas do problema, os novos canais de comunicação e informação on-line são fundamentais na era digital em razão da sua instantaneidade, extraterritorialidade e caráter democrático, no entanto, com a presença de desigualdades socioeconômicas no Brasil e a ausência de uma inclusão digital efetiva, são insuficientes, demandando a proposição de políticas públicas de apoio pelo Poder Público.

Desta forma, objetiva-se o trabalho na primeira seção conceitualizar a violência doméstica e familiar, por ser um grande problema social, causando impacto não apenas as vítimas, mas também a sua família e a sociedade, além de ocasionar dificuldades na trajetória pessoal das vítimas deste tipo de violência. Na segunda seção, realiza-se uma análise das tecnologias enquanto instrumento auxiliar no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, expandindo os espaços de atuação do Poder Público e proteção dos direitos humanos. Ao final, são feitas reflexões sobre as medidas necessárias para efetividade dos novos mecanismos tecnológicos no enfrentamento dos abusos e agressões às mulheres.

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES

A violência doméstica contra as mulheres possui raízes pelas estruturas patriarcais de dominação e opressão presente na sociedade, estabelecendo relações hierárquicas de poder e de subjugação, onde há uma falsa ideia de superioridade do homem, que legitima a sua agressividade, e uma expectativa de obediência da mulher (Mulinari; Rosa; Alampe, 2021). Portanto, a violência contra mulher é um fenômeno estrutural da sociedade determinado pela desigualdade de gênero, que opera produzindo vulnerabilidades na vida das mulheres.

A violência doméstica contra a mulher é sistêmica e repetitiva (Knoblauch, 2020), fortalecendo-se do medo de sofrer retaliações e romper vínculos familiares e da insegurança quanto à atuação do Poder Público. Segundo Mulinari, Rosa e Alampe (2021), a dificuldade em denunciar o abuso consiste em dois aspectos: os estigmas sociais impostos às mulheres vítimas de violência doméstica, apresentando como principais sintomas o medo e a vergonha; e as desconfiças no tocante

ao desempenho das instituições e à efetividade da punição aplicada ao agressor, implicando em uma segurança e estabilidade à mulher.

Nesse sentido, destaca-se a concepção e processamento do ciclo da violência, dividindo-se em três etapas: a primeira sendo intitulada como ato de tensão, quando há desentendimentos, raiva e xingamento entre o casal; a segunda fase é o ato de violência, quando o agressor perde o controle e materializa a primeira fase com agressões; e por fim, na terceira fase há o ato de arrependimento em que o indivíduo pede desculpas e volta a agir “normalmente”. A violência contra as mulheres gera graves e sérias consequências, não apenas individuais como sociais, atingindo diretamente o seu desenvolvimento social, envolvendo o exercício da cidadania e violando os direitos humanos dessas vítimas.

A violência doméstica e familiar é prevista na Lei 11.340 promulgada no dia 07 de agosto de 2006, podendo ser manifestada em diversas formas, como física (por meio de socos, chutes, tapas, puxões), psicológica (com xingamentos, humilhações, chantagens e isolamento da mulher), sexual (estupro, forçar aborto), patrimonial (destruir ou danificar objetos pessoais da mulher, retenção de documentos) e moral (falar mal diante de outras pessoas, caluniar e difamar) (Brasil, 2006). Esta violência ocorre com membros com vínculos, que estão, muitas vezes, no mesmo espaço doméstico e/ou ambiente familiar e não tem mais uma relação de afeto com o agressor.

Desta forma, observa-se que no Brasil, a taxa anual de feminicídio é 74% maior do que a média mundial, ocupando uma posição alta no ranking global de violência doméstica, além do fato de que 536 mulheres são agredidas a cada hora (UNODC, 2018). Durante a pandemia do COVID-19 a situação foi agravada em razão do isolamento social, ao aumentar o convívio nos lares e, conseqüentemente, as possibilidades de tensões e estresses nos núcleos familiares (Fornari *et al.*, 2021), ampliando o contato da vítima com o seu agressor (Mulinari; Rosa; Alampe, 2021).

Among the measures taken to prevent the COVID-19 pandemic from spreading, social isolation was the main recommendation. Thus, there was guidance for the population to remain restricted to the domestic space, usually a privileged setting for various problems, including violence against women (Fornari *et al.*, p. 3, 2021).

Houve um crescimento de 431% em relatos de brigas de casal por vizinhos em redes sociais entre fevereiro e abril de 2020, enquanto os casos de feminicídio aumentaram 22,2% de março para abril em 12 Estados brasileiros, confirmando a intensificação da violência doméstica e familiar no período de quarentena (Vieira *et al.*, 2021). O isolamento social e o incremento da convivência nas residências não eclodiram apenas as chances de situações de violência, como também impôs obstáculos às denúncias devido à impossibilidade de registrar Boletim de Ocorrência presencialmente, à redução do contato social e aos entraves em encontrar formas alternativas de proteção (Mulinari; Rosa; Alampe, 2021).

O ano de 2020 teve-se subnotificação com os dados de ocorrências de violência doméstica e familiar, um dos principais fatores é que a rede de saúde estava voltada diretamente para o COVID-19, propondo o isolamento social para que as pessoas permanecessem no seu ambiente doméstico, estando constantemente na presença dos seus agressores (Fernandes, 2020). Mesmo após a pandemia e o isolamento social, no primeiro semestre do ano de 2023, houve um grande aumento de feminicídio no Brasil em comparação aos anos anteriores, enquanto os índices de crime contra a vida caíram neste mesmo período, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o NEC-USP, isto é, ainda que o país esteja tendo êxito com a redução da violência letal, a mortalidade das mulheres está crescendo (Pinhoni; Velasco; Gallo, 2023).

Percebe-se que as medidas implantadas pelo Estado para garantir a seguridade da mulher não estão sendo eficientes na diminuição do índice de ocorrências de violências cometidas contra as mulheres. Embora se tenha legislação adequada para este tipo específico de crime, as previsões legais não conseguem compreender a realidade social das mulheres. Os dados das estatísticas indicam que ainda existem dificuldades para enfrentar os abusos e agressões contra as mulheres, em razão disso, a necessidade de haver políticas públicas e aparatos estatais na promoção de ações direcionadas para o corpo feminino.

Por exemplo, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (2022), a fim de auxiliar as vítimas realizou uma página específica para tratar sobre a violência doméstica e de gênero contra as mulheres, o qual funciona 24 horas por dia, a finalidade do espaço é auxiliar as vítimas a encerrem o ciclo de violência, buscando facilitar o acesso para aquelas com maiores dificuldades de irem a delegacias para prestar a denúncia. Urgente a proposição de medidas para garantir a proteção das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar pelo Poder Público.

3 TECNOLOGIA COMO AUXÍLIO PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

A tecnologia evoluiu exponencialmente nos últimos anos, se tornando um produto de auxílio no desenvolvimento e modernização da sociedade, oferecendo ferramentas digitais para a desconstrução de obstáculos impostos pela realidade social. Os dispositivos tecnológicos podem ser aplicados em diversos setores da coletividade, não sendo destinados apenas ao entretenimento. Ações emergenciais de combate à violência doméstica e defesa das mulheres foram desenvolvidas a partir do uso das novas tecnologias, disponibilizando canais on-line para reportar as agressões sofridas em ambientes familiares e requisitar medidas protetivas, bem como prover informações sobre os casos de violência doméstica (Fornari *et al.*, 2021).

Em 2020, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Câmara dos Deputados, aprovou o Projeto de Lei n. 2.688/20, que altera a Lei Maria da Penha, a fim de prever o atendimento virtual à mulher vítima de violência doméstica e familiar. O Projeto estabelecia que, durante o período de calamidade pública ou emergência, o recebimento, processamento e encaminhamento de denúncias de vítimas de violência doméstica e familiar aos órgãos competentes poderiam ser realizados por meio de plataforma digital inserida na Rede Mundial de Computadores, e o acesso às medidas protetivas também poderia ser executado mediante solicitação virtual.

De acordo com Relatório da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (2022), encontrou-se apensado o Projeto de Lei nº 3.034/20, que destaca a necessidade de um sistema digital para registro de ocorrências e realização de denúncias especificamente para os casos de violência doméstica, e o Projeto de Lei nº 24/22, que também caminha no mesmo sentido de uma plataforma virtual para facilitar a concessão de medidas protetivas e garantir a segurança das vítimas.

Ao final, o Relatório apresentou uma proposta de Substitutivo (SBT-A n. 1) para realocar os dispositivos e aproveitar o conteúdo das proposições, compreendendo que o artigo dispendo sobre a realização do atendimento integral e inicial à ofendida pela Internet estaria localizado no art. 10-A da Lei Maria da Penha, que trata do direito da mulher ao atendimento policial especializado, e o dispositivo que diz respeito à solicitação, encaminhamento e autorização de medidas protetivas de urgência seria colocado juntamente ao art. 21-A, que também aborda esse tema (Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 2022). Além disso, foi retido o texto que concedia de forma automática a medida protetiva

ante a garantia mínima constitucional que o direito de uma pessoa seja restrito sem a manifestação de uma autoridade competente, mesmo diante das denúncias de violência doméstica (Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 2022).

Art. 10-A.

§ 3º O direito ao atendimento policial especializado, de que trata o caput, incluindo a realização de denúncia ou registro de ocorrência policial, deve ser exercido de forma presencial nas delegacias de polícia ou virtual pela Rede Mundial de Computadores, sendo obrigatória a oferta de solução tecnológica que viabilize o atendimento integral da vítima nas modalidades virtual.

Art. 21-A. As medidas protetivas de urgência, de que trata esta Lei, deverão ser solicitadas pela ofendida ou pelo Ministério Público, encaminhadas ao juiz e autorizadas na modalidade virtual pela Rede Mundial de Computadores. (Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sem página, 2022)

Embora o Substitutivo (SBT-A n. 1) tenha sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), em junho de 2023 foi apresentado Requerimento (nº 1907/2023) postulando a declaração de prejudicialidade das proposições relativas à COVID-19, aguardando manifestação do plenário. O ápice da pandemia passou, no entanto, seus efeitos e implicações permanecem na sociedade, há uma nova estrutura social marcada pela presença de sistemas de redes interligadas, onde os meios de comunicação falam cada vez mais uma língua digital em prol de uma integração global (Castells, 2010).

O mundo hiperconectado apresenta um grande leque de plataformas digitais de comunicação que podem ser amplamente acessadas por meio de aparelhos eletrônicos como celular, smartphones, tablet, computador e de conexão à internet (Knoblauch, 2020), organizando novas formas de interação, controle e transformação social (Castells, 2010). A tecnologia está atrelada a vida da maioria das pessoas, tornando-se uma ferramenta capaz de propiciar maior comodidade à sociedade (Knoblauch) ao permitir a aplicação de políticas públicas de suporte à realização de serviços comunicativos e informativos entre o Estado e os cidadãos (Alves; Silva, 2023).

Na época do isolamento domiciliar devido à situação de calamidade pública provocada pela pandemia, as novas tecnologias figuraram como aliadas estratégicas do Poder Público, visando amplo alcance e celeridade a todo tipo de ação (Knoblauch, 2020). A internet e as mídias digitais ganham lugar nos espaços públicos e políticos para interação e aproximação do governo e os cidadãos (Alves; Silva, 2023), por exemplo, a utilização dos meios virtuais para auxiliar no acesso à delegacia ou posto de atendimento com a finalidade de reportar situações de violência (Knoblauch, 2020).

Na França, as vítimas de violência doméstica e familiar podem fazer a denúncia pela internet por meio de um chat conectado diretamente com policiais, e, em ocasião de perigo, o sistema possui um botão que fecha a página e apaga as mensagens trocadas nas conversas (Vieira *et al.*, 2021). No Brasil, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) desenvolveu a Central Especializada em Atendimento às Vítimas de Crimes e de Violência Doméstica e Familiar (CEAV), que funciona como canal especializado para o recebimento de solicitações de medidas protetivas de urgência por meio do Balcão Virtual; além de efetuar atendimento via WhatsApp, e-mail, telefone e de forma presencial para orientar e encaminhar mulheres que sofrerem violência doméstica e seus familiares para uma rede de serviços públicos, como assistência social, saúde mental e assistência jurídica (TJSC, 2023).

A Central possui parcerias institucionais, como o Núcleo Especial de Atendimento a Vítimas de Crimes (NEAVIT); o Ministério Público de Santa Catarina; a entidade acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, Casa das Anas; e os acordos com as universidades públicas e privadas para o atendimento gratuito de serviços jurídico, médico, psicológico e de assistência social (TJSC, 2023). Em Goiânia/GO, em 2015, aproximadamente quatro meses após a criação da Patrulha Maria da Penha, foi criado o WhatsApp do Disque Denúncia para receber chamadas em relação ao descumprimento das medidas protetivas e avisar sobre situações de violência doméstica contra a mulher (Alves; Silva, 2023).

Em razão dos diversos atendimentos realizados via WhatsApp conferindo informação às vítimas, somente são considerados produtivos e submetidos ao acompanhamento do serviço e à avaliação formal no sistema de segurança pública aqueles que geram um atendimento presencial, logo, os dados prestados pela Patrulha Maria da Penha apenas são mensurados e analisados quando originam ocorrências (Alves). O contato com as assistidas é feito por uma policial feminina, proporcionando um suporte comunicacional mais humanizado e

personalizado, que aproximou as vítimas de violência doméstica à Patrulha Maria da Penha e criou um espaço público mais aberto para denúncias e acesso à informação sobre o tema (Alves; Silva, 2023).

Com base nos atendimentos observados, vê-se que as assistidas/vítimas encararam o WhatsApp como um ambiente mais “informal” para realizar as denúncias de violência e de descumprimento de MPU do que via chamada 190 ou presencialmente. Por terem um atendimento mais personalizado na plataforma on-line, as mulheres atendidas se sentiram mais à vontade para tirar dúvidas com as policiais e ter mais informações que permeiam a violência doméstica e os assuntos de toda a rede de enfrentamento (Alves; Silva, p. 162, 2023).

Em contrapartida, observou-se que não houve uma padronização das respostas nem uma solução imediata para determinados casos, comprometendo as diretrizes da política pública instituída (Alves; Silva, 2023). Ainda, as agentes relataram que muitas assistidas não tinham internet móvel no aparelho celular e somente respondiam as mensagens e ligações quando possuíam acesso de sinal Wi-fi em casa ou outro lugar horas, até dias, depois, dificultando a comunicação (Alves; Silva, 2023). Estudos apontam que a nível mundial 433 milhões de mulheres não têm conexão à internet, ao passo que em países de médio e baixo desenvolvimento 10% delas são menos prováveis de ter um telefone que os homens e 23% de usar internet (Fornari *et al.*, 2021).

O acesso à internet mostra-se uma barreira aos meios virtuais de registro de Boletim de Ocorrência e de apoio e proteção de instituições policiais, jurídicas e sociais, principalmente nas famílias de baixa renda, que sofrem com a desigualdade socioeconômica e exclusão digital (Mulinari; Rosa; Alamepe, 2021). Mesmo que as tecnologias da informação e comunicação estejam globalmente em ascensão, persiste um obstáculo maior à acessibilidade dos meios digitais por mulheres do que por homens, especialmente daquelas economicamente vulneráveis, existindo a necessidade de que as estratégias de combate à violência doméstica e familiar não sejam restritas a uma única modalidade, assegurando acolhimento de formas alternativas sem a exposição da vítima (Fornari *et al.*, 2021).

Os atendimentos on-line não trouxeram consigo políticas públicas que expandissem propriamente todos os atos necessários para que as mulheres sentissem seguras ou tivessem informações suficientes para

fazer a denúncia (Mulinari; Rosa; Alampe, 2021), tampouco garantiram condições adequadas de inclusão digital. O acolhimento das mulheres que enfrentam situações de abuso em seus lares deve ser integral, levando em conta aspectos sociais, culturais, econômicos e subjetivos, priorizando os cuidados com as vítimas mais do que a mera disponibilização de plataformas digitais. O foco das ações do Poder Público não pode se limitar à forma dos canais de denúncia e informação, é preciso um olhar para políticas públicas de serviços de assistência social e jurídica a mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A Central Especializada em Atendimento às Vítimas de Crimes e de Violência Doméstica e Familiar (CEAV) identificou três categorias, que não se excluem, inclusive são direitos somados, que devem ser preenchidas quando do estabelecimento de atendimentos virtuais direcionados às vítimas de violência doméstica e familiar: a dimensão tecnológica e cidadão, que possibilita a plena comunicação, informação e o exercício da cidadania; a dimensão da igualdade, onde é assegurada a assistência social, atendendo aos pedidos de doação de cesta básica, por exemplo, e jurídica por meio da Defensoria Pública; a dimensão da liberdade, protegendo o direito à vida, liberdade, segurança e propriedade das vítimas, como o uso do canal digital para avisar do descumprimento da medida protetiva de urgência (Alves; Silva, 2023).

Nota-se que a violência doméstica atua como um obstáculo à defesa e exercício de inúmeros direitos e garantias fundamentais, cabendo ao Estado encontrar maneiras efetivas de proteger as mulheres vítimas de estruturas sociais (Mulinari; Rosa; Alampe, 2021) e se adaptar a inovação tecnológica e a transformação organizacional para garantir a velocidade e eficiência da reestruturação da sociedade (Castells, 2010), considerando a falência do sistema criminal na redução da desigualdade de gênero e da gênese da criminalidade (Knoblauch, 2020). Mesmo que parte da população que não tenha acesso à internet e às mídias digitais, bem como conhecimento insuficiente sobre a utilização da ferramenta on-line, a introdução de meios virtuais para realização de denúncias e registro de ocorrências é essencial para as vítimas que se encontram em circunstâncias de isolamento social, têm todo o seu deslocamento monitorado ou são impedidas de saírem de casa sem a presença do agressor (Alves; Silva, 2023). É uma medida especial que deve alcançar a todas as mulheres a partir do desenvolvimento de políticas públicas socioeconômicas e digitais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que a violência doméstica e familiar contra a mulher é questão pública e não individual, cabendo ao Estado garantir as mulheres, vítimas de violência, medidas cabíveis para o combate deste tipo de violência. O auxílio da tecnologia para o enfrentamento da violência doméstica e familiar de forma preventiva e repressiva trará maior segurança para a sociedade, principalmente para essas vítimas.

Nesse sentido, o uso de ferramentas digitais na segurança pública em relação aos recursos na assistência ao combate da violência contra as mulheres é de fundamental importância, pois amplia a atuação dos agentes públicos quanto aos casos e atendimentos específicos de abuso e agressões às mulheres, assegurando maneiras instantâneas, extraterritoriais e democráticas do Estado garantir a efetiva proteção das vítimas.

Acredita-se que as iniciativas de digitalização do sistema de realização de denúncias devem ser introduzidas em todo o país com a finalidade de produzir o mapeamento, de melhor forma, da violência contra as mulheres, aperfeiçoando de modo eficaz a utilização da Lei 11.340/2006. A utilização do aplicativo WhatsApp, por exemplo, por ser um espaço mais amplo para que se possa realizar denúncias, sanar dúvidas e divulgar informações sobre o combate da violência doméstica e familiar contra as mulheres, ainda, por ser um ambiente menos formal, as assistidas sentem-se mais à vontade para relatar o ocorrido, sendo um canal que aprimorou o atendimento às mulheres e possibilitou a garantia dos direitos humanos violados das vítimas.

É dever de o Estado encontrar maneiras efetivas de proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar, adaptando ferramentas tecnológicas no setor da segurança social e desenvolvendo políticas públicas de inclusão digital relacionadas às mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

REFERENCIAS

ALVES, R. D. R.; SILVA, M. L. M. Tecnologias da informação e comunicação na garantia de direitos das mulheres em situação de violência doméstica. **Revista Brasileira de Segurança Pública**, v. 17, n. 1, p. 146–165, 2023. Disponível em: <https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/1486>. Acesso em: 14 nov. 2023.

BRASIL. **Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.** Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2006]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm. Acesso em: 10 nov. 2023.

CASTELLS, M. **A Sociedade em Rede.** São Paulo: Paz e Terra, 2010.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER. Câmara dos Deputados. **Relatório.** Brasília, 2022.

FERNANDES, N. Sem lugar seguro: quarentena expõe crise de violência doméstica no país. **R7**, 01 abr. 2020. Disponível em: <https://noticias.r7.com/saude/coronavirus/sem-lugar-seguro-quarentena-expoe-crise-de-violencia-domestica-no-pais-02072023>. Acesso em: 12 nov. 2023.

FORNARI, L. F.; LOURENÇO, R. G.; OLIVEIRA, R. N. G.; SANTOS, D. L. A.; MENEGATTI, M. S.; FONSECA, R. M. G. S. Domestic violence against women amidst the pandemic: coping strategies disseminated by digital media. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, n. 1, e20200631, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/gVWKQ6LYc6hffHxknL7QD3p/?lang=en>. Acesso em: 14 nov. 2023.

KNOBLAUCH, F. D. C. A utilização da tecnologia na luta contra a violência doméstica no confinamento domiciliar. **Revista de Gênero, Sexualidade e Direito**, v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistagsd/article/view/7056/pdf>. Acesso em: 14 nov. 2023.

MULINARI, R. R.; ROSA, V. C.; ALAMPE, L. P. Impactos da pandemia: as medidas legislativas e políticas públicas adotadas pelo Brasil no combate à violência doméstica. **SCIAS: Direitos Humanos e Educação**, v. 4, n. 1, p. 85–106, 2021. Disponível em:

<https://revista.uemg.br/index.php/sciasdireitoshumanoseducao/article/view/5523>. Acesso em: 14 nov. 2023.

PINHONI, M.; VELASCO, C.; GALLO, R. Monitor da violência: assassinatos caem 3,4% no primeiro semestre de 2023 no Brasil. **G1**, Rio de Janeiro, 17 ago. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/monitorda-violencia/noticia/2023/08/17/monitor-da-violencia-assassinatos-caem-34percent-no-primeiro-semester-de-2023-no-brasil.ght>. Acesso em: 14 nov. 2023.

TJSC. Central TJSC de Atendimento às Vítimas registra suspeita de tráfico humano na capital. **Portal CNJ**, Brasília, DF, 28 de fev. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/web/imprensa/-/central-de-atendimento-as-vitimas-do-tjsc-registra-caso-de-trafico-humano-na-capital?redirect=%2F>. Acesso em: 31 jul. 2023.

UNODC. United Nations Office on Drugs and Crime. Global study on homicide: Gender-related killing of women and girls. **UNODC Research**, 2018. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf. Acesso em: 14 nov. 2023.

VIEIRA, M. B. W.; FEITOSA, F. E. A.; PINHEIRO, D. F.; SILVA, L. G.; ALCANTARA, P. P. T. Novas formas de denunciar casos de violência doméstica durante a quarentena propiciada pelo COVID-19. **HOLOS**, v. 3, p. 1–11, 2021. DOI: 10.15628/holos.2021.11759. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/11759>. Acesso em: 14 nov. 2023.

BREVES OLHARES SOBRE A JUSTIÇA REPRODUTIVA COMO FUNDAMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES³¹

BRIEF LOOKS AT REPRODUCTIVE JUSTICE AS THE FOUNDATION OF WOMEN'S HUMAN RIGHTS

Júlia Silva Gonçalves³²

Fabiane Simioni³³

Caroline Ledesma Al-Alam³⁴

Resumo

Os direitos sexuais e os direitos reprodutivos (DS e DR) foram, e seguem sendo negligenciados porque são desconsiderados como reivindicações legítimas e urgentes para a vida das mulheres, especialmente daquelas mais pobres e racializadas do Sul Global. A par da arquitetura protetiva internacional e doméstica dessa categoria de direitos, tem-se observado a sua complexificação a partir do conceito de Justiça Reprodutiva por ativistas e acadêmicas do campo dos feminismos negros. Trata-se da ideia de que é preciso alargar as formas de reconhecimento do exercício dos DS e DR para além da sua dimensão individual. A Justiça

³¹ Texto originalmente publicado nos anais do XIX Congresso Internacional de Direitos Humanos: Direitos Humanos, Conflitos e Paz em 2022, com algumas atualizações para este volume. Disponível em: <https://cidh2022.wordpress.com/>.

³² Mestranda em Direito e Justiça Social no Programa de Pós-graduação em Direito e Justiça Social (PPGDJS/FaDir/FURG/RS). Estudante internacional especial na Universidade de Ottawa (UOttawa), em Feminist and Gender Studies (Feeling Feminist Politics). Especialista em Direito de Família e Sucessões pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP). Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Advogada. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7718602544425229>. E-mail: juliasilvagoncalves15@gmail.com.

³³ Doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora de graduação (Relações Internacionais e Direito) e do Mestrado em Direito e Justiça Social da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Co-líder do grupo de pesquisa Interseccionalidades e Decolonialidade nas Relações Internacionais (INDERI/FURG/CNPq). CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8522130600238633>. E-mail: fabe.simioni@gmail.com.

³⁴ Mestranda em Direito e Justiça Social no Programa de Pós-graduação em Direito e Justiça Social (PPGDJS/FaDir/FURG/RS). Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Advogada. CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7765004676363147>. E-mail: carol.alam@hotmail.com.

Reprodutiva também diz respeito aos aspectos estruturais, de direitos sociais e econômicos em aliança com os DS e DR. Diante disso, o presente artigo parte de uma análise da base epistemológica feminista crítica passando pela abordagem interseccional e decolonial das desigualdades. Nesse contexto busca-se compreender o conceito de violência obstétrica e quais as suas principais formas de expressão e como esse tipo de abuso afeta a justiça reprodutiva e os direitos humanos das mulheres.

Palavras-chave: Epistemologias Feministas. Justiça Reprodutiva. Interseccionalidade. Gênero.

Abstract

Sexual rights and reproductive rights (SR and RR) have been, and continue to be, neglected because they are disregarded as legitimate and urgent claims for the lives of women, especially those poorer and racialized in the Global South. Alongside the international and domestic protective architecture of this category of rights, it has been observed its complexity from the concept of Reproductive Justice by activists and academics in the field of black feminisms. This is the idea that I need to expand the ways of recognizing the exercise of SR and RR beyond their individual dimension. Reproductive Justice also concerns structural aspects, social and economic rights in alliance with SR and RR. Therefore, this article starts from an analysis of the critical feminist epistemological basis through the intersectional and decolonial approach to inequalities. In this context, we seek to understand the concept of obstetric violence and its main forms of expression and how this type of abuse affects reproductive justice and women's human rights.

Keywords: Feminist Epistemologies. Reproductive Justice. Intersectionality. Gender.

1 INTRODUÇÃO

A sexualidade é campo fundamental para constituir a mulher-sujeito perpassando a sua independência na sociedade. No Brasil, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, apesar de serem uma questão de saúde pública e de absoluta relevância, ainda são negligenciados.

É latente a falta de políticas públicas eficazes voltadas à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, impedindo a realização da Justiça Reprodutiva. O debate sobre o tema é de suma relevância para a saúde pública ao mesmo tempo em que apresenta alguns desafios, considerando

que atravessa pontos que causam controvérsia, como a necessidade de um Estado laico e de políticas de planejamento familiar.

Até hoje no Brasil não existe uma compreensão do que seria Justiça Reprodutiva e sua relação intrínseca com os Direitos Humanos das mulheres. Dentro desse contexto, o estudo da mortalidade materna apresenta especial relevância dentro do âmbito internacional, encontrando-se presente na Agenda 2030 da ONU como ponto ao qual deve ser dispendida uma análise profunda. A redução da mortalidade materna assim como o acesso à saúde sexual e reprodutiva encontram-se dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 5 da Agenda 2030 promovida pela ONU, dada a sua relevância.

Dessa forma, entende-se que a construção social da sexualidade reproduz as desigualdades e discriminações vigentes, sendo um espelho de diversas mazelas da nossa sociedade, justificando-se a relevância do presente estudo, tendo em vista importância do corpo como espaço de relação, de construção individual e da busca por autonomia e justiça.

É no contexto atual da sociedade brasileira, na qual as desigualdades sociais e de gênero são latentes que se discute o conceito de Justiça Reprodutiva e os seus desdobramentos sociais para as mulheres como grupo heterogêneo. O direito à autonomia reprodutiva sempre esteve no centro da luta pelos direitos humanos das mulheres, contudo, até os dias de hoje, diversos são os problemas existentes nesse panorama. Atualmente, não existe um planejamento familiar que coloque a mulher no centro das decisões, e não apenas como agente passivo sobre quem essas decisões são tomadas.

Assim, o exercício da autonomia reprodutiva sobre o próprio corpo encontra diversos obstáculos, principalmente quando essa mulher já se encontra gestante. Quais são esses obstáculos enfrentados pelas mulheres que impedem o exercício de uma gestação segura e desejada? No momento do parto, qual é o tratamento dispensado pelo sistema de saúde às mulheres e de que forma as variáveis de raça e classe influenciam nisso? A Justiça Reprodutiva fundamenta os Direitos Humanos das Mulheres no Brasil?

Dessa forma, presente artigo enquadra-se na defesa dos direitos humanos das mulheres, os quais incluem o controle e a tomada de decisão livre e responsável sobre questões relacionadas à própria sexualidade e reprodução, sem coerção, discriminação e violência, favorecendo a busca pela autonomia reprodutiva.

2 EPISTEMOLOGIAS FEMINISTAS COMO ANTÍDOTO AO DETERMINISMO BIOLÓGICO

Desde que surgiu, o feminismo busca identificar e propor medidas para eliminar todas as formas de desigualdade entre homens e mulheres, que ao longo da história da humanidade colocaram estas em posição hierárquica subalterna em relação àqueles. Mas foi somente nos anos 90 que as feministas começaram a construir teorias sólidas e uma epistemologia própria, apta a se contrapor às ideias biológicas e biologizantes das diferenças entre os sexos (Scott, 1995, p. 72).

Na segunda fase da segunda onda do feminismo³⁵, em meio a uma busca pela legitimação acadêmica dos estudos feministas, a historiadora Joan Scott revoluciona com a teorização do conceito de gênero, por meio de seu aclamado artigo “Gênero: uma categoria de análise histórica”. Para Scott, gênero seria “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos” e também “uma forma primária de dar significado às relações de poder” (Scott, 1995, p. 86). Segundo a autora, o termo “gênero” é forma de indicar a criação social do arquétipo feminino e masculino sobre os papéis desempenhados por homens e mulheres na sociedade, rejeitando explicações biológicas para as diversas formas de subordinação feminina, como o fato de que as mulheres têm a capacidade de gestar enquanto os homens têm uma força física superior.

Simone de Beauvoir, ao tratar dos dados da biologia que eram alegados como razões para a posição hierárquica superior dos homens, destaca o quanto a naturalização da maternidade sempre colocou as mulheres em segundo lugar ou ao menos subestimou o valor de seu trabalho (Beauvoir, 2019, p. 97):

Mesmo nos momentos em que a humanidade reclamava mais asperamente maior número de nascimentos, a necessidade de mão de obra superando a de matérias-primas a explorar, mesmo nas épocas em que a maternidade foi mais

³⁵ Autoras como a filósofa Nancy Fraser e a historiadora Joana Maria Pedro indicam que dentro do período da segunda onda do feminismo houve momentos distintos, com enfoques distintos (FRASER, 2007, p. 295), sendo que no início não apareciam referências a “gênero”, sendo utilizada a expressão “mulher” e em um segundo momento “mulheres”, após reivindicações de negras índias e pobres que não se sentiam incluídas nas pautas (Pedro, 2005, p. 79).

venerada, não permitiu ela que as mulheres conquistassem o primeiro lugar. [...] engendrar, aleitar não são atividades, são funções naturais; nenhum projeto nelas se empenha. Eis porque nelas a mulher não encontra motivo para uma afirmação ativa de sua existência: ela suporta passivamente seu destino biológico.

Já a cientista política, Carole Pateman (1988) defende que o contrato sexual representado pelo casamento demonstra as assimetrias de gênero, sendo a forma pela qual o direito patriarcal é criado e mantido. A autora entende que apesar de tentadora a compreensão de “gênero neutro”, a eliminação das diferenças sexuais entre homens e mulheres não seria a melhor solução para um tratamento verdadeiramente isonômico. As mulheres precisam ter alternativa que não seja se tornarem cópias daqueles, devendo ser considerado e respeitado o trabalho reprodutivo exercido por elas.

Para a historiadora Silvia Federici (2017, p. 168), o momento histórico em que se evidenciou a origem da apropriação por parte do Estado dos direitos reprodutivos das mulheres seria demarcado por aquele período em que, após um período de grande dizimação populacional, nas décadas de 1620 e 1630, verificou-se uma crise demográfica profunda e percebeu-se que era necessário aumentar a população – sobretudo a proletária – para retomar a produtividade que supostamente conduziria à estabilidade econômica. A partir daí, iniciaram-se diversas medidas de opressão e violência contra as mulheres, voltadas ao controle de seus corpos, de sua sexualidade e de suas capacidades reprodutivas, que somente deveriam ser explorados a serviço dos interesses do Estado. Nas palavras da autora (Federici, 2017, p. 178):

O resultado destas políticas, que duraram duzentos anos (as mulheres continuavam sendo executadas na Europa por infanticídio no final do século XVIII), foi a escravização das mulheres à procriação. Enquanto na Idade Média elas podiam usar métodos contraceptivos e haviam exercido um controle indiscutível sobre o parto, a partir de agora seus úteros se transformaram em território político, controlados pelos homens e pelo Estado: a procriação foi colocada diretamente a serviço da acumulação capitalista.

Embora pareça forte e exagerada a expressão “escravização das mulheres à procriação”, não há evidente correlação com o que acontece atualmente? A questão é tão petrificante quanto instigante, e nos leva a uma segunda indagação: será que as mulheres vivenciam até menos liberdade sexual e detêm menos direitos reprodutivos do que as mulheres que viveram no período medieval?

Em razão da capacidade de gestar, atrelou-se à mulher profundamente e unicamente ao papel de mãe: a maternidade até pouco tempo era, e de certa forma, segue sendo, compulsória para a maioria das mulheres, traduzindo-se em uma identidade forçada. Assim, muitas perderam a autodeterminação sobre os seus corpos, ou conforme já explicava Adrienne Rich (1979), o poder reprodutivo das mulheres passou a ser explorado por sistemas e instituições dominadas por homens.

Mas não foi apenas o direito de abortar ou de não engravidar que foi retirado das mulheres, como se poderia pensar – e como talvez tenham pensado algumas feministas que iniciaram as pautas acerca dos direitos sexuais e reprodutivos. Dependendo da classe social e da idade, algumas mulheres também perderam o direito de engravidar, em casos de esterilização forçada e de histerectomia, por exemplo (Hooks, 2022, p. 54). É esse o contexto da relevância social do estudo da Justiça Reprodutiva, pois, em resumo, o que se verifica é uma falta de direitos sobre os próprios corpos, em diversos sentidos.

3 JUSTIÇA REPRODUTIVA: UM CONCEITO POUCO EXPLORADO

O conceito de Justiça Reprodutiva é estudado dentro do espectro dos Direitos Humanos das Mulheres, através do prisma da interseccionalidade, permitindo vislumbrar as diversas violências sofridas por estas, especialmente no período gestacional e no parto, tanto pelo sistema de saúde como pela sociedade como um todo, resultando em um grau elevado de morte materna, principalmente entre aquelas mais pobres e racializadas.

Nesse contexto é que o termo “justiça reprodutiva” é cunhado: o conceito amplia a perspectiva acerca dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porque traz em conjunto o estudo dos direitos humanos e da justiça social, assim como do exercício da maternidade livre, segura e desejada.

Ressalta-se é impossível estudar Justiça Reprodutiva sem o recorte de raça e classe proporcionado pela interseccionalidade. O termo foi apresentado mundialmente pela primeira vez na Conferência

Internacional sobre População e Desenvolvimento realizada em Cairo no ano de 1994, mas antes disso, foi introduzido como tal por ativistas negras estadunidenses, cujo principal expoente foi Loreta Ross.

Ross (2017) explica que um grupo de mulheres negras que trabalhavam pelo movimento a favor da escolha (“pro-choice movement”) em 1994 cunharam o termo “justiça reprodutiva” a fim de reunir as experiências vividas por essas mulheres e alimentar uma consciência que favorecesse uma política que terminasse com a opressão sofrida. O estudo da justiça reprodutiva, diferente de outros movimentos acadêmicos que se distanciam da “práxis”, permitiu a construção de pontes entre ativistas e a academia, com efeitos especialmente relevantes às mulheres negras que por diversas vezes foram deixadas de fora das discussões em prol de um “feminismo branco”.

Em relação a isso, esclarece a aclamada intelectual negra bell Hooks (2022, p. 50):

Enquanto a questão do aborto foi e permanece relevante para todas as mulheres, houve outras questões reprodutivas que eram tão vitais quanto, que precisavam de atenção e poderiam ter servido para incentivar multidões. Essas questões iam desde educação sexual básica, controle pré-natal, medicina preventiva – que ajudassem mulheres a compreender como o corpo funciona – à esterilização forçada, cesarianas desnecessárias e/ou histerectomias e as complicações médicas que esses procedimentos causavam. De todas essas questões, mulheres brancas individuais com privilégio de classe se identificaram mais intimamente com a dor da gravidez indesejada. E destacaram a questão do aborto. De maneira alguma formavam o único grupo que precisava de aborto seguro e legal. Como já dito, elas tinham muito mais probabilidade de ter meios de conseguir fazer um aborto do que mulheres pobres da classe trabalhadora. Naqueles dias, mulheres pobres, incluindo as mulheres negras, constantemente procuravam por aborto ilegal. O direito de abortar não era uma questão exclusiva de mulheres brancas; simplesmente não era a única nem mesmo a mais importante questão reprodutiva para uma multidão de mulheres norte-americanas.

Dentre os diversos direitos reprodutivos mencionados pela autora, estão os casos de esterilização forçada, que seria o oposto extremo da pauta do aborto, mas que afeta sobretudo mulheres racializadas, indígenas, periféricas, sendo um tópico pouco enfrentado e extremamente nevrálgico aos direitos humanos das mulheres e à justiça social.

Nesse sentido, Bathacharya (p. 110, 2013) elucida o contexto no qual foi orquestrado o estudo inicial da justiça reprodutiva nos Estados Unidos:

A história das mulheres afro-americanas e de outras mulheres não-brancas nos Estados Unidos é ensanguentada por casos de esterilização forçada pelo Estado. Durante os anos 1960, os estados de Illinois, Iowa, Ohio, Virgínia e Tennessee debateram leis de esterilização compulsória para mães negras usuárias dos serviços de assistência social. Quando a medicação contraceptiva Norplant foi lançada no mercado, um editorial no jornal Philadelphia Inquirer insinuava que ela era a solução para a pobreza negra. Um destino similar esperava as mulheres de Porto Rico. Quando a indústria americana, sob o programa econômico da Operação Bootstrap, foi à ilha em busca de mão de obra barata nos anos 1930 e 1940, muitas fábricas mantinham clínicas de controle de natalidade no local para as trabalhadoras e algumas se recusavam a contratar mulheres a não ser que tivessem sido esterilizadas [...].

Assim, conforme expressão linguística utilizada por Sueli Carneiro, “matriarcado da miséria”, cunhada originalmente pelo poeta negro nordestino Arnaldo Xavier, as mulheres negras, apesar de toda a exclusão, pobreza e vulnerabilidade pelas quais foram assoladas ao longo da história, são resistência e liderança em suas comunidades. No Brasil, muitos lares são liderados por essas mulheres, sendo o contexto histórico ferramenta imprescindível de análise além do gênero, mas também de raça (Carneiro, 2011)

Não olvidando-se do modelo capitalista vigente, o qual influencia de forma inegavelmente profunda a sociedade no contexto da modernidade tardia, a raça afeta o indivíduo para muito além de sua condição econômica (Vergés, 2021). Para Lélia Gonzalez (2018) insistir

na crítica exclusivamente da luta de classes, é negar a incorporação de análise da categoria raça e sexo.

Para a autora Carla Akotirene (2019) a interseccionalidade é a corrente teórico-metodológica que visa dar visão à essa inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e “cisheteropatriarcado”³⁶, elementos que atingem de forma ainda mais grave as mulheres negras, sobrepostas pelo cruzamento de gênero, raça e classe. Assim, importante o emprego da interseccionalidade no estudo das diferentes perspectivas existentes para as mulheres como grupo heterogêneo.

Dentro desse terreno os direitos reprodutivos podem ser definidos em termos de poder e recursos: poder de tomar decisões sobre a própria fecundidade, gravidez, escolha de ter ou não, filhos com base em informações seguras e os recursos para efetivar essas decisões (Corrêa; Petchesky, 1996). Dessa forma, é direito da mulher o planejamento reprodutivo que lhe permita tomar o controle do seu corpo e escolher as decisões que irá tomar: autonomia na forma como se dará o parto acompanhada de assistência médica ou de alguém habilitado e da sua confiança (Mattar; Diniz, 2012).

Nesse contexto, segundo a UNFPA o direito à autodeterminação reprodutiva é baseado no seguinte tripé: o direito de planejar a própria família, o direito de tomar uma decisão reprodutiva livre de interferência e o direito de ser livre de todas as formas de violência, discriminação e coerção que afetam a saúde sexual e reprodutiva da mulher. Quem não quer ser mãe, deve receber as informações adequadas para evitar uma gravidez indesejada e caso esta ocorra, possuir o direito de interrompê-la, e quem deseja a maternidade, deve poder exercê-la de forma segura e com o amparo da sociedade para tanto (Diniz, 2000)

O exercício da autonomia reprodutiva sobre o próprio corpo encontra diversos entraves, principalmente quando essa mulher já se encontra gestante. Os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres no exercício de uma gestação segura e desejada dependem das variáveis a que elas estão condicionadas. Nesse sentido, ao analisar um grupo de mulheres brancas, de classe média e alta, pressupõem-se que o início de uma gravidez não desejada relaciona-se ao “ideal da maternidade” proveniente de uma cultura patriarcal e difundido em toda a sociedade,

³⁶ Expressão utilizada por Akotirene (2019) para designar a forma como a sociedade está organizada, na qual a acredita-se em uma hierarquia da identidade de gênero cisgênero; da orientação heterossexual, e do masculino sobre o feminino, caracterizado pela existência do patriarcado.

levando a uma percepção de que a mulher só estará realmente completa quando tiver filhos.

Para as mulheres com menor grau escolaridade e de classe social mais baixa, predominantemente aquelas pretas e/ou pobres, a situação agrava-se: além dos problemas supracitados soma-se a falta de acesso a métodos contraceptivos eficazes e pouco invasivos, como os dispositivos intrauterinos (conhecidos como DIUs) e a pílula anticoncepcional, em oposição aos procedimentos de esterilização através de cirurgias, como a laqueadura de trompas e a histerectomia.

Além disso, o tratamento dispensado por profissionais da saúde no pré-natal (quando este existe) e no momento do parto pode ser deficitário em regiões mais pobres. Esse tratamento inadequado revela-se tanto na falta de afeto e cuidado para com a parturiente que encontra-se em momento de extrema vulnerabilidade como na prática de condutas violentas e abusivas, caracterizadas como violência obstétrica.

De modo a agravar a situação vigente, violência obstétrica foi chancelada recentemente pelo governo federal com a promulgação da nova caderneta da gestante, de 2022, na qual práticas como a episiotomia, a qual consiste em corte feito na vagina durante o parto para facilitar o trabalho do médico, voltaram a ser permitidas e mesmo incentivadas pela pasta.

Dentro do estudo da justiça reprodutiva, a autora Natalia Gerardi (2016), pesquisadora argentina que analisa desde uma perspectiva latino-americana as mais diversas formas de violência contra as mulheres, explica que a expressão “violência obstétrica” é fortemente vinculada à América Latina, e representa não apenas a violência física no momento do parto perpetrada pelos agentes da saúde, como também perpassa a violência psicológica e o descaso à parturiente quanto a falta de realização ou acompanhamento do pré-natal e os cuidados para com a gestante.

A invisibilização das experiências vividas pelas mulheres e do que estas anseiam em prol da imposição do saber médico, se traduzem em condutas que configuram uma violação dos direitos humanos e reprodutivos das mulheres. Entre tais violações, está a omissão de informação e a falta de transparência no dever médico legal de informar a gestante e seus familiares de forma clara e adequada acerca dos procedimentos que estão sendo tomadas (Gherardi, 2016).

Segundo Simioni (2022) a prática de abusos verbais é recorrente no Brasil, sendo experimentada por cerca de um quarto das mulheres (25%), comunicações desrespeitosas que ridicularizam a gestante que já encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade, desconsideração das queixas de dor e humilhações de cunho sexual ofendem o Direito à

integridade moral e emocional da vítima e infelizmente, ainda são naturalizadas por setores da sociedade ou mesmo invisibilizadas, uma vez que essas situações apesar de recorrentes, não alcançam grande repercussão.

Dessa forma, nota-se que estamos longe do que é compreendido por justiça reprodutiva, sendo necessárias medidas estatais que permitam a evolução social nesse sentido, como o fomento à educação sexual desde o ensino básico nas escolas, a criação de centros de informação acerca dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres com foco desde a infância, assim como a organização de redes de apoio para mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os determinismos biológicos ligados ao gênero colocaram as mulheres em um papel estritamente relacionado ao cuidado, relegadas ao ambiente doméstico ou privado, com a completa invisibilização dos seus direitos sexuais e reprodutivos, mantidos fora dos holofotes públicos e considerados matéria de menor relevância. A justiça reprodutiva visa trazer ao debate temas que por muito tempo foram negligenciados pela sociedade e pelos feminismos brancos, uma vez que procura analisar a realidade através de uma abordagem descolonial e racializar as discussões.

O estudo da justiça reprodutiva permite acessar as desigualdades sociais e raciais, assim como as desigualdades de gênero no que se refere a temas especialmente sensíveis como aborto, violência obstétrica, maternidade livre e segura e planejamento familiar que coloque a mulher no centro das discussões e sujeito ativo nos processos de tomada de decisões.

Dessa forma, o estudo da Justiça Reprodutiva deve integrar a luta pela defesa dos direitos humanos das mulheres, incluindo o controle e a tomada de decisão livre e responsável sobre questões relacionadas sexualidade e reprodução, sem coerção, discriminação e violência, favorecendo a busca pela autonomia reprodutiva.

REFERÊNCIAS

AKOTIRENE, C. **Interseccionalidade**. Feminismos Plurais. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.

BHATTACHARYA, T. **O que é a teoria da reprodução social?** *Socialist Worker*. [S. l.]: [S. n.], 2013. Disponível em: http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2019/09/04_Bhattacharya.pdf. Acesso em: 22 jul. 22.

BEAUVOIR, S. **O segundo sexo**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.

CARNEIRO, S. **Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil**. São Paulo: Selo Negro, 2011.

CORRÊA, S.; PETCHESKY, R. Direitos Sexuais e Reprodutivos: uma perspectiva feminista. **Physis: Ver. Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, 1996.

CRENSHAW, K. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos ao gênero. **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 10, n. 1. 2002.

DINIZ, S. **Maternidade voluntária, prazerosa e socialmente amparada**: breve história de uma luta. 2000. Disponível em: <https://www.mulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/02/maternidade-volunt%C3%A1ria.pdf>. Acesso em: 9 ago. 2022.

FEDERICI, S. **Calibã e a bruxa**: mulheres, corpos e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.

FRASER, N. Mapeando a imaginação feminista: da redistribuição ao reconhecimento e à representação. **Revista Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 15, n. 2, p. 291-308, maio/ago. 2007.

GHERARDI, N. **Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar**. CEPAL - Serie Asuntos de Género N° 141, 2016.

GONZALEZ, L. **Primavera para as rosas negras**: Lélia Gonzalez em primeira pessoa. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.

HOOKS, B. **O feminismo é para todo mundo**: políticas arrebatadoras. 17. ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2022.

LARA, B. Ministério da Saúde incentiva violência obstétrica em lançamento da nova Caderneta da Gestante. **Intercept Brasil**, São Paulo, 09 maio 2022. Disponível em: <https://www.intercept.com.br/2022/05/09/ministerio-da-saude-raphael-camara-violencia-episiotomia/>. Acesso em: 20 ago. 2023.

MATTAR, L. D.; DINIZ, S. G. Reproductive hierarchies: motherhood and inequalities in women's exercising of human rights. **Interface - Comunic., Saude, Educ.** 2012.

PATEMAN, C. **The Sexual Contract**. Cambridge: Polity Press, 1988.

PEDRO, J. M. Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa histórica. **História**, v. 24, n. 1, p.77-98, 2005.

RICH, Adrienne. **Motherhood**: the contemporary emergency and the quantum leap. On lies, secrets and silence: selected prose 1966-1978. Nova Iorque: Norton, 1979.

ROSS, L. J. Reproductive Justice as Intersectional Feminist, Activism. **Souls**, v. 19, n. 3, p. 286-314, 2017.

SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. **Revista Educação e Realidade** (UFRGS), v. 20, n. 2, p. 71-99, 1995.

SIMIONI, F. Violência Obstétrica. *In*: TERRA, B. (org). **Dicionário Feminista Brasileiro**: conceitos para a compreensão dos feminismos. São Paulo: Dialética, 2022.

VERGÉS, F. **Uma teoria feminista da violência**: Por uma política antirracista da proteção. São Paulo: Ubu, 2021.

A INVISIBILIDADE DAS MULHERES ATRÁS DAS GRADES

A INVISIBILITY OF WOMEN BEHIND BARS

Thalyta Karina Correia Chediak³⁷

João Baraldi Neto³⁸

Luíse Pereira Herzog³⁹

Resumo

O presente trabalho busca discutir o abandono afetivo das mulheres que estão cumprindo pena privativa de liberdade nas penitenciárias femininas em âmbito nacional, principalmente no estado de Rondônia, destacando a responsabilidade civil do Estado. A presente pesquisa tem por natureza qualitativa e quantitativa de caráter documental e objetiva frente a análise dos dados sobre estas mulheres apenadas, fornecido pela pesquisa por Alves, em 2018, na penitenciária Estadual de Rondônia (PENFEN), tal como, os dados e entrevistas realizadas pelo Projeto Programa Justiça Sem Muros desenvolvido pelo Estado de São Paulo. O estudo tem como base os estudos de Marina Castañeda (2006), sobre o machismo invisível, os estudos de Maria Berenice Dias (2007) sobre o princípio da afetividade nas relações de família no âmbito jurídico. Por fim, entendemos que a responsabilidade do Estado sobre o abandono afetivo das mulheres encarceradas, está relacionado com o distanciamento geográfica, ausência de estrutura física das unidades prisionais e a reprodução institucional no tratamento desigual em razão do gênero, o que corrobora para a perpetuação do machismo invisível.

Palavras-chave: Abandono afetivo, Direito de família, Mulheres encarceradas, Machismo invisível, Responsabilidade Civil do Estado.

³⁷ Advogada. Mestre em Educação pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Especialista em Direito Civil e Processual Civil pela Faculdade de Rondônia (FARO). Mestranda em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal de Rio Grande, FURG.

³⁸ Mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Faculdade Católica de Rondônia (FCR).

³⁹ Advogada. Mestranda em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal de Rio Grande, FURG. Especialista em Processo Civil pela Faculdade Dom Alberto. Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC.

Abstract

The present work aims to discuss the emotional abandonment of women serving time in female prisons on a national level, particularly in the state of Rondônia, highlighting the civil responsibility of the State. This research is both qualitative and quantitative in a documentary nature, focusing on the analysis of data concerning these incarcerated women, provided by Alves' 2018 study at the Rondônia State Penitentiary (PENFEN), as well as the data and interviews conducted by the Justice Without Walls Program Project developed by the State of São Paulo. The study is grounded in the works of Marina Castañeda (2006) on invisible sexism and Maria Berenice Dias (2007) on the principle of affection in family relationships within the legal context. Ultimately, we understand that the State's responsibility for the emotional abandonment of incarcerated women is related to geographical distance, the lack of physical infrastructure in prison facilities, and institutional reproduction of gender-based inequality, all of which contribute to the perpetuation of invisible sexism.

Keywords: Emotional abandonment, Family law, Incarcerated women, Sexism.

1 INTRODUÇÃO

A afetividade vem sendo estudada de maneira exponencial e, desta forma, incluso nas fundamentações dos julgados pelos magistrados no século XXI. Averigua-se que a hermenêutica jurídica está crescendo referente a ausência da afetividade nas relações familiares em que podem interferir no emocional e na estrutura familiar, que geram o abandono afetivo.

Sobre a esfera jurídica, o tema alude sobre a falta dos pais na vida dos filhos, assim como a responsabilidade jurídica dos genitores para com a prole da família. Entretanto, não discussões diversas sobre o princípio da afetividade por outros ângulos no eixo familiar e, em razão disso, este artigo trata sobre a discussão do abandono afetivo às mulheres encarceradas.

Desta forma, discute sobre o princípio da afetividade, instituto do Direito de Família, nas penitenciárias femininas, a partir de análise e discussões de dados sobre o perfil e características das mulheres encarceradas, divulgado no relatório sobre mulheres privadas de liberdade em junho de 2017 pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), também propomos a análise dos relatos das mulheres encarceradas do programa Justiça Sem Muros, realizado pela Defensoria

do Estado de São Paulo, e a pesquisa de campo realizada por Alves (2018) acerca da Penitenciária Feminina (PENFEN) em Rondônia.

Portanto, a pesquisa possui natureza qualitativa e quantitativa de caráter documental onde analisamos recortes midiáticos acerca da condição feminina no sistema penitenciário com base em estudos de Michel Foucault (2011) sobre o discurso social que reforça a existência do machismo invisível, abordado por Marina Castañeda (2006), além do direito de família e o princípio da afetividade por Maria Berenice Dias (2007 e 2006) e Rodrigo da Cunha Pereira (2011), bem como estudos de Zygmunt Bauman (2001) sobre a fluidez dos relacionamentos afetivos, de forma a verificar a existência do abandono afetivo no ambiente prisional de maneira ambilateral, seja partindo dos familiares ou do próprio Estado.

A proposta desse artigo é discutir sobre o abandono afetivo no âmbito prisional, mais especificamente na relação entre os familiares e as apenadas.

O estudo tem por base a discussão e a análise de dados do programa Justiça Sem Muros, realizado pela Defensoria do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República, tendo objetivo de atender ao Estado em um ano, iniciativa que busca auxiliar na estrutura de políticas públicas conexas com a realidade.

Levando em consideração a baixa quantidade de dados atualizados sobre as mulheres encarceradas, a proposta de discussão baseia-se nas informações do relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade disponibilizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) de junho de 2017, também, leva-se em consideração os dados da pesquisa sobre a penitenciária feminina em Rondônia (PENFEN), bem como propõe a análise de recortes de entrevistas com as apenadas.

A proposta deste artigo, tem a finalidade de conscientizar a sociedade frente a existência de um cenário em contradição, pois ao mesmo passo que enaltece às mulheres referente a aceitação sobre o corpo feminino a partir de discursos mercantis que fazem uso do marketing visual em campanhas para aceitação do próprio corpo, entretanto, há uma invisibilidade quanto a existência das mulheres encarceradas perante a sociedade.

É diante desse debate que faz necessário a criação de um ambiente propício para a formulação de políticas públicas que atendam a realidade da estrutura social, a fim de assegurar os Direitos das Mulheres, assegurar a convivência familiar e atingir a finalidade do encarceramento: a reinserção do sujeito em sociedade, e não o seu abandono.

A análise e discussão dos dados terá base nos estudos de Marina Castañeda (2006) sobre o machismo invisível e suas consequências no espaço das penitenciárias femininas, seja no tratamento dessas pela sociedade, seja na estrutura do local que as comportam, seja no âmbito familiar, ou na abordagem que o governo confere a essas mulheres.

A existência do abandono afetivo coloca em risco a eficácia do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os Direitos Humanos das mulheres encarceradas. Ao papel da mulher é conferido a delicadeza e a responsabilidade de cuidar da casa e da família. No entanto, no ambiente em que são inseridas, as mulheres não possuem espaços feitos exclusivamente para elas, como é o caso da penitenciária feminina de Rondônia, PENFEM, feita para ser originalmente uma penitenciária masculina (Alves, 2018).

As diferenças sexuais sempre foram valorizadas ao longo da história em todo o mundo de forma invisível, enraizados socialmente (Castañeda, 2006). Inserida em uma sociedade permeada pelo machismo invisível que reprime e a invisibiliza quando esta não realiza o papel a que lhe é historicamente delimitado, segundo relatos das apenadas, a mulher é esquecida. O sentimento de exclusão, tanto pelo sistema prisional quanto pelos familiares não contribui para o processo de ressocialização.

A partir de depoimentos de mulheres encarceradas, coletados pelas duas pesquisas acima mencionadas, questiona-se a postura do Estado como propiciador de espaços de abandono afetivo, seja através da burocracia do sistema penitenciário por meio de revistas vexatórias, a localização das penitenciárias femininas que dificultam o acesso dos familiares, ou a dificuldade de reconhecimento da importância de visitas íntimas, ao passo que para os homens, a visita íntima é considerada necessidade humana para acalmar os nervos e diminuir conflitos nas prisões, tanto que inicialmente foi regulamentada pela Lei de Execuções Penais apenas para os presos masculinos, em 1984 (Pereira, 2012).

Nesse sentido, tapa-se os olhos para a existência de mulheres encarceradas e negligencia-se o dispositivo constitucional, que define ter o Estado, assim como a família e a sociedade, o dever de proporcionar a convivência familiar com base no princípio da dignidade humana.

2 REFLEXÃO SOBRE O ABANDONO AFETIVO INVERSO

O conceito de família passou por inúmeras alterações durante a história, e por estabelecer as bases da formação social, detém grande importância na esfera jurídica. O laço consanguíneo que antes formava a

concepção central de núcleo familiar, gradativamente é substituído por laços afetivos.

Estes laços sustentam a ligação da família de forma a contemplar a dinamicidade da sociedade moderna e os novos arranjos familiares. Pereira (2011) explica não existir família em ambientes sem afeto, pois sua falta é igual a desordem estrutural, visto que é o afeto que conjuga a existência familiar.

A partir de discussões e desenvolvimento do tema, a afetividade ganha status jurídico e com base em concepções históricas é elevada à princípio e, segundo Pereira (2011), como um dos principais responsáveis o discurso psicanalítico “que o desejo e amor começam a ser vistos e considerados como verdadeiro sustento do laço conjugal e da família”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2014) afirmam que “todo o moderno Direito de Família gira em torno do princípio da afetividade”. Portanto, a família pós-moderna é compreendida além de laços sanguíneos, mas sobretudo no afeto.

A modernidade líquida, nos moldes do princípio da afetividade, transforma o Direito de Família, que foi construído em concepções sólidas de patrimônio e laços sanguíneos, começa a atingir a amplitude das relações sociais e fazer do ser humano o ponto central de preocupação pelo legislador, conforme pontua Dias (2006, p. 61),

[...] os laços de afeto e de solidariedade derivam da convivência familiar, não do sangue. Assim, a posse do estado de filho nada mais é do que o reconhecimento jurídico do afeto, com o claro objetivo de garantir a felicidade, como um direito a ser alcançado.

A afetividade abrange, segundo a autora (2006) muito mais que laços de afeto, também é responsável pelo desenvolvimento de conceitos de solidariedade, paciência e perdão. O direito das famílias instalou uma nova ordem jurídica para a família, atribuindo valor jurídico ao afeto.

[...] as relações de família, formais ou informais, indígenas ou exóticas, ontem como hoje, por mais complexas que se apresentem, nutrem-se, todas elas, de substâncias triviais e ilimitadamente disponíveis a quem delas queira tomar afeto, perdão, solidariedade, paciência, devotamento, transigência, enfim, tudo aquilo que, de um modo ou de outro, possa ser reconduzido à arte e à virtude

do viver em comum. A teoria e a prática das instituições de família dependem, em última análise, de nossa competência de dar e receber amor (Dias, 2006, p. 68-69).

O valor jurídico atribuído ao afeto estabelece um marco transformador que contempla modelos familiares que antes se viam sem a proteção jurídica do Estado.

Por um lado, a afetividade desenvolve o sujeito em sua completude, solidifica as relações entre estes e contribui para a formação da sociedade, a sua falta pode acarretar abalos psicológicos irreparáveis, o que se refere ao abandono afetivo.

O abandono afetivo é decorrente da falta de afetividade no âmbito familiar. O abandono dos pais para com os filhos, e da responsabilidade civil que estes têm de arcar devido ao dano causado ao interesse juridicamente tutelável consistente no cuidado dos filhos, enquanto, em situações inversas acabam não sendo abordadas nessas interpretações, como por exemplo, o abandono dos familiares para com a mulher encarcerada.

Em entrevista sobre reportagens em uma penitenciária feminina de São Paulo, o médico Drauzio Varella (2017) comentou que as mulheres encarceradas são abandonadas pelos familiares porque a sociedade aceita com mais naturalidade a prisão do homem enquanto a prisão feminina possui uma conotação sexual.

Tem dois aspectos: primeiro, que a mulher não é para ir presa. Mulher é tratada na família para dar exemplo, para ser boazinha, obediente, então já uma quebra de paradigma importante. Segundo, porque a prisão da mulher tem sempre uma conotação sexual também, porque se ela rouba, é porque ela é devassa também (Varella, 2017).

Os ideais que circundam o papel feminino são pautados em discursos de gênero, levados de geração em geração que perpassa desde práticas culturais, dizeres populares entre outros, ou seja, são direitos consuetudinários, em que são considerados um conjunto de costumes e práticas da sociedade e são aceitos como leis.

Para Foucault (2011) o discurso é construído a partir da troca e se constitui como um jogo.

O discurso nada mais é do que um jogo, de escritura, no primeiro caso, de leitura, no segundo, de troca, no terceiro, e essa troca, essa leitura e essa escritura jamais põem em jogo senão os signos (Foucault, 2011, p. 49).

O discurso realizado em uma região, expõe características de determinado grupo, suas regras, seus anseios e sua estrutura social, ou seja, seus signos implícitos. Para Varella (2017), o rompimento do papel social ocasiona a quebra do paradigma caricato ofertado à mulher, portanto, é compreensível que se a mulher é “bela, recatada e do lar”, é vista em sociedade, porém, se rouba, ela é invisibilizada porque não presta, ao contrário do que acontece com os homens.

O DEPEN em 2017 divulgou dados em que comparam a quantidade de visitas entre os estabelecimentos masculinos e femininos e apontam a ocorrência de média de 4,55 visitas por preso no decorrer do semestre, enquanto nas unidades femininas, essa média reduz para 4,45 visitas por presa, ao passo que nas unidades mistas a média semestral é de 2,63 por custodiada. O laço de afeto enfraquece quando a mulher é presa e não mantém o contato com os familiares e, com isso, o sistema penitenciário desfavorece a ressocialização e intensificar sentimento de revolta por conta do abandono.

3 DESCONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO: A MULHER E O MACHISMO INVISÍVEL

Hoje, vivemos em tempos o qual Bauman (2001) conceitua como modernidade líquida, em que as relações sociais e amorosas estão em constante movimento.

Esse momento tem características pelo desenvolvimento tecnológico e pelo consumo excessivo e incansável de informações, mas ao mesmo tempo, preso às amarras de uma cultura tradicional e intolerante, expondo em esfera mundial problemática estrutural e a busca por uma metamorfose pragmática.

Partindo dessa premissa, temas enraizados culturalmente ganham destaque e questionamentos, como as questões de gênero e os papéis sociais, havendo o rompimento de paradigmas.

A desigualdade social colocou em prejuízo a mulher, durante muito tempo, o que caracterizou a mulher como uma figura feminina frágil, sendo incapaz de exercer determinados papéis na sociedade. Essa ideia se deu pelo decorrer da história e conduz a construção do papel da

mulher na sociedade. Apesar do cenário social gerar espaços para discussões relacionados a mulher como sujeito social, desenvolvendo temas como igualdade salarial e demais decisões políticas permanecem a discursos machistas.

Para Castañeda (2006), o machismo na atualidade funciona através das aparências e expõem um jogo de poder que, é realizado pelos detalhes, o que desenvolvem grandes problemáticas. O machismo não significa que o homem bate na mulher ou a prende dentro de casa. Contudo, tem a ver com as suas atitudes com os demais indivíduos, porém, não apenas com as mulheres, mas também com outros homens, crianças e subordinados. Ainda a autora, aponta que o machismo se dá, também, pelo olhar, gestos ou falta de atenção. Mas a pessoa que recebe estas atitudes, percebe-o com toda a clareza e sente-se diminuída, desafiada ou ignorada. Não há necessariamente a violência física, ou repreensão, mas estabelece uma relação de desigualdade em que alguém é superior sobre a outra pessoa.

Segundo Castañeda (2006) os conflitos entre homem e mulher estão relacionados com a aquisição e manipulação do poder, trazendo à tona desigualdades no âmbito social, econômico e político.

Os movimentos pró feminismo contribuem no processo de ampliação do papel da mulher e seus direitos na sociedade, entretanto, não há celeridade no processo, como com a garantia do sufrágio feminino pela Constituição de 1946, a promulgação da Lei Maria da Penha em 2006, e a qualificação do crime de feminicídio como hediondo.

Contudo, as tentativas de inclusão da mulher no mercado de trabalho não detêm como objetivo a equidade de gênero estabelecida no seio constitucional, mas apenas a introdução das mulheres no mercado capitalista a fim de favorecer a economia da máquina do Estado.

A autora Castañeda (2006), explica que o machismo invisível permeia o seio social e é mais nocivo que o machismo tradicional explícito, pois por ser algo impossível de ser observado no dia a dia, se torna invisível, e é nocivo pelo fato de ser de difícil identificação para sua superação, sendo reproduzido pela própria sociedade em pequenos detalhes.

Atravessa a estrutura e o funcionamento de nossas instituições; injeta seus valores em nosso debate político e social; tem um impacto enorme nas dinâmicas populacionais do país, na educação e na divisão do trabalho. Permeia todas as relações familiares, sociais, profissionais, econômicas (Castañeda, 2006, p. 24).

Há uma diferença psicológica que distancia homens e mulheres, a partir da qual estabelece papéis exclusivos em todos os âmbitos (Castañeda, 2006, p. 17). No que tange a estrutura familiar, de fato, é pautada na figura materna, portanto a conversão de mulher-mãe à mulher-encarcerada é ainda mais difícil.

Com relação aos homens, observamos que quando presos é destinado todo o apoio familiar, seja da mãe ou esposa, em grande parte dos casos, entretanto, o mesmo não acontece com as mulheres, conforme dados do projeto Justiça Sem Muros (2016).

Por fim, Castañeda (2006) afirma que “A verdadeira raiz de muitos problemas presumivelmente psicológicos é o machismo invisível”. Dessa forma, analisaremos o machismo invisível no ambiente de encarceramento dessas mulheres e de que maneira contribuem para reforçar o abandono familiar.

4 O MACHISMO COMO CAUSA DO ABANDONO AFETIVO NAS MULHERES ENCARCERADAS

Os estudos e pesquisas que envolvem a mulher no sistema prisional são recentes e de vasto campo interdisciplinar a serem explorados. Segundo Kenarik Boujikian (2017), a mulher enfrenta quase os mesmos problemas do homem dentro da prisão, no entanto, outros fatores devem ser levados em consideração, dentre eles, “o julgamento da sociedade sobre elas, a partir de critérios de gênero e abandono afetivo” (Boujikian, 2017).

Conforme relato da Desembargadora Boujikian (2017) do Tribunal de Justiça de São Paulo, o sistema carcerário brasileiro apresenta deficiência em pesquisas estatísticas sobre dados prisionais, com situação ainda mais drástica no caso das mulheres. Os dados mais atualizados que foram encontrados são dos anos de 2014 a 2017, com a pesquisa de Alves em 2018, confirmando a afirmação de Boujikian (2017) quanto ao desinteresse do Estado em pesquisas sobre o tema.

Estudos diversos apontam que a maioria das mulheres encarceradas não possuem ligação com o tráfico ou facções, porém estas são coadjuvantes do crime, ou seja, são presas por ajudar o companheiro (cônjuge) e, depois de presas, são vítimas do abandono afetivo familiar.

Boujikian (2017), revela que ao ter contato diário e conhecer a realidade, comenta que “há um vazio na ida dessas mulheres presas, porque, na verdade, elas são abandonadas por completo. As únicas pessoas que dão apoio a elas normalmente são mãe e irmã”. Nos presídios

femininos reflete-se a problemática de gênero, com agravantes de uma sociedade predominantemente machista.

Em unidade prisional paulista, uma mulher, que não foi identificada, em tratamento médico, comentou a discriminação de gênero que sofreu em depoimento à entrevista realizada pelo Programa Justiça Sem Muros:

Eu fui presa em 5 pessoas. Duas não tinham passagem, pegaram 8 anos e saíram, outro que pegou 8 está preso. Meu namorado pegou 10 anos, e eu peguei 11 e pouco, eu peguei mais que todo mundo. Por quê? E eu sou a única mulher (Programa Justiça Sem Muros, 2016).

Independentemente da existência de situação agravante no momento do cárcere, nessa situação ou não, o projeto em comento expõe que na maioria das situações a mulher surge no ato criminoso como coadjuvante.

Os presídios foram feitos para os homens, portanto, o tratamento dado às mulheres apenadas é igual ao da prisão masculina, feito em discursos de exclusão proferidos tanto pelo sistema judiciário quanto da própria família. A conversão à mulher-criminosa acontece de forma cruel e contribui para o sentimento de abandono antes mesmo da sentença, conforme relato de outra apenada:

Quando eu cheguei era muita tristeza e medo. Fiquei um mês e quinze dias sem ver meu pai e mãe, sem ter notícias. Diz que é a burocracia, que tem que ter um monte de papel. E eu fiquei sozinha, não chegava carta, não chegava nada (Programa Justiça Sem Muros, 2016).

Conforme DEPEN (2017), ao compararmos dados no país relativos às visitas em estabelecimento masculinos e femininos, observa-se que em média 4,55 visitas por preso no decorrer do semestre, enquanto nas unidades mistas a média semestral é de 2,63. É importante discutir as causas dessa diferença numérica. Ao trazermos a comparação para o estado de Rondônia, a situação permanece, conforme Alves (2018) em pesquisa realizada sobre o cenário da penitenciária estadual feminina em Rondônia. Destacam-se três fatores principais que contribuem para o abandono afetivo.

O primeiro encontra-se no fato de nem todos os municípios de Rondônia possuem unidades prisionais femininas. Logo, as mulheres em cárcere são encaminhadas para as unidades mais próximas de onde residem, e a distância geográfica não favorece o contato entre as apenadas e os familiares. O segundo é a falta de infraestrutura das penitenciárias. Apesar da legislação definir que as mulheres devam ser encarceradas em instituições diferentes de homens, em um mesmo prédio deve existir um local específico para elas.

Segundo Alves (2018), a Penitenciária Feminina de Rondônia (PENFEM), foi originalmente construída para os homens com espaços e estruturas específicas para abrigar o gênero, sendo este apenas adaptado para receber as apenadas, de forma improvisada. A alegação é confirmada por dados do DEPEN (2017) em análise a infraestrutura prisional e a capacidade de assegurar direitos e garantias básicas elencadas constitucionalmente. O relatório denuncia a falta de locais adequados para as mulheres gestantes, bem como berçário, creche e lugares reservados para lactantes.

Somente 14,2% das unidades prisionais femininas possuem espaços especiais no Brasil. Alves (2018) confirma os dados fornecidos pelo DEPEN (2017) ao explicar que os locais para receber visitas são pequenos e apertados:

São lugares pequenos onde as visitas chegam a permanecer sentadas em carteiras escolares durante até quatro horas e onde a ventilação é insuficiente. Segundo os registros dos questionários, a sala destinada ao berçário e que abriga presas grávidas ou lactantes e crianças de até seis meses de idade também não possui a ventilação necessária, não possui quantidade de berços suficientes para todas as crianças e necessita de reparos na instalação elétrica (Alves, 2018, p. 247).

De fato, a estrutura das instituições penitenciárias não é realizada para o cuidado com a pessoa e por consequência não contribui para o contato entre os familiares, tanto por questões geográficas quanto estruturais. Vale frisar que geralmente as mulheres sofrem mais rejeição e abandono do que os homens quando presos, informação comprovado anteriormente, e de acordo com o Programa Justiça Sem Muros (2016), a responsabilidade de cuidar dos filhos geralmente é da mulher, que sem o apoio do pai, perde contato com os filhos.

No ano de 2014, o projeto “Política de Atendimento Mães em Cárcere” juntamente com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, divulgaram dados que mostram que 78% das mulheres presas tinham filhos 72% não recebiam visitas dos filhos, famílias ou amigos, contribuindo com o rompimento do laço de afeto da mulher para com a sua família decorrência da prisão.

A conotação sexual da prisão feminina reflete na regulamentação da visita íntima, tendo em vista que esse direito foi estabelecido em 2001 pela resolução 1/1999 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) por meio da resolução 96 da Secretaria das Administrações Prisionais do Estado de São Paulo, com base no caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

De fato, foi a Lei de Execução Penal (LEP) de 1984 que estabeleceu no Brasil o direito à visita íntima aos homens por meio do artigo 41 e esse direito foi estendido no decorrer do tempo aos homossexuais e às mulheres. Vale lembrar que o direito à visita íntima não se encontra previsto em lei, na realidade tem origem em costumes adotados pela direção das próprias penitenciárias (Nucci, 2011). Esse direito foi regulamentado para as mulheres em 2001, no entanto, já teria sido recomendado por meio da resolução número 96 da Secretaria das Administrações Prisionais do Estado de São Paulo, tendo por base o princípio da isonomia. Importante ressaltar que a competência de regulamentação das vistas íntimas é do setor de gestão das unidades prisionais.

O Diário Oficial do Estado de Rondônia, publicou em 10 de novembro de 2015, a Portaria n.º 1061/GAB/SEJUS que objetivou estabelecer a padronização das funções dos servidores das penitenciárias estaduais, bem como a proposta de uma revista humanizada com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, de forma que restou vedado a prática da revista vexatória. No entanto, a medida autoriza a cada estabelecimento prisional, a competência para estipular os próprios critérios e procedimentos para a concessão da visita íntima, com base nas condições e características ofertada pelo estabelecimento.

Contudo, há lacunas sobre a regulamentação dessa prática, porque se deixa a cargo dos gestores das unidades prisionais a maneira da atuação da forma que acharem adequado, respeitando à legislação. Em razão disso, é necessário que os meios de comunicação façam a divulgação sobre a presente temática para que se tenha engajamento sobre o assunto em larga escala, em especial nos sistemas prisionais, porque a conscientização da existência do abandono afetivo, contribui em reformulações no ambiente prisional, seja no tratamento das visitas ou das

apenadas, favorecendo um ambiente ressocializador. Mais do que relação sexual, a visita íntima é um meio de manutenção do laço afetivo com o parceiro, importante tanto para homens quanto para mulheres.

O terceiro fator pauta-se na questão de gênero, assunto discutido anteriormente e que reflete na sociedade e estabelece regras e expectativas do comportamento feminino. A PENFEM fica na avenida Jorge Teixeira em Porto Velho e, apesar de ser localizada em via com grande movimentação, não há sinalização alguma, o que para Alves (2014) aparenta ser intencional essa visibilização. A mulher não tem espaço físico adequado e nem identificação, ela perde a existência e preferem permanecer em silêncio do que serem penalizadas.

Enquanto oprime, invisibiliza e silencia, o Estado estende tal condição à família dessas mulheres, pois acreditamos que ao vitimar uma mulher, vitima-se ao menos uma família. A família permanece presa às normas institucionais, aos horários, à obrigação de contribuir com alimentos e produtos de higiene, a fim de suprir a incapacidade do poder público em assegurar o mínimo de dignidade àquelas que amam (Alves, 2014, p. 248).

Trata-se do machismo invisível e a opressão que ele exala (Castañeda, 2006). Segundo depoimento de uma idosa encarcerada, o ambiente no qual estão inseridas contribui para o sentimento de abandono e revolta:

A cadeia não reeduca ninguém, ela revolta. É muito revoltante o que acontece aqui, a gente vive abandonada. Só de você estar privada de liberdade não é bom, mas aqui é o pior do mundo (Programa Justiça Sem Muros, 2016).

Tanto o peso do discurso de uma sociedade machista, quanto o peso da burocracia que dificulta o contato das apenadas com seus familiares, recaem em todos os sujeitos envolvidos, fortalecendo sua perpetuação na história.

5 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO

A dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico, desdobra-se no direito de família através dos conceitos de solidariedade familiar, afetividade, igualdade entre os filhos e chefia familiar, igualdade entre cônjuges e companheiros, pluralidade familiar, entre outros.

Este princípio carrega sentimentos afetivos no eixo familiar de forma a corroborar com o dispositivo 227 da Constituição Federal de 1988, o qual prevê ser um dever do Estado, da família e da sociedade proporcionar a convivência familiar. Portanto, o Estado não apenas tem o dever de evitar a prática de atos que atentem contra este princípio, mas também assegurar seu cumprimento, oferecendo o mínimo para a existência real da dignidade humana, assegurando a felicidade como direito constitucional.

A positivação da felicidade foi consolidada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275 pelo Supremo Tribunal Federal, quando recebeu característica constitucional. O direito à felicidade é uma maneira de cuidar das feridas sociais, com o objetivo de proteger grupos vulneráveis por meio da proteção de garantias que já deveriam ser respeitadas.

As mulheres encarceradas retratam um grupo vulnerável que tem a necessidades diferentes das masculinas e com características próprias, porém ignoradas. Por mais que o art. 5º da Constituição Federal de 1988 estabeleça igualdade de gênero, esta, aparentemente, não é respeitada no âmbito prisional:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] (Brasil, 1988).

O princípio da dignidade humana funciona como uma ferramenta de parâmetro para todo o ordenamento jurídico, pois, segundo Dias (2007), possui como um de seus ramos, o princípio da solidariedade familiar.

Solidariedade é o que cada um deve ao outro. Esse princípio, que tem origem nos vínculos afetivos,

dispõe de conteúdo ético, pois contém em suas entranhas o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e reciprocidade. [...] em se tratando de crianças e de adolescentes, é atribuído primeiro à família, depois à sociedade e finalmente ao Estado (CF 227) o dever de garantir com absoluta prioridade os direitos inerentes aos cidadãos em formação (Dias, 2007, p. 63).

Dias (2007) mostra que tendo em vista a garantia à convivência familiar, existe uma tendência em buscar o fortalecimento dos vínculos familiares, pois no afeto são construídas as relações entre sujeitos. Levando em consideração a importância da estrutura familiar e de seus vínculos afetivos, é evidente a concepção de que a ausência do afeto pode causar danos irreparáveis.

Nas decisões dos magistrados há a visualização do abandono afetivo como dano moral, que se pauta na indenização pecuniária como forma de reparação dessa lacuna familiar. Este é um tema um tanto polêmico que expõe no âmbito jurídico, de um lado, a industrialização dos danos morais e, de outro, a dificuldade de se negar a indenização, visto que não há como negar a proteção dos direitos da personalidade. Dias (2007) compreende a indenização como possível instrumento pedagógico que pode alterar a configuração social e familiar.

A indenização por abandono afetivo poderá converter-se em instrumento de extrema relevância e importância para a configuração de um direito das famílias mais consentâneo com a contemporaneidade, podendo desempenhar papel pedagógico no seio das relações familiares (Dias, 2007, p. 409).

Os impactos negativos decorrentes do abandono afetivo, são inegáveis. Dentro das penitenciárias femininas a situação é ainda mais agravada, seja pela conversão da mulher-mãe em mulher-presa e o sentimento de culpa que recai sobre esta mulher.

No artigo 3º da Convenção Internacional de Direitos Civis e Políticos, estabelece a seguridade de equidade entre gêneros “os Estados no presente Pacto comprometem-se a assegurar a homens e mulheres igualdade no gozo de todos os direitos civis e políticos enunciados no presente Pacto”.

Ademais, as Regras Mínimas de Padrão da ONU (2015) referente ao Tratamento de presos reforçam o princípio da não-discriminação como princípio fundamental para o Direitos Humanos, definindo que “Estas Regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não deve haver nenhuma discriminação em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, patrimônio, nascimento ou outra condição”.

A equidade de tratamento simples e puro, por si só se faz ineficaz o cumprimento do princípio da não-discriminação, visto que deve se levar em consideração especificidades de cada gênero, e isso, conforme o artigo 5º constante na Carta de Princípios da ONU (1945), não deve ser considerado prática discriminatória.

As medidas legais foram criadas com a finalidade de proteger os direitos de grupos específicos, como mulheres grávidas, lactantes, crianças, jovens, pessoas idosas, doentes ou com deficiências, não deverão ser julgadas discriminatórias. A necessidade e a aplicação de tais medidas sempre estarão sujeitas à revisão por uma autoridade judicial ou outra competente. Ou seja, as medidas devem ser avaliadas e controladas para garantir que sejam aplicadas de maneira justa e de acordo com a lei, sem violar os princípios de igualdade e não discriminação.

Uma jovem apenada, em depoimento ao Programa Justiça Sem Muros (2016), questiona a falta de contato com os familiares:

Eles falam que a gente é reeducanda, reeducanda do que? Eles estão ressocializando a gente aqui de que maneira? Deixando a gente sem ver nossos filhos? Sem ver nossos maridos, sem ver nossa visita? (Programa Justiça Sem Muros, 2016).

É importante esclarecer, através da análise dos dados apresentados até aqui, que existem diversos fatores responsáveis pelo abandono afetivo, no entanto não se deve isentar que responsabilidade é também conferida ao Estado, visto que detém o dever de cumprir a lei e assegurar direitos e garantias fundamentais.

Por também ser responsabilidade do Estado proporcionar a convivência familiar, o abandono afetivo acaba sendo reflexo da burocracia das penitenciárias e, neste cenário, o sentimento de desamparo é ainda mais crítico. De fato, a Constituição Federal de 1988 também estabelece a responsabilidade civil do Estado no que tange a reparação de danos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (Brasil, 1988).

Disserta-se sobre responsabilidade civil do Estado em razão de dano causado a terceiro de maneira que deva repará-lo. A responsabilidade do Estado, refere-se à esfera econômica, uma indenização financeira que resta caracterizada a partir da ação ou omissão deste, responsável pelo dano causado, a menos que o dano seja exclusivamente do prejudicado, trata-se da responsabilidade objetiva do Estado.

De fato, existe o dever de ação do Estado e, portanto, a omissão caracteriza a sua responsabilidade. O sistema prisional feminino não foi projetado para a mulher presa e a situação se permanece inalterável no decorrer dos anos, fazendo com que a prisão acabe se tornando uma punição simples e dura. A omissão do Estado em fazer valer os princípios e a legislação constitucional nas penitenciárias femininas confirmam a existência do dano e a responsabilidade estatal.

A responsabilidade civil do Estado no que tange o surgimento do ambiente que contribui para o abandono afetivo, seja, pela localização geográfica das penitenciárias, quando o acesso se faz difícil pelo fato da família residir no interior do Estado; seja pela constante falta de conhecimento da equipe de gestão local acerca da importância do vínculo familiar que, por sua vez, reproduzem abordagem inadequada no tratamento dos sujeitos envolvidos; seja pela falta de estrutura no edifício, o qual não garante espaços que atendam às necessidades femininas; seja pela conversão da mulher em criminosa, de acordo com o discurso polarizado na sociedade.

É importante analisarmos o contexto no qual as mulheres presas se encontram, de forma que compreendamos que a existência do machismo invisível permeia as relações que as envolvem e contribuem para a

existência do abandono afetivo, cabendo ao Estado protegê-las e fornecer um ambiente ressocializador.

Apesar do tema ser pouco palpável em se tratando de afeto, a discussão é extremamente relevante, visto que estamos em uma sociedade volátil, pautada em princípios neoliberais que favorecem uma postura individualista, que exclui as minorias e tapa os olhos para aquilo que não favorece o mercado internacional. Portanto, este artigo tem por finalidade estigar com que a sociedade passe a enxergar a sociedade feminina apenas, bem como suas necessidades e seus direitos sejam atendidos.

O Estado detém a competência de fazer valer o objetivo do encarceramento a partir da promoção de espaços que diminuam a reprodução de práticas machistas que excluem o gênero feminino, de forma que o respeito ao direito da mulher encarcerada pelo Estado, seja exemplo para a promoção de conscientização em toda esfera social, a compreender que os direitos individuais não possuem força para serem respeitados sem respeito aos direitos coletivos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante o exposto, é possível observar a existência do abandono afetivo nas instituições penitenciárias femininas no âmbito nacional e, especialmente, em Rondônia, que por sua vez ultrapassa as barreiras familiares e resulta na desvalorização das mulheres encarceradas pelo próprio Estado, por meio da análise dos dados apresentados pelo Projeto Justiça Sem Muros (2016), DEPEN (2017) e a pesquisa de Alves (2018) sobre a PENFEN.

Consequentemente, as mulheres apenas têm sentimento de revolta, raiva e isolamento, implantando na sociedade a falta de esperança de um sistema carcerário que ressocialize, que traga o sujeito preso de volta à convivência social, consciente de seus atos e seguro de que encontrará no seio familiar a força de enfrentar os obstáculos ao longo da vida.

Embora o papel da mulher em sociedade é pautado em estigmas culturais que corroboram para o seu desamparo, tanto por parte Estado, quanto por parte dos familiares, a conversão da mãe em mãe-criminosa é instantânea e cruel.

O Estado por sua vez, necessita desenvolver espaços que viabilizem a visitas de familiares às apenas, bem como, propiciar espaços para que estas sejam escutadas. Mais que criação de leis em defesa desse grupo vulnerável, é preciso que a finalidade da norma seja cumprida, a fim de que demandas das mulheres encarceradas sejam

atendidas, por meio de espaços que atendam necessidades específicas e programas que favoreçam o contato entre os familiares e as apenadas, para que não se perpetue o abandono afetivo e sejam minorizados os efeitos do machismo invisível.

REFERÊNCIAS

ALVES, H. V. S. Quem são as mulheres encarceradas na penitenciária estadual feminina de Rondônia? Uma análise de gênero sobre o perfil da população carcerária feminina. **Revista Formação**, v. 25, n. 45, p. 231-250, 2018. Disponível em:

<https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/5255/4517>. Acesso em: 10 out. 2022.

BAUMAN, Z. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [1988]. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 16 jun. 2023.

BRASIL. **Pacto Internacional sobre Direitos Civil e Políticos**. Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992. Brasília: Congresso Nacional, 1992.

BRASIL. Palestrantes apontam dificuldades enfrentadas por mulheres encarceradas. **Senado Notícias**. Brasília, DF: Senado Federal, 2018. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/11/29/palestrantes-apontam-dificuldades-enfrentadas-por-mulheres-encarceradas>. Acesso em: 15 out. 2022.

BRASIL. Relatório temático sobre mulheres privadas de liberdade- junho de 2017. **Ministério da Justiça e Segurança Pública**. Brasília: 2017. Disponível em:

<http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/Infopenmulheresjunho2017.pdf/view>. Acesso em: out. 2022.

CASTAÑEDA, M. **O machismo invisível**. São Paulo: A Girafa Editora, 2006.

DIOF. Portaria n.º 1061/GAB/SEJUS. **Diário Oficial do Estado de Rondônia**, 2015. p. 38-49. Disponível em: http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2015/12/Doe-_29_12_20152.pdf. Acesso em: out. 2022.

DIOESP. Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, Resolução 96. **Diário Oficial do Estado de São Paulo**: 2010. Disponível em: <https://sindespe.org.br/portal/wp-content/uploads/2016/05/regimento-interno.pdf>. Acesso em: out. 2022.

DIAS, M. B. **Manual de direito das famílias**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

DIAS, M. B. **União homoafetiva**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006.

DPESP, Defensoria Pública do Estado de São Paulo. **Política de Atendimento Mães em cárcere**. São Paulo: 2014. Disponível em: <http://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/1174.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. 42. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

FOUCAULT, Michel. **A ordem do discurso**. 21. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011.

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. **Novo Curso de Direito Civil**. Responsabilidade Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. **Novo curso de Direito Civil: direito de família**. As famílias em perspectiva constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014.

GARCIA, J. Mulheres presas são abandonadas e julgadas pela sociedade. Entrevista com Kenarik Boujikian. **UOL Notícias**, São Paulo, 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/03/01/mulheres-presas-sao-abandonadas-por-completo-diz-magistrada-do-tj-sp.htm>. Acesso em: 10 out. 2022.

ITTC, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Quem são essas mulheres. Alternativas ao encarceramento. **Programa Justiça Sem Muros** [online]. São Paulo: 2016. Disponível em: <http://mulheresemprisao.org.br/depoimentos/>. Acesso em: out. 2022.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Carta de Princípios da ONU**. Paris: 1945. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/carta/>. Acesso em: out. 2022.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Paris: 1948. ONU. Organização das Nações Unidas. UNODC. Regras Mínimas de Padrão da ONU sobre o Tratamento de Presos (Regras de Nelson Mandela). Viena, Áustria: 2015. E-book. Disponível em: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf. Acesso em: out. 2022.

NUCCI, G. S. **Manual de Processo Penal e Execução Penal**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.

PEREIRA, M. M. O direito à visita íntima no sistema prisional brasileiro: história, relativização, controvérsias e efeitos. **Direito Net**, 26 jun. 2012. Disponível em: <https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7280/O-direito-a-visita-intima-no-sistemaprisional-brasileiro-historia-relativizacao-controversias-e-efeitos>. Acesso em: out. 2022.

PEREIRA, R. C. Princípio da afetividade. *In*: DIAS, M. B. **Diversidade sexual e direito homoafetivo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 193- 197.

VARELLA, D. O abandono é a principal diferença entre mulheres e homens na cadeia. **G1**, 12 jul. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/abandono-e-a-principal-diferenca-entre-mulheres-e-homens-na-cadeia-diz-drauzio-varella.ghtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

A INVISIBILIDADE DAS MULHERES PESCADORAS E O RECEBIMENTO DO SEGURO- DEFESO EM SILVIA FEDERICI

THE INVISIBILITY OF FISHING WOMEN AND THE RECEIPT OF DEFENSE INSURANCE IN SILVIA FEDERICI

Kaio Figueiredo Salvador⁴⁰
Isabella Pozza Gonçalves⁴¹

Resumo

O trabalho investiga as dificuldades encontradas pelas mulheres pescadoras no recebimento do seguro-defeso, a partir de pesquisa qualitativa orientada por análise documental da legislação pertinente ao tema e de revisão bibliográfica, sobretudo em leitura da feminista italiana Silvia Federici (2017). O benefício é concedido aos pescadores em geral na época em que a pesca não é permitida para garantir a reprodução das espécies marinhas sem interferência humana. A desproteção social tornou-se ainda mais severa após a Lei n. 13.134/2015, que excluiu as atividades de “apoio à pesca”, geralmente designadas às mulheres, do recebimento do seguro-defeso. Diante disso, o Estado assume a postura do reconhecimento do trabalho das mulheres como um “não trabalho” e promove a desigualdade de gênero na distribuição de políticas públicas.

Palavras-chave: Seguro-defeso, trabalho doméstico, gênero.

Abstract

The work investigates the difficulties encountered by women fishermen in understanding defense insurance, based on qualitative research guided by documentary analysis of the legislation relevant to the topic and a bibliographic review, especially in reading by the Italian feminist Silvia Federici (2017). The benefit is granted to fishermen in general at times when fishing is not permitted to guarantee the reproduction of marine species without human interference. Social lack of protection became even more severe after Law n. 13.134/2015, which

⁴⁰ Graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. E-mail: kaio.fs@hotmail.com

⁴¹ Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG. E-mail: isabella.pozza01@gmail.com

excluded “fishing support” activities, generally designated for women, from the scope of defense insurance. In view of this, the State takes the stance of recognizing women's work as “non-work” and promotes gender inequality in the distribution of public policies.

Keywords: Defense insurance, domestic work, gender.

1 INTRODUÇÃO

O seguro-defeso é um importante instrumento de promoção da justiça socioambiental, equivalente ao seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo para as pescadoras artesanais. Portanto, configura “um auxílio financeiro temporário fornecido aos(às) pescadores(as) artesanais no período de defeso, ou seja, interim destinado à reprodução das espécies marinhas e aquáticas, previsto no art. 7º, inciso II, da Constituição Federal de 1988” (Mendes; Monteiro; Costa, 2018, p. 24).

Contudo, a licença ambiental se encontra, na maioria dos casos, com os homens, já que as mulheres exercem atividades fora do mar, como a evisceração do pescado e o conserto das redes de pesca, o que é usado para justificar o não reconhecimento das mulheres como pescadoras artesanais perante o INSS, resultando na dificuldade do recebimento do seguro-defeso para as mulheres e na falta de reconhecimento político do ofício, entendido pelo Estado como um “não trabalho”. A desproteção tornou-se ainda mais severa após a Lei nº 13.134, de 2015, que excluiu as atividades de “apoio à pesca”, geralmente designadas às mulheres, do recebimento do benefício e até mesmo da inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira - RGP.

Na Lagoa dos Patos, conforme investigado por Mendes, Monteiro e Costa (2018), a negação dos direitos das pescadoras ao recebimento do seguro defeso no município de Rio Grande/RS em 2012 foi enfrentada pela Ação Civil Pública n.º 5002559-10.2012.4.04.7101, de iniciativa da Procuradora da República Anelise Becker, com vistas ao restabelecimento do benefício, que foi julgada procedente à época.

Portanto, o Estado brasileiro legisla em favor da desvalorização do trabalho doméstico das pescadoras. Em uma perspectiva histórica, podemos dizer que a consideração do trabalho desenvolvido pelas mulheres no espaço doméstico é reduzido ao “não trabalho” como parte do desenvolvimento do Estado capitalista, ainda que seja destinado à produção de itens comercializáveis, como a pesca, tendo em vista que o capitalismo impôs às mulheres a função de reprodução de trabalhadores, excluindo-as do mercado de trabalho e controlando a natalidade feminina

através da repressão estatal e da proibição das práticas abortivas, comuns até a Idade Média.

A autora Silvia Federici (2017) aduz sabiamente em sua obra “Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva”, que a exclusão da mulher no mercado de trabalho é o resultado de uma construção histórica, pois as mulheres foram reduzidas a função sexual, onde seu único papel era criar filhos para dar continuidade ao Estado. Nesse ínterim, a única atividade permitida além da reprodução era o labor que poderia auxiliar o marido.

Assim, se uma mulher costurava algumas roupas, tratava-se de “trabalho doméstico” ou de “tarefas de dona de casa”, mesmo se as roupas não eram para a família, enquanto quando um homem fazia o mesmo trabalho, se considerava como “produtivo”. A desvalorização do trabalho feminino era tal que os governos das cidades ordenaram às guildas que ignorassem a produção que as mulheres (especialmente as viúvas) realizavam em suas casas, por não se tratar realmente de trabalho, e porque as mulheres precisavam dessa produção para não depender da assistência pública (Federici, 2017, p. 182).

Nessa toada, todo o esforço feminino era reduzido ao trabalho doméstico, não valorizado, pois quando precisam exercer atividade externa ao âmbito familiar, era submetida a uma baixa remuneração, a qual não custeava condições mínimas de subsistência. Assim, se o trabalho do conserto de redes de pesca ou evisceração do peixe fosse realizado por homens em uma linha de produção industrial, seria reconhecido como uma forma de trabalho digna de proteção da legislação trabalhista, mas, ao revés, o mesmo trabalho desenvolvido pelas mulheres em seus lares, é um “não trabalho”.

A pesquisa qualitativa é orientada a partir da análise documental da legislação pertinente ao tema e de revisão bibliográfica, sobretudo em Mendes, Monteiro e Costa (2018) e Silvia Federici (2017). Faz-se a análise da legislação vigente que regulamenta a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP e da jurisprudência do Tribunal Federal da 4ª Região, de onde infere-se que há uma exclusão sistemática do trabalho feminino, conforme é demonstrada por Mendes, Monteiro e Costa (2018), que abordam o não recebimento do benefício pelas mulheres pescadoras em Rio Grande/RS.

2 DESENVOLVIMENTO

O seguro defeso surgiu como política pública em 1990 para dar efetividade ao texto constitucional que havia sido recentemente aprovado após um processo de redemocratização do país e para fornecer uma resposta específica aos problemas dos trabalhadores da pesca artesanal, em uma espécie de “seguro-desemprego” no período de defeso, época que o IBAMA define como estratégica para a reprodução dos animais marinhos e que, por essa razão, a pesca fica temporariamente proibida, impedindo que os pescadores exerçam sua profissão e retirem dela a sua forma de sustento.

A Constituição de 1988 já previa direitos previdenciários aos pescadores artesanais no seu artigo 195, §8º, determinando que estão incluídos no Regime Geral de Previdência Especial e que sua colaboração é favorecida, assim como no artigo 201, §7º, II, onde o constituinte previu a idade para a aposentadoria deste grupo de forma privilegiada. Assim, o pescador artesanal passa a ser considerado segurado especial para fins previdenciários, já que “labora essencialmente para a subsistência – e não para a geração de excedente direcionado ao mercado –, por meio da mútua colaboração dos membros de seu grupo familiar, com o uso apenas eventual de trabalho de terceiros” (Campos; Chaves; 2014, p. 9).

Da mesma forma, o seguro defeso surgiu para dar efetividade ao artigo 225 da Constituição de 1988, que define que o meio ambiente equilibrado é “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” e sua preservação é dever do Estado e da coletividade. O estabelecimento de um período de interrupção temporária da atividade pesqueira, para garantir a reprodução das espécies em níveis adequados para o equilíbrio ecológico e até mesmo para a continuidade da pesca, faz jus ao princípio da prevenção, pois se antecipa à ocorrência de um dano ambiental de difícil reparação, com certa previsibilidade e através da intervenção estatal.

A prevenção é indispensável ao sistema de proteção ambiental porque os danos causados ao meio ambiente são, por vezes, irreparáveis, ainda que haja o emprego de alta tecnologia ou o alocamento de grandes recursos financeiros, causando um prejuízo que se prolonga indefinidamente. Assim, “não se podem mensurar os prejuízos da extinção de uma espécie, da desertificação de áreas produtivas, ou da destruição de uma floresta repleta de ecossistemas plurais” (Medeiros, 2013, p. 82).

Dessa forma, a instituição do seguro-defeso como política pública atende a uma função dúplex: por um lado, garante a subsistência mínima do trabalhador que exerce a profissão de pesca artesanal, e, por outro, diminui as chances de o trabalhador infringir a lei ambiental em decorrência da sua situação de vulnerabilidade econômica, possibilitando a continuidade do regular ciclo de vida das espécies marinhas.

A primeira legislação que regulamentou o tema foi a lei n. 8.287/1991, que definiu o seguro-defeso como uma espécie de seguro-desemprego e determinava que o trabalhador deveria demonstrar o exercício ininterrupto da atividade por, no mínimo, três anos através do Registro Geral da Pesca (RGP) e de atestado da colônia de pescadores. Posteriormente, o seguro-defeso foi regulado pela Lei n. 10.779/2003, que diminuiu de três para um ano o tempo de atividade profissional mínima, a Resolução CODEFAT no 468/2005, a Lei n. 11.959/2009, a Resolução CODEFAT no 657/2010 e a Instrução Normativa no 1/2011, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE). A legislação pertinente ao benefício se alterou de modo a ampliar seu acesso, em alguns casos, e de restringi-lo, em outros.

A lei n. 11.959/2009 não tratou do seguro-defeso explicitamente, mas desenhou a definição jurídica de institutos relativos à pesca. A referida lei define o defeso como “a paralisação temporária da pesca para a preservação da espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou recrutamento, bem como paralisações causadas por fenômenos naturais ou acidentes” e definiu de forma ampla a atividade pesqueira em seu art. 4º, parágrafo único, abrangendo os trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca, os reparos realizados em embarcações de pequeno porte e o processamento do produto da pesca artesanal.

Já a resolução 657/2010 restringe este entendimento, determinando que o período de defeso será definido pelo Ministério do Meio Ambiente e que a pesca é definida como a captura, para fim comercial, da espécie objeto do defeso. Assim, retira o reparo dos petrechos de pesca, atividade comumente desenvolvida pelas mulheres, do exercício profissional da pesca.

Além disso, a licença ambiental exigida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para a concessão do benefício está comumente associada ao nome do homem, em sociedades conjugais que atuam em cooperação na atividade pesqueira. A desproteção social das mulheres aumenta o seu grau de dependência e torna esse núcleo familiar mais vulnerável e empobrecido. Salienta-se que a relação do pescador com o ecossistema local é, para além de profissão, uma relação de identidade cultural e social, além da construção de técnicas e conhecimentos

tradicionais que constituem patrimônio imaterial a ser protegido, não devendo o Estado forçar o pescador a retirar-se da atividade pela incapacidade do Poder Público em garantir o mínimo existencial.

São pescadores, possuidores de uma complexa relação existente entre a profissão exercida e a apropriação da temática ambiental. Sujeitos de sua própria construção multi-identitária, cujo exercício do trabalho extrapola a definição de atividade produtiva e passa a se configurar como modo de vida, integrando-se à subjetividade individual e configurando-se como cultura (Codes; Barzano; 2014, p. 247).

Na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, a Procuradora da República Anelise Becker desenvolveu pesquisa que se tornou referência para tratar da questão de gênero na distribuição do seguro-defeso, trazendo luz à realidade vivenciada no exercício da pesca no estuário da Lagoa dos Patos. Tem-se que, até 2010, quando houve mudança de entendimento, o Ministério do Trabalho e Emprego havia pago indistintamente aos homens e mulheres o benefício do seguro-defeso, com base nas atividades desenvolvidas em terra e em alto-mar para a comercialização do pescado.

Contudo, o entendimento equivocado assumido em 2010 pela União, sintetizado na resolução 657/2010, restringiu a pesca à atividade de captura do pescado, geralmente atribuída aos homens, enquanto marginalizou a atividade geralmente atribuída às mulheres, qual seja, do conserto do pescado e da confecção das redes de pesca em ambiente doméstico, ao “não trabalho”. O entendimento vem de uma interpretação errônea da Lei n. 10.779/2003 e interrompeu o pagamento do benefício às mulheres da comunidade pesqueira de Rio Grande/RS.

Além da definição jurídica restritiva, que demonstra um desconhecimento do setor produtivo pela União, os requisitos estabelecidos pela resolução 657/2010 para a concessão do benefício são documentais e a dificuldade em reunir toda a documentação necessária afasta os indivíduos mais pobres desse direito. A União passou a exigir, entre estes documentos, a licença ambiental emitida pelo IBAMA e relacionar o título individual da licença à concessão do benefício.

Segundo Anelise Becker, com relação às mulheres pescadoras, o “benefício deve-se dar com base na comprovação do exercício, por elas, de atividade econômica em tal regime e, pois, independentemente da

apresentação de licença ambiental de pesca em nome próprio” (Becker, 2013, pp. 52-53). Em relação ao perfil dos beneficiários, Becker (2013) menciona perícia realizada pelo analista pericial em Antropologia Marco Paulo Fróes Schettino, vinculado à 6 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF em Rio Grande/RS e São José do Norte/RS.

Para o perito, a atividade da pesca se desenvolve em uma economia comunitária e familiar, relacionada com o seu território, sendo que sua interrupção afeta a sobrevivência de toda a coletividade e a fragmentação da força de trabalho em indivíduos isolados demonstra desconhecimento da sua forma de vida. São, portanto, povos tradicionais detentores de saberes ancestrais que estão à margem da produção acadêmica e que devem ser protegidos pelo Estado. A sociedade conjugal atua em cooperação para atingir os objetivos comerciais, de forma a complementar a atividade do parceiro(a) e por isso é equivocada o entendimento da União por individualizar e separar o trabalho masculino e o “não trabalho” feminino realizado em terra.

A compreensão de tais atividades como “ajuda” é evidente no caso das mulheres envolvidas na pesca artesanal, cujas atividades produtivas misturam-se com as tarefas domésticas, sendo muitas vezes levadas a cabo concomitantemente – assim, a coleta de mariscos, o cuidado dos filhos, o reparo de redes, o preparo das refeições e a evisceração do peixe aparecem todas, indistintamente, como atividades associadas ao cuidado da casa e da família. A literatura existente acerca das relações de gênero na pesca evidencia a invisibilidade do trabalho das mulheres e suas precárias condições de vida; ademais, enfatiza como, historicamente, não se tem assegurado às mulheres os mesmos direitos de que gozam os homens (Becker, 2013, p. 71-72).

Outro documento de imprescindível análise para compreender o perfil do beneficiário do seguro-defeso no estuário da Lagoa dos Patos é o “Censo da Pesca Artesanal”, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em parceria com Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) no ano de 2010. Na ocasião, 80% dos pescadores entrevistados afirmaram receber o seguro-defeso e em 1/3 dos casos a mulher também recebe e o seu não recebimento afetaria de forma grave a subsistência do núcleo familiar.

O perito reforça que as atividades de manutenção, beneficiamento, captura e comercialização dependem uma das outras e não podem existir isoladamente. A quebra de uma das etapas da cadeia produtiva traz prejuízo para toda a comunidade, pois impede a manutenção profissional da pesca. Sobre a renda média do grupo, “é em geral baixa, mesmo em safras boas, e pode cair a níveis próximos à linha da pobreza em safras ruins” (Becker, 2013, p. 57).

Diante do não recebimento do benefício para as mulheres da comunidade, o Ministério Público Federal, sob o nº 5002559-10.2012.4.04.7101, promoveu Ação Civil Pública com o objetivo de restabelecer o pagamento. A ação pediu para que o INSS deferisse os pedidos de seguro-defeso destas mulheres e que a exigência da licença ambiental seja relativizada, propondo que seja aceita a licença do marido, tendo em vista o caráter familiar e comunitário da pesca artesanal.

Felizmente, o juízo compreendeu que o entendimento da União excluía as mulheres e essa interpretação afrontava os dispositivos da Constituição Federal. Assim, em decisão liminar, “reconheceu o defeso como hipótese de desemprego involuntário, consignou a relevância do trabalho da mulher, na medida em que influencia diretamente na produtividade do grupo familiar (que, de outra forma, deveria providenciar a contratação de terceiros)” (Becker, 2013, p. 88). O entendimento foi reafirmado na sentença, que julgou procedentes os pedidos da inicial, e, posteriormente, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a sentença.

Contudo, a decisão só traz efeitos jurídicos nos limites geográficos da jurisdição local, ou seja, só garante o recebimento em Rio Grande/RS e São José do Norte/RS, mas não a nível nacional. Desde então, a União não mudou o seu entendimento da matéria e, pelo contrário, solidificou um entendimento restritivo através da lei 13.134/2015, que altera a nº 10.779/2003 definindo que “a concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei.”

A exclusão sistemática do trabalho feminino, mormente realizado em ambiente doméstico, do recebimento de um salário, é uma estratégia do patriarcado para garantir a submissão e dependência das mulheres, reduzidas ao seu papel de reprodução da nova força de trabalho. A gênese dessa desqualificação do trabalho feminino tem relação com o desenvolvimento do Estado capitalista e é estudado pela feminista italiana Silvia Federici em suas obras “Calibã e a bruxa: Mulheres, corpo e acumulação primitiva” (2017), “O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista” (2019) e “O patriarcado do

salário: Notas sobre Marx, gênero e feminismo” (2021), nas quais constrói uma análise histórica da relação entre trabalho e desigualdade de gênero, além de analisar obras de Karl Marx e Michel Foucault.

Para Federici (2017), o salário é a moeda de troca do modelo capitalista e é a partir dele que se constroem algumas lutas sociais por salários mais justos e melhores condições de trabalho. Assim, “fica evidente que o capital domina e se expande através e por meio do salário” (Federici, 2021, p. 23). Contudo, ficam à margem dessas lutas os trabalhadores e trabalhadoras que não recebem salário, pois o não recebimento de uma remuneração os torna invisíveis, até mesmo para os autores da esquerda.

O movimento marxista tradicional delineou que o salário separa o trabalho produtivo e improdutivo e elegeu alguns trabalhadores como agentes revolucionários, colocando à margem a figura da dona de casa, pressupondo que elas estão em uma espécie de estágio “pré-capitalista”. Por vezes, a sugestão deste grupo para as mulheres é “levá-las às fábricas”, ou seja, inseri-las em uma dupla jornada de trabalho, uma remunerada e outra não, sem liberá-las do trabalho doméstico e as levando à exaustão. Nesse sentido, Federici (2017) se apropria dos estudos de Marx para analisar o sistema capitalista, mas elabora críticas ao pensamento marxista e seus apoiadores por marginalizar as mulheres do debate econômico.

Em uma perspectiva histórica, Federici (2017) afirma que, apesar da submissão de todos os servos aos seus senhores, na Idade Média as mulheres trabalhavam nos campos e em casa, sem que houvesse uma hierarquia entre os dois tipos de trabalhos e o trabalho dos servos homens, já que a subsistência se dava a partir de uma economia familiar, em atividades complementares. Após a monetização da economia, o êxodo rural e o surgimento das primeiras cidades medievais, algumas mulheres que foram para a cidade começaram a trabalhar em profissões antes exercidas por homens, como ferreiras, açougueiras, comerciantes, entre outros.

Ainda assim, havia uma submissão feminina, principalmente relacionada com o regime de servidão dos camponeses, mas o início de uma economia capitalista transformou as relações sociais e a divisão sexual do trabalho. A colonização e as pestes que assolavam a Europa fizeram diminuir a população do continente e isso levaria a uma crise econômica. Essa taxa de mortalidade afetou sobretudo a população mais pobre, porque “em geral, não foram os ricos que morreram quando as pragas ou a varíola arrasaram as cidades, mas os artesãos, os trabalhadores e os vagabundos” (Federici, 2017, p. 168). Para possibilitar

o desenvolvimento capitalista, era preciso incentivar a alta natalidade, para criar uma massa de trabalhadores e consumidores e expandir os lucros.

A população mais pobre resistia às investidas do clero para incentivar a natalidade pelo custo alto de ter mais filhos, o que pesaria sobre a sobrevivência do núcleo familiar. Além disso, era comum que as mulheres conhecessem de técnicas de controle de natalidade e até mesmo a prática de infanticídio, o que passava despercebido pela sociedade em geral, pois não havia uma preocupação tão grande em relação a esse aspecto.

Contudo, o desenvolvimento do mercantilismo mudou o entendimento da igreja, que passou a aumentar o controle moral sobre o corpo das mulheres, condenar a contracepção, o aborto e o infanticídio, e perseguir as mulheres pagãs que detinham o conhecimento das práticas abortivas, o que ficou conhecido como “caça às bruxas”. Além disso, as mulheres parteiras, que até então cuidavam de outras mulheres no momento do parto, passaram à margem da prática médica, que realocou os homens como responsáveis por garantir o nascimento da criança, por vezes colocando o feto sobrevalorizado em relação à vida e saúde da mãe. Assim, “mulheres perderam o controle que haviam exercido sobre a procriação, sendo reduzidas a um papel passivo no parto, enquanto os médicos homens passaram a ser considerados como “aqueles que realmente davam vida” (Federici, 2017, p. 177).

A cruzada religiosa de controle do corpo feminino levou as mulheres à saída do mercado de trabalho “fora de casa”, pois era importante que se dedicassem ao cuidado dos filhos, da casa e à reprodução, o que foi reforçado pela doutrina protestante posteriormente, e à desvalorização do trabalho doméstico, compreendido como um “não trabalho” sem remuneração, criando uma hierarquia na divisão sexual do trabalho.

A capacidade reprodutiva das mulheres foi utilizada para garantir as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Enquanto isso, o tempo e esforço utilizado para as inúmeras atividades domésticas foi “poupado” aos homens trabalhadores, que puderam dedicar seu tempo à sua profissão, seja trabalhando mais horas ou melhorando suas habilidades, ao passo em que as mulheres tornavam-se dependentes deste salário, aumentando a desigualdade entre homens e mulheres.

Ganhava espaço (no direito, nos registros de impostos, nas ordenações das guildas) a suposição

de que as mulheres não deviam trabalhar fora de casa e de que tinham apenas que participar na “produção” para ajudar seus maridos. Dizia-se até mesmo que qualquer trabalho feito por mulheres em sua casa era “não trabalho” e não possuía valor, mesmo quando voltado para o mercado (Wiesner, 1993, p. 83 e segs.). Assim, se uma mulher costurava algumas roupas, tratava-se de “trabalho doméstico” ou de “tarefas de dona de casa”, mesmo se as roupas não eram para a família, enquanto, quando um homem fazia o mesmo trabalho, se considerava como “produtivo”. A desvalorização do trabalho feminino era tal que os governos das cidades ordenaram às guildas que ignorassem a produção que as mulheres (especialmente as viúvas) realizavam em suas casas (Federici, 2017, p. 183).

Tal historicidade não pode ser universalizada, sob pena de erro grosseiro da análise histórica, tendo em vista que o Brasil foi construído através da exploração do trabalho escravo e do genocídio de homens e mulheres indígenas. Às mulheres negras foi imposto o trabalho forçado sob o regime escravista e, após a abolição da escravatura, ao subemprego mal-pago e à dupla jornada de trabalho, especialmente realizando os serviços domésticos para as mulheres brancas nas casas de classe média, além dos seus próprios. Nem todas as mulheres brasileiras queixavam-se das mesmas opressões.

Enquanto os homens negros sofriam a opressão do racismo e as mulheres brancas, a do sexismo, as mulheres negras eram atravessadas pelas duas violências simultaneamente. Para Bell Hooks, “embora muitas desejassem ser donas de casa, apenas as que tinham tempo livre e dinheiro realmente podiam moldar suas identidades segundo o modelo da mística feminina” (Hooks, 2015, pp. 194-195). A crítica do feminismo negro ao feminismo branco e hegemônico ficou marcado pelo discurso de Sojourner Truth em conferência de mulheres em Ohio, em 1852, onde disse:

Eu lavrei, plantei e colhi para os celeiros e nenhum homem podia ajudar-me – e não sou eu uma mulher? Eu posso trabalhar tanto quanto qualquer homem (quando eu puder fazê-lo) e ser chicoteada também – e não sou eu uma mulher? Eu dei à luz cinco crianças e vi todas serem vendidas para a

escravatura e quando chorei a minha dor de mãe, ninguém senão Jesus ouviu – e não sou eu uma mulher?” (Truth *apud* HookS, 2014, p. 115).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desqualificação do trabalho das pescadoras artesanais e o rebaixamento a um status de “não trabalho”, indigno de proteção do Estado, está intrinsecamente relacionado ao ambiente em que a atividade é exercida. Enquanto os homens pescadores vão a alto mar capturar o pescado nas embarcações, as mulheres trabalham em suas casas, mesclando atividades de cuidado doméstico com atividades da linha de produção da pesca, indispensáveis para alcançar o resultado final da comercialização e que, se ausentes, paralisariam toda a produção.

A escolha da União por exigir a licença ambiental do IBAMA, mormente em posse da pessoa encarregada pela captura do pescado e relativa ao número de pessoas embarcadas, demonstra que o Estado brasileiro reflete o pensamento patriarcal construído através dos séculos e trazido e imposto ao Brasil pelas caravelas portuguesas que aqui desembarcaram. Federici (2017) traz luz ao caso porque sua análise econômica e social transborda os limites do marxismo tradicional e enxerga que a mulher, ao não receber salário, que é a moeda de troca das lutas sociais, pelo trabalho doméstico, também é explorada pelo capitalismo.

Além de ser invisibilizada pelos movimentos sociais, também o Estado não as reconhece como classe trabalhadora e, ao formular e distribuir políticas públicas de redução da extrema pobreza, não as enxerga. O excelente trabalho da procuradora Anelise Becker, que com afinco e competência logrou êxito em garantir judicialmente o pagamento para as mulheres do estuário da Lagoa dos Patos, não obsta o fato de que a decisão teve alcance local e restrito às cidades de Rio Grande/RS e São José do Norte/RS e a União não reformou seu entendimento a nível nacional, mantendo a exclusão sistemática das mulheres do programa do seguro-defeso.

REFERÊNCIAS

BECKER, A. Seguro-defeso e pescadoras artesanais: o caso do estuário da Lagoa dos Patos. **Boletim Científico Esmпу**, Brasília, n. 41, p. 45-91, dez. 2013.

CAMPOS, A. G.; CHAVES, J. V. Seguro Defeso: problemas enfrentados pelo programa. **Boletim Mercado de Trabalho**, Brasília, n. 56, p. 77-84, fev. 2014.

CODES, D. H. C.; BARZANO, M. A. L. Me criei no mar, em cima do mar: pescadores, narrativas e fotografias em São Francisco do Conde-BA. **Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, Rio Grande, v. 2, n. 31, p. 243-259, jun. 2014.

FEDERICI, S. **Calibã e a bruxa**: Mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo: Elefante, 2017.

FEDERICI, S. **O ponto zero da revolução**: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. São Paulo: Elefante, 2019.

FEDERICI, S. **O patriarcado do salário**: Notas sobre Marx, gênero e feminismo. São Paulo: Elefante, 2021.

HOOKS, B. **E eu não sou uma mulher?** Mulheres negras e feminismo. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2014.

HOOKS, B. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. **Revista Brasileira de Ciências Políticas**, Brasília, v. 16, n. 1, p. 193-210, jan. 2015.

MEDEIROS, L. P. O princípio da prevenção sob o enfoque ambiental e da saúde: um imperativo sociodemocrático. **Revista Universitas Jus**, Brasília, v. 24, n. 1, p. 79-88, jan. 2013.

MENDES, B. L.; MONTEIRO, N. I.; COSTA, J. R. C. Gênero, pesca e meio ambiente: As pescadoras artesanais da Laguna dos Patos e a justiça ambiental no percebimento do seguro defeso. **Revista Gepesvida**, São José, v. 4, n. 8, p. 14-29, jan. 2018.

COMPLIANCE: NOVA FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS E EFETIVO PROPULSOR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES

COMPLIANCE: THE NEW CLASH PREVENTION TOOL AND EFFECTIVE PROPELLING METHOD OF LABORER'S FUNDAMENTAL RIGHTS

Janáína Tôrres Esteves⁴²

Resumo

o presente trabalho evidencia que o *compliance* é uma eficaz ferramenta de prevenção de conflitos e propulsor dos direitos fundamentais inerentes aos trabalhadores, gerando benefícios para as organizações do setor público e privado, bem como para os trabalhadores. O *compliance*, constituído em políticas e procedimentos internos de prevenção e redução de conflitos, corrobora para construção de uma cultura organizacional ética e com responsabilidade social, mitigando as demandas judiciais e a alta litigiosidade perante o Poder Judiciário. Baseado em uma metodologia de pesquisa bibliográfica, pautada na análise crítica da doutrina e da legislação sobre a matéria, conclui-se que os efeitos positivos da implantação de um programa de *compliance* refletem nas organizações e, especialmente, na vida dos trabalhadores, vez que garante o cumprimento das leis e regulamentos (agir em conformidade), mas sobretudo, promove o amparo à dignidade e aos direitos fundamentais dos trabalhadores constantes no ordenamento jurídico vigente, fomentando um ambiente laboral digno regido pelas boas práticas.

Palavra-chave: *Compliance*. Prevenção. Conflitos. Direitos Fundamentais.

Abstract

The present paper aims to demonstrate that compliance is an effective tool for preventing clash and it is a propelling method of

⁴² Professora e Advogada. Mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - FDUC (2012). Pós-Graduada em Direitos Humanos e Democracia pelo *Ius Gentium Conimbrigae*, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - FDUC (2010). Pós-Graduada em Direito e Compliance Trabalhista e em Direito Previdenciário e Prática Processual - Regime Geral de Previdência pelo Instituto de Estudos Previdenciários - IEPREV (2021). Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória - FDV (2009).

the fundamental rights, inherent to workers, providing benefits for public and private organizations as well as to the employees. Compliance, based on internal policies and procedures for prevention and reduction of clash, corroborates the construction of an ethical and socially responsible organizational culture, decreasing judicial demands and high litigation before the judiciary. Based on a methodology of bibliographic research, centered on the critical analysis of the doctrine and legislation on the matter, therefore, the positive effects of implementing a compliance program are reflected in organizations and specially, in the lives of the workers, since it guarantees compliance with the laws and regulations (acting in accordance) but, above all, it promotes the dignity and fundamental rights of workforce according to the current legal system promoting a decent work environment governed by good practices.

Keywords: Compliance. Prevention. Clash. Fundamental Rights.

1 INTRODUÇÃO

É notório que, o compliance alcança expressiva relevância no cenário nacional e internacional no processo de gestão das organizações do setor público e privado.

No Brasil, o compliance revela-se como uma nova perspectiva, notadamente, no âmbito trabalhista, eclodindo com base na prevenção e redução de conflitos na atividade organizacional.

Registra-se que, diante dos recentes acontecimentos divulgados nos meios de comunicação do país acerca das organizações, envolvendo graves violações às legislações constantes no ordenamento jurídico vigente, especialmente, no que tange aos direitos dos trabalhadores, bem como os crescentes escândalos de corrupção, o agir em conformidade (compliance) propaga a necessidade da construção de uma cultura organizacional pautada na ética e na responsabilidade social, ou melhor, uma política de boas-práticas, a fim de extirpar com todas as chagas decorrentes do agir em desconformidade. É nesse contexto, que sobressai o compliance, como ferramenta de prevenção de conflitos e efetivo propulsor dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

O presente trabalho visa analisar os reflexos positivos que a implementação de um programa de compliance pode gerar para as organizações e, também, para os trabalhadores, mitigando conflitos, ilícitos e riscos inerentes à atividade organizacional.

Inicialmente, para melhor elucidação da temática, conceitua-se o termo compliance, pontuando os objetivos gerais inerentes ao programa.

Outrossim, demonstra-se os benefícios em prol das organizações do setor público e privado que adotam um programa de compliance, com enfoque na elaboração de um código de conduta ética, bem como nos canais de denúncia.

Posteriormente, com o intuito de verificar de forma concreta os benefícios da implantação de um programa de compliance, torna-se necessário fazer breves apontamentos sobre a prevenção de conflitos, que acarreta na diminuição das lides trabalhistas, em virtude da melhoria do processo de tomadas de decisões (célere detecção e resposta das organizações perante os problemas), evitando condutas lesivas e consequências adversas tanto para as organizações, quanto para os trabalhadores.

Finalmente, após delimitadas e contextualizadas as questões conceituais e primordiais para o estudo do compliance como ferramenta de prevenção de conflitos, evidencia-se acerca da sua relação com os trabalhadores das organizações, ou seja, o compliance como propulsor dos direitos fundamentais dos trabalhadores, haja vista que o agir em conformidade promove o devido respeito às legislações vigentes (Constituição Federal de 1988, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e outras), estimulando o desenvolvimento sustentável, com base na ética e na transparência organizacional, essenciais para a fruição da cooperação mútua entre organizações e trabalhadores, transformando dignamente o ambiente laboral.

2 COMPREENDENDO O *COMPLIANCE*

Hodiernamente, é notório que o termo compliance tem alcançado significativa visibilidade e projeção no meio social.

A ausência de uma política corporativa de compliance aliada com a falta de integridade organizacional tornaram-se uma amarga chaga mundial, em virtude do colossal aumento de escândalos, fraudes, corrupções, infrações, bem como desvios de conduta, comprometendo as organizações públicas e privadas.

Mas, pergunta-se: o que é compliance?

Inicialmente, destaca-se que o termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que na tradução significa cumprir com, obedecer.

Registra-se que, a doutrina associa compliance à noção de conformidade, isto porque “possuir compliance significa estar em conformidade com a legislação do Estado e com as demais normas de

conduta que possam ser aplicáveis às pessoas de determinada organização”. (Andrade; Ferreira, 2017, p. 73-84)

Nesse diapasão, aponta-se que compliance “é um conjunto de regras, padrões, procedimentos éticos e legais, que, uma vez definido e implantado, será a linha mestra que orientará o comportamento da instituição no mercado em que atua, bem como a atitude dos seus funcionários”. (Caneloro; Rizzo; Pinho, 2012, p. 30)

De acordo com Wagner Giovanini (2014), compliance significa encontrar-se em consonância com as legislações e regulamentos internos e externos das organizações. Assim, o compliance extrapola o simples acolhimento da legislação, tem por escopo a concordância com os princípios da empresa, alcançando a ética, a moral, a honestidade e a transparência, na condução dos negócios e em todas as atitudes dos indivíduos.

Igualmente, nas palavras dos Ilustres Professores Fabrício Lima Silva e Iuri Pinheiro (2020, p. 42):

O *compliance* pode ser definido como o princípio de governança corporativa que tem por objetivo promover a cultura organizacional de ética, transparência e eficiência de gestão, para que todas as ações dos integrantes da empresa estejam em conformidade com a legislação, controles internos e externos, valores e princípios, além das demais regulamentações do seu seguimento. Caracteriza como um conjunto de procedimentos e boas práticas, realizados de forma independente, no âmbito das organizações, para identificar e classificar os riscos operacionais e legais, estabelecendo mecanismos internos de prevenção, gestão, controle e reação frente aos mesmos.

Por fim, realça-se que o compliance "consiste em um conjunto de medidas a serem adotadas pelas empresas com o objetivo de prevenir, detectar e responder a riscos de integridade" (Oliveira; Oliveira, 2019, p. 111-112), consubstanciando, conforme entendimento dos Professores Fabrício Silva e Iuri Pinheiro (2020, p. 47) “o tripé de atuação do compliance: prevenir, detectar e remediar”.

Destarte, com as explanações supracitadas, pode-se inferir que compliance é um vocábulo que se relaciona com as ferramentas de efetivação da missão e dos valores das organizações públicas e privadas, significando estar em conformidade com as legislações vigentes, os

padrões éticos, bem como os regulamentos internos e externos, por meio de procedimentos e diretrizes voltadas para a proteção e a ética organizacional. Em outros termos, o compliance contribui para a construção de um ambiente digno e de combate aos riscos inerentes à atividade organizacional.

No tocante aos objetivos do compliance, visa mitigar os ilícitos e os riscos relativos à atividade organizacional, ou melhor, mira a prevenção e a redução dos conflitos, com o intento de manter as organizações íntegras, corroborando para o estabelecimento de uma cultura organizacional pautada na ética e na responsabilidade social, tratando imediatamente quaisquer desvios e desconformidades.

Nessa temática, aduz os Ilustres Professores Fabrício Lima Silva e Iuri Pinheiro (2020, p. 43):

O objetivo é bastante ambicioso, não se restringindo à implantação de mecanismos de compliance, mas também na mudança da cultura corporativa e do clima organizacional. A implantação de programas de *compliance* está diretamente relacionada à diminuição de riscos, sendo muito importantes as ações de planejamento, execução e monitoramento, como ferramentas de proteção contra desvios de conduta e de preservação/geração de valor econômico.

Ainda, sobre a inserção do compliance no Brasil, em 1995 foi instituído o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), responsável pela edição do "Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa". No ano de 1998, foi aprovada a Lei nº 9.613, cuja finalidade é o combate aos crimes de lavagem de dinheiro, criando também o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Ademais, foi editada a Resolução nº 2.554 do Banco Central do Brasil (BC), que disciplinou a criação de estruturas e mecanismos de controles internos de riscos para as instituições financeiras (Silva; Pinheiro, 2020, p. 37).

Ressalva-se que, o compliance ganhou expressiva notoriedade no meio social brasileiro após os escândalos de corrupções políticas, tendo como marco principal a Lei nº 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa. Portanto, o compliance, também denominado como programa de comprometimento ou programa de integridade, surgiu “como uma necessidade imposta pela sociedade em direção às empresas, de forma a exigir maior transparência e seriedade nas relações negociais” (Lazzarin; Cavagnoli, 2018, p. 95-110).

Entretentes, apesar da maior notoriedade em âmbito nacional com os escândalos de corrupções políticas e, sequencialmente, com a promulgação da Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção ou Lei da Empresa Limpa), mister ressaltar que o compliance não deve ser reduzido unicamente ao combate à corrupção:

[...] os programas de *compliance* não devem se restringir ao combate à corrupção. Tais programas, para manterem lógica, consistência e coerência, devem versar sobre todas as esferas da empresa, envolvendo questões fiscais, contábeis, trabalhistas, financeiras, ambientais, jurídicas, previdenciárias, éticas, dentre outras (Silva; Pinheiro, 2020, p. 47).

Obviamente, é imprescindível que um programa de *compliance*, atuando como ferramenta de prevenção de conflitos e ilícitos, aborde sobre todas as áreas contempladas pelas organizações, como a trabalhista, tributária, ambiental, previdenciária, ética, antitruste, e outras, na medida em que visa a contenção dos riscos atinentes à atividade organizacional.

Acresça-se que, compete às organizações, tanto do setor público e do privado, as definições e normatizações relativas ao programa de *compliance*. Em consonância com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), “cada programa deve respeitar as peculiaridades de cada indústria e ser revisto constantemente de modo a contemplar novos riscos que eventualmente possam surgir [...]” (CADE, 2016). Contudo, um programa de *compliance* possui princípios fundamentais que podem nortear sua implantação nas organizações, cita-se: princípio da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade social.

Outrossim, menciona-se a edição da ISO 37301:2021 (Sistema de Gestão de *Compliance*) pela Organização Internacional de Normalização ou Padronização (*International Organization of Standardization – ISO*), norma técnica que tem por escopo servir de padrão internacional e referência global para programas de gerenciamento de conformidade, estabelecendo diretrizes para criação, desenvolvimento, manutenção, avaliação e melhoria do sistema.

Inegavelmente, são variados os benefícios para as organizações que implementam um programa de *compliance*, como o fortalecimento da imagem e reputação organizacional, por conseguinte, maior credibilidade, segurança e longevidade; ampla satisfação e

comprometimento dos trabalhadores com as organizações; melhoria do processo de tomadas de decisões, com identificação antecipada dos problemas e célere resposta das organizações, que evita condutas prejudiciais e consequências adversas; prevenção e redução dos riscos da atividade e comportamentos indevidos dos trabalhadores; diminuição da ocorrência de fraudes, irregularidades, desvios de condutas e corrupções; economia de recursos com despesas evitáveis, como multas, indenizações e cobranças judiciais; por fim, significativo progresso na saúde das organizações, notadamente, no que tange ao bem estar do ambiente de trabalho.

É clarividente que, são inúmeros os benefícios da implantação de um programa de *compliance* pelas organizações, citando-se a capacidade de evitar demandas direcionadas ao Poder Judiciário, visto que a ferramenta auxilia na prevenção e redução de conflitos e ilícitos, subsidiando, também, a resolução dos conflitos internamente, afastando uma possível lide em âmbito judicial.

Assim, firmado nas benesses proporcionadas por um programa de *compliance*, merece realce a adoção dessa política no âmbito das relações trabalhistas, com ênfase no aspecto preventivo, culminando na efetiva proteção aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

3 O COMPLIANCE COMO FERRAMENTA DE PREVENÇÃO DE CONFLITOS E PROPULSOR DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES

Indubitavelmente, a implantação de um programa de *compliance* em âmbito laboral, por meio da inclusão de políticas éticas e de responsabilidade social, direcionadas para o aprimoramento de uma gestão eficiente dos trabalhadores e das próprias organizações, apresenta-se como eficaz ferramenta para resolução interna dos conflitos, evitando o alcance da lide ao Judiciário.

É relevante destacar que, uma das finalidades do *compliance* em âmbito laboral é a garantia de uma tutela ativa dos direitos trabalhistas, culminando na prevenção, redução e até mesmo extinção das transgressões relativas às obrigações legais e contratuais e, por conseguinte, proporcionando maior satisfação dos trabalhadores e um ambiente de trabalho harmônico, mitigando as demandas judiciais e eventuais condenações, em virtude da premissa de agir em conformidade.

Os programas e as políticas relativas ao *compliance* possuem um estimado papel nas organizações, pois atuam na prevenção de conflitos e ilícitos, bem como na redução dos riscos atinentes à atividade,

provocando a reverência aos ditames legais e contratuais. Em outros termos, promove o agir em conformidade com os direitos e deveres relacionados ao contrato de trabalho, como a gestão de benefícios, jornada de trabalho, pagamentos, convenções coletivas de trabalho, segurança e medicina do trabalho, entre outros.

Nessa esteira, o programa de *compliance* poderá adotar medidas para detecção, prevenção e correção de falhas, combatendo práticas que violem as leis, acarretando maior satisfação com o clima organizacional, com reflexos positivos imediato nos resultados das organizações. No tocante às referidas medidas, pode-se citar o mapeamento de risco, implantação do código de conduta, treinamentos, abertura de canais de denúncia para apuração de desconformidades e aplicação adequada de cunho disciplinar (Silva; Pinheiro, 2020, p. 71).

Como explanado, no Brasil, o *compliance* vem alçando relevante notoriedade no meio social e, também, nas relações de trabalho. Inclusive, a doutrina versa que o *compliance* é “como um direito inespecífico do trabalhador, não somente pela sua própria condição de empregado, mas, também, e principalmente, como cidadão” (Aguiar, 2015, p. 1.227-1.241).

Sabe-se que, a implementação de um programa de *compliance* deve ser fundamentada nas leis vigentes, com a criação de políticas e procedimentos internos que conduzam à ética e à responsabilidade organizacional, privilegiando as medidas preventivas, como o código de conduta ética e os canais de denúncias, para combate às ilegalidades, a fim de reduzir e até mesmo extinguir os riscos inerentes às atividades, harmonizando o ambiente de trabalho.

Isto porque, um clima organizacional impróprio, cujas regras não são respeitadas pelas organizações, certamente repercute de forma negativa nos índices de produtividade dos trabalhadores.

No entanto, a construção e solidificação de um ambiente de trabalho ético e digno ecoa positivamente nas organizações, inclusive com atuação mais íntegra dos trabalhadores com a missão e objetivos organizacionais, inclusive evitando o ajuizamento de demandas judiciais e a alta litigiosidade perante o Poder Judiciário.

Rememora-se que, para as organizações, o maior dano em caso de descumprimento das normas trabalhistas e flagrante ausência de comprometimento com o capital humano, além dos impactos econômicos, reside nos prejuízos referentes à imagem e reputação organizacional, capaz de comprometer a própria continuidade da atividade, estremecendo a confiança do público, dos parceiros e dos

investidores. Além disso, para as organizações do setor privado, reflete diretamente no seu valor de mercado.

Na perspectiva da relevância da imagem e da reputação das organizações, bem como a nova postura do mercado, cuja tendência é a maior exigência de condutas legais e éticas, aduz Flávio Andrade e Isadora Ferreira (2017, p. 73-84):

A propósito, a imagem da organização vem sendo cada vez mais considerada como algo inerente e indispensável à sua sustentabilidade, algo que pode levá-la ao sucesso ou ao fracasso, e o *compliance* vem sendo visto nesse cenário como um dos mais relevantes mecanismos de proteção à imagem e à reputação da organização perante os stakeholders em geral, pois tem o poder de evitar atos que possam gerar danos, ao melhorar os índices de cumprimento de normas internas e estatais.

Lamentavelmente, em oposição aos ditames de um eficaz programa de *compliance*, registra-se ainda no Brasil, em pleno século XXI, organizações em absoluto descompasso com as legislações vigentes no ordenamento jurídico, notadamente, de proteção aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Conjectura-se, de forma exemplificativa, o resgate de trabalhadores em condições análogas a de escravos, designadamente, em organizações vinculadas ao setor têxtil e alimentício.

Na maior parte dos casos apurados pelos órgãos responsáveis de amparo ao trabalho, vislumbra-se sobretudo trabalhadores estrangeiros aliciados por falsas promessas de uma vida digna. Ao reverso, a deplorável realidade é um ambiente laboral insalubre, trabalhos forçados, jornadas exaustivas em condições degradantes e desumanas, quer dizer, absoluta violação dos direitos fundamentais inerentes aos trabalhadores.

Para tanto, cita-se o caso da Zara, marca de grande renome internacional, que estampou diversas manchetes nacionais, em virtude da utilização de mão de obra escrava pela organização. Em uma operação no ano de 2011, que fiscalizou oficinas subcontratadas pela Zara de fabricação de roupas, 15 indivíduos, incluindo uma adolescente de 14 anos, foram libertados de trabalho escravo contemporâneo em plena capital paulista (Repórter Brasil).

Outrossim, menciona-se acerca da triste realidade da produção de cacau no Brasil, que beneficia as gigantes do agronegócio, como a Olam International, Barry Callebaut e Cargill, extraíndo-se da reportagem

“Chocolate com trabalho escravo: as violações trabalhistas na indústria do cacau no Brasil”, a situação deplorável de trabalhadores, que foram resgatados de fazendas com péssimas acomodações, sem acesso a banheiro ou água potável, bem como recebendo salários que não alcançam a metade do mínimo (Repórter Brasil).

Ainda, em fevereiro de 2023, a vinícola Aurora foi flagrada se beneficiando do uso da mão de obra escrava para colheita de uva em Bento Gonçalves, na região serrana do Rio Grande do Sul, em que 210 trabalhadores de uma terceirizada foram resgatados em situações deploráveis. A empresa possuía o certificado “*Great Place to Work*”, que traduzindo significa um “ótimo lugar para trabalhar”. Igualmente, a Cooperativa Garibaldi e a vinícola Salton também estão envolvidas no caso dos escravizados da uva, sendo que esta era signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU, documento que defende o “trabalho digno para todos” (Repórter Brasil).

Certamente, a adoção de um efetivo programa de *compliance* impediria, especialmente, a violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, além da mancha na imagem e na reputação dessas organizações.

Com efeito, um programa eficiente de *compliance*, com envolvimento da alta administração; criação de um código de conduta ética; canais de denúncias; comunicações e treinamentos periódicos; desenvolvimento de mecanismos e controles para detecção de problemas, desvios, fraudes e atos ilícitos; aplicação consistente de medidas disciplinares no tocante às violações; entre outros, coopera em demasia com o fortalecimento das organizações.

Nesse contexto, Maria Carla Pereira Ribeiro e Patrícia Dittrich Ferreira Diniz (2014, p. 90) asseguram que implantada a política e funcionando de forma efetiva do *compliance*, a organização tende a adquirir maior confiança dos investidores e credibilidade no mercado, alcançando altos níveis de cooperação interna e externa, por conseguinte, aumentam a lucratividade, mas sempre de forma sustentável, atraindo benefícios para a organização, os trabalhadores e a sociedade.

É inegável que, o *compliance* proporciona uma maior proteção aos trabalhadores, uma vez que privilegia-se não apenas a relação das organizações com o mercado, mas primordialmente a busca por estar em conformidade com as legislações vigentes no ordenamento jurídico, assegurando um ambiente laboral seguro, com respeito aos direitos fundamentais inerentes aos trabalhadores, por conseguinte, inibindo comportamentos corruptos e lesivos, em virtude de um expressivo

comprometimento com as diretrizes éticas e de responsabilidade social das organizações.

Impera mencionar que, a perspectiva do *compliance* como propulsor dos direitos fundamentais suscita uma discussão de (re)conhecimento do Direito Internacional do Trabalho, vez que essa temática inserida nas organizações acende a necessidade da fomentação de medidas para a responsabilização internacional das organizações (nacionais e internacionais), em razão das violações dos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Atualmente, em âmbito mundial e nacional, diversas organizações são acusadas de violação aos direitos fundamentais, sucessivamente, aos direitos trabalhistas, como a perpetração do trabalho análogo ao escravo, assédio moral, assédio sexual, discriminações, abusos, e outros.

É nessa esteira que o *compliance* nasce como uma ferramenta aliada à proteção dos direitos basilares da dignidade da pessoa humana, quer dizer, coopera com o amparo aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

Em outras palavras, o *compliance* inibe a violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores no ambiente laboral, exigindo condutas legais e éticas, com o intuito de consolidar um novo comportamento por parte das organizações, com a busca pelo lucro de forma sustentável, com ênfase no progresso econômico, ambiental e social na condução das atividades e negócios.

Certamente, o surgimento de novas formas de detecção dos problemas nas organizações, juntamente com a mobilização dos órgãos internacionais e nacionais, bem como do Poder Legislativo na elaboração de leis e regulamentos robustos; a firme atuação do Poder Judiciário no combate ao descumprimento dos dispositivos legais; a severa fiscalização do Estado; o clamor da sociedade no que tange ao agir em conformidade, coíbem as transgressões aos direitos fundamentais dos trabalhadores, propiciando inclusive o devido cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho.

Além disso, em 2011, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou os “Princípios Orientadores sobre Negócios e Direitos Humanos: Implementando os Parâmetros da ONU para proteger, respeitar e reparar”. Este modelo consiste na obrigação do Estado em defender os abusos aos direitos humanos. Igualmente em 2011, o Conselho criou um Grupo voltado às discussões sobre Empresas e Direitos Humanos. Em alguns casos, as empresas uniram-se juntamente com os governos, organizações internacionais e organizações não governamentais - ONGs,

em iniciativas voluntárias para apontar algumas questões de direitos humanos. (Mesquita, 2020, p. 05)

Pelo exposto, vislumbra-se que a tutela efetiva da dignidade e dos direitos fundamentais dos trabalhadores é parte integrante de um programa de *compliance*, tornando-se necessária a garantia do acesso às medidas preventivas e de redução de eventuais abusos ou violações desses direitos pelas organizações, que não podem abster-se de sua função social, ou seja, a devida proteção à relação de trabalho e ao ambiente laboral sadio.

4 CONCLUSÃO

A implantação de um programa de *compliance* nas organizações, para os olhares menos atentos, pode parecer excesso de políticas e procedimentos.

Entretantes, o *compliance* não se confunde unicamente com o mero cumprimento dos ditames legais, vez que visa também a adequação das organizações aos padrões éticos e morais, servindo de ferramenta para prevenção, redução e até mesmo extinção de conflitos e ilícitos, conseqüentemente, na seara trabalhista propulsiona os direitos fundamentais dos trabalhadores.

É notório que a adoção de *compliance* nas organizações gera ética, responsabilidade social, transparência e segurança jurídica organizacional, resultando no devido respeito às legislações vigentes e aos direitos fundamentais dos trabalhadores.

O agir em conformidade, ou melhor, o *compliance* aliado com as ações afirmativas organizacionais, como: a construção de um código de conduta ética; canais de denúncias; comunicações e treinamentos periódicos; reverência às legislações vigentes; criação de mecanismos de prevenção, detecção e correção de conflitos; pronta e célere resposta para os problemas; envolvimento da alta administração; aplicação consistentes de medidas disciplinares no tocante às violações; entre outros, direcionam as organizações do setor público e privado à eficaz política de valorização do capital humano, tão aclamada no meio social.

Em outros termos, por meio de um efetivo programa de *compliance*, baseado em normas adequadas, éticas e morais, que devem ser seguidas pela alta administração e por todos os trabalhadores, terceirizados, fornecedores e parceiros, erradica-se a precarização das relações de trabalho, com o fito de propiciar um desenvolvimento sustentável das organizações que atenda aos anseios econômicos, mas

sobretudo, aos anseios sociais, com absoluta deferência aos direitos fundamentais inerentes aos trabalhadores.

Frisa-se, o *compliance* é uma ferramenta que logra máximo êxito com a mútua cooperação entre as organizações e os trabalhadores, estimulando naturalmente um ambiente laboral digno, auxiliando na evolução plena organizacional, bem como no desenvolvimento do capital humano e da sociedade.

Portanto, todos os esforços empregados para a implantação de um efetivo programa de *compliance* são indispensáveis à construção de um ambiente laboral ético e saudável, visto que previne, detecta e corrige os conflitos, tornando-se uma ferramenta benéfica para as organizações e os trabalhadores, inclusive para o Poder Judiciário, em virtude da diminuição das demandas judiciais.

Em outras palavras, previne, reduz e até mesmo extingue os riscos, conflitos e ilícitos concernentes às atividades, propiciando uma convivência justa e harmoniosa entre as organizações e os trabalhadores, sobretudo, pela necessidade de uma política voltada para a valorização do trabalho como realização do ser humano e a absoluta reverência à inalienável dignidade da pessoa humana.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. C. Compliance um direito fundamental nas relações de trabalho: uma marca da hipermodernidade. **Revista LTr**, São Paulo, v. 79, n. 10, p. 1.227-1.241, out. 2015.

ANDRADE, F. C. M.; FERREIRA, I. C. Compliance trabalhista: compreendendo a prevenção de risco trabalhista por meio de programa de integridade. **Revista Síntese: trabalhista e previdenciária**, São Paulo, v. 28, n. 331, p. 73-84, jan. 2017.

CADE. Conselho Administrativo de Defesa Econômica. **Guia para programas de compliance**. Brasília, 2016. Disponível em: http://www.cade.gov.br/aceso-a-informacao/publicacoes-institucionais/guias_do_Cade/guia-compliance-versao-oficial.pdf. Acesso em: 05 out. 2023.

CANDELORO, A. P.; RIZZO, M. B. M.; PINHO, V. **Compliance 360º: riscos, estratégias, conflitos e vaidades no mundo corporativo**. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012.

COMPLIANCE TOTAL. **Pilares de um Mecanismo de Integridade e Sistema de Compliance**. Texto baseado no conteúdo do livro “*Compliance – A excelência na prática*” de Wagner Giovanini. 2014. Disponível em: <https://www.compliancetotal.com.br/compliance/pilares>. Acesso em: 09 out. 2023.

LAZZARIN, S. K.; CAVAGNOLI, F. O. Compliance trabalhista. **Revista Fórum Justiça do Trabalho**, Belo Horizonte, v. 35, n. 417, p. 95-110, set. 2018.

MESQUITA, A. A. B. S.; MESQUITA, E. A. O compliance trabalhista atuando como protetor dos direitos humanos nas empresas. **Revista Pensamento Jurídico**, São Paulo, v. 14, n. 3, 2020.

OLIVEIRA, M. V. R.; OLIVEIRA, L. G. M. *In*: OLIVEIRA, L. G. M. (Org.). **Compliance e integridade: aspectos práticos e teóricos**. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019. v. 2.

REPÓRTER BRASIL. Chocolate com trabalho escravo: as violações trabalhistas na indústria do cacau no Brasil. **Reporter Brasil**, São Paulo, 27 ago. 2020. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2020/08/chocolate-com-trabalho-escravo-as-violacoes-trabalhistas-na-industria-do-cacau-no-brasil/>. Acesso em: 09 out. 2023.

REPÓRTER BRASIL. Roupas da Zara são fabricadas com mão de obra escrava. **Reporter Brasil**, São Paulo, 16 ago. 2011. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2011/08/roupas-da-zara-sao-fabricadas-com-mao-de-obra-escrava/>. Acesso em: 09 out. 2023.

REPÓRTER BRASIL. Vinícola flagrada com trabalho escravo no RS ostentava o selo “Great Place to Work”. **Repórter Brasil**, São Paulo, 17 abr. 2023. Disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2023/04/vinicola-flagrada-com-trabalho-escravo-no-rs-ostentava-o-selo-great-place-to-work/>. Acesso em: 13 out. 2023.

RIBEIRO, M. C. P.; DINIZ, P. D. F. Compliance e Lei Anticorrupção nas Empresas. **Revista de Informação Legislativa/Senado Federal**, Brasília, v. 50, n. 199, publicada pela Coordenação de Edições Técnicas, 2014.

SILVA, F. L.; PINHEIRO, I. **Manual do Compliance Trabalhista:** teoria e prática. Salvador: JusPodivm, 2020.

BPC PARA INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DE PONTOS CONTROVERSOS

BPC FOR INDIVIDUALS IN SITUATIONS OF SOCIAL VULNERABILITY: AN ANALYSIS FROM CONTROVERSIAL POINTS

Vítor Prestes Olinto⁴³

Dandara Trentin Demiranda⁴⁴

José Ricardo Caetano Costa⁴⁵

Resumo

O presente trabalho visa analisar o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) no que diz respeito à insegurança social causada pela sua frequente variabilidade jurídica. Trata-se de uma temática importante de ser debatida, justamente por afetar uma fatia da população que necessita desse tipo de benefício para subsistência e enfrenta diversas barreiras para o acesso pleno. Barreiras essas que advêm, sobretudo, do contexto de vulnerabilidade social em que estas pessoas estão inseridas. Para tanto, será abordada, inicialmente, a recente questão dos empréstimos consignados para beneficiários do BPC, e a possibilidade de severo comprometimento da renda familiar, podendo gerar superendividamento. Num segundo momento, o projeto de lei nº 254/2023 será utilizado como exemplo da constante variabilidade jurídica do BPC e as consequências dessas frequentes mudanças.

⁴³ Mestrando em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Advogado. Especialista em Direito Previdenciário pela Escola Superior da Magistratura Federal (ESMAFE/RS). Especialista em Prática Jurídica Social - Residência Jurídica pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Membro do Projeto de Pesquisa e Extensão Cidadania, Direitos e Justiça – CIDIJUS. E-mail: vpolinto@gmail.com. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6612-6699>.

⁴⁴ Mestranda em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Advogada. Bolsista CAPES. Endereço eletrônico: dandararentin@hotmail.com.

⁴⁵ Doutor em Serviço Social, Professor da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social na Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e coordenador do Projeto de Pesquisa e Extensão Cidadania, Direitos e Justiça (CIDIJUS). Advogado. E-mail: jrcc.pel@gmail.com.

Ao final, serão feitas considerações acerca do benefício, objeto de análise do trabalho, como forma de emancipação social. A presente pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa para a apreciação dos dados pesquisados. Trata-se de pesquisa teórica, com utilização de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental pertinentes à temática em discussão, além de uma metodologia teórico-exploratória. Ao final, serão apresentadas algumas reflexões sobre a temática abordada.

Palavras-chave: assistência social; insegurança; benefício de prestação continuada; variabilidade.

Abstract

The present work aims to analyze the Continuous Payment Benefit (BPC) of the Organic Social Assistance Law (LOAS) with regard to social insecurity caused by its frequent legal variability. This is an important topic to be debated, precisely because it affects a segment of the population that needs this type of benefit for subsistence and faces several barriers to full access. These barriers arise, above all, from the context of social vulnerability in which these people are inserted. To this end, the recent issue of loans granted to BPC beneficiaries will be initially addressed, and the possibility of severe impairment of family income, which could lead to over-indebtedness. Secondly, bill n° 254/2023 will be used as an example of the constant legal variability of the BPC and the consequences of these frequent changes. At the end, considerations will be made about the benefit, the object of analysis of the work, as a form of social emancipation. This research uses a qualitative approach to evaluate the researched data. This is theoretical research, using bibliographic and documentary research techniques relevant to the topic under discussion, in addition to a theoretical-exploratory methodology. At the end, some reflections on the topic covered will be presented.

Keywords: social assistance; insecurity; continued provision benefit; variability.

1 INTRODUÇÃO

A desigualdade social diz respeito à disparidade ou diferença na distribuição de recursos, oportunidades, renda, educação, saúde e outros, entre os indivíduos ou grupos em uma sociedade. Infelizmente, trata-se de um fenômeno praticamente impossível de ser erradicado, haja vista que é impossível todos terem exatamente as mesmas oportunidades e riquezas.

Trata-se de um fenômeno multifatorial, que engloba desde a desigualdade de renda, com alguns indivíduos ganhando substancialmente mais do que outros, até o acesso desigual a recursos e qualidade de vida. A desigualdade social é um desafio importante em muitas sociedades e pode ter impactos negativos tanto para os indivíduos quanto para a sociedade como um todo.

Visando contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, a Constituição Federal de 1988 previu, dentro do sistema de Seguridade Social, que a promoção da Assistência Social seria destinada a todos aqueles que dela necessitarem. Conforme previsão do art. 203, objetivou-se a concessão de benefício no montante de um salário mínimo mensal ao indivíduo portador de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, visando a redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.

Inobstante seja possível realizar críticas aos critérios exigidos, em especial o critério socioeconômico, o benefício representa uma grande conquista para a sociedade brasileira, eis que permite a garantia dos mínimos existenciais. No presente artigo, buscamos debater alguns aspectos desse benefício, em especial as últimas alterações e discussões legislativas.

Para tanto, será abordada, inicialmente, a recente questão dos empréstimos consignados para beneficiários do BPC, situação que pode gerar o superendividamento de famílias em situação de vulnerabilidade. Em um segundo momento, o projeto de lei nº 254/2023 será utilizado como exemplo da constante variabilidade jurídica do BPC e as consequências dessas frequentes mudanças. Por fim, na terceira seção, serão feitas considerações acerca do BPC como forma de emancipação social. A presente pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa para a apreciação dos dados pesquisados. Trata-se de pesquisa teórica, com utilização de técnicas de pesquisa bibliográfica e documental pertinentes à temática em discussão, além de uma metodologia teórico-exploratória. Ao final, serão apresentadas algumas reflexões sobre a temática abordada.

2 A POLÊMICA DOS CONSIGNADOS NO BPC

Um assunto polêmico envolvendo o BPC diz respeito a recente autorização para que os beneficiários possam contratar empréstimos consignados. Trata-se de uma alteração trazida pela lei nº 14.431, de 2022.

Na sociedade capitalista em que vivemos, baseada no consumo, o acesso a crédito é fundamental para movimentar a economia, possibilitando a aquisição de bens e serviços. Para os indivíduos que não dispõem do crédito à vista, os bancos e as instituições financeiras fornecem algumas opções de contratação, entre elas o crédito consignado.

Trata-se de uma modalidade de empréstimo pessoal em que o pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do contratante, em parcelas mensais fixas, por prazo determinado, após autorização do cliente (BACEN, 2021). Em razão da maior segurança oferecida pela operação, cujas parcelas são descontadas em folha, as taxas de juros são mais baixas do que as demais modalidades ofertadas pelo mercado.

Durante muitos anos, essa modalidade de contratação era restrita aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aos segurados do regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais, aos servidores públicos federais e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social. No entanto, após as alterações trazidas pela já mencionada lei, houve a ampliação do público alvo, permitindo a contratação por beneficiários do benefício de prestação continuada e de programas federais de transferência de renda.

Desde antes de sua publicação, a lei foi alvo de grande polêmica, assunto que pretendemos abordar nas próximas linhas. Isso porque o BPC e os programas de transferência de renda, em especial o bolsa família, são destinados para indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Deste modo, ao permitir o comprometimento de parcela significativa do benefício para o pagamento de dívidas – a única renda para muitas famílias –, poderá estar sendo colocado em risco a subsistência de milhares de brasileiros.

A concessão de crédito na modalidade consignada foi pensada como uma forma de democratizar o acesso ao crédito, possibilitando melhoria de qualidade de vida. No entanto, é medida perigosa, pois os recursos de programas de transferência de renda são utilizados, em regra, para gastos básicos de subsistência. Com o empréstimo, haverá comprometimento de até 40% do benefício, que será descontado antes do pagamento. Permitir o comprometimento de uma renda que, em tese, é utilizada para gastos essenciais como alimentação, saúde e moradia, poderá colocar tais famílias em situação ainda mais delicada, pois, conforme prevê

a Portaria nº 816/2022, em nenhuma hipótese o Governo Federal poderá ser responsabilizado pelo pagamento da obrigação assumida, de modo que a responsabilidade recairá inteiramente sobre o beneficiário (Demiranda; Costa, 2023, p. 90).

No Brasil, além da grande desigualdade social e econômica, também é possível observar uma grande disparidade no acesso à educação de qualidade. Como consequência, percebe-se que parcela significativa da população não possui noções básicas de educação financeira. Tal situação acaba por gerar o superendividamento das famílias que, em razão do severo comprometimento de seus rendimentos mensais, ficam impossibilitadas de adquirir produtos básicos, como alimentos e itens de higiene.

É justamente a preocupação com a saúde financeira desses indivíduos em situação de vulnerabilidade que gerou tantas críticas à lei nº 14.431/2022. Conforme mencionam Demiranda e Costa (2023), tratam-se de benefícios de pequeno valor, que ficarão comprometidos por médio/longo prazo para o pagamento de dívidas, o que poderá gerar o aprofundamento do quadro de exclusão social.

Em março de 2023, a Medida Provisória (MP) nº 1.164, que recriou o bolsa família, vedou a concessão de crédito consignado para indivíduos que fazem parte do programa de transferência de renda. Tal medida foi mantida pela Lei nº 14.601/2023. No entanto, a contratação de crédito segue válida para indivíduos que recebem o BPC.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, pela constitucionalidade da lei nº 14.431/2022. Ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.223, os ministros entenderam que a lei não viola disposições constitucionais, já que o legislador constituinte não fez nenhuma consideração sobre o assunto, cabendo ao legislador ordinário dispor sobre o assunto. Em que pese a decisão da Suprema Corte, manifestamos novamente nossa preocupação com a medida, haja vista que se o crédito for utilizado como complemento de renda, há risco de severo comprometimento da subsistência familiar e inadimplência a médio/longo prazo.

3 O PL 254/2023 E O IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES NO BPC

Em um segundo momento, o presente trabalho pretende analisar o projeto de lei nº 254/2023 que tramita na Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Federal Fernando Máximo, o qual visa acabar com

o parâmetro de renda para a concessão do benefício de prestação continuada da LOAS, sob o prisma das pessoas desamparadas e necessitadas.

Para fins deste trabalho, o conceito de desamparado ou necessitado é atribuído à condição pessoal de fragilidade física associada à econômica, recaindo sobre o Estado o dever de suprir o amparo mínimo a tais cidadãos. A partir disso, a assistência social constitui um substitutivo de renda, e não um salário-indireto. (Sposati; Falcão; Fleury, 1995).

A proposta de autoria do Deputado Fernando Máximo visa alterar a Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social, especificamente no critério da renda para concessão do benefício assistencial. Atualmente, a lei garante o BPC/LOAS apenas para as pessoas com deficiência que possuem renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário-mínimo⁴⁶. No entanto, caso o projeto seja aprovado, o BPC/LOAS poderá ser concedido para todas as pessoas com deficiência, independentemente da existência de renda própria ou familiar, conforme aduz a ementa⁴⁷ do referido projeto.

Importante referir que o presente objetivo não é uma análise de mérito acerca do teor do projeto, mas sim expor mais uma variável em torno do BPC, benefício destinado a parcela da população que possui notável déficit educacional e, principalmente, informacional sobre seus direitos e requisitos de concessão.

Invariavelmente, o BPC recebe, todos os anos, diversas mudanças no seu fluxo de funcionamento, seja através de portarias, leis e até mesmo através da reforma da previdência de 2019. Mudanças essas que afetam questões burocráticas de acesso ao benefício e também questões que envolvem seus requisitos de concessão. Como consequência disso, observa-se uma insegurança jurídico-social que permeia esse direito

⁴⁶ Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

§3º - Observados os demais critérios de elegibilidade definidos nesta Lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

⁴⁷ Ementa: Altera o art. 20, caput e o §3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; bem como o art. 1º da Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021, para flexibilizar os critérios de acesso ao Benefício Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, por parte das pessoas com deficiência.

fundamental para grande parte da sociedade brasileira que conta com a renda desse benefício para o seu sustento.

O que se pretende enfatizar, neste momento, são os impactos causados por essas frequentes variações do benefício de prestação continuada, especialmente sobre o prisma de quem necessita como forma de subsistência. O desconhecimento de direitos, por si só, já marginaliza considerável parte da população. Imaginemos a proporção e o poder da burocratização de direitos e constantes variáveis sobre o mesmo benefício para uma sociedade que já possui uma involuntária ignorância sobre seus próprios direitos e deveres.

A dificuldade ao acesso dos benefícios da Seguridade Social, especificamente aqueles vinculados à Assistência Social, que possuem caráter predominantemente alimentar e, como consequência, de subsistência, por questões burocráticas e por barreiras informacionais é inadmissível numa sociedade dita globalizada e informatizada. É preciso ter em mente, justamente, que diversas pessoas estão à margem da informação, vivendo paralelamente a realidade das outras pessoas. A informação não chega para parte da sociedade, predomina a desinformação e a informalidade.

O desafio que surge então é alimentar essa população que desconhece as regras básicas do jogo com informações precisas num cenário de constante variação legislativa. O atual modelo da busca de direitos é fracassado na sua origem na medida em que o discurso de avanços tecnológicos é visível somente em um lado da balança, o lado estatal, enquanto parcela significativa da sociedade sequer tem acesso à internet qualificada para requerer benefícios e ter acesso à informação. O cenário e as perspectivas são pouco animadoras, na medida em que menos de um terço da população brasileira tem acesso pleno à internet (Menos De, 2022).

Evidentemente que as políticas públicas podem aproveitar as novas tecnologias para melhorar as condições de vida da população e dos mais pobres, mas a luta contra a exclusão digital visa sobretudo encontrar caminhos que diminuam seu impacto negativo sobre a distribuição de riqueza e oportunidades.

Apesar do projeto de lei nº 254/2023, referido acima, ser benéfico para quem necessita do BPC, é mais um exemplo da variabilidade jurídica tratada neste trabalho. Retrocessos e, principalmente, avanços em direitos fundamentais que sustentam famílias não podem encontrar óbices no que tange ao acesso e disseminação de informação, devem ser claros e transparentes para quem se beneficia.

Diante disso, a atual conjuntura carece de maior responsabilidade no que diz respeito aos direitos fundamentais sociais de segunda dimensão. A segurança jurídica de um benefício assistencial deve ser buscada incessantemente para que se tenha uma sociedade cada vez mais equânime em direitos, oportunidades e qualidade de vida.

4 O BPC COMO FORMA DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL

Por fim, julgamos fundamental compreender o BPC dentro de uma perspectiva emancipatória dos sujeitos que venham a preencher os (justos) requisitos para este benefício fundamental.

Neste passo, parece-nos que os aportes teóricos de Nancy Fraser podem ser de crucial importância para uma guinada na compreensão deste benefício. Segundo a filósofa, o centro da gravidade na constelação denominada “globalização”, deslocou-se da busca pela redistribuição, para o reconhecimento (Fraser, 2002, p. 3). Ou seja, os movimentos sociais que antes buscavam ferrenhamente a distribuição mais equânime da riqueza, hoje perderam força para os movimentos que, para além disso, buscam a representação, a identidade e a diferença. “Já não restrita ao eixo da classe, a contestação abarca agora outros eixos de subordinação, incluindo a diferença sexual, a raça, a etnicidade, a religião e a nacionalidade” (Fraser, 2002, p. 3), de modo que a justiça social não se cinge apenas à redistribuição, mas também ao reconhecimento.

No entanto, esta mesma autora alerta para a temeridade que representa a *substituição* dos movimentos (da redistribuição para o reconhecimento), defendendo que estes devam complementar-se, enriquecer-se, andar conjuntamente, pois, ao contrário de alcançarmos um paradigma mais amplo e rico, estaremos a trocar um economicismo truncado, por um culturalismo também truncado, numa evidente combinação de desenvolvimento desigual. Como remédio, Nancy Fraser lança mão do que denominou de “concepção bidimensional da justiça social”, ou seja, requer que olhemos para a justiça de modo bifocal, usando duas lentes, simultaneamente. “Vista por uma das lentes, a justiça é uma questão de distribuição justa; vista pela outra, é uma questão de reconhecimento recíproco” (Fraser, 2002, p. 3/5).

Para tanto, Nancy Fraser propõe que prevaleça o *princípio de paridade de participação*, na qual prevaleçam os arranjos sociais que permitam a todos os membros da sociedade interagir entre si, como pares, apontando duas condições para que a paridade participativa seja possível:

Primeiro, deve haver uma distribuição dos recursos materiais que garanta a independência e ‘voz’ dos participantes. [...] Estão excluídos, portanto, arranjos sociais que institucionalizam a privação, a exploração e as flagrantes disparidades de riqueza, rendimento e tempo de lazer que negam a alguns os meios e as oportunidades de interagir com outros como pares. Em contraponto, a segunda condição para a paridade participativa requer que os padrões institucionalizados de valor cultural expressem igual respeito por todos os participantes e garantam iguais oportunidades para alcançar a consideração inicial. Essa condição exclui padrões institucionalizados de valor que sistematicamente depreciam algumas categorias de pessoas e as características a elas associadas (Fraser, 2002, p. 7).

A questão que queremos levantar, a partir da teoria da justiça de Nancy Fraser pode assim ser resumida: podemos dizer que, no Brasil, o benefício assistencial da LOAS vem atendendo aos critérios da distribuição (econômico) e do reconhecimento (cultural)?

Entendemos que a resposta é negativa. Absolutamente não!

A distribuição não é alcançada, apenas em nível insignificativo, devido ao critério absolutamente restrito da elegibilidade dos potenciais candidatos, especialmente em decorrência do critério nefasto da renda *per capita* (mesmo que no Judiciário esse patamar tenha avançado, timidamente, para meio salário-mínimo nacional). E o reconhecimento, para aqueles poucos que conseguem o benefício, não advém após a obtenção deste. Isso porque, como vimos alhures, é necessário preservar a condição de miserabilidade para que possam continuar a perceber o benefício assistencial. Assim como os presidiários, que possuem estampado na testa sua condição, os miseráveis também mantêm esse estigma.

Passam a ser compreendidos como parasitas de um sistema absurdamente excludente, esquecendo-se que a miséria é fruto de uma riqueza concentrada, de um modo de produção excludente.

Assim, feitas estas considerações iniciais, cabe indagar: a LOAS, através do BPC, como política de proteção social, alberga o princípio da paridade de participação aos seus beneficiários ou candidatos?

Lembrando as colocações de Píson: “Pero es que estoy convencido de que sin una mínima igualdad material, sin unas mínimas posibilidad

de acceso a educación, salud, alimento, etc, no es posible el ejercicio de la libertad individual” (Píson, 1998, P.77, *apud* Couto, 2014, p. 51), podemos, sem embargo, afirmar que as políticas de proteção social intentadas no Brasil, dentre as quais a LOAS, estão muito distantes de alcançar a justiça social bidimensional⁴⁸.

Com relação à redistribuição das riquezas, o Brasil não conta com uma política organizada e articulada de distribuição de riquezas, muito embora ocupe o 7º lugar no ranking de produção de riqueza, com um PIB (Produto Interno Bruto) de 2,3 trilhões de dólares, pouco atrás de países como a França, com um PIB de 2,8 trilhões de dólares e Reino Unido, na casa do 2,9 trilhões de dólares (Confira, 2014).

Aliás, vem bem a calhar as contribuições trazidas pelo Procurador da República na Paraíba, Renan Paes Felix, em seu artigo “Por que as nações fracassam?”, reportando-se, aí, ao estudo desenvolvido por dois pesquisadores norte-americanos que buscaram entender o motivo pelo qual alguns países se tornaram mais desenvolvidos e mais ricos do que outros, ainda no subdesenvolvimento e na miséria (Felix, 2016).

Segundo os pesquisadores, existem dois tipos de instituições políticas: *inclusivas*, que contribuem para o desenvolvimento econômico e social, e *instituições políticas extrativas*, que enriquecem apenas a cúpula dominante, que detém o poder e age em detrimento da população, na salvaguarda de seus próprios interesses. Analisando mais detidamente a história de diversos países, perceberam uma íntima relação as políticas inclusivas e a prosperidade das nações, com o empoderamento de diferentes classes da sociedade, permitindo o exercício do poder político de forma mais pluralística, ao passo que, os países estruturados com instituições políticas extrativas canalizam seus recursos naturais econômicos para beneficiar poucos detentores do poder, em detrimento da população.

Não por menos que o Brasil muito embora ocupe a 7ª posição na economia mundial, paradoxalmente, ocupa o 75º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 76º lugar no Índice de Percepção da

⁴⁸ Esta autora reviu recentemente sua teoria e acrescentou, às categorias da redistribuição e do reconhecimento, o enquadramento ou representação (Fraser, 2009), mas esta categoria, embora importante, não temos como problematizá-la nesta reflexão. De qualquer modo, esta autora incorporou à sua teoria bidimensional de justiça este elemento novo, justificando que “a fim de lidar satisfatoriamente com esse problema, a teoria da justiça deve se tornar tridimensional, incorporando a dimensão política da representação, ao lado da dimensão econômica da distribuição e da dimensão cultural do reconhecimento” (Fraser, 2009).

Corrupção (IPC), demonstrando que há um distanciamento claro entre a produção de riquezas do país e o bem-estar social de seus cidadãos.

Assim, que voz tem aqueles que recebem (quando recebem) a pífia renda mensal de um salário-mínimo, além do estigma que carregam por serem beneficiários desses programas? Que lazer lhes é permitido com tal renda, se nem mesmo os direitos mais primários, como saúde e educação, lhes é assegurado? Como andar par e passo ao lado de quem recebe centenas de vezes o seu salário? Que independência, autonomia, igualdade, solidariedade estamos a construir com essas políticas públicas desarticuladas, focalizadas e reducionistas? Que condições tem de progredir, esses seres humanos que, de ombros caídos, voz baixa e olhos cheios de resignação, enxergam-se sem esperança?

Por decorrência lógica, evidentemente que as políticas de proteção social, em especial a LOAS, estão muito distantes de conferir reconhecimento aos seus beneficiários. O reconhecimento de que falamos refere-se ao exercício da cidadania, na sua mais abrangente acepção, englobando a participação política, social e civil, de forma a tomar assento no seu lugar na sociedade, e não viver atrelado a uma política de migalhas, sem as mínimas oportunidades para dela se livrar e retomar a sua dignidade e autonomia. Mas, para tanto, teríamos que contar com políticas públicas eficientes, com programas de distribuição de renda dignos e não estigmatizantes, com políticas de proteção social afiançadoras das necessidades básicas, promovendo um padrão de inclusão social.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo não busca apresentar soluções práticas para a insegurança social vivenciada pelos beneficiários BPC/LOAS. Buscamos, com o presente trabalho, fazer uma reflexão acerca de algumas polêmicas que envolvem esse benefício e, em especial, apontar a sua importância como política pública de proteção social.

O estudo, ainda que de forma breve, abordou a questão dos empréstimos consignados para beneficiários do BPC. Inobstante não seja mais possível a contratação de crédito para indivíduos participantes de programas de transferência de renda, segue sendo permitida para beneficiários do BPC. Trata-se de um assunto que causa grande preocupação a estes pesquisadores, eis que pode gerar o superendividamento de indivíduos e famílias que já se encontram em situação de vulnerabilidade, podendo comprometer o mínimo existencial.

Além disso, através da análise exemplificativa do projeto de lei nº 254/2023, que visa a concessão do BPC sem que exista a verificação de renda familiar, diferentemente do que prevê a legislação vigente, foi possível observar somente mais uma das variações e facetas que o benefício pode receber, ainda que em forma de projeto de lei. O produto disso, diversas pessoas sem acesso ao benefício fundamental de sobrevivência, por um fator inadmissível em um mundo globalizado: a falta de informação qualificada e o conseqüente desconhecimento de direitos.

Ao final, foi abordado o BPC como forma de emancipação social, numa perspectiva que busca compreender se de fato o benefício vem atendendo aos critérios de distribuição de renda e de reconhecimento cultural. Entendemos que a distribuição não é alcançada tendo em vista critérios restritos de elegibilidade e o reconhecimento não advém após a obtenção do benefício, considerando a necessidade de manutenção do estado de miserabilidade para que possam continuar a perceber o BPC.

Ante ao apresentado neste trabalho, acreditamos que as políticas públicas de proteção social, justamente as voltadas à assistência social, em que pese as vinculadas à previdência e a saúde também, estão consideravelmente à margem de conferirem uma real guarida na vida de quem usufrui desses benefícios. Em última análise, urge uma maior reflexão acerca do tema para que não se crie um estigma negativo ainda maior em torno dessas pessoas que necessitam de amparo e, mais importante, de uma qualidade justa de vida, não mínima e miserável.

REFERÊNCIAS

BACEN, Banco Central do Brasil. **Perguntas e respostas**: empréstimos consignados. [s. l.], 2021. Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_emprestimosconsignados. Acesso em: 31 out. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [1988]. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993**. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências. Brasília:

Presidência da República, [1993]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm. Acesso em: 20 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 14.431, de 3 de agosto de 2022. Altera as Leis nºs 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para ampliar a margem de crédito consignado aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, aos segurados do regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais, aos servidores públicos federais e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social e para autorizar a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada e de programas federais de transferência de renda, a Lei nº 13.846, de 18 de junho de 2019, para dispor sobre a restituição de valores aos cofres públicos, e a Lei nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, para alterar procedimentos relativos à concessão do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14431.htm. Acesso em: 21 out. 2023.

BRASIL. Lei nº 14.601, DE 19 de junho de 2023. Conversão da Medida Provisória nº 1.164, de 2023. Institui o Programa Bolsa Família; altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento, e a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003; e revoga dispositivos das Leis nºs 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e 14.342, de 18 de maio de 2022, e a Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023. Brasília: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14601.htm. Acesso em: 18 out. 2023.

BRASIL. Medida Provisória nº 1.164, de 2 de março de 2023. Convertida na Lei 14.601, de 2023. Institui o Programa Bolsa Família e altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto em folha de pagamento. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível

em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1164.htm. Acesso em: 18 out. 2023.

BRASIL. **Projeto de Lei 254/2023**. Altera o art. 20, caput e o §3º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; bem como o art. 1º da Lei nº 14.176, de 22 de junho de 2021, para flexibilizar os critérios de acesso ao Benefício Prestação Continuada – BPC, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, por parte das pessoas com deficiência. Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2347052>. Acesso em: 17 out. 2023.

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. **Ação direta de inconstitucionalidade - ADI 7223**. Origem: DF - DISTRITO FEDERAL. Relator: MIN. NUNES MARQUES. Transitado em julgado em 19 out. 2023. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6455850>. Acesso em: 22 out. 2023.

CONFIRA o ranking das 50 maiores economias do mundo. **Terra**, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.terra.com.br/economia/pib-mundial/>. Acesso em: 26 jun. 2016.

COUTO, B. R. **O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira**: uma equação possível? 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

DEMIRANDA, D. T.; COSTA, J. R. C. O Crédito Consignado como Potencial Fator Desencadeante do Superendividamento: análise da lei no 14.431/2022 e da concessão de crédito para beneficiários de programas de transferência de renda. **Revista Brasileira de Direito Previdenciário**, Porto Alegre e Curitiba, v. 72, p. 83-97, 2023.

FELIX, R. P. Por que as nações fracassam? **Associação Nacional dos Procuradores da República**, Brasília, DF, 2016. Disponível em: <https://www.anpr.org.br/artigo/96>. Acesso em: 26 jun. 2016.

FRASER, N. A Justiça Social na Globalização: Redistribuição, Reconhecimento e Participação. **Revista Crítica de Ciências Sociais**, v. 63, p. 7-20, 2002. Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/63/RCCS63Nancy%20Fraser-007-020.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2016.

FRASER, N. Reenquadrando a Justiça em um Mundo Globalizado. **Lua Nova**, São Paulo, v. 77, p. 11-39, 2009.

MENOS DE um terço da população brasileira tem acesso pleno à internet, mostra pesquisa. **G1**, Rio de Janeiro, 18 mar. 2022. Disponível em: <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/03/18/menos-de-um-terco-da-populacao-brasileira-tem-acesso-pleno-a-internet-mostra-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 18 out. 2023.

SPOSATI, A.; FALCÃO, M. C.; FLEURY, S. M. T. **Os Direitos (Dos Desassistidos) Sociais**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1995.

SINDEMIA E SEGURIDADE SOCIAL: O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NO GERENCIAMENTO DOS DESAFIOS SOCIAIS DA PANDEMIA DE COVID-19

COVID SYNDEMIC AND SOCIAL SECURITY: THE UNIFIED SOCIAL ASSISTANCE SYSTEM (SUAS) IN MANAGING THE SOCIAL CHALLENGES OF THE COVID-19 PANDEMIC

Frederico Thaddeu Pedroso ⁴⁹
Gabriel Lima Mendes ⁵⁰

Resumo

O artigo tem como objetivo promover reflexões sobre o papel do Estado na gestão da pandemia de COVID-19, encarada como um desastre biológico, a partir das políticas públicas destinadas a combater a pobreza e a desigualdade. A observação se concentra na atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), um pilar fundamental da Assistência Social no Brasil. A pesquisa se baseia em um método científico que considera quatro elementos-chave: teoria de base, abordagem, procedimento e técnica e busca responder o seguinte problema: dadas as vulnerabilidades provocadas pela pandemia e as complexas interações entre os aspectos biológicos e sociais da COVID-19, quais são os limites e as possibilidades da Assistência Social brasileira em relação à gestão socioeconômica deste desastre, através da atuação do Sistema Único de Assistência Social? Ao final, conclui-se que a gestão do desastre biológico ocorreu no âmbito da Seguridade Social, por meio de políticas públicas de assistência social que reconheceram a natureza sindêmica da crise.

⁴⁹ Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Bacharel em Direito pela Universidade Franciscana. Membro do grupo de pesquisa em Direitos da Sociobiodiversidade, vinculado à UFSM. Bacharel em Direito pela Universidade Franciscana de Santa Maria (UFN). Advogado inscrito na OAB/RS. E-mail: frederico.pedroso@acad.ufsm.br

⁵⁰ Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Membro do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual e Contemporaneidade – GPPIC, vinculado à UFSM. Advogado inscrito na OAB/RS e Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Bossoroca/RS. E-mail: gabrielmendes.advocacia@gmail.com

Palavras-chave: Assistência Social; Desastre biológico; Direitos Sociais; Seguridade Social; Sindemia;

Abstract

This article aims to foster reflections on the role of the State in managing the COVID-19 pandemic, viewed as a biological disaster, through public policies aimed at combating poverty and inequality. The focus is on the performance of the Unified Social Assistance System (SUAS), a fundamental pillar of Social Assistance in Brazil. The research is based on a scientific method that considers four key elements: base theory, approach, procedure, and technique, and seeks to address the following question: given the vulnerabilities caused by the pandemic and the complex interactions between the biological and social aspects of COVID-19, what are the limits and possibilities of Brazilian Social Assistance in the socio-economic management of this disaster, through the actions of the Unified Social Assistance System? In conclusion, it is found that the management of the biological disaster took place within the framework of Social Security, through public policies of social assistance that recognized the syndemic nature of the crisis.

Keywords: Biological Disaster; Sindemia. Social Assistance; Social Rights; Social Security.

1 INTRODUÇÃO

A COVID-19, uma pandemia de escala global, já tirou a vida de mais de 600 mil brasileiros. Esse assombroso marco foi alcançado em pouco mais de 19 meses desde o primeiro registro de óbito causado pela doença, em 12 de março de 2021. Entre os diversos fatores e particularidades desse fenômeno pandêmico, os aspectos biológicos ligados à natureza infecciosa do vírus – a patogenia de um agente altamente contagioso e transmissível – emergem como elementos cruciais para compreender a mais significativa crise de saúde global do século XXI.

Com efeito, compreender plenamente a doença e a consequente emergência global demanda uma consideração meticulosa e perspicaz dos aspectos biológicos do vírus SARS-CoV-2. A comunidade científica tem desempenhado um papel histórico e eficaz, desenvolvendo vacinas de maneira inédita e salvando inúmeras vidas do alcance desse temido coronavírus.

No domínio das ciências sociais aplicadas, é evidente que fatores socioeconômicos, arraigados na sociedade desde tempos imemoriais,

como as desigualdades, mantêm um diálogo horizontal com a patogenia do agente causador da doença e suas nuances biológicas. Assim, questões sociológicas clássicas, como discriminação, acesso a serviços, carências habitacionais e distribuição de riqueza, influenciam diretamente as consequências nefastas desse desastre biológico.

Nesse contexto, este ensaio se propõe a contemplar o papel do Estado na gestão dos riscos sociais decorrentes desse desastre biológico, através da perspectiva da Seguridade Social. Em particular, focaremos nas políticas públicas destinadas a combater a pobreza e a desigualdade (Assistência Social), tendo como base as orientações e a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) durante essa crise. Dessa forma, a evolução deste artigo será norteadada pela seguinte questão de pesquisa: diante das vulnerabilidades trazidas pela pandemia e das complexas interações entre os aspectos biológicos e sociais da COVID-19, quais são os limites e as possibilidades da Assistência Social brasileira em relação à gestão socioeconômica deste desastre, através da atuação do Sistema Único de Assistência Social?

Quanto à metodologia, este trabalho repousa sobre o quadrinômio de teoria de base, abordagem, procedimento e técnica. Utilizam-se contribuições teóricas do Direito dos Desastres, de autores que contemplam o direito de forma transdisciplinar, a exemplo de Délton Winter de Carvalho, complementadas por princípios do Direito Constitucional e dos Direitos Humanos. Dada a complexidade multidisciplinar do objeto de estudo, emprega-se uma abordagem sistêmico-complexa, com a base comunicacional entre diversas áreas do conhecimento, entrelaçando a perspectiva político-jurídica com outras esferas, como as ciências da saúde. Quanto ao procedimento e à técnica, são adotados o método monográfico e a pesquisa bibliográfica, respectivamente.

2 DIALOGANDO COM A PANDEMIA: A CONCEPÇÃO DE "SINDEMIA" E A DIMENSÃO LEGAL DA COVID-19

Ante aos níveis alarmantes de contaminação mundial, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) oficializou que a doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2)⁵¹, a COVID-19,

⁵¹ A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a COVID-19 como uma doença zoonótica – causada por um vírus transmitido de animais para pessoas. Doenças zoonóticas são associadas ao desequilíbrio ecológico moderno, que facilita a difusão de patógenos da vida selvagem para humanos (Gomes, 2020).

tinha atingido o patamar de pandemia global, tornando-se uma emergência internacional de saúde pública (Sohrabi, 2020). O conceito de pandemia é “uma epidemia de grandes proporções, que se espalha em vários países de continentes variados” (De Rezende, 1998). Um exemplo histórico de pandemia é a gripe “espanhola” (1918-1919), que matou de 50 a 100 milhões de pessoas em um curtíssimo intervalo de tempo. O número de mortes causadas pela pandemia da gripe espanhola é maior do que o provocado pelas duas grandes guerras mundiais juntas (Taschner, 2018).

Desde então, diversos países do mundo vêm investindo vultuosos recursos nos estudos acerca da fisiopatologia do novo coronavírus. Dentre as principais peculiaridades biológicas do vírus, destaca-se a alta transmissibilidade pela via respiratória entre seres humanos, tanto entre indivíduos sintomáticos quanto assintomáticos.

Outro fator importante identificado é o potencial gravoso que a síndrome respiratória grave causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) possui quando atinge pessoas que possuem a saúde de certa forma debilitada por fatores pré-existentes – as chamadas comorbidades –, tais como idosos, imunodeprimidos, obesos, diabéticos, hipertensos, portadores de doenças respiratórias e cardiovasculares crônicas etc. A COVID-19 é ainda apontada como uma doença altamente capaz de alterar doenças crônicas já estabilizadas em um curto espaço de tempo, deixando o paciente muito mais propenso e vulnerável a infecções externas variadas (Feitoza, 2020).

Neste contexto, percebe-se que um grau de vulnerabilidade maior recai sobre grupos minoritários bem delimitados em razão da associação desses fatores biológicos pré-existentes com o potencial destrutivo do coronavírus. Aliado a isso, tem-se que os níveis de desigualdade de renda no Brasil e as fragilidades socioeconômicas decorrentes, como dificuldade no acesso a habitação, saúde, segurança alimentar, renda básica, entre outros corolários pragmáticos de direitos constitucionalmente assegurados, também influem no grau de gravidade da doença, que possui origens sistêmicas e afeta sistematicamente as populações mais vulneráveis. Nesse sentido, verifica-se que a doença e seus reflexos socioeconômicos acionam diretamente o Sistema de Seguridade Social em seus três pilares: Saúde, Previdência e Assistência Social (Agostinho, 2020). Tal sistema foi introduzido no ordenamento constitucional brasileira pela Constituição Federal de 1988 e possui a sua expressão máxima no artigo 194, “caput”, da carta política: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos

Poder Públicos e da sociedade, destinadas assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil, 1988).

Tybusch e Oliveira (2020, p. 55) indicam, em estudos realizados pelo “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC, 2020), que os grupos minoritários raciais e étnicos tem maior risco de adoecer e morrer de Covid-19, em razão de alguns fatores como: a discriminação; o acesso e utilização de serviços e saúde; ocupação; Lacunas educacionais, de renda e de riqueza; e, a habitação.

Nessa mesma linha é a lição de Luiza Pires, Laura Xavier e Laura Lima (2020, p. 2):

Diante dos níveis abissais de desigualdade de renda e de acesso a serviços no Brasil, não faltam motivos para esperar um efeito desproporcional do COVID-19 entre os mais vulneráveis no país. A carência de infraestrutura domiciliar, principalmente nas periferias, oferece um maior risco de contágio e propagação de infecções respiratórias [...] no que tange à desigualdade no acesso à saúde, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 indicam que entre os 20% mais pobres da população, 94,4% não têm plano de saúde e 10,9% se autoavaliam com saúde regular, ruim ou muito ruim, mas não consultaram um médico no último ano. Entre os 20% mais ricos, esses índices são de apenas 35,7% e 2,2%, respectivamente. Para piorar, o número disponível de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) é quase cinco vezes inferior para os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS (1,04 leito por 10 mil habitantes, ou menos ainda em estado do Norte e Nordeste) do que para quem tem acesso à rede privada (4,84 leitos por 10 mil habitantes).

Ao observar a interação entre os ângulos biológicos e sociais inerentes a pandemia da COVID-19, pesquisadores começaram a difundir a noção de *sindemia*. Richard Horton (2020), editor chefe do periódico britânico *The Lancet*, conceitua as sindemias: “syndemics are characterised by biological and social interactions between conditions and states, interactions that increase a person’s susceptibility to harm or

worsen their health outcomes”⁵². Ainda conforme lição de Richard Horton (2020), “our societies need hope. The economic crisis that is advancing towards us will not be solved by a drug or a vaccine. Nothing less than national revival is needed”⁵³. A perspectiva sindêmica conduz a um olhar amplo ao contexto biossocial que a doença atinge, partindo do pressuposto de que a interação desta com fatores pré-existentes pode potencializar os seus efeitos. A abordagem diferenciada a partir do caráter sindêmico da crise sanitária global integra o tratamento da doença com fatores socioeconômicos pré-existentes na população afetada (Santos; Vitória, 2021).

No âmbito do direito, tem-se refletido acerca da natureza jurídica da pandemia da COVID-19. A fim de estudar os tratamentos adequados aos regramentos e conflitos jurídicos surgidos e/ou acentuados a partir da eclosão do cenário pandêmico, os debates e as considerações acadêmicas acerca do enquadramento jurídico do fenômeno vêm ganhando destaque.

Délton Winter de Carvalho (2020) parte da classificação jurídica da COVID-19 como um desastre biológico. Objetivando oferecer subsídios para o enfrentamento jurídico da pandemia e de suas nuances – danos biológicos, sociais, econômicos, ambientais etc. – o autor analisa o fenômeno a partir de três conceitos contextuais amplamente utilizados nas pesquisas que versam sobre Direito dos Desastres: (i) causas; consequências (ii); e (iii) estabilidade.

Ainda, Tybusch e Oliveira (2020, p. 56) acerca da vulnerabilidade indicam que esta é elemento importante para definir a magnitude de um desastre. “Quanto maior a vulnerabilidade, maiores serão as suas consequências. Isto posto, para categorizar a Covid-19 como um desastre, seria interessante mencionar que, alguns relatórios e Universidades vão relacioná-lo com o número de vítimas”.

Dessa forma, a vulnerabilidade dos indivíduos atingidos pela catástrofe aparece como fator determinante para a maior exposição ao risco e conseqüentemente para a letalidade do desastre (perspectiva típica do ramo emergente do Direito dos Desastres)⁵⁴. Em se tratando de um

⁵² Em tradução nossa: As sindemias são caracterizadas por interações biológicas e sociais entre condições e estados, interações estas que aumentam a suscetibilidade do indivíduo de prejudicar ou piorar o seu estado de saúde.

⁵³ Em tradução nossa: Nossas sociedades precisam de esperança. A crise econômica que vem avançando entre nós não será resolvida através de um remédio ou vacina. Nada menos do que um renascimento das nações se faz necessário.

⁵⁴ O Direito dos Desastres possui como objeto as questões (eco) complexa que permeiam as catástrofes – como inundações, furacões, deslizamentos de terra etc. Dentre tantas questões, sejam naturais, antropogênicas ou mistas, um ponto muito

desastre biológico, onde as condições físicas pré-existentes dos indivíduos são agentes agravantes da mortalidade e das sequelas permanentes causadas pelo vírus (Sars-Cov-2), questões sociais (leia-se, desigualdades⁵⁵) como falta de saneamento básico, desigualdades raciais, condições precárias de moradia etc. devem ser compreendidas conexamente com os fatores puramente biológicos do agente patogênico causador da doença (Carvalho, 2020).

E estas contingências sociais (riscos) acionam o dever de Proteção Estatal a partir da Seguridade Social. Assim sendo, o Estado deve realizar ações que venham a proteger o cidadão, seja através da concessão de benefícios previdenciários (Previdência Social), de tratamento médico (Saúde), ou de um benefício assistencial de prestação continuada (Assistência Social), a fim de garantir aos seus “súditos” um mínimo existencial em face das consequências da crise, em observância à dignidade da pessoa humana (La Bradbury, 2020).

A classificação da natureza jurídica da COVID-19 como desastre biológico se coaduna com especificação de sindemia, inaugurada pelo antropólogo-médico Merrill Singer na década de 90 (Horton, 2020) e agora utilizada por outros pesquisadores da área para abordar a crise causada pela COVID-19.

Partindo das premissas expostas e considerando a crise sanitária global causada pela COVID-19, os Estados viram-se forçados a intervir de forma mais enérgica a partir de políticas públicas de enfrentamento a desigualdade social e a pobreza. No Brasil, essa atuação se deu diretamente a partir da Seguridade Social, acionada de forma enérgica em seus três pilares a partir das contingências sociais causadas por uma pandemia tão grave e duradoura: Saúde, Assistência e Previdência Social. Nesse sentido, a partir da perspectiva de sindemia e da classificação jurídica do fenômeno COVID-19 como desastre, o enfrentamento público às vulnerabilidades sociais constitui parte da estratégia e enfrentamento à doença e de diminuição dos riscos e danos causados. Com o

estudado pelos acadêmicos das Ciências Sociais no que tange aos desastres é o da exposição dos indivíduos aos seus riscos, tão variável de acordo com o contexto socioeconômico no qual a(s) pessoa(s) está inserida. (Farber, 2019).

⁵⁵ Para os antropólogos XXX e XXX, o termo desigualdade é um termo “dos mais fugidos, a ponto de nem mesmo o sentido da expressão sociedade igualitária ficar inteiramente claro”. No livro XXX, dedicado ao estudo antropológico das origens e extensões da desigualdade social, os autores referem que a desigualdade, de modo geral “é definida por negação: a ausência de hierarquias – a crença de que certas pessoas, ou tipos de pessoas, são superiores a outras – ou como a ausência de relações de dominação ou exploração” (David; Wengrow, 2022, p.145).

distanciamento social severo imposto durante a primeira fase da síndrome⁵⁶, a crise socioeconômica não tardou a eclodir pelo mundo, em especial nos países em desenvolvimento.

No relatório “The State of Food Security and Nutrition in the World”⁵⁷, publicado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) em conjunto com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (Fida), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ano síndêmico foi classificado como um momento crítico para o mundo, marcado pelo aumento significativo da fome em níveis internacionais, em especial na África, na América do Sul e na Ásia (Reis, 2021).

Em âmbito nacional, o aumento da insegurança alimentar é igualmente preocupante. Os resultados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19, realizado em 2.180 domicílios nas cinco regiões do país, em áreas urbanas e rurais, entre 5 e 24 de dezembro de 2020, constatou que 20,5% da população possui um grau moderado ou grave de insegurança alimentar, enquanto 9% da população (aproximadamente 19,1 milhões de brasileiros) estavam passando fome – insegurança alimentar grave (Penssan, 2021).

Neste cenário, ganha destaque a necessidade de enfrentamento dos aspectos sociais da doença pelo Estado através de políticas públicas afetivas de Seguridade Social, em especial aquelas de assistência social. A Constituição Federal (1988) estabelece diversas normas programáticas que incluem no contrato social da República Federativa do Brasil diretrizes interventivas, no sentido de garantir ao cidadão o bem-estar mínimo a partir de uma atuação positiva do Estado. Para Norberto Bobbio (1988), a ideia do Estado de bem-estar social busca realizar um equilíbrio, denominado como socialismo liberal, transcendendo a concepção individualista da sociedade para incluir princípios de justiça distributiva no contrato social.

Isto posto, a partir da função social do Estado e das nuances socioeconômicas da COVID-19, passa-se a uma breve reflexão acerca de um segmento específico do Estado/Seguridade Social brasileira durante a

⁵⁶ A primeira fase aqui considerada é aquela anterior a primeira aplicação de vacina contra a COVID-19 no mundo, ocorrida em 08 de dezembro de 2020, no Reino Unido. No Brasil, a primeira aplicação de vacina contra a COVID-19 ocorreu em 17 de janeiro de 2021 (Baddini; Fernandes, 2021).

⁵⁷ Em tradução nossa: Relatório sobre a segurança alimentar e nutrição no mundo.

sindemia, a Assistência Social. Na próxima seção, objetiva-se explorar a relação entre as vulnerabilidades pandêmicas com a magnitude dos danos causados pela pandemia para destacar o caráter social da República Federativa do Brasil e a importância do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) brasileiro, que, apesar de não ter tido tanto destaque midiático como o Sistema Único de Saúde (SUS) foi tão um braço da Seguridade Social importantíssimo para o enfrentamento da crise sindêmica dos últimos anos.

3 O PAPEL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) NA GERÊNCIA E SUPERÇÃO DO DESASTRE

Dentre os direitos fundamentais estipulados pela Constituição Federal (Brasil, 1988), os classificados como “sociais” possuem em sua essência um postulado de proteção, que impõe ao Estado um dever de agir. A partir da importância constitucional desses direitos, que possui capítulo específico na Carta Magna, existe um corolário jurídico-político lógico decorrente dos direitos sociais, o da proibição da proteção insuficiente por parte do Estado. Os pressupostos fáticos-materiais dos direitos sociais são tão relevantes que imputam ao Estado um dever direto prestação – que se dá a partir da edição de atos normativos, criação de procedimentos e garantias, na instituição de auxílios pecuniários, políticas públicas específicas etc. (Mendes, 2017).

Ditos procedimentos constituem-se em verdadeiras medidas de caráter social e evoluíram lenta e progressivamente para o sistema/ideal, hoje consagrado constitucionalmente, chamado de Seguridade Social (Castro, 2020). A partir da Seguridade Social, o Estado cumpre com três grandes deveres sociais (compromissos constitucionais): prover saúde a todos independentemente de contribuição efetiva, proteger os segurados da Previdência Social (aqui, exige-se contribuição dos segurados), bem como prestar assistência social às pessoas carentes visando assegurar o mínimo existencial, independentemente de qualquer contribuição específica por parte destas (Agostinho, 2020).

Percebe-se a preocupação com o progresso social e as melhores condições de vida também no âmbito dos direitos humanos internacionais. Os direitos sociais foram positivados tanto na Carta das Nações Unidas de 1945 quanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, documentos precursores do sistema universal de proteção aos direitos humanos (Piovesan, 2013).

No Brasil, principalmente após a promulgação da Constituição Cidadã, existe um crescente esforço estatal no campo da proteção social.

Inegavelmente, a Constituição de 1988 alargou a gama dos direitos sociais e, conseqüentemente, o campo da responsabilidade estatal pela proteção social. Como referido, o sistema de proteção se dá pela Seguridade Social através de políticas públicas relevantes, abrangentes e de caráter permanente. Conforme lição de Luciana Jaccoud (2009, p. 61), “tais iniciativas formam um conjunto que, mesmo que heterogêneo, incompleto e muitas vezes ineficaz, dotaram o país de um sistema de proteção amplo, com impacto efetivo”.

Neste contexto e no âmbito do pilar da Assistência Social, ganha destaque a Política Nacional de Assistência Social – PNAS, aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de Assistência Social. O instrumento jurídico-político é um valioso instrumento que consolidou toda a condução do trabalho público a ser realizado no âmbito da proteção social. Desatacam-se as seguintes diretrizes da organização da Assistência Social presentes na PNAS (Brasil, 2004, p. 32-33), todas fundamentadas e decorrentes do Sistema de Seguridade Social consagrado Constituição Federal. Já a Lei Federal nº 8.742/1993, a chamada “LOAS” – Lei Orgânica da Assistência Social, consagra de forma mais específica o pilar da Assistência Social:

- I. descentralização político administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal bem como às entidades beneficentes e de assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de governo, respeitando-se as diferenças e as características socio territoriais locais;
- II. participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;
- III. primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de governo;
- IV. centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, programas e projetos (Brasil, 2004, p. 32).

Observa-se que para consolidação dessas diretrizes de efetivação da Assistência Social como direito de cidadania, a harmonia executiva

entre os entes federados, responsáveis solidários pela proteção social, torna-se fundamental. A partir deste preceito harmônico inerente ao pacto federativo, os três níveis de governo possuem atribuições socioassistenciais. Partindo desta conjuntura harmônica dos entes federados surge o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que “introduz uma concepção de sistema orgânico em que a articulação entre as três esferas de governo constitui-se em elemento fundamental” (Couto, 2009, p. 202). Essa concepção unitária, mas atenta as realidades locais a partir de um sistema único incorpora ao SUAS uma importante abordagem territorial, oferecendo ao cidadão alternativas fisicamente palpáveis em âmbito local.⁵⁸

A teorização de Milton Santos (2013) sobre a pobreza urbana destaca a complexidade do fenômeno e a necessidade de “desfragmentação” das ações para um enfrentamento adequado. Conforme sua lição (Santos, 2013, p. 18), “um fenômeno tão sintético e complexo não pode ser compreendido através do estudo isolado de fragmentos de informações. Somente um exame do contexto, pode ser de alguma ajuda para a construção de uma teoria coerente capaz de servir como base para a ação”.

A Política Nacional de Assistência Social (Brasil, 2004) trata da gestão das políticas públicas através do Sistema Único (SUAS), estipulando que o sistema nada mais é do que um modelo de gestão descentralizado e participativo, que se constituiu na regulação e na organização em todo território nacional das ações socioassistenciais. Nesse sentido, percebe-se uma gestão compartilhada e um financiamento conjunto das políticas pelos entes federativos. Na lição de Maria Luiza de Souza Lajús (2009, p. 11) “a PNAS e o SUAS como modelo de gestão representa a possibilidade de concretizar uma gestão descentralizada, com comando único em cada esfera governamental, capaz de assegurar e efetivar direitos de cidadania e inclusão social”. Já a Norma Operacional Básica (MDS, 2005, p. 22) do SUAS assim dispõe:

Um dos seus objetivos é transformar a política de assistência social em uma política realmente federativa, por meio da cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal [...].

⁵⁸ A atuação em âmbito local do SUAS é relevantíssima, considerando que é nos municípios que as pessoas de fato estão e que a vida pública acontece. Rui Barbosa refere que “não há corpo sem células. Não há Estado sem municipalidades. Não se pode imaginar existência de nação, existência de povo constituído e existência de Estado, sem vida municipal” (Barbosa, 1973. p. 14).

A plena concretização do federalismo cooperativo no país requer o aprimoramento de instrumentos legais e institucionais de cooperação intergovernamental. Trata-se, portanto, de uma estratégia fundamental frente à escassez de recursos públicos, à diferenciada capacidade gerencial e fiscal dos entes federados, às profundas desigualdades socioeconômicas regionais e à natureza cada vez mais complexa dos problemas que exigem soluções intersetoriais e intergovernamentais

Ante aos fundamentos da descentralização federativa, ações intersetoriais e do sistema de financiamento compartilhado (co-financiamento) do SUAS, verifica-se a importância dos instrumentos jurídicos-políticos da Assistência Social brasileira no enfrentamento das nuances sociais da COVID-19 a partir da perspectiva de zoonose e de desastre biológico exposta no item 2. Bem como se observa a relevância e a abrangência da Seguridade Social brasileira, que ganhou notoriedade no momento da crise da COVID-19, em especial no que se refere ao alicerce da Assistência Social.

Muito embora o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não tenha sido objeto de promoção e valorização popular tal como o Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência social e o atendimento à população em vulnerabilidade através do SUAS durante a crise sanitária esteve em pleno funcionamento desde a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional pela OMS, ocorrida em 30 de janeiro de 2020. Em verdade, os dois sistemas representam duas “faces” de uma mesma moeda, a Seguridade Social brasileira, custeada por toda a sociedade brasileira, de forma direta e/ou indireta mediante os recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (Brasil, 1988).

Já nos primeiros atos normativos que versaram sobre o “novo normal”⁵⁹, Decreto nº 10.282, de março de 2020 (Brasil, 2020), foi estipulado que o atendimento à população em estado de vulnerabilidade é um serviço público e atividades essenciais, sendo indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que se não atendidos, colocam em perigo a

⁵⁹ Termo popular difundido para referir-se a nova realidade imposta pela pandemia da COVID-19. Refere-se ao isolamento social, uso de máscaras, higienizações constantes, testagens contínuas, *home office* etc.

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Assim, todos os trabalhadores (diretos e indiretos) do SUAS foram convocados para atuarem na linha de frente na “batalha” contra o vírus.

Também a partir de atos normativos publicados durante a pandemia, identifica-se a percepção do Estado de que o cenário de emergência em saúde pública exige esforços sinérgicos entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em consonância com a perspectiva de sindemia e da noção gestão de riscos a partir das vulnerabilidades inerente ao Direito dos Desastres. Vejamos parte da Portaria nº 54, de 1º de abril de 2020 (Brasil, 2020, p. 2), firmada pela secretária nacional de assistência social do Ministério da Cidadania:

ANEXO I. Nota técnica nº 7/2020. 3.2. Neste contexto, destaca-se a importância do trabalho colaborativo e sinérgico entre o SUS e o SUAS em cada localidade, visando à promoção de ações intersetoriais coordenadas e a convergência de esforços. É importante que as definições no âmbito do SUAS estejam articuladas com o SUS e considerem o curso da pandemia em cada localidade, com atenção às recomendações dos Ministérios da Saúde e da Cidadania e das autoridades sanitárias locais, bem como as demais regulamentações nacionais, estaduais, municipais ou distritais relacionadas ao tema. Em cada localidade, portanto, os gestores da Assistência Social devem se articular com a área da saúde para uma avaliação cotidiana da pandemia e das medidas que devem ser adotadas.

As medidas referenciais para o SUAS foram editadas através de atos normativos, majoritariamente através de portarias, que objetivaram minimizar o impacto da pandemia, especialmente no âmbito das disfunções sociais. Dentre as inúmeras portarias lançadas no âmbito do SUAS, destacam-se as seguintes, sem pretensão exaustiva: (i) Portaria nº 58/2020, que trouxe orientações acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia do COVID-19; (ii) Portaria nº 65/2020, que aprovou orientações e recomendações para os serviços de acolhimento de pessoas idosas e com deficiência no contexto da COVID-19; (iii) Portaria nº 69/2020, que versou sobre garantia de proteção social à população em

situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da COVID-19; (iv) Portaria nº 86/2020, que versou sobre o atendimento à mulheres em situação de violência doméstica e familiar na rede do SUAS; (v) Portaria nº 100/2020, que aprovou recomendações para o funcionamento da rede socioassistencial de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Médica Complexidade do SUAS, de modo a integrar a manutenção do atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia da COVID-19.

Assim sendo, comunicando os atos normativos analisados com a perspectiva de sindemia e da natureza jurídica COVID-19 como desastre, percebe-se que a Seguridade Social e, especialmente, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) brasileiro desempenhou um importante papel no enfrentamento das vulnerabilidades pandêmicas de caráter socioeconômico, aparecendo como um importante instrumento político-executivo do Estado na gestão da crise sanitária. A importância da aplicação da racionalidade do Direito dos Desastres no tratamento jurídico da COVID-19 é de suma importância, considerando que este ramo do direito possui uma perspectiva sistêmica hábil a guiar a atuação jurídico-política do Estado a partir de uma gestão circular dos riscos e danos (De Carvalho, 2020).

4 CONCLUSÃO

As particularidades epistemológicas e patogênicas do novo coronavírus (Sars-CoV-2), em conjunto com os fatores de risco, como as comorbidades pré-existentes, desempenham um papel significativo na investigação das causas da letalidade da COVID-19, que é responsável pela maior pandemia viral dos últimos 100 anos. No entanto, esses fatores biológicos, quando analisados de forma isolada, não são suficientes para uma compreensão completa da maior crise de saúde global do século, uma crise sistêmica que afeta sistematicamente a população e gera impactos que vão além da simples deterioração da saúde, incluindo desemprego, desigualdade, pobreza e outros desafios. Uma doença que se espalhou pelo mundo sem restrições geográficas em um período muito curto apresenta, inegavelmente, dimensões sociológicas e econômicas.

Esta pesquisa buscou examinar algumas dessas dimensões, assim como a resposta do Estado na atenuação dessas questões por meio da Seguridade Social.

Embora seja possível apontar várias deficiências na gestão do risco da COVID-19 por parte do governo brasileiro, incluindo a disseminação de informações falsas (infodemia), abordagens não científicas,

desorganização no combate à propagação do vírus e atrasos na aquisição e distribuição de vacinas, é evidente que instrumentos de políticas públicas historicamente sólidas e resilientes desempenharam um papel crucial na atenuação do impacto, mesmo diante de vozes discordantes. Muitos destes indivíduos estão atualmente sob investigação por crimes pela Comissão Parlamentar de Inquérito da COVID-19, conhecida como "CPI da COVID".

Nesse contexto, a Seguridade Social da República Federativa do Brasil emergiu como uma força resiliente na luta contra o vírus e suas consequências. Dois sistemas descentralizados e cofinanciados por todos os entes da federação, o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), estiveram na vanguarda da resposta ao vírus e seus efeitos prejudiciais desde o início da crise.

Partindo da classificação da pandemia como um desastre jurídico e da perspectiva médico-anropológica da sindemia, este ensaio abordou questões políticas e jurídicas a partir da seguinte pergunta de pesquisa: dado o contexto das vulnerabilidades pandêmicas e das complexas interações entre os aspectos biológicos e sociais da COVID-19, quais os limites e as possibilidades de atuação da Assistência Social brasileira na gestão socioeconômica do desastre a partir da atuação do Sistema Único de Assistência Social brasileiro? Utilizando o método científico proposto, esta pesquisa explorou o tema e chegou a suas conclusões através da integração de várias disciplinas, incluindo o direito, a política, a sociologia e a medicina antropológica.

Portanto, após uma análise da perspectiva da sindemia e da classificação jurídica da pandemia com base na teoria do Direito dos Desastres e da Seguridade Social, conclui-se que a gestão do desastre biológico por meio das políticas públicas de assistência social reconheceu a natureza sindêmica da crise de saúde. Isso representa um importante instrumento da Seguridade Social existente no Estado brasileiro. No entanto, a luta contra a doença está longe de terminar e requer apoio contínuo em termos políticos e econômicos para atenuar as vulnerabilidades, reduzir os riscos e prevenir danos futuros.

Por fim, destaca-se o papel fundamental dos serviços, atividades e de todos os profissionais do Sistema Único de Assistência Social. Embora o pilar da Saúde, representado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), tenha ganhado destaque durante a crise devido à percepção pública de sua importância, o SUAS trabalhou em conjunto e em constante interação com o SUS, demonstrando um exemplo sólido da integração dos três pilares da Seguridade Social. Além disso, as diretrizes, os objetivos e, especialmente, a atuação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

exemplificam pragmaticamente o compromisso com a proteção social presente na Constituição de 1988, promulgada após mais de duas décadas de regime militar.

REFERÊNCIAS

AGOSTINHO, T. **Manuel de direito previdenciário**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

BADDINI, B.; FERNANDES, D. Primeira pessoa é vacinada contra COVID-19 no Brasil. **CNN Brasil**, 17 jan. 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/primeira-pessoa-e-vacinada-contracovid-19-no-brasil/>. Acesso em 26 out. 2021.

BARBOSA, R. *In*: PAUPÉRIO, A. M. **O município e seu regime jurídico no Brasil**. Rio de Janeiro: Forense, 1973.

BOBBIO, N. *et al.* **Dicionário de Política**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, v. 674, 1998.

DAVID, G. WENGROW, D. **O despertar de tudo**: uma nova história da humanidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BRANCO, P. G. G. MENDES, G. F. **Curso de Direito Constitucional**. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [1988]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 22 mar. 2021.

BRASIL. **Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020**. Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. Diário Oficial da União, v. 1, p. 1-1, 2020.

BRASIL. **Política nacional de assistência social, PNAS-2004: Norma Operacional Básica NOB-SUAS**. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Assistência Social, 2004. Disponível em:

https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf. Acesso em 26 out. 2021.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 58, de 15 de abril de 2020**. Aprova a Nota Técnica nº 20/2020, que traz orientações gerais acerca da regulamentação, gestão e oferta de benefícios eventuais no contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 59, de 22 de abril de 2020**. Aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social -SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 65, de 06 de maio de 2020**. Aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 69, de 14 de maio de 2020**. Aprova recomendações gerais para a garantia de proteção social à população em situação de rua, inclusive imigrantes, no contexto da pandemia do novo Coronavírus, COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 86, de 01 de junho de 2020**. Aprova recomendações gerais para o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar na rede socioassistencial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS no contexto da Pandemia do novo Coronavírus, COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília.

BRASIL. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Portaria nº 100, de 14 de julho de 2020**. Aprova as recomendações para o funcionamento da

rede socioassistencial de Proteção Social Básica - PSB e de Proteção Social Especial - PSE de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, de modo a assegurar a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes cenários epidemiológicos da pandemia causada pelo novo Coronavírus - COVID-19. Diário Oficial da União, Brasília.

COUTO, B. R. O Sistema Único de Assistência Social: uma nova forma de gestão da assistência social. *In*: BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. **Concepção e gestão da proteção social não contributiva no Brasil**, UNESCO, 2009.

CASTRO, C. A. P. LAZZARI, J. B. **Manual de Direito Previdenciário**. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

CARVALHO, D. W. A natureza jurídica da pandemia COVID-19 como um desastre biológico: um ponto de partida necessário para o direito. **Revista dos Tribunais**, v. 1017, n. 2020, p. 243-267, 2020.

CDC. Centers for Disease Control and Prevention. **Health Equity Considerations and Racial and Ethnic Minority Groups**. Disponível em: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/race-ethnicity.html> Acesso em: 20 set. 2021.

LA BRADBURY, Leonardo Cacau Santos. Teoria do risco social (contingência) e da proteção estatal. **GenJuridico**, [s. l.], 2020. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2020/02/17/teoria-risco-social-contingencia/>. Acesso em: 19 out. 2022.

REZENDE, J. M. Epidemia, endemia, pandemia, epidemiologia. **Revista de Patologia Tropical/Journal of Tropical Pathology**, v. 27, n. 1, p. 153-155, 1998.

SOUZA LAJÚS, M. L. A política pública de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social-SUAS. **Revista Cadernos do Ceom**, v. 22, n. 30, p. 165-178, 2009.

FARBER, D. **Navegando a interseção entre direito ambiental e o direito dos desastres**. *In*: CARVALHO, D. W. de; FARBER, D. (org.). Estudos aprofundados em direito dos desastres. 2. ed. Curitiba: Appris, 2019, p. 25.

FEITOZA, T. M. O. *et al.* COMORBIDADES E COVID-19. **Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia**, v. 8, n. 3, p. 711-723, 2020.

GOMES, C. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 2, n. 3, 2020.

HORTON, R. Offline: COVID-19 is not a pandemic. **The Lancet**, v. 396, n. 10255, p. 874, 2020.

JACCOUD, L. Proteção social no Brasil: debates e desafios. **Concepção e gestão**, 2009.

PENSSAN, R. **Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil**. Rio de Janeiro: Rede Penssan, 2021.

PIOVESAN, F. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

PIRES, L. N.; CARVALHO, L.; XAVIER, L. L. COVID-19 e desigualdade: a distribuição dos fatores de risco no Brasil. **Experiment Findings**, v. 21, 2020.

REIS, E. M. Relatório da ONU: ano pandêmico marco por aumento da fome no mundo. **UNICEF**, 2021. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/relatorio-da-onu-ano-pandemico-marcado-por-aumento-da-fome-no-mundo>. Acesso em: 26 out. 2021.

SANTOS, G. P.; VITÓRIO, S. C. A sindemia global da COVID-19: uma análise sobre vulnerabilidade social e políticas públicas no Brasil. **Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília**, v. 1, n. 19, p. 340-371.

SANTOS, M. **Pobreza Urbana**. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

SOHRABI, C. *et al.* World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19). **International journal of surgery**, v. 76, p. 71-76, 2020.

TASCHNER, N. P. Gripe espanhola: 100 anos da mãe das pandemias. **Veja Saúde**, São Paulo, 11 mar. 2020. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/blog/cientistas-explicam/gripe-espanhola-100-anos-da-mae-das-pandemias/>. Acesso em: 27 out. 2021.

TYBUSCH, F. B. A.; OLIVEIRA, G. F. A crise da biodiversidade e seus impactos no surgimento de pandemias: uma análise sobre o desastre biológico da covid-19. *In*: CALGARO, C.; REZENDE, E. N.; TYBUSCH, J. S. (coord.). **Direito e sustentabilidade I**. Florianópolis: CONPEDI, 2020. Disponível em: <http://conpedi.daniloir.info/publicacoes/nl6180k3/nk9s678l/nEYM56d4Ch360g7f.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS

PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS

Fernanda Pohlmann⁶⁰

Resumo

O presente artigo busca conhecer a origem do Tribunal Penal Internacional, demonstrando que ele é inseparável da noção de direitos humanos e objetivos. Por fim, o artigo proporciona uma análise do futuro do Tribunal Penal Internacional, analisando como o tribunal revolucionou o direito internacional penal e quais foram as principais mudanças que trouxe ao sistema internacional, como a criação de novos tribunais internacionais. Integração de perspectivas de gênero (gender mainstreaming) consiste em avaliar as diferentes implicações, para homens e mulheres, de leis e políticas públicas, em todos os níveis, visando a alcançar a igualdade de gênero. O objetivo do presente trabalho é analisar criticamente em que medida o Tribunal Penal Internacional se compromete com esse método em sua atuação. Para isso, é feita uma breve retrospectiva sobre a necessidade de uma leitura de gênero no direito internacional, e são examinadas as previsões do Estatuto de Roma sobre gênero. Em seguida, são analisadas as lacunas na jurisprudência sobre violência sexual e de gênero, bem como as barreiras na participação e reparação das vítimas nos processos relativos a esses crimes. Conclui-se que o TPI representa um passo importante para a justiça internacional, e houve progresso significativo no combate à violência sexual e de gênero, mas falta uma visão mais sensível ao gênero em sua atuação, que deve ser compatibilizada com expectativas realistas sobre o papel do tribunal. Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional; Direito Penal Internacional; integração de perspectivas de gênero; violência sexual e de gênero.

⁶⁰ Doutoranda em Direito Público da Faculdade de Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal. Mestre em Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Brasil. Licenciada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Brasil. Trabalhou por mais de dez anos com políticas públicas na Universidade Federal do Rio Grande e atua desde 2011 como advogada na área cível.

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional; Direitos Humanos; Princípio da Legalidade.

Abstract

This article seeks to understand the origins of the International Criminal Court, demonstrating that it is inseparable from the notion of human rights and objectives. Finally, the article provides an analysis of the future of the International Criminal Court, analyzing how the court revolutionized international criminal law and what were the main changes it brought to the international system, such as the creation of new international courts. integration of gender perspectives (gender mainstreaming) consists of evaluating the different implications, for men and women, of laws and public policies, at all levels, with a view to achieving gender equality. The objective of this work is to critically analyze the extent to which the International Criminal Court is committed to this method in its activities. To this end, a brief retrospective is made on the need for a reading of gender in international law, and the provisions of the Rome Statute on gender are examined. Next, the gaps in the jurisprudence on sexual and gender-based violence are analyzed, as well as the barriers to the participation and reparation of victims in the processes related to these crimes. It is concluded that the ICC represents an important step for international justice, and there has been significant progress in combating sexual and gender-based violence, but there is a lack of a more gender-sensitive vision in its actions, which must be compatible with realistic expectations about the role of the court. Keywords: International Criminal Court; International Criminal Law; integration of gender perspectives; sexual and gender violence.

Keywords: International Criminal Court; Human rights; Principle of Legality.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo está inserido nos estudos do Doutorado em Direito Público da Universidade de Coimbra, e teve como ponto de partida as discussões realizadas no âmbito da Disciplina de Humanização do Direito Internacional. O ponto de partida deste trabalho está intimamente ligado ao fato de que a matéria penal é correlata ao princípio da legalidade, tanto nos tempos de guerra como nos tempos de paz. Analisaremos, portanto, a evolução histórica dos Tratados e Tribunais até o presente momento.

O Tribunal Penal Internacional é oriundo de uma série de aprendizados históricos, desde tratados internacionais até tribunais ad hoc, ele também surge como consequência do Novo Direito Internacional, de uma busca pelo indivíduo por trás do Estado. Um Tratado dessa amplitude, que aborda tantos países deve ter sido demasiado burocrático e cansativo de construir, pois, trata-se de países diversos, com culturas diversas, um verdadeiro exercício de paciência e diplomacia.

A união de novos conhecimentos e do aprendizado histórico concebe um tribunal humanitário de caráter permanente, porém, o futuro do tribunal é incerto, possuindo a assinatura de diversos países em seu Estatuto, mas não a posterior ratificação, tendo sua eficácia comprometida

No CAPÍTULO 1 aborda-se a Origem do TPI - TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL. Parte-se da análise do final da Primeira Grande Guerra, considerando a tentativa do Tratado de Versalhes de julgar os responsáveis pelos crimes cometidos. Pretende-se demonstrar a ineficácia e ineficiência do Tribunal. Em seguida, aborda-se o Tribunal de Nuremberg, que possibilitou o julgamento dos grandes criminosos durante a Segunda Guerra Mundial e foi um relevante progresso para o Direito Penal Internacional, no que concerne a tipificação dos crimes e competência para julgamento, apesar de ter muitos vícios atribuídos ao seu desempenho. Faz-se menção a momentos importantes na história do Direito Internacional: a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), e a proclamação da Declaração dos Direitos Universais do Homem.

Em seguida, realiza-se um breve estudo sobre os princípios que permitiram o mapeamento da normativa internacional: da culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado como crime pelo direito internacional, da posição e imunidades, da obediência hierárquica não excludente de responsabilidade, do devido processo legal, da legalidade, e da participação no ato criminoso.

Ainda, faz-se alusão a Comissão de Direito Internacional e o seu principal objetivo de criar um tribunal penal internacional de caráter permanente e a criação de dois tribunais para casos específicos, para a Iugoslávia e para Ruanda, pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aborda-se os objetivos de tais Tribunais: punir penalmente os acusados considerados responsáveis pelas sérias violações do Direito Humanitário Internacional, bem como aborda-se os principais dilemas enfrentados naquele período e inovações trazidas.

No CAPÍTULO 2, traz-se os crimes que são de competência do Tribunal, a forma como é estabelecida a jurisdição e quais as garantias processuais para as pessoas acusadas de crimes internacionais. São mencionados os objetivos deste Tribunal, e a preocupação com a garantia da proteção aos direitos humanos. Estabelecemos uma conexão entre os Tribunais de exceção até a assinatura do Estatuto de Roma, por meio do qual criou-se o Tribunal Penal Internacional (TPI).

Os fundamentos e objetivos do Tribunal Penal Internacional (TPI) são abordados. Além da competência e o funcionamento do Tribunal. O TPI vislumbra por apresentar soluções consensuais e máxima disposição dos compromissos pelos países signatários, além de englobar os diferentes interesses da política criminal das delegações estaduais de forma que todos Estados pudessem suportar seus compromissos.

O tratado estabelece os crimes da competência do Tribunal: crime de genocídio; crimes contra a Humanidade; crimes de guerra; O crime de agressão. São elencadas as principais características do TPI: imparcialidade e autonomia. E a obediência a princípios importantes, como o da reserva legal, a impossibilidade de exercer jurisdição retroativa, e a não previsão da pena de morte.

No CAPÍTULO 3, aborda-se o Princípio da Legalidade na forma teórica e já aplicada anteriormente no TPI. O princípio da legalidade é um dos pilares da justiça internacional e significa que uma pessoa só pode ser punida por um crime se o ato em questão for especificado em uma lei escrita. Ele é um dos Princípios Gerais do Direito, e antes da criação do tribunal, muitos casos eram julgados desrespeitando esse princípio, hoje temos expressamente previsto os casos de crimes, não dando espaço para interpretações análogas, e nos casos de ambiguidade, favorecendo o acusado.

Por fim, realizamos a análise de casos em que foi aplicado o Princípio da Legalidade para garantir a justiça e imparcialidade dos julgamentos, tais como: Caso Ongwen, Caso Katanga e Caso Lubanga.

Por fim, o Tribunal Penal Internacional visa proteger os direitos humanos, "considerando que o descomhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a actos de barbárie que revoltam a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do ser humano" (Brasil, 1998).

2 CAPÍTULO 1: ORIGEM DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

2.1 TRATADO DE VERSALHES

Com o fim da Primeira Guerra Mundial, utilizou-se o Tratado Versalhes para realizar a primeira tentativa da criação de um Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal era composto pelos vencedores da Guerra, e através dele seriam julgados os responsáveis pelos crimes cometidos durante esse período (Slavicek, 2010).

Infelizmente o tribunal não efetivou os seus objetivos. Um dos exemplos de ineficácia e ineficiência do Tribunal, refere-se ao caso de Kaiser Guilherme II (Castro, Pasquarell, 2022) da Alemanha, um dos principais articuladores da Guerra, ele se refugiou na Holanda, e o país não permitiu que ele fosse extraditado para o julgamento, baseando-se no princípio da legalidade, fundamentando que as violações não estavam devidamente tipificadas no Direito Internacional, nem tampouco as violações às convenções de Direito Humanitário.

2.2 TRIBUNAL DE NUREMBERG

Posteriormente, o Tribunal de Nuremberg possibilitou o julgamento dos grandes criminosos durante a Segunda Guerra Mundial e foi um relevante progresso para o Direito Penal Internacional, apesar de ter muitos vícios atribuídos ao seu desempenho. No ano de 1945, os países aliados contra o nazismo passaram a averiguar os crimes cometidos pela Alemanha nazista e como os autores desses crimes seriam julgados. Um mês depois do fim da segunda grande guerra ocorreu um julgamento que foi sediado em Nuremberg, Alemanha. A possibilidade de respeito aos direitos humanos, inclusive dos potenciais criminosos, englobava os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, permitindo que os criminosos pudessem ter um julgamento justo e não serem simplesmente executados.

Após a Segunda Guerra Mundial ocorreram dois importantes momentos na história do Direito Internacional: a criação da Organização das Nações Unidas (ONU), e a proclamação da Declaração dos Direitos Universais do Homem, refletindo posteriormente na Resolução 95 da Assembleia Geral da ONU, que estabeleceu os princípios de Nuremberg.

Tais princípios permitiram o mapeamento da normativa internacional e são utilizados atualmente: da culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado como

crime pelo direito internacional, da posição e imunidades, da obediência hierárquica não excludente de responsabilidade, do devido processo legal, da legalidade, e da participação no ato criminoso, princípio da jurisdição universal, dentre outros.

O princípio da culpabilidade individual como fundamento da responsabilidade penal por ato considerado como crime pelo direito internacional é considerado extremamente importante pois, até então, a responsabilidade pelos -crimes cabia apenas aos Estados, excluindo-se os indivíduos. Atualmente, há a responsabilização dos Estados, porém, há a possibilidade de também responsabilizar internacionalmente os criminosos.

O princípio da posição e imunidades refere-se ao fato de que, a posição hierárquica ocupada pela pessoa não necessariamente confere imunidade, nem exclui a responsabilidade com base apenas em cumprimento de ordem hierárquica. Vale mencionar que, nesse caso pode existir a exceção dos crimes de guerra, pois a ordem para cometimento de crime contra a paz é sempre considerada ilegal.

Importante ressaltar também, o princípio do devido processo legal, através dele, o Tribunal de Nuremberg passou a responsabilizar pessoalmente os indivíduos, e evitando a execução sumária, sem julgamento. A forma adequada do devido processo legal, permitiu que, por mais grave que seja a acusação, o acusado tem o direito a um julgamento justo. Nesse sentido, cabe ressaltar: "com o juízo de culpa apenas se quer censurar o delinquente que não se preparou para respeitar os comandos jurídicos-criminais e, portanto, para respeitar aquele mínimo que a vida em sociedade impõe (Correia, Dias, 1971).

Sobre o princípio da jurisdição universal o Estado se submete automaticamente ao Estatuto. Cabe mencionar que, outros Estados, como por exemplo, os Estados Unidos necessitam da diferenciação entre genocídio e crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Os artigos 11 a 16 do Estatuto trazem os requisitos de jurisdição e admissibilidade. Nesse sentido, vale ressaltar o texto de Ambos (1999): "Gerichtshoffreundliche Staateen, insbesondere auch Deutschland, vertraten auf der Grundlage des Weltrechtsprinzips die Ansicht, daS - erstens - eon Staatsich automatisch mit Vertragsbeitritt der Gerichtsbarkeit unterwerfen und - zweitens - der Gerichtshof eine universelle Zuständigkeit besitzen müsse".

Por fim, o princípio da participação no ato criminoso, prevista para responsabilizar não apenas os autores dos delitos, mas também aqueles que se escondem por detrás deles, seja por interesses políticos ou financeiros, mas participam orquestrando as barbáries da guerra.

Considerado pelos doutrinadores como um tribunal de exceção, o Tribunal de Nuremberg cometeu muitas irregularidades. Mesmo que a tentativa tenha sido em sentido positivo, e tenha progredido em relação às execuções sumárias, esse Tribunal foi criado após os atos de guerra, e os julgadores eram na grande maioria, os próprios vencedores de guerra, os vencidos acabavam por terem seus direitos desrespeitados e eram condenados por inúmeros crimes que não lhes pertenciam. Ou seja, na maioria das vezes, os juízes escolhidos eram representantes das potências vencedoras, desrespeitando preceitos importantes do direito, tais como a imparcialidade e a neutralidade.

Por fim, o principal contributo do Tribunal de Nuremberg foi especificar e tipificar os crimes internacionais, ou seja, crimes que põem em risco a paz e a sobrevivência da humanidade. Esse avanço permitiu que, sempre que um crime fosse considerado internacional, seria imediatamente estabelecido a competência para processo e julgamento dele, evitando uma série de injustiças e elevando as garantias aos direitos humanitários.

2.3 TRIBUNAL DE TÓQUIO

Posteriormente ocorreu a criação de mais um tribunal temporário, de exceção, feito especialmente para determinado caso, o Tribunal de Tóquio, ou Tribunal para o Extremo Oriente. A intenção específica era prever penas para os crimes contra a paz, a humanidade e os crimes de guerra cometidos por autoridades Japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Como resultado dos vinte e oito acusados, sete foram condenados à morte, dezesseis à prisão perpétua e os outros a penas menores (Aguilar, 2016).

2.4 TRIBUNAIS PARA RUANDA E EX-IUGOSLÁVIA

Outros dois, criados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, foram os tribunais para Ruanda e para a Ex-Iugoslávia. Ambos se esmeraram em julgar e condenar os responsáveis pelos massacres e por violações graves do direito humanitário cometido em ambos os países. Em ambos os casos, as violações foram cometidas no âmbito de conflitos armados internos, portanto, ambos os casos serviram para reconhecer que violações aos direitos humanos e violações graves do direito internacional praticadas internamente constituem-se crimes internacionais.

Após esse emaranhado entre tentativas de punição, vícios e respeito aos direitos humanos ocorridos no Tribunal de Nuremberg,

houve uma Assembleia Geral da ONU em 1948, com a intenção de criar a Comissão de Direito Internacional. Essa Comissão tinha o objetivo de criar um tribunal penal internacional de caráter permanente. O Conselho de Segurança criou esses tribunais penais por ser uma fase em que ocorreram violações sérias, no entanto, ainda julgavam casos retrospectivos. Porém houve a introdução do crime de genocídio e caiu o crime contra a paz, nessa época foi produzida uma jurisprudência rica e vasta.

Em 1991, iniciou-se conflito armado na antiga Iugoslávia, e na mesma década ocorreu genocídio no território de Ruanda na África. Por conta disso, o Conselho de Segurança das Nações Unidas decidiu criar tribunais ad hoc. Foram então criados dois tribunais para casos específicos, o primeiro em 1993, para o caso da Iugoslávia, conforme resolução 827 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e o segundo em 1996 para Ruanda, pela resolução 955 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA (ICTR) foi criado em 1995 com o objetivo em de punir penalmente os acusados considerados responsáveis pelas sérias violações do Direito Humanitário Internacional. A situação em Ruanda tratava de grupos políticos extremistas, apoiados pelo governo, que organizaram assassinatos em massa, com torturas e estupros. Tal confronto persistiu por muito tempo entre dois grupos étnicos: Tutsis e os Hutus. O genocídio decorreu do próprio sistema político que incentivava as divisões étnicas, manipulação política, causando mais de quinhentas mil pessoas assassinadas em três meses. Almeida (2009) menciona que "os regimes políticos que fazem uso do terror procuram fazer com que suas ações desapareçam para a população como essenciais para uma construção harmônica da sociedade". A situação ficou insustentável, criando instabilidade política e crises humanitárias em toda a região dos Grandes Lagos Africanos e o genocídio só chegou ao fim quando alguns exilados Tutsis se rebelaram, criando a Frente Patriótica Ruandesa (RPF), e intervieram, com o apoio da comunidade internacional.

Dessa forma, o ICTR foi inovador na questão de dar veredictos em relação ao crime de genocídio, trazendo justiça para as vítimas e diminuindo o cometimento de novos crimes. O TPIR foi criado para processar os líderes políticos e militares hutus responsáveis pelo genocídio. De acordo com Flávia Piovesan (2002), "a gravidade do crime de genocídio poderia implicar o colapso das próprias instituições nacionais, que, assim, não teriam condições para julgar seus perpetradores.

Ainda há de ser mencionado o INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) com o objetivo de punir os principais responsáveis pelas atrocidades cometidas na guerra. As diferenças étnicas entre locais e sérvios desencadearam a guerra civil que aconteceu na Iugoslávia e causou sua fragmentação. Foi criado em 1993 pelo Conselho de Segurança da ONU, após conflitos étnicos violentos em toda a região dos Bálcãs. O tribunal foi criado para processar indivíduos responsáveis por violações graves do direito internacional humanitário durante esses conflitos. O ICTY foi o primeiro tribunal penal criado pelas Nações Unidas, e provou que era possível existir justiça internacional transparente e eficiente, principalmente porque os juízes já não tinham lado e as condutas delituosas estavam descritas no Direito Internacional.

Ambos os tribunais têm poderes para investigar e julgar indivíduos suspeitos de crimes graves, incluindo genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e violações do direito internacional humanitário. Eles são tribunais internacionais e seus casos são julgados por juízes internacionais, incluindo juízes designados pelos países participantes. Os tribunais Ad hoc para a ex Iugoslávia e Ruanda marcaram um importante passo na implementação de uma justiça internacional em casos de crimes graves.

Cabe ressaltar, porém, duas críticas sobre o ICTR e o ICTY que não desapareceram após o Tribunal de Nuremberg: A primeira crítica diz respeito à seletividade do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo em vista que, de acordo com o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas (Ki-Moon, 2010), o Conselho de Segurança é o órgão encarregado de tomar todas as medidas que sejam necessárias para a manutenção ou restabelecimento da paz, não cabendo discriminação. A segunda crítica trata da criação dos tribunais após a ocorrência dos fatos, desobedecendo de certa forma o princípio da legalidade, e é uma garantia fundamental da pessoa humana ser processada e julgada por um tribunal competente criado com anterioridade. Dessa forma, ambos os tribunais evoluíram, mas continuaram com status de tribunais de exceção.

3 CAPÍTULO 2: ESTATUTO DE ROMA - FUNDAMENTOS E OBJETIVOS DO TRATADO INTERNACIONAL QUE ESTABELECE O TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL - ESTABELEECENDO O TPI

Neste capítulo cabe tratarmos sobre os crimes que são de competência do Tribunal, a forma como é estabelecida a jurisdição e quais

as garantias processuais para as pessoas acusadas de crimes internacionais.

O Tribunal Penal Internacional busca cumprir este objetivo de forma independente, imparcial e eficaz. Além disso, o TPI tem como objetivo garantir que as vítimas e seus direitos sejam levados em consideração durante todo o processo, garantindo a efetividade da proteção aos direitos humanos.

Segundo Almeida (2009), o Tribunal Penal Internacional pode considerar um ato desumano como Crime contra a Humanidade, mesmo que cometido por apenas um indivíduo uma ou duas vezes, contra um número qualquer de pessoas, desde que esse indivíduo esteja inserido em um grupo hegemônico, e que tal grupo seja regido por uma ideologia e pratique atos desumanos de forma sistemática e generalizada. Atualmente existem várias decisões que corroboram com essa ideia do Tribunal Penal Internacional.

Após a experiência dos tribunais ad hoc (ICTR e ICTY), foi convocada, em 1998, a Conferência de Roma, onde se assinou o Estatuto de Roma, por meio do qual criou-se o Tribunal Penal Internacional (TPI), o primeiro e único, tribunal internacional de caráter permanente. Sua sede é em Haia, conforme está previsto no Artigo 1 ao 4, dentre outras questões organizacionais. O Estatuto de Roma (United Nations, 1998) determina em seu Artigo 1º, a criação do Tribunal Penal Internacional como uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, e será complementar das jurisdições penais nacionais.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) tem como fundamentos a justiça internacional e a erradicação da impunidade em relação aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional, como genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e o crime de agressão. O objetivo principal do TPI é responsabilizar indivíduos por estes crimes, que são considerados de grande impacto para a comunidade internacional, e contribuir para a prevenção de futuros atos de violência e conflitos.

A competência e o funcionamento do Tribunal regem-se por tal Estatuto, exige-se a ratificação dos países, e ele só pode julgar fatos a partir de sua criação. Segundo Ambos (1999), o Estatuto foi criado esperando por soluções consensuais e máxima disposição dos compromissos pelos países signatários, além de englobar os diferentes interesses da política criminal das delegações estaduais de forma que todos Estados pudessem suportar seus compromissos. É importante salientar que, as peculiaridades dos objetos das negociações tornam

necessário a busca por soluções que vão além do mero direito penal comparado.

O tratado estabelece as leis e procedimentos para processar e julgar indivíduos acusados de crimes. No entanto, alguns países, como os Estados Unidos, não ratificaram o tratado e não reconhecem a autoridade do Tribunal. Conforme definido no Estatuto, o Artigo 5.º manteve os seguintes crimes e definiu os crimes da competência do Tribunal: crime de genocídio; crimes contra a Humanidade; crimes de guerra; O crime de agressão.

Estão entre as principais características do TPI, ele ser imparcial e autônomo. Isso faz-se essencial a fim de garantir sua independência. Ele não faz parte do sistema das Nações Unidas, tem somente um acordo de cooperação recíproca. Ele obriga as partes que assinaram o tratado. A complementariedade, segundo Bassiouni (1999) é característica de sua base convencional, pode ser destacado o caráter complementar ao das jurisdições primárias, internas, dos Estados, ou seja, ele só pode atuar se, e quando, o Estado que tiver obrigação de investigar, processar e julgar a infração. Corroborando essa ideia: “a jurisdição do tribunal é adicional e complementar à do Estado, ficando condicionada à incapacidade ou à omissão do sistema judicial interno” (Piovesan, 2002).

O TPI obedece ao princípio da reserva legal, ou seja, as condutas típicas submetidas à jurisdição do tribunal estão devidamente descritas no Estatuto de Roma, em seu artigo 5º, sendo os crimes mais graves ao direito internacional. Há ainda a impossibilidade de exercer jurisdição retroativa, se o Tratado em questão passou a vigorar a partir do dia do dia 1 de julho de 2002, não pode-se exercer jurisdição em questões anteriores a esta data, conforme definido no Artigo 24 do Estatuto de Roma.

Há ainda de se mencionar sobre os casos dos Estados que ratificaram o Estatuto de Roma posteriormente à referida data. O TPI só tem competência para julgar os crimes ocorridos após a data de ratificação. Cabem duas exceções a esse princípio da não retroatividade: 1 - Um país que tenha ratificado o tratado pode pedir ao tribunal que investigue, processe e julgue crimes anteriores à ratificação, desde que não sejam anteriores à data que este começou a vigorar (1 de julho de 2002). 2 - De acordo com o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança é o órgão que tem competência para criar tribunais ad hoc, podendo enviar ao TPI qualquer situação de crimes ocorridos em qualquer Estado ou praticados por nacionais de qualquer Estado, independentemente da existência de ratificação, sua única limitação é a regra geral da retroatividade.

Cabe ainda ressaltar que, o TPI não traz previsão da pena de morte, mas sim da pena de prisão perpétua, conforme Artigo 77 (United Nations, 1998) – limite máximo da pena, e que crimes de guerra admitem prova em contrário, porém genocídio e crimes contra a humanidade não. E por fim, o TPI não reconhece as imunidades, não podendo um indivíduo ser julgado, ou não, somente em razão do cargo que ocupa (artigo 27 do Estatuto de Roma) (United Nations, 1998).

Importante mencionar que, o tribunal não exerce jurisdição retroativa, assim, como foi criado por um tratado que passou a vigorar a partir do dia do dia 1 de julho de 2002, ele não pode exercer jurisdição em questões anteriores a esta data (artigo 24 do Estatuto de Roma) (United Nations, 1998). No caso dos Estados que ratificaram o Estatuto de Roma posteriormente à referida data, o tribunal só tem competência para julgar os crimes ocorridos após a data de ratificação.

4 CAPÍTULO 3: O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: DEFINIÇÃO, IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO NO TPI

4.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade trata sobre a necessidade da descrição das condutas criminosas em tratados internacionais, ele é um dos pilares da justiça internacional e significa que uma pessoa só pode ser punida por um crime se o ato em questão for especificado em uma lei escrita. Antes da criação do tribunal, muitos casos eram julgados desrespeitando o princípio basilar do direito: o princípio da legalidade, ou seja, "nullum crimen sine legen".

Almeida (2008) trata “sistema de aplicabilidade directa” do Direito Internacional Penal, revelando que o princípio da legalidade aplica-se, in casu, e terá o alcance que vigorar no ordenamento jurídico interno do Estado julgador.

O Direito Internacional recorre aos Princípios Gerais do Direito, oriundos do Direito Interno do Estado. O Artigo 22 do Estatuto de Roma prevê o princípio da legalidade - Nullum crimen sine lege: "Nenhuma pessoa será considerada criminalmente responsável, nos termos do presente Estatuto, a menos que a sua conduta constitua, no momento em que tiver lugar, um crime da competência do Tribunal" (United Nations, 1998). Ademais, o Estatuto estabelece que o crime deve ser previsto de forma precisa, não dando espaço para interpretações análogas, e "em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objecto de inquérito, acusada ou condenada".

O outro princípio geral do direito, definido através do Artigo 23 do Estatuto de Roma, trata do "Nulla poena sine lege", ou seja, qualquer pessoa condenada pelo Tribunal só poderá ser punida em conformidade com as disposições do Estatuto.

Dias (1993) considera o princípio da legalidade como ainda hoje, o primeiro e o mais importante princípio e que deve continuar a dominar a política criminal devido à sua conformidade com a idéia do Estado de Direito. Esse princípio deve abraçar a definição das medidas de segurança e das condições de sua aplicação: tanto no plano das fontes formais, como no da proibição de retroactividade e do recurso à analogia contra reo.

Dessa forma, só existe crime passível de ser julgado quando há lei previa estrita e escrita. Segundo Correia e Dias (1971), todos os códigos criminais consagram esse princípio: "o nosso direito é constitucionalmente dominado pelo princípio nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege. Tal princípio é encontrado também no Artigo 29 da Constituição da República Portuguesa, que proíbe que se seja sentenciado criminalmente sem que uma lei anterior declare puníveis o ato ou a omissão" (Portugal, 1976).

Ainda que existam exceções do princípio da legalidade no Direito Penal, conforme os casos previstos no Artigo 7º, a – j, do Estatuto de Roma (United Nations, 1998). Nesses casos caberiam a analogia no Direito Penal, porém Correia e Dias (1971) tratam da analogia como o "problema da analogia", referindo-se que "por toda parte se está de acordo em que a analogia deve, pelo menos em princípio, ser repudiada. "Tal repúdio decorre das decorrentes incriminações por "força de uma visão normativista ou ordinalista concreta do direito".

Nesse sentido, cabe analisar os casos em que foram aplicados o Princípio da Legalidade para garantir a justiça e imparcialidade dos julgamentos.

4.2 AÇÕES E RESULTADOS DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Cabe analisarmos alguns casos que delimitaram o princípio da legalidade como essencial. São eles:

4.2.1 CASO ONGWEN

O presente caso trata de crianças-soldado em conflitos armados. O caso vai além do impedimento de crianças envolvidas em conflitos, pois, aborda danos irreparáveis na construção da personalidade do ser humano.

O ugandês Dominic Ongwen foi a primeira criança-soldado a ser julgada no Tribunal Penal Internacional (TPI), ele cometeu os mesmos crimes que cometeram contra ele, ou seja, crimes contra a humanidade e de guerra, pela prática de tortura, crimes sexuais e o próprio recrutamento de outras crianças para igualmente atuarem nas hostilidades (Cardoso *et al.*, 2022).

Spivak (2010) explica que, a vulnerabilidade dele por ser criança, e por todo o contexto ocorrido em sua vida: sequestro pelo grupo rebelde Lord's Resistance Army, ser vítima de tortura, inclusive tendo participado de assassinatos de civis, etc. de certa forma influenciou na sua trajetória dentro do próprio grupo, a ponto de chegar a chefiar muitas ações militares.

Após a inobservância das leis por parte do Estado, cabe identificar o papel do Direito Internacional nesse caso, em especial do Direito Humanitário. O Estado não evitou a violação de seus direitos. Justamente por isso, durante o julgamento, a defesa argumentou que as acusações contra Ongwen não estavam claramente definidas em lei. No entanto, a maioria dos juízes do TPI considerou que as acusações eram precisas e que o princípio da legalidade havia sido respeitado.

4.2.2 CASO KATANGA

Germain Katanga, comandante da milícia Patriotes Résistants Congolais, localizado na República Democrática do Congo, foi acusado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Katanga não poderia ser julgado por crimes que não estavam previstos em uma lei escrita. No entanto, a maioria dos juízes do TPI decidiu que os crimes em questão estavam claramente definidos na lei e que o princípio da legalidade havia sido respeitado.

4.2.3 CASO LUBANGA

Thomas Lubanga, líder rebelde congolês, acusado por crimes de guerra cometidos em Ituri (República Democrática do Congo), pelo Tribunal Penal Internacional relacionados ao recrutamento de crianças soldado. O caso em tela, representa um processo considerado inovador. Os procedimentos realizados na Corte foram considerados ousados, e foram muito criticados, pois foram ouvidas 129 vítimas (Valéry, Moreira, 2013).

Algumas instituições e organizações não governamentais também foram ouvidas, inclusive a Federação Internacional dos Direitos Humanos - FIDH e a Associação Africana Dos Direitos do Homem – ASADHO.

Dessa forma, houve presença da sociedade civil nacional e internacional no decorrer do processo.

As entidades se mobilizam para que haja continuidade das investigações e persecução penal dos envolvidos em graves crimes sexuais. Importante mencionar que, o TPI demonstra preocupação com a generalização da violência sexual utilizada como meio de guerra.

Durante o julgamento, a defesa argumentou que a lei que criminaliza o recrutamento de crianças soldado não era clara o suficiente. No entanto, a maioria dos juízes do TPI decidiu que a lei era clara e que o princípio da legalidade havia sido respeitado.

Nesse caso, o TPI observou o princípio da reserva legal, isto é, todas as condutas típicas submetidas à jurisdição do tribunal estão devidamente descritas no Estatuto de Roma, em seu artigo 5º, sendo os crimes mais graves ao direito internacional. Dessa forma, o tribunal não exerceu jurisdição retroativa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inúmeros são os avanços construídos no campo do Direito Internacional Público, porém, também, muitos são os problemas demonstrados ao longo dessa construção. Através desse trabalho procuramos demonstrar os desafios e os pontos negativos e positivos observados.

No Capítulo 1 conhecemos a origem do Tribunal Penal Internacional, após a Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, posteriormente houve a tentativa do Tribunal de Nuremberg julgar os criminosos durante a Segunda Guerra Mundial, e por fim o Tribunal de Tóquio, previa penas para os crimes cometidos por autoridades Japonesas. Todos foram grandes conquistas para os Direitos Humanos, pois, permitiram que os criminosos pudessem ter um julgamento justo e não serem simplesmente executados, tipificaram os crimes, porém também cometeram muitas irregularidades.

Abordamos os tribunais para Ruanda e para a Ex-Iugoslávia, que julgam e condenam os responsáveis pelos massacres e por violações graves do direito humanitário cometido em ambos os países. Mesmo com a evolução desses tribunais ainda continuaram com status de tribunais de exceção. Adentramos nos principais princípios que mapearam a normativa internacional e são até hoje utilizados.

No capítulo 2 tratamos sobre o Estatuto de Roma e de que forma foi estabelecido o Tribunal Penal Internacional, bem como o tipo de crime que é competência deste Tribunal, a forma como é estabelecida a

jurisdição e quais as garantias processuais para as pessoas acusadas de crimes internacionais.

Dessa forma, coube abordarmos o objetivo principal do TPI, que é responsabilizar indivíduos por crimes considerados de grande impacto para a comunidade internacional, e contribuir para a prevenção de futuros atos de violência e conflitos. Tratamos sobre a competência e o funcionamento do Tribunal e as principais características do TPI.

Coube trazer à tela que o TPI obedece estritamente ao princípio da reserva legal e não traz previsão da pena de morte, mas sim da pena de prisão perpétua, nem tampouco exerce jurisdição retroativa, ou seja, o tribunal só tem competência para julgar os crimes ocorridos após a data de ratificação.

No Capítulo 3 houve a necessidade de adentrar no princípio da legalidade afim de entender seu significado, e suas previsões expressamente previstas em lei. Por fim, analisamos alguns casos em que foram aplicados o Princípio da Legalidade para garantir a justiça e imparcialidade dos julgamentos, tais como: CASO ONGWEN, CASO KATANGA e CASO LUBANGA.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, V. C. M. R. **O Tribunal de Nuremberg e os Tribunais internacionais**. São Paulo: Saraiva, 2016.

ALMEIDA, F. A. M. L. F. **Os crimes contra a humanidade no actual Direito Internacional Penal**. Coimbra: Almedina, 2009.

ALMEIDA, Francisco António de Macedo Lucas Ferreira de. **Os crimes contra a humanidade no actual direito internacional penal**. Tese de (doutoramento em Ciências Jurídico-Políticas) – Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2008.

AMBOS, K. Zur Rechtsgrundlage des Internationalen Strafgerichtshofs. Eine Analyse des Rom-Statuts, 1999.

BASSIOUNI, M. C. **Crimes against humanity in international criminal law**. Martinus Nijhoff Publishers, 1999.

BRASIL. Representação da UNESCO no. **Declaração universal dos direitos humanos**. 1998.

CARDOSO, T. A. F. R.; SILVA, P. L.; FEITOZA, D. U. P. F. *et al.* A subalternidade de crianças soldado no âmbito do tribunal penal internacional: Uma análise do caso de Dominic Ongwen. **Revista Direito em Debate**, v. 31, n. 58, 2022, p. 12889-12889.

CASTRO, I. L.; PASQUARELL, B. V. L. O Tribunal de Nuremberg. **Perspectivas Sociais**, v. 8, n. 01, 2022, pp. 63–81.

CORREIA, E.; DIAS, J. F. **Direito Criminal**. [Reimpressão da 1. ed]. 1971, Coimbra: Almedina. v. I

DIAS, J. F. **Direito penal português**: as consequências jurídicas do crime. Lisboa: Aequitas/Editorial Noticias, 1993.

KI-MOON, B. Carta das Nações Unidas. **Sustainability in Debate**, v. 1, n. 2, p. 15-15, 2010.

PIOVESAN, F. A Força do Direito versus o Direito da Força. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 2 maio 2002.

PORTUGAL. VII Revisão Constitucional. **Constituição da República Portuguesa**. Lisboa, 1976.

SLAVICEK, L. C. **The treaty of versailles**. Infobase Publishing, 2010.

SPIVAK, G. C. **Pode o subalterno falar**. Minas Gerais: UFMG, 2010.

UNITED NATIONS. **Rome Statute of the International Criminal Court**. Online. 1998. Disponível em: https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/estatuto_roma_tpi.pdf.

VALÉRY, F. D.; MOREIRA, T. O. Justiça Criminal em Construção: O Tribunal Penal Internacional e o Caso Lubanga. **Revista de Direito Brasileira**, v. 4, n. 3, p. 184-213, 2013.

ENTRE TEXTOS E CONTEXTOS: A HERMENÊUTICA COMO FAROL PARA ADAPTAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS EM UMA SOCIEDADE EM CONSTANTE MUDANÇA

BETWEEN TEXTS AND CONTEXTS: HERMENEUTICS AS A LIGHTHOUSE FOR ADAPTATION OF SOCIAL RIGHTS IN A CONSTANTLY CHANGING SOCIETY

Caroline da Rosa Cavalheiro⁶¹
Juliana Inês Urnau⁶²

Resumo

No imbricado cenário da sociedade contemporânea, os direitos sociais enfrentam desafios cada vez mais intrincados à medida que as dinâmicas sociais, culturais e tecnológicas evoluem. Nessa toada, o presente estudo tem como escopo compreender como os direitos sociais estão sendo salvaguardados em uma sociedade em rede. Por conseguinte, esta investigação tem o fito de responder à seguinte indagação: em que medida hermenêutica jurídica pode facilitar a adaptação e interpretação de direitos sociais em contextos sociais em constante mudança? Desse modo, adotar-se-á como teoria de base a fenomenológica-hermenêutica, e em termos de procedimento, utilizar-se-á o bibliográfico e o documental. Logo, a técnica escolhida será a de fichamentos e resumos. Como conclusão é possível observar que a hermenêutica não resolve os problemas sociais do Brasil, mas é capaz de iluminar os caminhos para a interpretação jurídica.

Palavras-chave: Direitos Sociais; Hermenêutica Jurídica; Adaptação.

Abstract

In the intertwined scenario of contemporary society, social rights face increasingly intricate challenges as social, cultural and technological dynamics evolve. In this sense, the present study aims to understand how social rights are being safeguarded in a network society. Therefore, this research aims to answer the following question: to what extent can legal

⁶¹ Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: carolinedrcavalheiro@gmail.com

⁶² Mestranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria. E-mail: julianaurnau@gmail.com

hermeneutics facilitate the adaptation and interpretation of social rights in constantly changing social contexts? In this way, phenomenological-hermeneutics will be adopted as the basic theory, and in terms of procedure, bibliographic and documentary will be used. Therefore, the technique chosen will be that of records and summaries. In conclusion, it is possible to observe that hermeneutics does not solve Brazil's social problems, but it is capable of illuminating the paths to legal interpretation.

Keywords: Social Rights; Legal Hermeneutics; Adaptation.

1 INTRODUÇÃO

No intrincado e dinâmico cenário da sociedade contemporânea, onde as mudanças sociais, culturais e tecnológicas ocorrem em ritmo acelerado, os direitos sociais se deparam com desafios cada vez mais complexos. Sob a influência dessas dinâmicas mutáveis, a salvaguarda e adaptação dos direitos sociais tornam-se temas centrais e urgentes para a compreensão e efetivação da justiça social.

À medida que as fronteiras entre o local e o global se diluem, e as interconexões se intensificam, a configuração tradicional dos direitos sociais, concebidos em contextos históricos específicos, necessita de uma compreensão mais profunda e adaptativa. A sociedade, agora mais interligada do que nunca, demanda uma abordagem dinâmica e contextualizada para garantir que os direitos sociais não apenas resistam às mudanças, mas floresçam em meio a essas transformações.

Nessa maré, o intento desta pesquisa é responder o seguinte questionamento: em que medida a hermenêutica jurídica pode facilitar a adaptação e interpretação de direitos sociais em contextos sociais em constante mudança? Para isso, foi adotada como teoria de base a fenomenológica-hermenêutica e o procedimento consistirá no bibliográfico e documental, visto que a base de pesquisa está fundamentada em fichamentos e resumos elaborados a partir de livros e artigos pertinentes à temática abordada.

Diante disso, o objetivo geral do trabalho é compreender como os direitos sociais estão sendo assegurados em uma sociedade em rede. Para alcançar tal intento, primeiro se pretende verificar os direitos sociais na sociedade em rede e dando continuidade, serão estudados os desafios que surgem para o campo jurídico interpretativo, dividindo o estudo em dois capítulos, cada um abordando temas específicos.

2 CONTEXTOS DISTINTOS E DIREITOS RESILIENTES: HISTORICIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS

A sociedade contemporânea, resumidamente, configura-se como uma estrutura social intrincada, formada por complexas redes impulsionadas por tecnologias de comunicação e informação, as quais são baseadas na microeletrônica e em redes digitais de computadores e essas redes desempenham um papel fundamental ao gerar, processar e disseminar informações, com base no conhecimento acumulado nos diversos pontos de interconexão dessa vasta teia (Castells; Cardoso, 2005). Ou seja, hoje, a sociedade é feita de muitas redes que usam tecnologias como computadores e eletrônicos pequenos para se comunicar e compartilhar informações. Dessa forma, grande parte das pessoas e dispositivos eletrônicos estão conectados, trabalhando juntos como uma grande rede, compartilhando conhecimento e formando essa estrutura social moderna.

No entanto, no âmbito dos direitos sociais, é importante considerar como essa conectividade impacta o acesso equitativo a oportunidades, recursos e serviços. Os direitos sociais, que englobam aspectos como educação, saúde e bem-estar, tornam-se fundamentais na busca por uma sociedade digital inclusiva, garantindo que os benefícios dessa rede global sejam distribuídos de maneira justa e acessível a todos.

Desse modo, “os direitos humanos constituem o principal desafio para a humanidade nos primórdios do século XXI” (Herrera Flores, 2009, p. 17). Contudo, as restrições estabelecidas ao longo da história pelas ideias do liberalismo político e econômico demandam uma revisão abrangente que os alinhe com os desafios contemporâneos que enfrentamos atualmente (Herrera Flores, 2009). Isso ressalta a importância de repensar e adaptar os princípios fundamentais dos direitos humanos diante das complexidades do cenário contemporâneo.

Aliás, é inegável o considerável esforço internacional em estabelecer juridicamente uma base mínima de direitos que abranja todos os indivíduos e formas de vida que compõem a concepção abstrata de humanidade (Herrera Flores, 2009). Apenas mencionar documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Sociais e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, fornece uma sólida evidência do que relata (Herrera Flores, 2009). Esses marcos jurídicos sublinham a busca pela proteção e promoção dos direitos humanos em escala internacional.

Nessa senda, seja dito de passagem que considerando que examinar a evolução dos direitos fundamentais ao longo da história é crucial para compreender o significado, a base e a extensão de cada direito conquistado, faremos uma breve análise do desenvolvimento dos direitos

sociais (Gotti, 2012). Isto é, é preciso conhecer a “ancestralidade” do passado para entender o presente.

Com o intuito de conter abusos perpetrados pelo poder, os direitos fundamentais, na fase inicial do constitucionalismo, "são o resultado peculiar (com exceção de certo conteúdo social típico do constitucionalismo francês) do pensamento liberal-burguês do século XVIII, caracterizado por uma natureza individualista acentuada, eles surgem e se afirmam como direitos do indivíduo em relação ao Estado, especialmente como direitos de defesa, delineando uma área de não intervenção do Estado e uma esfera de autonomia individual diante de seu poder (Gotti, 2012). Em outros termos, resumidamente, os direitos fundamentais serviram para defender o indivíduo contra possíveis excessos de poder estatal.

Naquela época, a lógica do modelo liberal se expressava por meio da "abstenção" e da "não atuação" do Estado considerado como uma entidade adversa, desse modo, ganha destaque uma interpretação particular de "bloqueio", indicando que os direitos concebidos (liberdade, vida, propriedade e igualdade perante a lei) eram direitos que poderiam ser opostos ao Estado (Gotti, 2012).

Isso significa que o jeito de pensar do governo seguia a ideia de ficar "parado" e não agir muito, considerando o Estado como algo meio adversário e isso acarretava em uma percepção de que os direitos mencionados poderiam ser usados como forma de oposição ao governo. Consequentemente, “a liberdade, valor máximo do Estado Liberal, conduziu “a graves e irreprimíveis situações de arbítrio” (Gotti, 2012, p.16). “Expunha, no domínio econômico, os fracos à sanha dos poderosos” (Gotti, 2012, p.16).

Nesse contexto, tornou-se evidente que, na ausência de igualdade de condições, o direito à liberdade se tornava uma formalidade vazia, incapaz de resolver os desafios enfrentados pelas camadas proletárias da sociedade (Gotti, 2012). Era fundamental, então, buscar uma agenda que efetivasse a igualdade de oportunidades como meio essencial para melhorar as condições de vida e garantir, de fato, a liberdade social (Gotti, 2012). “Essas reivindicações sociais por melhores condições de vida culminaram na progressiva conquista dos direitos sociais” (Gotti, 2012, p.16).

Em outras palavras, a busca por oportunidades iguais ganhou destaque como uma resposta crucial para atender às demandas sociais e promover uma melhoria substancial na qualidade de vida das pessoas. Essa dinâmica impulsionou, de maneira progressiva, a conquista de direitos sociais. Nesse diapasão, se no constitucionalismo liberal o Estado

adota uma posição "negativa" de "abstenção" diante do exercício dos direitos fundamentais pelos indivíduos, no constitucionalismo social se exige do Estado - que se transforma em um Estado aliado, em um Estado de confiança - uma postura completamente oposta (Gotti, 2012, p. 16).

Logo, “para a sua concretização, requer-se do Estado, reiteradamente, uma atitude "ativa" e "positiva", direcionando a interpretação de seus direitos para legitimar as aspirações sociais, em vez de limitar a atuação do Estado por meio de um "bloqueio" (Gotti, 2012). É como se o Estado não apenas permitisse, mas também colaborasse ativamente para que esses direitos se concretizassem. Uma vez que “sem individualismo não há liberalismo” (Bobbio, p.16).

Dessa maneira, a adjetivação pelo social pretende a correção do individualismo liberal por intermédio de garantias coletivas” (Streck; Bolzan de Moraes, 2014,p.62). O liberalismo clássico é reformulado pela integração do capitalismo com a busca pelo bem-estar social, originando a fórmula do *welfare state* neocapitalista no pós-Segunda Guerra Mundial (Streck; Bolzan de Moraes, 2014). Isso revela que o capitalismo não é abolido, mas é combinado com políticas sociais para garantir uma distribuição mais equitativa dos benefícios sociais.

Todavia, mesmo no âmbito do Estado Social de Direito, a questão da igualdade não encontra uma resolução, persistindo além de uma abordagem meramente formal, desprovida de fundamentação material (Streck; Bolzan de Moraes, 2014). Isso quer dizer que a busca pela igualdade não é concretizada de forma efetiva e substancial, limitando-se a uma abordagem mais teórica do que prática.

Por essas e diversas outras razões, emerge um novo conceito, buscando articular o ideal democrático ao Estado de Direito, isso não ocorre como uma mera justaposição de conceitos, mas sim com um conteúdo distinto que incorpora as conquistas democráticas, as garantias jurídico-legais e a preocupação social (Streck; Bolzan de Moraes, 2014). Busca-se ir além da simples coexistência de ideias, visando uma harmonização efetiva que leve em consideração tanto a democracia quanto os fundamentos legais e sociais.

Ao contrário dos modelos anteriores, o Estado Democrático de Direito não apenas mantém uma continuidade, mas representa uma ruptura, pois, por meio de textos constitucionais direcionadores e compromissados, explícita formal e materialmente as condições que possibilitam a transformação da realidade (Streck; Bolzan de Moraes, 2014). Sinaliza, desse modo, para a realização das promessas não cumpridas da modernidade, uma circunstância de destaque,

especialmente em nações periféricas e de modernidade tardia, como é o caso do Brasil (Streck; Bolzan de Moraes, 2014).

Nessa trajetória, observa-se uma constante redefinição do Estado de Direito, incorporando continuamente novos conteúdos, especialmente diante da imposição dos novos paradigmas característicos do Estado de Bem-Estar Social (Streck; Bolzan de Moraes, 2014). Destarte, a sucessiva evolução desse modelo é como uma jornada de ajuste, onde o Estado se modifica continuamente para atender às necessidades e expectativas em constante mudança da sociedade.

Assim, os direitos sociais foram integrados ao conjunto de direitos após intensas demandas da classe trabalhadora que, em meio à miséria, condições laborais desumanas e completa exclusão da vida social e política, buscava o respaldo estatal para suas necessidades relacionadas ao trabalho, à educação, à saúde e à moradia, as quais tinham têm como principal fundamento a proteção da dignidade humana (Gotti, 2012). Por isso, os direitos humanos para Hanna Arendt (1979) “não são um dado, mas um construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução”.

E, inclusive, menciona-se que “a proibição do retrocesso consiste na vedação aplicada ao legislador e ao administrador de reduzir o nível dos direitos econômicos, sociais e culturais de que goza a população” (Martins, 2020, p.105). É como dizer que, se conseguimos avançar em algo que beneficia a sociedade, não devemos dar passos para trás. Isso ajuda a garantir que as melhorias já alcançadas não sejam perdidas.

Não obstante, em 2020, o mundo foi assolado pelo COVID-19 e as sociedades, globalmente, enfrentaram desafios sem precedentes. A doença trouxe adversidades significativas na saúde, na economia e na forma como as pessoas vivem. Assim, vários direitos sociais foram impactados pela pandemia, com o surgimento de novas prioridades, urgências, necessidades (Martins, 2020, p.153).

À vista disso, por exemplo, “a educação precisou ter uma abordagem diferente, em razão do necessário distanciamento social entre os alunos” (Martins, 2020, p.154). Por consequência, “ocorre que a desigualdade social mostrou, de forma dura, imediata e cruel, a diferença entre estudantes ricos e pobres, com e sem acesso à internet” (Martins, 2020, p.154). “Ora, os estudantes que vivem em condições mais vulneráveis, impossibilitados de usufruir do ensino a distância, ainda sofrerão posteriormente os efeitos da precariedade no seu acesso” (Martins, 2020, p.154). Por isso, abordar essas disparidades é crucial não apenas para fomentar a igualdade na educação, mas também para

assegurar a plena realização dos direitos sociais para todos os indivíduos na sociedade.

Dentro desse contexto, é relevante destacar que o elo entre a pobreza, a exclusão social e os direitos sociais está precisamente no respeito à proteção da dignidade da pessoa humana, dado que segundo Rosenfeld, “onde homens e mulheres estiverem condenados a viver na pobreza, os direitos humanos estarão sendo violados” (Sarlet, 2011). Essa afirmação ressalta que a perpetuação da pobreza não apenas reflete uma questão socioeconômica, mas também representa uma violação dos princípios fundamentais dos direitos humanos. Ao integrar esse entendimento numa sociedade em rede, onde as relações e interconexões são essenciais reflete em um verdadeiro “um desafio que é ao mesmo tempo teórico e prático” (Herrera Flores, 2009, p. 23).

3 O PAPEL DA HERMENÊUTICA NA GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS EM MEIO ÀS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS

Diante dessas transformações dos direitos sociais, é necessário encarar como o direito encara a temática. Isso também implica compreender que tipo de Direito pode ser capaz de efetivar os direitos sociais e demais direitos e princípios constitucionais. Aqui o objetivo é verificar se a hermenêutica pode ser o caminho para interpretar esses direitos.

Diante disso, se entende que o Direito é uma ciência da compreensão, e como tal, faz uso da interpretação (Silva, 2004). Essa interpretação não parte de um ponto zero (Gadamer, 1997), assim como não está contido no texto e nem dá abertura para o intérprete decidir conforme sua consciência (Streck, 2020). Na verdade, há um fechamento hermenêutico de interpretação em que a interpretação legal deve ser feita a partir dos princípios constitucionais (Streck, 2020).

De acordo com Dworkin (2002, 2003, 2005), a interpretação jurídica ainda deve respeitar a integridade e a coerência, a partir do romance em cadeia, em que a historicidade é respeitada e o Direito é atualizado quando interpretado/aplicado (o que ocorre no mesmo momento).

A coerência está ligada por uma consistência lógica das decisões, enquanto que a integridade vai exigir que os julgadores construam seus argumentos de forma lógica, com igualdade e em observância com o conjunto do Direito. A integridade também serve de freio para arbitrariedades. O conjunto dessas duas é a busca da igualdade: casos

semelhantes devem ser tratados de forma semelhante. Ainda, ambas possuem relação com a tese de Dworkin de que direito é interpretação, mas que pelo direito ser objetivo, essa interpretação não é irrestrita, mas leva a uma resposta correta, mais adequada (Streck, 2020).

Essa visão do direito decorre do giro ontológico-linguístico, que aconteceu no âmbito da filosofia, mas, ainda não é paradigma para o Direito. De acordo com Heidegger (1977) a linguagem é elemento de articulação para compreender o mundo, o que ocorre no tempo (em sentido de facticidade).

A facticidade é o elemento que estabelece que a compreensão e a interpretação ocorrem na aplicação. Tudo isso está estritamente relacionado com o Ser-aí de Heidegger: seu modo-de-ser é existencial, quanto ao futuro e suas possibilidades, mas o ser se dá pelo passado, pela faticidade, que abarca história, cultura, etc. E só aí é possível entender a questão do ser (Streck, 2020). Assim, o sentido da norma se dá no fenômeno e, por isso, se trata de uma hermenêutica fenomenológica:

A fenomenologia, para Heidegger, é hermenêutica. Aqui, entra em cena uma das categorias fundamentais do pensamento de Heidegger: o Dasein. Trata-se, o Dasein (habitualmente traduzido como “ser-aí”, “estar-aí”, “pre-sença” ou mesmo por “homem”)⁵⁰³, de um ente compreensivo, um ente que é justamente se questionando a respeito do sentido de ser. Um ente que, como diz Heidegger, é “dotado de um privilégio ôntico-ontológico”, na medida em que “somente a ontologia fundamental pode colocar-se diante de um problema cardeal, a saber, da questão sobre o sentido de ser em geral”; é a partir dessas considerações que o filósofo dirá que “da própria investigação resulta que o sentido metodológico da descrição fenomenológica é interpretação”⁵⁰⁴. Assim, a fenomenologia do Dasein é “hermenêutica no sentido originário da palavra em que se designa o ofício de interpretar”; é desvendando-se o sentido de ser e as estruturas fundamentais do Dasein em geral que se abre “o horizonte para qualquer investigação ontológica ulterior dos entes não dotados do caráter de presença”, donde decorre que “a hermenêutica da presença torna-se também uma ‘hermenêutica’ no sentido de elaboração das condições de

possibilidade de toda investigação ontológica.
(Motta, 2009, p. 202-203)

Assim, a linguagem é observada como condição de possibilidade para compreender o mundo (Streck, 2009). E ocorre a superação do esquema sujeito-objeto. No âmbito do Direito se compreende que o sentido da norma não está contido na lei (objeto), assim como o intérprete não pode usar de consciência para dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa sobre o que é Direito (assujeitamento), mas a linguagem pública se impõe como uma condição de possibilidade capaz de dar sentido, a partir do texto (Streck, 2020).

Inicialmente, a visão sobre o Direito é que o sentido estava no objeto, na lei, no texto em si, há a aposta na metafísica clássica e no positivismo exegetic. Depois, superado isso (pelo menos em parte) se passa para a parte do sujeito, próprio da filosofia da consciência e da metafísica moderna. Aqui, as apostas estão no Privilégio Cognitivo do Juiz (PCJ), e na discricionariedade, na vontade do juiz, no decido conforme minha consciência, etc. Para superar o ativismo judicial é necessário uma ruptura com essa ideia de sujeito-objeto, e lançar apostas na hermenêutica fenomenológica, que parte da relação de ambos, na aplicação, com pré-compreensão, em que o texto não possui sentido sozinho, assim como não há sentido sem texto, lembrando ainda da linguagem como condição de possibilidade entre ambos (Streck, 2020).

Isso é chamado de *applicatio*, um termo da Hermenêutica de Gadamer, que significa que a interpretação não pode ser separada, assim como não pode ser in abstracto. A compreensão é intrínseca a aplicação do texto. Quanto as leis: o intérprete não constrói o texto, assim como não é mero reproduzidor (o texto e o intérprete contribuem na aplicação) (Streck, 2020).

E o Poder Judiciário possui um papel importante de reforçar a “Constituição como norma (força normativa)” (Streck, 2009, p. 25) e de ser um intérprete que evidencia o direito democraticamente produzido e o texto constitucional (Streck, 2009). o Judiciário, quando provocado, deve dar respostas a partir de uma filtragem constitucional (tese substancialista). Para isso, a CF/88 deve ser observada e, conseqüentemente, seus princípios.

Dworkin (2005), ao conceber a sua teoria do Direito como integridade e coerência, aponta para a necessidade de que as decisões se baseiam nos argumentos de princípios a fim de afastar as arbitrariedades. Essa abordagem vê na linguagem e nos princípios constitucionais a

condição de possibilidade para compreender/aplicar/interpretar o Direito (Motta, 2009).

Assim, princípios constitucionais são a lente/pré-compreensão com os quais se deve observar o processo (Motta, 2009). O que ocorre é um fechamento hermenêutico (Streck, 2009), já que a linguagem pública se interpõe como condição de possibilidade⁶³ para compreender o mundo, e estabelecer limites para a interpretação.

Quanto aos princípios, é possível verificar que não se trata de princípios gerais do direito, mas de princípios em um sentido constitucional pragmático-problemático, que estão associados ao caráter transformador que o modelo de Estado Democrático impõe:

Em suma, cabe registrar que esses elementos que permeiam o conceito de princípios constitucionais (ou, se assim quisermos, os princípios do Constitucionalismo Contemporâneo), embora projetem maior luz para o fenômeno da decisão judicial, não podem ser tidos como permissivas para livre criação jurisprudencial do Direito. O dever de fundamentação das decisões somente é plenamente satisfeito na medida em que as decisões se apresentam adequadas à Constituição. Os princípios constitucionais oferecem espaços argumentativos - de caráter deontológico - que permitem controlar os sentidos articulados pelas decisões. Isto é, princípios não são escolhas e tampouco construções arbitrárias. Afinal, o conteúdo dos princípios constitucionais não é pré-definido por lei, muito menos pode ser livremente determinado pelos tribunais, isso porque eles são manifestações histórico-cultural que expressa em determinado contexto de uma experiência jurídica comum. Não existe uma "regra de reconhecimento" por meio da qual se possa reconhecer princípios enquanto princípios *jurídicos* previamente - *prévia e arbitrariamente*.

⁶³ Trata-se da virada linguística em que a linguagem deixa de ser uma terceira coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto, e passa a ser vista como condição de possibilidade para compreender o mundo - é uma questão existencial da filosofia heideggeriana (Heidegger, 2002 e Streck, 2020, p. 123-126).

Princípios não cabem em convenções. (Streck, 2020, p. 373).

Assim, a Constituição e os princípios constitucionais devem servir de lente para se observar os Direitos Sociais e a efetivação deles, assim como devem servir de paradigma para a jurisdição.

Partindo disso, é possível observar que a hermenêutica jurídica filosófica como um paradigma para o Direito pode ser uma lente adequada para se interpretar os Direitos Sociais, a fim de concretizar seus preceitos em observância com os princípios constitucionais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo objetivou responder em que medida a hermenêutica jurídica pode facilitar a adaptação e interpretação de direitos sociais em contextos sociais em constante mudança, considerando o contexto brasileiro.

Foi possível observar a evolução dos direitos desde um Estado Liberal e verificar que há uma constante mudança nas demandas de direitos, o que ainda é aprofundado na sociedade moderna e tecnológica.

A hermenêutica jurídica e filosófica vem, nesse sentido, como uma forma de interpretar e iluminar o caminho do direito. A busca da melhor interpretação, a partir da Constituição Federal e seus princípios busca dar mais efetividade aos direitos, a partir de um sistema íntegro e coerente que tenta servir de farol para o Estado Democrático e a igualdade que daí é exigido.

Importante frisar que a hermenêutica não soluciona os problemas sociais que o país enfrenta, porém, serve de lente para interpretação do direito e os direitos sociais, a partir de uma perspectiva pós giro ontológico linguístico que visa superar o racionalismo e o neoliberalismo como paradigmas que assolam o sistema.

REFERÊNCIAS

BOBBIO, N. **Liberalismo e democracia**. São Paulo: Brasiliense, 2000.

CASTELLS, M.; CARDOSO, G. **A Sociedade em Rede do Conhecimento à Acção Política**. Imprensa Nacional - Casa da Moeda: Lisboa, 2005.

DWORKIN, R. **Levando os direitos a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DWORKIN, R. **O império do direito**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

DWORKIN, R. **Uma questão de princípio**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

GADAMER, H. G. 1900 - **Verdade e método**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

GOTTI, A. **Direitos sociais**: fundamentos, regime jurídico, implementação e aferição de resultados. São Paulo: Saraiva, 2012.

HEIDEGGER, M. **Ser e tempo** (1927), Partes I e II. Petrópolis: Vozes, 2002.

HERRERA FLORES, J. **A reinvenção dos direitos humanos**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009.

MARTINS, Flávio. **Direitos sociais em tempos de crise econômica**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

MOTTA, F. J. B. **Levando o Direito a Sério**: uma exploração hermenêutica do protagonismo judicial no processo jurisdicional brasileiro. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Escola de Direito, Universidade do Vale do Rio do Sinos, São Leopoldo, 2009.

PIOVESAN, F. **Direitos humanos e o direito constitucional internacional**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 109

SARLET, I. W. **Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988**. Porto Alegre: Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011.

SILVA, O. A. B. **Processo e Ideologia**: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

STRECK, L. L.; BOLZAN DE MORAIS, J. L. B. M. **Ciência política e teoria do estado**. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

STRECK, L. L. **Dicionário de Hermenêutica**: 50 verbetes fundamentais da Teoria do Direito à luz da Crítica Hermenêutica do Direito. 2. ed. Belo Horizonte: Letramento; Casa do Direito, 2020.

STRECK, L. L. **Verdade e Consenso**: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas da possibilidade à necessidade de respostas corretas em direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

**SOSTENIBILIDAD Y ORDEN ECONÓMICO EN
EL ESTADO SOCIOAMBIENTAL: BREVE
SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS
CONSTITUCIONES ECONÓMICAS BRASILEÑA Y
VENEZOLANA**

**SUSTAINABILITY AND ECONOMIC ORDER IN
THE SOCIO-ENVIRONMENTAL STATE: BRIEF
SYSTEMATIZATION AND ANALYSIS OF
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE
BRAZILIAN AND VENEZUELAN ECONOMIC
CONSTITUTIONS**

Victoria Emilia Toro Blanco⁶⁴

Resumen

Este artículo analiza la protección del medio ambiente en las constituciones económicas de Brasil y Venezuela desde una perspectiva de sostenibilidad y orden económico en el estado socioambiental. El objetivo del trabajo era identificar las similitudes y diferencias con base a los conceptos señalados. Se utilizó la revisión bibliográfica de doctrina junto a la hermenéutica constitucional, con enfoque cualitativo como estrategia metodológica. Utilizando ambos conceptos en el análisis, se concluyó que ambos países reconocen la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental y establecen principios y directrices para promover la protección del medio ambiente. La Constitución brasileña destaca la defensa del medio ambiente como obligación del Estado y promueve el uso sostenible de los recursos naturales. Por su parte, la Constitución venezolana enfatiza la necesidad de un desarrollo sostenible que respete los límites ecológicos y establece la responsabilidad del Estado de proteger y preservar el ambiente.

Palabras clave: Constitución brasileña; Constitución venezolana; Estado socioambiental; Constitución económica; Protección del medioambiente.

⁶⁴Abogada de la Universidad Central de Venezuela, cursando la Maestría en Derecho y Justicia Social de la Universidad Federal de Rio Grande, bolsista del programa PAEC OEA-GCUB 2022.

Abstract

This article analyzes the protection of the environment in the economic constitutions of Brazil and Venezuela from a perspective of sustainability and economic order in the socio-environmental state. The objective of the work was to identify the similarities and differences based on the concepts indicated. Using both concepts in the analysis, it was concluded that both countries recognize the importance of balancing economic development with environmental preservation and establish principles and guidelines to promote environmental protection. The Brazilian Constitution highlights the defense of the environment as an obligation of the State and promotes the sustainable use of natural resources. For its part, the Venezuelan Constitution emphasizes the need for sustainable development that respects ecological limits and establishes the State's responsibility to protect and preserve the environment. The literature review of doctrine was used together with constitutional hermeneutics, with a qualitative approach as a methodological strategy.

Keywords: Brazilian constitution; Venezuelan constitution; Socio-environmental state; Sustainability; Economic constitution; Environmental protection.

1 INTRODUCCIÓN

Dados los desafíos ambientales globales y la necesidad de un desarrollo económico sostenible, la protección jurídica del medio ambiente a través de mecanismos constitucionales y dentro de los pilares fundacionales de la organización estatal, se vuelve esencial para garantizar la justicia. Aunque, con diferentes abordajes y estructuras, las constituciones de Venezuela y Brasil prevén la protección del medio ambiente como obligación del Estado y a su vez; garantizan el derecho a un medio ambiente sano como derecho fundamental. Por otro lado, ambas incorporan el equilibrio ambiental como límite de las libertades económicas y (de forma concreta o difusa) recogen la sostenibilidad como principio del orden económico estatal. Aún con sus diferencias, estos países vecinos comparten desafíos similares, por su riqueza en recursos naturales, especialmente en cuanto que comparten la selva amazónica. En este artículo, se examina minuciosamente el enfoque adoptado por las Constituciones Económicas de Brasil y Venezuela en lo que respecta a la protección ambiental.

En el presente artículo se busca integrar los conceptos de orden económico (en el sentido de constitución económica) y estado

socioambiental. Según Häberle, la constitución económica se refiere al conjunto de principios, valores y normas constitucionales que regulan la actividad económica dentro de un Estado. Según Haberle, conforme al constitucionalismo moderno, esta establece los fundamentos para una economía social y ecológicamente responsable, en la que se busca conciliar los objetivos económicos con los valores de justicia, equidad y sostenibilidad.

Esta constitución económica no solo se limita a la protección de derechos económicos, como la propiedad privada y la libertad de empresa, sino que también incluye disposiciones que garantizan la igualdad de oportunidades, la distribución justa de recursos y la protección del medio ambiente. En este enfoque, la constitución económica se concibe como una parte integral de la constitución en su conjunto, interactuando con otros derechos fundamentales y principios constitucionales. Busca establecer un equilibrio entre los intereses económicos, sociales y medioambientales, y orientar la política económica hacia el logro del bienestar general y la sostenibilidad.

En la constitución brasileña se utiliza el término orden económico en ese sentido, en el artículo 170. En el caso de la constitución venezolana, es el artículo 112 el que sienta las bases del orden económico, aunque todo el Título IV de la constitución venezolana de 1999 trata sobre el sistema socioeconómico y el Capítulo I de dicho título, describe la función del Estado en la economía. Es con esa acepción que será utilizado el concepto.

Por otro lado, es preciso abordar una definición de estado socioambiental. Sousa Santos, se refiere a este como una evolución del estado de bienestar tradicional, que implica una reconfiguración del papel del Estado para abordar los desafíos sociales y ambientales del siglo XXI. Este nuevo tipo de estado reconoce la interdependencia entre lo social y lo ambiental, reconociendo que la justicia social y la sostenibilidad ambiental son objetivos inseparables. El estado socioambiental se basa en la idea de que los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, deben ser garantizados y protegidos por el Estado.

En el estado socioambiental se busca equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente y el bienestar social, buscando integrar la justicia social y la sostenibilidad ambiental, reconociendo la importancia de proteger los derechos humanos y garantizar un desarrollo equitativo y sostenible.

Por último, Freitas (2011) nos trae el concepto de sostenibilidad como:

El principio constitucional que determina, independientemente de regulación legal, con eficacia directa e inmediata, la responsabilidad del Estado y de la sociedad por la concretización de desarrollo material e inmaterial, socialmente inclusivo, durable y ecuánime, ambientalmente limpio, innovador, ético y eficiente, con el fin de asegurar, preferencialmente de modo preventivo y precavido, en el presente y en el futuro, el derecho al bienestar físico, psíquico y espiritual, en consonancia homeostática com el bien de todos.

Con enfoque en estos conceptos, orden económico, sostenibilidad y estado socioambiental; Analizaremos los principios y mecanismos de protección, directrices e instrumentos, presentes en cada una de las mencionadas constituciones, cuyo objetivo es promover la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico.

2 EL PAPEL DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La Constitución Económica desempeña un papel fundamental en la definición de las bases económicas y en la promoción del desarrollo sostenible. Forrester (1995) destaca que la Constitución juega un papel central al establecer directrices y límites para la actividad económica en beneficio del medio ambiente. Esto implica que las disposiciones constitucionales relacionadas con la economía deben tener en cuenta la protección y preservación del medio ambiente como un objetivo fundamental.

Asimismo, Cançado Trindade (2007) resalta que el reconocimiento del medio ambiente como un derecho fundamental en las constituciones modernas refleja la importancia de protegerlo en el ámbito económico. Lo cual significa que la Constitución no solo establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos en relación con el medio ambiente, sino que también establece los límites y responsabilidades de las actividades económicas para garantizar la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Siguiendo la idea de Trindade, se conviene que el ordenamiento jurídico económico que se configura dentro de la constitución, cumple un papel crucial al establecer mecanismos legales y políticos que promueven la conservación y protección del medio ambiente en el marco de la actividad económica. Según Juárez (2012) Estos mecanismos pueden

incluir disposiciones sobre el uso sostenible de los recursos naturales, la regulación de actividades industriales y comerciales, la promoción de tecnologías limpias y la responsabilidad de restablecer el ambiente a su estado natural en caso de alteraciones. También como señala Hüning (2020) esto puede lograrse a través de la imposición de tributos ambientales.

Es importante tener en cuenta que la protección del medio ambiente en las constituciones analizadas, no solo implica establecer obligaciones para el sector privado, como se verá más adelante, sino también para el Estado. Tanto en Venezuela como en Brasil, el Estado tiene el deber de promover políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible, garantizar el acceso a la tecnología y facilitar la transferencia de conocimientos en el ámbito ambiental.

Por otra parte “al crear el deber jurídico del Estado y de toda la comunidad, la Constitución no prevé la disponibilidad para decidir sobre la protección o no protección del medio ambiente, impone claramente el deber de protección ambiental. La Constitución brasileña consagra el medio ambiente como derecho individual y como fin y tarea del Estado.” (Huning, 2020, p. 48). Se sostiene que lo mismo ocurre con la constitución venezolana pues la obligación viene del concepto de acciones positivas de según Alexy, no aplicable solo a una constitución específica y el cual la propia autora cita en su texto así:

El concepto de derecho a las acciones positivas del Estado comprende derechos de tipos completamente diferentes, que pueden ser clasificados jurídicamente de diferentes maneras. Uno es la clasificación en (1) derechos de protección, (2) derechos de organización y procedimiento, y (3) derechos sociales. A pesar de considerables distinciones y en cuanto a la estructura y contenido de estos derechos, existe un rasgo común que justifica su reunión en grupo. Todos requieren acciones positivas. Para su no vulneración, no basta que el Estado no intervenga en las respectivas esferas de protección, tales como la vida, la libertad, la vida y propiedad. El estado debe hacer algo. Robert Alexy (2008, *apud* Hüning, 2020, p. 48)

Por otra parte, analiza su relevancia como derechos fundamentales:

Para Alexy, dentro del análisis de los derechos a las prestaciones, el derecho al medio ambiente, a pesar de tener una característica de derecho social, se encuadra en lo que se denomina un derecho fundamental completo, constituyéndose en derecho de defensa, derecho a la protección, derecho al procedimiento y derecho a declarar disposición fáctica. Robert Alexy (2011, *apud*, Hüning, 2020, p. 120)

Entonces, en resumen, la protección constitucional del medio ambiente, garantiza que esto no sea una elección del Estado, sino una parte más de este, en un nuevo concepto que va más allá de preservar recursos para su explotación y que además reviste al mismo de la legitimidad que tienen los derechos fundamentales. Por otra parte, integrarlo dentro del orden económico, evita que este pueda hacer estragos, impidiendo que el Estado cumpla con la obligación de garante adquirida.

Es por ello que la Constitución Económica desempeña un papel fundamental en la protección ambiental al establecer directrices y límites para la actividad económica en beneficio del medio ambiente. Reconoce al medio ambiente como un derecho fundamental y establece obligaciones tanto para el sector privado como para el Estado en la conservación y preservación del medio ambiente. Esta relación entre la Constitución y el medio ambiente refleja la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental para lograr un desarrollo sostenible.

3 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE BRASIL

La Constitución Económica de Brasil establece principios y fundamentos que buscan conciliar el desarrollo económico con la preservación ambiental. De acuerdo con Leite (2008), la Constitución brasileña adopta un enfoque integrado que reconoce la importancia del desarrollo económico para el bienestar de la sociedad, siempre y cuando se armonice con la protección ambiental. Los principios de precaución y prevención son fundamentales en este contexto, como destaca Silva (2012). Además, la Constitución establece directrices para la preservación y conservación del medio ambiente, así como incentivos e

instrumentos económicos para promover la protección ambiental, como señala Rocha (2003).

Según Hüning (2020) La Constitución Federal de Brasil garantiza la libre iniciativa, la propiedad privada y la competencia en el orden económico, más comprometida con la protección del medio ambiente. En su obra “Extrafiscalidade Ambiental” analiza el uso de la extrafiscalidad ambiental como mecanismo de protección del derecho fundamental al medio ambiente equilibrado, según lo establecido en la Constitución Federal de Brasil. El objetivo es verificar si la Constitución permite la aplicación de la extrafiscalidad ambiental en los impuestos brasileños como forma de promover este derecho fundamental. Ahora bien, para llegar a ese análisis, la autora examina primero y a profundidad el lugar que el orden económico constitucional le otorga al medio ambiente. En conclusión, considera al Estado contemporáneo brasileño como un estado socioambiental, con el compromiso de defender un medio ambiente equilibrado. Además de proteger las libertades individuales, el estado asume funciones de garantía, regulación y protección, interviniendo en la economía y la sociedad para asegurar condiciones mínimas de desarrollo para todos los ciudadanos.

En ese sentido, el artículo 225⁶⁵ de la Constitución Federal, establece que “toda persona tiene derecho al medio ambiente

⁶⁵ Toda persona tiene derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad de vida, imponiéndose al Gobierno y a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones.

§ 1el- Para asegurar la efectividad de este derecho, corresponde al Gobierno:

I - preservar y restaurar procesos ecológicos esenciales y proveer para la gestión ecológica de especies y ecosistemas;

II - preservar la diversidad e integridad del patrimonio genético del país y supervisar las entidades dedicadas a la investigación y manipulación del material genético;

III - definir, en todas las dependencias de la Federación, los espacios territoriales y sus componentes a ser especialmente protegidos, siendo permitida su alteración y supresión sólo por la ley, prohibiéndose cualquier uso que comprometa la integridad de los atributos que justifican su protección; IV - exigir, en los términos previstos en la ley, para la instalación de una obra o actividad potencialmente causante de una degradación significativa del medio ambiente, previo estudio de impacto ambiental, que será difundido;

V - controlar la producción, venta y uso de técnicas, métodos y sustancias que representen un riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente;

VI - promover la educación ambiental en todos los niveles de educación y conciencia pública para la preservación del medio ambiente;

ecológicamente equilibrado, imponiendo al Poder Público ya la comunidad el deber de preservarlo y defenderlo” en sus dieciséis secciones establece los principios y deberes relacionados con la protección y preservación del medio ambiente en Brasil. Dicho artículo reconoce que el medio ambiente es un bien de uso común de todos y debe ser protegido por medio de políticas y acciones que promuevan la conservación, el desarrollo sostenible y el respeto por la diversidad ambiental. También se menciona la necesidad de controlar y prevenir la contaminación, así como de proteger la fauna y la flora, con especial atención a las áreas consideradas de importancia ecológica y cultural. En especial interesa la sección VIII del artículo que obliga al Estado a “fiscalizar, junto con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, la producción y comercialización de productos y sustancias que comporten riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente” y la sección XVI referente al control estatal de “la producción, la comercialización y el empleo de técnicas, métodos y sustancias que comporten riesgo para la vida, la calidad de vida y el medio ambiente”. Ambas ponen de manifiesto, el deber estatal de intervenir en la economía cuando se trate de garantizar la sostenibilidad y equilibrio ecológico. De allí, se extraen algunas de las bases que permiten a la autora afirmar al estado brasileño como un Estado socioambiental, pues se hace evidente la importancia que el medio ambiente tiene en la configuración del modelo estatal.

Por otro lado el artículo 170 en su sección VI establece para el Estado la “defensa del medio ambiente, inclusive mediante tratamientos diferenciados conforme al impacto ambiental de los productos y servicios

V II – proteger la fauna y la flora, prohibiendo, en los términos de la ley, prácticas que comprometan su función ecológica, provoquen la extinción de especies o sometan a los animales a crueldad.

§ dosel- El que explota recursos minerales está obligado a recuperar el medio ambiente degradado, de acuerdo con la solución técnica requerida por el organismo público competente, conforme a la ley.

§ 3el- Las conductas y actividades consideradas nocivas para el medio ambiente sujetarán a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, independientemente de la obligación de reparar el daño causado.

§ 4el- La Selva Amazónica Brasileña, la Mata Atlántica, la Serra do Mar, el Pantanal Mato-Grossense y la Zona Costera son patrimonio nacional, y su uso se hará, de conformidad con la ley, en condiciones que aseguren la preservación del medio ambiente, incluido el uso de los recursos naturales.

§ 5el- Tierras no disponibles o tierras arrebatadas por los Estados, por acciones discriminatorias, necesarias para la protección de los ecosistemas naturales.

§ 6el- Las plantas que operen con un reactor nuclear deben tener su ubicación definida por ley federal, sin la cual no pueden instalarse¹⁰⁴.

y de sus procesos de elaboración y prestación” lo cual según Hüning (2020) demuestra que el derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental dentro del estado socioambiental brasileño “constituyéndose en una potestad/deber efectivo de esta Política Socioambiental de Estado, lo que implica la necesidad de la acción estatal en busca de la protección de un medio ambiente ecológicamente equilibrado” (Hüning, 2020, p. 7).

4 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA DE VENEZUELA

La Constitución Económica de Venezuela también contiene principios y fundamentos que reconocen la importancia de la protección ambiental. Según García (2006), la Constitución venezolana resalta la necesidad de un desarrollo económico sostenible que respete los límites ambientales. El enfoque constitucional adoptado en Venezuela busca la preservación y conservación del medio ambiente, estableciendo instrumentos económicos para promover la sostenibilidad, según lo mencionado por Leiva (2004).

El Capítulo IX de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se dedica específicamente a los derechos ambientales y representa un avance significativo en comparación con la concepción anterior de conservacionismo clásico, que se centraba principalmente en la protección de los recursos naturales como bienes económicos.

Anteriormente, la protección jurídica del ambiente se caracterizaba por una regulación parcial cuyo principal objeto era la conservación de los recursos naturales. Ahora, impulsados por una necesidad y una tendencia mundial, los postulados constitucionales exigen que la normativa en esta materia responda a políticas ambientales de amplio alcance que se inscriban en los parámetros contenidos en los tratados internacionales de carácter ambiental, todo ello con el objeto de garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, en el que el uso de los recursos por parte de las presentes generaciones no comprometa el patrimonio de las futuras" (Exposición de Motivos de la Constitución Venezolana de 1999, Capítulo IX).

Esta cita resalta la transformación en la protección jurídica del ambiente, que pasó de una regulación parcial centrada en la conservación de los recursos naturales a una perspectiva más amplia y global. La exposición de motivos, muestra que el propósito del legislador constituyente fue brindar una protección al medio ambiente en sí mismo, como parte integral del Estado y no como un mero medio lucrativo, destinado a extenderse en el tiempo.

La protección del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales se establece como un objetivo fundamental en el preámbulo de la Constitución. El texto constitucional desarrolla de manera amplia los derechos y deberes ambientales de cada generación y reconoce el derecho a un medio ambiente seguro, saludable y equilibrado ecológicamente.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales, los monumentos naturales y otras áreas de importancia ecológica. Además, se debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación y se deben proteger el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono y las especies vivas.

Art. 127 Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia.

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Capítulo IX).

El artículo 127, es el pilar de las obligaciones estatales de protección socioambiental, mismo que el artículo 225 de la constitución brasilera, aunque desarrollado de forma diferente, otorga al medio ambiente una posición central en el modelo estatal, cuando se examina en conjunto a las otras normativas constitucionales.

En todos los contratos y permisos que afecten los recursos naturales, se establece la obligación de conservar el equilibrio ecológico, permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma, y restablecer el ambiente a su estado natural si es alterado, de acuerdo con lo que determine la ley.⁶⁶

Además, los principios contenidos en el Capítulo IX se encuentran integrados en otras disposiciones y principios constitucionales que promueven el desarrollo sostenible de la nación, como la educación ambiental, las limitaciones a la libertad económica en aras de la protección del ambiente, el reconocimiento de las aguas como bienes de dominio público, y la protección del hábitat de los pueblos indígenas, entre otros. En ese sentido:

Los principios contenidos en este Capítulo encuentran su transversalización axiológica en el texto constitucional, a través de otras disposiciones y principios que tienen como finalidad el desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable de la Nación. Así, encuentra fundamento constitucional la obligatoriedad de la educación ambiental, las limitaciones a la libertad económica por razones de protección del ambiente, el carácter de bienes de dominio público que se le atribuye a las aguas, la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, la

⁶⁶ Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas.

En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.

protección del hábitat de los pueblos indígenas, entre otros" (Exposición de Motivos de la Constitución Venezolana de 1999).

Estos extractos de la exposición de motivos resaltan la importancia de la protección del equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común de la humanidad. La Constitución establece derechos y deberes ambientales, reconociendo el derecho de cada generación a un medio ambiente seguro, sano y equilibrado. Asimismo, se enfatiza la responsabilidad del Estado en garantizar un desarrollo sostenible y proteger diversos elementos ambientales, así como la participación ciudadana en la ordenación del territorio. Se establecen también obligaciones en contratos y permisos para conservar el equilibrio ecológico y restablecer el ambiente en caso de alteraciones. Estos principios ambientales se entrelazan con otras disposiciones constitucionales que promueven el desarrollo sostenible en diversos ámbitos de la sociedad.

En general, la constitución venezolana adopta una visión sistemática o integral de los derechos ambientales, incorporando políticas ambientales de amplio alcance basadas en tratados internacionales ambientales. El objetivo es garantizar un desarrollo ecológico, social y económicamente sostenible que no comprometa los recursos para las generaciones futuras.

Es importante destacar que dentro de los límites del régimen socioeconómico previsto por la Constitución venezolana se encuentra la protección y preservación del medio ambiente. La Constitución establece un marco jurídico que busca armonizar el desarrollo económico y social con la conservación del entorno natural, promoviendo un modelo de desarrollo sustentable. Si bien el régimen socioeconómico no se define de forma rígida, al igual que en la constitución brasileña, encontramos compromisos con el liberalismo económico pues el artículo 299 y el 112, consagran principios como la libre competencia, iniciativa y productividad, pero también defensa del ambiente, solidaridad y la justicia social.

En el artículo 112 de la Constitución, se establece que "todas las personas tienen el derecho de dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, con las limitaciones previstas en la Constitución y las leyes, por razones de [...] desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente [...] Esto destaca el papel fundamental del Estado como regulador de la economía para asegurar el desarrollo humano integral y la protección del ambiente.

Estas disposiciones constitucionales demuestran la importancia que se le otorga al papel del Estado en la regulación económica y en la protección del ambiente dentro del régimen socioeconómico previsto por la Constitución venezolana.

En el artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que el régimen socioeconómico tiene como objetivo garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, enmarcado dentro de los “principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente”

Por otra parte, en el artículo 127 ya citado, existen ciertas menciones a la intervención del estado en la economía en pro del equilibrio ecológico. En ese sentido, establecen la obligación de proteger los “recursos biológicos” y se prohíbe patentar el genoma de seres vivos.

Estos principios constitucionales establecen los límites y las directrices para la planificación y ejecución de políticas públicas en materia ambiental, promoviendo la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la gestión adecuada de los desechos y la prevención de la contaminación.

En resumen, el medio ambiente se encuentra dentro de los límites del régimen socioeconómico previsto por la Constitución venezolana, lo que refleja la importancia que se le otorga a la protección ambiental como parte integral del desarrollo sostenible del país.

5 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS CONSTITUCIONES ECONÓMICAS DE BRASIL Y VENEZUELA E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS PRÁCTICAS ECONÓMICAS

En términos de similitudes, ambas constituciones reconocen la importancia de garantizar el derecho a un medio ambiente equilibrado y saludable para las generaciones presentes y futuras. Ambos países consideran que la protección ambiental es un objetivo fundamental y establecen principios y directrices para promoverla.

Ambas constituciones también reconocen la necesidad de adoptar prácticas económicas sostenibles que respeten los límites del medio ambiente y promuevan la conservación de los recursos naturales. Ambos países reconocen la importancia de equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental y promueven la adopción de políticas públicas y regulaciones para lograr este objetivo.

Sin embargo, también existen diferencias en los enfoques adoptados por cada país. En el caso de Brasil, la Constitución Económica

busca conciliar el desarrollo económico con la preservación ambiental. Reconoce la importancia de la libre iniciativa, la propiedad privada y la competencia en el orden económico, pero también establece la defensa del medio ambiente como una obligación del Estado. Se enfatiza la necesidad de políticas públicas que fomenten el desarrollo sostenible y se promueve el uso sostenible de los recursos naturales y la promoción de tecnologías limpias.

Por otro lado, la Constitución Económica de Venezuela enfatiza la necesidad de un desarrollo económico que respete los límites ecológicos y prioriza la sostenibilidad sobre el crecimiento económico acelerado. Se reconoce el derecho al medio ambiente seguro y equilibrado y se establece la responsabilidad del Estado de proteger y preservar el ambiente. La Constitución venezolana también promueve la participación ciudadana en la gestión del ambiente y establece la obligación del Estado de promover políticas que fomenten el desarrollo ecológico, social y económicamente sostenible.

Estas diferencias reflejan las realidades socioeconómicas, políticas y ambientales de cada país. Brasil, como una economía más grande y diversificada, enfrenta el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental debido a su dependencia de sectores como la agricultura, la minería y la industria. Venezuela, por su parte, cuenta con importantes recursos naturales y busca un modelo económico que priorice la sostenibilidad y la protección ambiental, considerando su riqueza petrolera y biodiversidad.

En resumen, si bien Brasil y Venezuela comparten la preocupación por la protección del medio ambiente y la adopción de políticas sostenibles, sus enfoques difieren en términos de cómo equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental y las prioridades establecidas en sus respectivas constituciones. Cada país adapta sus estrategias en función de sus circunstancias y desafíos específicos. La implementación de las disposiciones constitucionales relacionadas con la protección del medio ambiente requiere la adopción de políticas y legislaciones específicas. En Brasil, se han creado organismos ambientales como el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), así como legislación ambiental como la Ley de Delitos Ambientales, para garantizar la aplicación efectiva de las directrices constitucionales (Ferraz, 2017).

En Venezuela, la protección ambiental se aborda a través de legislaciones específicas, como la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Gestión Integral de Residuos, que tienen como objetivo promover la

conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales (García, 2006).

A pesar de los avances en la legislación, ambos países enfrentan desafíos en la implementación efectiva de las medidas económicas orientadas a la protección del medio ambiente. Estos desafíos incluyen la falta de recursos financieros, la necesidad de una mayor supervisión y la concientización de la sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad.

La protección del medio ambiente puede tener impactos significativos en la economía de los países. En Brasil, la promoción de prácticas económicas sostenibles ha contribuido a la valoración de los recursos naturales y al desarrollo de sectores como la agroindustria sostenible y el ecoturismo. Estas actividades generan empleo, estimulan la economía local y promueven la preservación de los ecosistemas (Leite, 2008).

De manera similar, en Venezuela, la adopción de políticas ambientales ha influido en el sector energético y en la explotación responsable de los recursos naturales. La diversificación de la economía y la protección de la biodiversidad son aspectos clave de este enfoque (Leiva, 2004). Sin embargo, es importante reconocer que la protección ambiental también puede plantear desafíos económicos e infelizmente, en el caso venezolano, aún están presentes muchos desafíos, ya que a pesar del amplio marco normativo, la deforestación, la contaminación y otros daños ambientales son la orden del día, según el Observatorio de Economía Política (2022) en su Informe anual sobre la situación socioambiental venezolana.

6 CONCLUSIÓN

En conclusión, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible son temas fundamentales en las constituciones económicas de Brasil y Venezuela. Ambos países reconocen la importancia de garantizar un equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental, estableciendo principios, derechos y obligaciones para promover la protección del medio ambiente como parte integral de la organización estatal.

Sin embargo, existen diferencias en los enfoques adoptados por cada país. Mientras que la Constitución brasileña busca conciliar el desarrollo económico con la preservación ambiental, la Constitución venezolana enfatiza la necesidad de un desarrollo económico que respete los límites ecológicos y priorice la sostenibilidad. La Constitución Económica de Brasil reconoce la importancia de políticas públicas que

fomenten el desarrollo sostenible y promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Por su parte, la Constitución Económica de Venezuela prioriza la sostenibilidad y la protección ambiental, estableciendo la responsabilidad del Estado en la protección y preservación del medio ambiente.

Ambos países enfrentan desafíos en la implementación efectiva de las medidas económicas orientadas a la protección del medio ambiente, como la falta de recursos financieros y la concientización de la sociedad. Sin embargo, han adoptado legislaciones específicas y creado organismos ambientales para garantizar la aplicación de las directrices constitucionales.

Es importante seguir trabajando en la implementación efectiva de las disposiciones constitucionales relacionadas con la protección del medio ambiente, así como en la promoción de prácticas económicas sostenibles. Esto requiere una cooperación activa entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado, así como una mayor conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en la toma de decisiones económicas.

En resumen, las Constituciones Económicas de Brasil y Venezuela son instrumentos importantes en la búsqueda del equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental. A través de estos marcos jurídicos, es posible establecer directrices e instrumentos que promuevan la sostenibilidad y contribuyan a un futuro más consciente y equilibrado en relación con el medio ambiente.

En última instancia, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible deben ser objetivos compartidos en la búsqueda de un futuro equilibrado, justo y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

REFERENCIAS

ALEXY, R. Del marco de los derechos fundamentales a la protección. **Revista del Programa de Posgrado en Derecho de la Universidad Federal de Bahía**, Salvador, v. 2, n. 17, 2008. p. 341.

ALEXY, R. **Teoría de los Derechos Fundamentales**. 2. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2011.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República, [1988]. Disponible em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Acesso em: 16 jun. 2023.

CANÇADO TRINDADE, A. A. Direito Ambiental e Direito Constitucional: O Meio Ambiente como Direito Fundamental. **Revista Jurídica**, v. 354, 2007, p. 9-17.

FORRESTER, V. The Role of the Constitution in Environmental Protection. **Vanderbilt Law Review**, v. 48, n. 4, p. 849-876, 1995.

FREITAS, J. Sustentabilidade. **Direito ao Futuro**. Belo Horizonte, Minas Gerais: Fórum, 2011.

HÄBERLE, P. Ventana abierta: Sustentabilidade Direito ao Futuro. Traducido por Emilio Mikunda Franco. Editorial Tecnos, España, 2019.

HUNING, L. **Extrafiscalidade Ambiental**: A extrafiscalidade nos impostos brasileiros como instrumento jurídico econômico de defesa do meio-ambiente ecologicamente equilibrado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

LEITE, J. R. M. **Direito Ambiental na Constituição**: Doutrina, Jurisprudência, Glossário. São Paulo: Saraiva, 2008.

OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA. Situación Socioambiental de Venezuela, 2022. Disponible en <https://ecopoliticavenezuela.org/2023/06/06/informe-oep-situacion-socioambiental-de-venezuela-2022/> acceso el: 26 jun. 2023.

ROCHA, J. A. Q. C. **Constituição, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

SILVA, J. A. **Direito Ambiental Constitucional**. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.

SANTOS, B. S. **Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide**. Inglaterra: Routledge, 2014.

